No. 84

Martes 18 de Febrero de 2014.

LXII Legislatura

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Segundo Año de Ejercicio

TOMO I

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE:
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE

VICEPRESIDENTES:
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

SECRETARIAS:
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

PRESIDENTE:
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sen. Emilio Gamboa Patrón,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional.

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sen. Jorge Emilio González Martínez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sen. Manuel Bartlett Díaz,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Sen. Miguel Romo Medina,
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sen. Sen. Arely Gómez González,
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sen. José María Martínez Martínez,
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Gaceta del Senado

CONTENIDO

ORDEN DEL DÍA..... **6**

Acta de la sesión del 13 de febrero de 2014 ….. **16**

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite su Informe de actividades durante la "4th IEL-SEELRIL Internacional Oil and Gas Law Conference, realizada del 4 al 6 de diciembre de 2013, en Londres, Inglaterra..... **25**

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL
Consulta la Gaceta del Senado en ***www.senado.gob.mx***

PODER EJECUTIVO FEDERAL

Secretaría de Gobernación

Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2013……. **36**

COMUNICACIONES DE COMISIONADOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

De las ciudadanas y los ciudadanos Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Ángel Trinidad Zaldívar, por las que presentan sendas solicitudes para formar parte del organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública que dispone el decreto de reformas constitucionales del 7 de febrero de 2014. ……. **37**

CÁMARA DE DIPUTADOS

Oficios con los que remite:

- Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.……. **77**

- Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978.

- Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del Código Penal Federal. ……. **80**

- Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, y del Código Federal de Procedimientos Civiles. **82**

- Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. ……. **94**

INICIATIVAS

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social. ……. **96**

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 2º y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4°, ambos de la Ley General de Turismo. ……. **96**

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. …..……..……. **96**

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el segundo y tercer párrafos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ……..……. **97**

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. ……..……..……. **103**

De los Senadores Mónica T. Arriola Gordillo, Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda. ……..……..……. **114**

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 27 de la Ley Minera. ……..……..……. **121**

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso g) y se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y se reforman los artículos 1 y 11, fracción I de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. ……..……..……. **122**

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ……..……..……. **127**

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 8º de la Ley General de Educación. ……..……..……. **127**

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales, y se reforman los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. ……..……..……. **128**

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha. ……..……..……. **141**

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud. ……..……..……. **141**

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 15; y se adiciona el 26 bis, de la Ley Federal de Defensoría Pública. ……..……...……. **142**

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en materia de redes públicas de internet de banda ancha. ……..……..……...……. **150**

De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social. ……..……..……...……. **151**

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión. ……..……..……...……. **156**

De los Senadores René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 254 y se adiciona un artículo 368 Quinquies al Código Penal Federal. ……..……..……...……. **157**

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ……..……..……...……. **161**

De la Sen. Marcela Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones. ……..……..……...……. **164**

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. ……..……..……...……. **192**

De los Senadores Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5°, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de colegiación y certificación obligatorias. ……..……..……...……. **199**

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ……..……..……..……...……. **210**

De los Senadores Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias. ……..……..…..……...……. **217**

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. ……..……..……..…..……...……. **282**

De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto para crear la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ……..…..……...……. **287**

De los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 25 Constitucional. ……..…..……...……. **316**

CONTINÚA TOMO II

ORDEN DEL DÍA

Acta de la sesión del 13 de febrero de 2014.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite su Informe de actividades durante la "4th IEL-SEELRIL Internacional Oil and Gas Law Conference, realizada del 4 al 6 de diciembre de 2013, en Londres, Inglaterra.

Comunicaciones y correspondencia.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

Secretaría de Gobernación

Oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2013.

COMUNICACIONES DE COMISIONADOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

De las ciudadanas y los ciudadanos Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Ángel Trinidad Zaldívar, por las que presentan sendas solicitudes para formar parte del organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública que dispone el decreto de reformas constitucionales del 7 de febrero de 2014.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Oficios con los que remite:

- Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978.

- Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del Código Penal Federal.

- Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

- Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

INICIATIVAS

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Asistencia Social.

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 2º y se reforman las fracciones VI y IX del artículo 4°, ambos de la Ley General de Turismo.

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda.

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el segundo y tercer párrafos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

De los Senadores Mónica T. Arriola Gordillo, Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda.

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 27 de la Ley Minera.

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso g) y se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y se reforman los artículos 1 y 11, fracción I de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 8º de la Ley General de Educación.

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales, y se reforman los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha.

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud.

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 15; y se adiciona el 26 bis, de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en materia de redes públicas de internet de banda ancha.

De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 85 y 101 de la Ley del Seguro Social.

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De los Senadores René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 254 y se adiciona un artículo 368 Quinquies al Código Penal Federal.

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Sen. Marcela Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.

De los Senadores Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5°, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de colegiación y certificación obligatorias.

Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De los Senadores Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto para crear la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 25 Constitucional.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 273 de la Ley del Seguro Social; 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De la Comisión de Juventud y Deporte, los que contienen puntos de acuerdo:

- Que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento y fortalecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad y educación vial.
- Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público.

De la Comisión de Defensa Nacional, los que contienen puntos de acuerdo:

- Por el que el Senado de la República felicita y extiende el más amplio reconocimiento a la labor heroica, así como al compromiso y entrega de los militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de la Armada de México, que recientemente realizaron acciones de ayuda a la población, en los estados afectados por el paso del huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", en septiembre de 2013.
- Que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación a instruir y realizar las acciones necesarias para modernizar las fuerzas armadas.
- Por el que se desecha la proposición por el que se solicitaba la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional.

PROPOSICIONES

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, a enviar un análisis detallado sobre el impacto que tendrá en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco.

Del Sen. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y del gobierno del estado de Tamaulipas a implementar una estrategia integral contra la inseguridad en el estado.

De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Mariana Gómez del Campo Gurza, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a informar sobre las medidas implementadas ante la situación inusitada de violencia que impera en distintos puntos de la República Mexicana, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De los Senadores Ana Gabriela Guevara, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Marcela Guerra Castillo, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto y Humberto Mayans Canabal, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a realizar un diagnóstico que permita identificar rutas de acción que lleven a un fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, financieros y del ejercicio del presupuesto.

De los Senadores Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, la que contiene punto de

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico.

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer un pronunciamiento de mayor contundencia en rechazo a la violación de los derechos humanos y libertades civiles de los venezolanos.

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas que aún permiten contraer matrimonio a menores de edad, a reformar su legislación en materia familiar, estableciendo como requisito que los pretendientes tengan 18 años de edad cumplidos.

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría Comunicaciones y Transportes a incluir a Campeche en el Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste, indicado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a fin de que esta entidad sea considerada en el trazado de la ruta del Tren Transpeninsular y Corredor Transísmico y pueda incrementarse el transporte de carga y de pasajeros en esta entidad.

Del Sen. Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República ordena los trabajos para la expedición de una Constitución de Principios.

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Economía a diseñar estrategias en materia minera, con el objeto de regularizar el cobro por la extensión de los terrenos que se explotan en este sector.

Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a trabajar en conjunto con demás instancias de los tres niveles de gobierno para detener los avances del crimen organizado en la entidad, concretar el "Programa Escudo" y dar celeridad al mando único.

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a proceder de inmediato a iniciar el proceso de extradición de Javier Villarreal a nuestro país para que responda por los delitos que se le imputan; asimismo, a acelerar y, en su caso, implementar los protocolos necesarios para lograr que sean detenidos el resto de los responsables de la mega deuda coahuilense.

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a presentar un informe que contenga el registro de los yacimientos probados que tiene el país de gas asociado al carbón o gas grisú, así como una estimación detallada de la cantidad de recursos y el valor comercial de los mismos; una relación de las concesiones que tienen permitido explotar este gas y los contratos que Petróleos Mexicanos ha celebrado para la transportación y compra de este gas.

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a rendir un informe sobre las fallas que existen en materia de prestación de servicios de telefonía celular, así como las medidas y acciones que cada una está tomando a fin de mejorar su calidad y el avance que presentan.

Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las autorizaciones para la operación de una mina a cielo abierto en la zona

conocida como "El Arco" ubicada en el paralelo 28, límite geográfico de los estados de Baja California y Baja California Sur.

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y disponibilidad de información presupuestal de la entidad para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a realizar los estudios correspondientes para incorporar las áreas naturales protegidas del litoral costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano.

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la realización de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero en Nuevo Vallarta, Nayarit, México; y exhorta al Ejecutivo Federal a dar continuidad al trabajo realizado.

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a remitir un informe acerca de los casos de violación de derechos humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a informar sobre los avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas.

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que propone la representación de los ciudadanos Senadores en los estados del país, a través de sus oficinas de enlace, a efecto de contribuir en la difusión del documento "cartilla de información básica para la localización de menores" implementado en el marco del Programa Alerta Ámber.

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a invitar a los diferentes grupos políticos venezolanos, en especial al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al diálogo transparente y franco en un marco de legalidad y tolerancia y sobre todo con el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades civiles.

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Jorge Luis Lavalle Maury, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe en torno al proyecto del tren transpeninsular entre el estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán.

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil.

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social un informe respecto del estado que guardan la atención de las mujeres en estado de gravidez en la clínicas y hospitales de dicho instituto, en las entidades federativas, especialmente en el estado de Oaxaca.

De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Raúl Morón Orozco y Juan Carlos Romero Hicks, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Educación Pública el respeto a la minuta firmada entre la Secretaría de Educación Pública y los diversos subsistemas educativos de fecha 14 de mayo del 2013.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a instrumentar un plan de acción que permita garantizar el derecho a la salud de las mujeres en estado de gravidez de la entidad.

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos violentos ocurridos en los últimos días en la República Bolivariana de Venezuela; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asistir a una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, a fin de puntualizar la información proporcionada en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013 y de discutir acciones que fomenten la corrección de la política económica.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las causales por las que sus espacios educativos ostentan los más altos niveles de deserción del país.

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación administrativa.

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a fortalecer las acciones, programas y políticas públicas encaminadas a impulsar la agricultura familiar, en la lucha por la Seguridad Alimentaria y Nutricional; en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014.

De los Senadores Armando Ríos Piter, Aarón Irizar López, José Yunes Zorrilla, Sofío Ramírez Hernández, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristáin Navarrete y Fidel Demédecis Hidalgo, la que contiene punto de acuerdo que solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013.

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a desarrollar programas que promuevan el reconocimiento de las comunidades afromestizas mexicanas.

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a iniciar las investigaciones conducentes para aclarar el caso de negligencia que sufrió Virginia Hernández Cruz, fincando las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar y compartir los resultados obtenidos con esta Soberanía.

De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, René Juárez Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Geografía y Estadística para que en el próximo Conteo

de Población 2015 se modifiquen los formatos empleados en los cuestionarios, a fin de obtener con precisión el volumen total de la población indígena en el territorio nacional, entre otros indicadores.

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de Petróleos Mexicanos informe sobre la situación que guardan las reservas probadas y no probadas de hidrocarburos del país, para cada uno de los campos que las contienen, así como los resultados de la actividad de exploración en cada una de las áreas en que se hubiera efectuado, para los años 2011, 2012 y 2013.

Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover la creación de un programa de conectividad ecológica en la región de América del Norte para la conservación de la mariposa monarca.

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones y los trabajos necesarios con las autoridades correspondientes para abrir accesos públicos hacia la playa en la localidad de Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a esclarecer el conflicto entre taxistas y transportistas, ocasionado el 11 de febrero de 2014 en la carretera hacia el aeropuerto de Cancún, Cancún, Quintana Roo, entre sindicatos de taxistas, transportistas y policía federal.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar un programa de apoyo a los productores de trigo de nuestro país.

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los congresos locales a que, en el marco de la publicación de la reforma constitucional en materia política-electoral, consideren la inclusión de la paridad de género en el acceso de los cargos de elección popular, específicamente en las listas de ayuntamientos y alcaldías.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo relativo al informe de labores de los titulares de los órganos político administrativos en el D.F.

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo a la impunidad en materia de delitos cometidos contra periodistas.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a informar sobre las acciones a implementar encaminadas a reforzar la seguridad en las instalaciones e inmediaciones de ese transporte, ante los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días.

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de todos los acuerdos y proyectos que se han firmado con las agencias de seguridad de Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos a llevar a cabo las

investigaciones correspondientes en relación a los ataques a la sede del Partido Revolucionario Institucional en la entidad.

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno de estado de Veracruz a hacer una investigación pronta e imparcial del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y los diez periodistas asesinados durante su gestión.

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a los encargados de protección civil en los estados y en el Distrito Federal a implementar acciones que permitan disminuir al máximo los factores que están provocando los incendios forestales en nuestro país.

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar un diagnóstico de la contaminación en la Laguna de Tres Palos, en el estado de Guerrero, así como trabajos de saneamiento y rescate.

De la Sen. Marcela Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a informar sobre el número de procedimientos de extinción de dominio de bienes a favor del Estado que se han iniciado del año 2009 a la presente fecha.

De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la Secretaría de Salud se incrementen las acciones necesarias que garanticen el diagnóstico oportuno, tratamiento y atención integral de los menores que padecen cáncer, con el fin de reducir sustancialmente el número de muertes por esta causa.

De la Comisión de Seguridad Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir el decreto que declare la última semana de abril, como la "Semana Nacional de la Seguridad Social", en conmemoración a la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS

Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el punto de acuerdo relativo al equipo del acelerador lineal tomógrafo computarizado para el Hospital de la Mujer, presentado el 9 de diciembre de 2013.

EFEMÉRIDES

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día del Ejército Mexicano.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en conmemoración del 47º aniversario de la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco).

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día del Ejército Mexicano.

AGENDA POLÍTICA

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la Cumbre de Líderes de América del Norte.

C I T A .

ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE FEBRERO DE 2014

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cinco minutos del día jueves trece de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y cinco ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles doce de febrero de dos mil catorce.

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Autorizó a la Comisión de Turismo la ampliación de plazo para la presentación del dictamen al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado el 28 de noviembre de 2013.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el Informe de actividades relativo a la participación de la Delegación del Congreso de la Unión en la 22a. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, efectuada del 12 al 16 de enero de 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.- *Quedará de enterado.*

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de resultados de la visita oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Cuba, así como de su participación en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los días 28 y 29 de enero del año en curso, en la ciudad de La Habana.- *Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.*

Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2013, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho periodo.- *Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.*

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.*

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.*

(Iniciativas) La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre los géneros en el Poder Judicial.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera.*

El Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.*

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.*

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.*

La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.*

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.*

La Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con *proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.*

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Participación Ciudadana.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.*

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.*

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 3º, la fracción XI al artículo 18, la fracción III al artículo 21 y las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- *Con dispensa de segunda lectura. Para la presentación del dictamen, intervinieron los senadores: Hilda Esthela Flores Escalera, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; y Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, a favor; David Monreal Ávila del PT, a favor; y Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor. Fue aprobado por 96 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.*

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.- *El Presidente de la Mesa Directiva informó que recibió la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya sobre este asunto, la cual se integrará al Diario de los Debates. Fue aprobado por 98 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.*

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto que reformaba los artículos 20 y 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- *Fue aprobado en votación económica.*

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, con puntos de acuerdo:
1) Que exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores, a fin de incorporar la perspectiva de género en sus actividades.
2) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a llevar acciones afirmativas para la integración de un mayor número de mujeres en sus gabinetes.
3) Que exhorta a diversas autoridades a emprender acciones en materia de alerta de violencia de género.
4) Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a nombrar a una mujer como responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Intervinieron los senadores: Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar los dictámenes; y David Monreal Ávila, para hablar sobre el dictamen referido a la alerta de violencia de género. El Presidente de la Mesa Directiva informó que recibieron las intervenciones del Senador Benjamín Robles Montoya sobre estos dictámenes, los cuales se integrarán al Diario de los Debates. Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de las administraciones públicas de las 31

entidades federativas, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a erradicar el índice de personas que se encuentran en situación de calle en el territorio nacional.- *Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.*

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar la estrategia de seguridad y desarrollo integral de Michoacán.- *Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Junta de Coordinación Política el segundo de ellos.*

El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justificaron la suspensión de la prueba Enlace.- *Se turnó a la Comisión de Educación.*

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo para requerir a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva y, conforme a derecho, integre la averiguación previa correspondiente con motivo de la denuncia que por traición a la patria presentó el día 5 del mes en curso Andrés Manuel López Obrador y otros ciudadanos, respecto a conductas atribuibles a Enrique Peña Nieto y otros servidores públicos con motivo de la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia energética.- *Se turnó a la Comisión de Justicia.*

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- *Fueron aprobados en votación económica.*

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.*

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212; y se adiciona un artículo 307 bis, ambos de la Ley General de Salud.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.*

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia en mercados y centrales de abasto de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté libre del clembuterol.- *Se turnó a la Comisión de Salud.*

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva para la Cruzada Nacional contra el Hambre a explicar las razones por las cuales ha destinado una excesiva cantidad de recursos a la publicidad de este programa.- *Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.*

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores emprenda las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño respecto del fraude cometido en la compra de los detectores moleculares GT200.- *Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.*

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal el traslado de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres.- *Se turnó a la Comisión de Gobernación.*

De las Senadoras y Senadores Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de África, de América del Norte, de América Latina y el Caribe, de Europa, de Asia-Pacífico, de Organismos No Gubernamentales, con punto de acuerdo para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores establezca los criterios para la recepción de personal diplomático adscrito en México en las instalaciones del Senado de la República.- *Quedó en poder de la Mesa Directiva.*

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de evitar una posible crisis alimentaria en diversos poblados del estado de Guerrero.- *Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.*

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar las medidas necesarias que permitan prevenir y evitar los actos de discriminación en el deporte profesional de nuestro país.- *Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.*

(Efemérides) El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del 183 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con veintitrés minutos y citó a la siguiente el martes dieciocho de febrero a las once horas.

Fin de la sesión.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014

SENADORES ASISTENTES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO:

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS
ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO
ALCALÁ RUIZ BLANCA
ÁLVAREZ GARCÍA IVONNE LILIANA
AMADOR GAXIOLA DANIEL
ARAUJO LARA ANGÉLICA
ARRIOLA GORDILLO MÓNICA
ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL
AYALA ALMEIDA JOEL
BARBOSA HUERTA MIGUEL
BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA
BARRERA TAPIA MARÍA ELENA
BARROSO AGRAMONT RICARDO
BARTLETT DÍAZ MANUEL
BURGOS GARCÍA ENRIQUE
BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO
CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA
CAMACHO SOLÍS MANUEL
CASILLAS ROMERO JESÚS
CAVAZOS LERMA MANUEL
CERVANTES ANDRADE RAÚL
CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL
CORDERO ARROYO ERNESTO
CORRAL JURADO JAVIER
COTA JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO
CUÉLLAR CISNEROS LORENA
CUEVAS BARRÓN GABRIELA
DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA
DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA
DELGADO CARRILLO MARIO
DEMEDICIS HIDALGO FIDEL
DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA
DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA
DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO
ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO
ESCUDERO MORALES PABLO
FAYAD MENESES OMAR
FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.
FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA
FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO
FLORES SÁNCHEZ MARGARITA
GAMBOA PATRÓN EMILIO
GÁNDARA CAMOU ERNESTO
GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO
GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA
GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE
GASTÉLUM BAJO DIVA
GIL ZUARTH ROBERTO

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA
GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY
GONZÁLEZ CANTO FÉLIX
GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS
GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMILIO
GRACIA GUZMÁN RAÚL
GUERRA CASTILLO MARCELA
GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA
HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR
HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL
HERNÁNDEZ LECONA LISBETH
HERRERA ALE JUANA LETICIA
HERRERA ANZALDO ANA LILIA
HERRERA ÁVILA FERNANDO
IRIZAR LÓPEZ AARÓN
JUÁREZ CISNEROS RENÉ
LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR
LAVALLE MAURY JORGE LUIS
LÓPEZ BRITO FRANCISCO S
LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO
LOZANO ALARCÓN JAVIER
MARTÍNEZ ESPINOZA MARÍA VERÓNICA
MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA
MAYANS CANABAL FERNANDO E.
MAYANS CANABAL HUMBERTO
MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO
MENDOZA DAVIS CARLOS
MENDOZA DÍAZ SONIA
MERODIO REZA LILIA GUADALUPE
MONREAL ÁVILA DAVID
MORÓN OROZCO RAÚL
NEYRA CHÁVEZ ARMANDO
ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN
OROZCO SANDOVAL MARTÍN
ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR
ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA
PADIERNA LUNA DOLORES
PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA
PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA
PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO
PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO
PENCHYNA GRUB DAVID
PÉREZ MAGAÑA EVIEL
PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO
POZOS LANZ RAÚL AARÓN
PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS
PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO
RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO
RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ
RÍOS PITER ARMANDO
ROBLEDO ABURTO ZOÉ

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN
ROMERO CELIS MELY
ROMERO DESCHAMPS CARLOS
ROMERO HICKS JUAN CARLOS
ROMERO LAINAS ADOLFO
ROMO MEDINA MIGUEL
ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN
RUFFO APPEL ERNESTO
SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH
SALDAÑA PÉREZ LUCERO
SALINAS SADA NINFA
SÁNCHEZ GARCÍA GERARDO
SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS
SANSORES SAN ROMÁN LAYDA
TELLO CRISTERNA ALEJANDRO
TORRES CORZO TEÓFILO
TORRES GRACIANO FERNANDO
TORRES PEIMBERT MARCELA
VEGA CASILLAS SALVADOR
YUNES LANDA HÉCTOR
YUNES MÁRQUEZ FERNANDO
YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

SENADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II A IV DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO:
BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA
BLASQUEZ SALINAS MARCO A.
ROJAS HERNÁNDEZ LAURA

SENADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA:
ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER
SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F

ATENTAMENTE

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
SECRETARIA

REPORTE DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA

De conformidad con los artículos 62, 63 y 66 del Reglamento del Senado de la República, se presenta la siguiente relación:

SENADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA A LA SIGUIENTE SESIÓN:

LA CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2014
GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA
ROJAS HERNÁNDEZ LAURA
SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH

ATENTAMENTE

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
SECRETARIA

17/02/2014

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

UNA, DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE LA "4TH IEL-SEELRIL INTERNACIONAL OIL AND GAS LAW CONFERENCE, REALIZADA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LONDRES, INGLATERRA.



SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS

DR. ADOLFO ROMERO LAINAS
SENADOR DE LA REPÚBLICA

México, Distrito Federal a 13 de febrero de 2014

OFICIO: ARL/13022014/180

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.-

Estimado senador Presidente:

Por medio de la presente remito a usted, para los efectos reglamentarios aplicables, el informe de las actividades que realicé en el marco de la Mth IEL-SEELRIL International Oil and Gas Law Conference" celebrada del 4 al 6 de diciembre de 2013 en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Anexo una breve relación del contenido en dicha Conferencia de referencia

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi mayor consideración

ATENTAMENTE

El evento reunió a destacados juristas a nivel mundial en materia explotación y comercio de gas natural y petróleo. En las Conferencias se trataron diversos aspectos relativos a la modernización de la industria de los hidrocarburos en un mundo globalizado, los riesgos de prácticas de corrupción, la aplicación de sanciones y la actuación del crimen organizado a nivel mundial afectando todos, el desempeño de las organizaciones.

Los trabajos presentados también abordaron la problemática relacionada con el uso de nuevas tecnologías para la extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales y que representan un reto tecnológico y financiero. Anexo el programa de las conferencias.

Otro aspecto relevante fue el de la interpretación de los acuerdos o contratos que fueran objeto de disputa, sobre todo cuando los términos de los propios contratos admitieran más de una interpretación -¿qué criterios deberán prevalecer para dirimir diferencias? -¿los criterios económicos solamente? Estos cuestionamientos están en la base del arbitraje internacional en la materia.

Asimismo se habló sobre los contratos de adquisición y su cumplimiento, se hizo referencia a los principales problemas y soluciones documentados. Lo cual se puso en la perspectiva de su impacto en el comportamiento de los mercados internacionales de hidrocarburos.

El evento fue presentada por Paul Stockley, secretario de la Conferencia. Entre los panelistas figuraron Mary C. Spearing, de la compañía Baker Botts, L.L.P., con sede en Washington, Estados Unidos; Linda Szymnski, Jefe de la oficina de Ética y de Cumplimiento de la Royal Dutch Shell; Sam Tate, Asesor de la British Petroleum; Vannesa Harvard-Williams, de la compañía Globakl Head of Enviroment, de Londres; Piotr Spaczynski de la compañía Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A. de Varsovia, Polonia, entre otros especialistas.

Una importante ponencia abordó el caso, hoy paradigmático, de la explotación de petróleo y gas no convencional en los Estados Unidos de Norteamérica, se proporcionaron datos actualizados sobre las últimas estadísticas con énfasis en el impacto económico. Otros casos específicos fueron los de África, Medio Oriente, China y la región Asia-Pacífico.

En resumen:

Ahora que nuestro país será destino de nuevas e importantes inversiones extranjeras directas e indirectas en materia de hidrocarburos, a raíz de las reformas estructurales aprobadas recientemente, como nunca antes México deberá considerar que este nuevo escenario implicará una relación inédita con el derecho internacional que regula el intercambio comercial de hidrocarburos, los contratos internacionales y las obligaciones sujetas al arbitraje fuera de nuestras fronteras. Por lo que igualmente, impactará la transferencia de tecnología y derechos industriales que regulan la transferencia de tecnología petrolera y con los cuales deberemos estar mayormente familiarizados.

Si bien, la inversión extranjera directa traerá en la industria petrolera, pero sobre todo la relativa a la explotación del gas natural de yacimientos no convencionales, significará un fuerte incentivo a la ceración de empleos y capital, no debemos perder de vista que también significará un enorme reto para los mexicanos de hoy garantizar una explotación racional de los recursos naturales no renovables, que respete a la vez el entorno ecológico y que se traduzca en una posibilidad de desarrollo sustentable para las generaciones futuras.

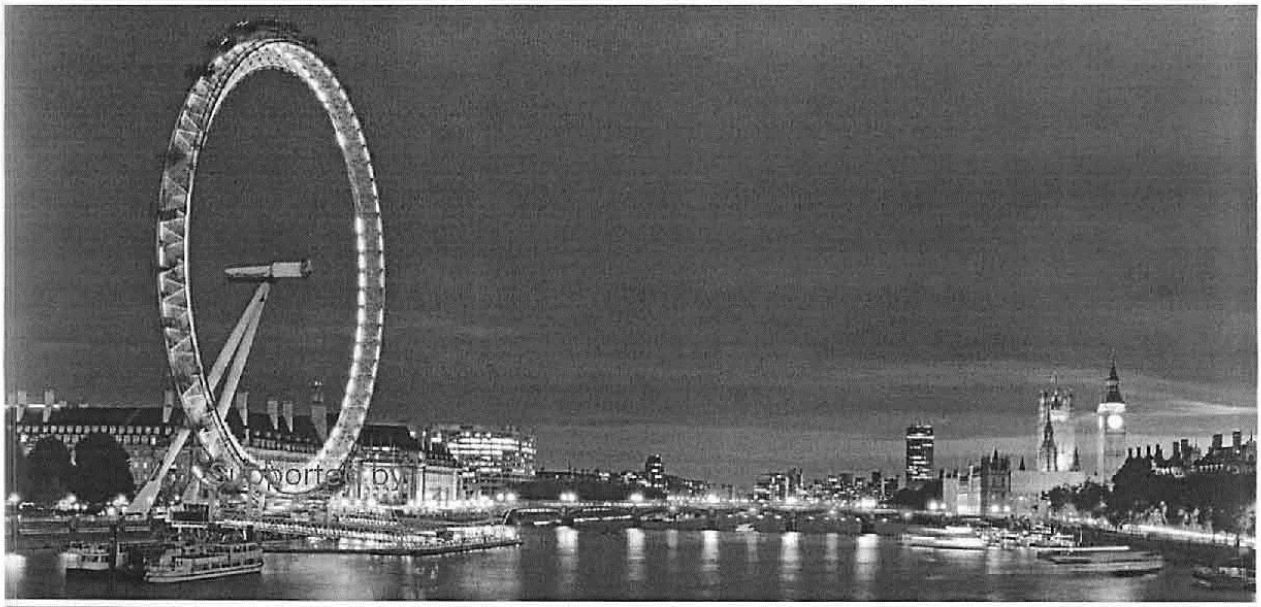
Presented by

Institute for ENERGY LAW

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION
the global voice of the legal profession

The Oil and Gas Law Committee of the IBA Section on Energy, Environment, Natural Resources and Infrastructure Law (SEERIL)

4th IEL-SEERIL International Oil and Gas Law Conference



4th IEL-SEERIL International Oil and Gas Law Conference

December 4-6, 2013
Waldorf Hilton Hotel
London, United Kingdom

Supported by

Institute for Transnational Arbitration (ITA) of The Center for American and International Law

IBA European Forum

Headline Conference Sponsor

EY Building a better working world

Highlights

- Featured Luncheon Speaker: Professor Jan Paulsson "The Purpose of Investment Protection Treaties Is Not To Protect Investments"
- Corruption, sanctions and economic crime
- Economic logic and interpreting agreements
- Damages in the shale business
- Moving towards an African Lex Petrolea

Up to 9 hours of CPD hours available.*
Conference Certificates of Attendance will be provided to all registrants. The Certificate may be used to obtain accreditation in self-reporting MCLE credit states (US).

*As per the Solicitors Regulation Authority of England and Wales. The number of CPD points/hours available may vary for other bar associations and law societies on their criteria.

Register Now!
cailaw.org/iel • www.ibanet.org

4th IEL-SEERIL International Oil and Gas Law Conference

SCHEDULE AT A GLANCE December 4-6

Conference Co-Chairs

Paul Stockley
Bond Dickinson LLP
London, United Kingdom
Publications Officer, IBA Oil and Gas Law Committee

Alex Msimang
Vinson & Elkins LLP
London, United Kingdom

Associate Social Event Sponsors

Bond Dickinson

DEBEVOISE & PLIMPTON

HERDEM&Co. ATTORNEYS AT LAW

Conference Luncheon Sponsors

ÆLEX

MATTOS FILHO >
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados

Conference Refreshment Break Sponsor

ODUJINRIN & ADEFULU

Conference Exhibitors

EY Building a better working world

GETTING THE DEAL THROUGH

Global Law and Business

Practical Law

Wednesday, December 4

19:00	OPENING RECEPTION AT ST JOHN'S MUSEUM

Thursday, December 5

9:00	WELCOME, OVERVIEW AND INTRODUCTIONS
	INTERNATIONAL REGULATORY UPDATE MODULE
9:15	LEGISLATION AND ENFORCEMENT UPDATE: CORRUPTION, SANCTIONS AND ECONOMIC CRIME
10:30	COFFEE/TEA BREAK
10:50	HYDRAULIC FRACTURING REGULATION AROUND THE WORLD
11:50	WHAT TO EXPECT IN A NORTH SEA MACONDO DEEP WATER EXPLOSION SCENARIO
12:30	HOSTED LUNCHEON FEATURING PROFESSOR JAN PAULSSON
	DISPUTE RESOLUTION MODULE
14:00	WHEN AN AGREEMENT ADMITS TWO INTERPRETATIONS, SHOULD ECONOMIC LOGIC HAVE A BEARING ON PROPER INTERPRETATION?
14:40	DAMAGES IN THE SHALE BUSINESS: ANYTHING DIFFERENT FROM THE USUAL OIL AND GAS DISPUTE?
15:15	COFFEE/TEA BREAK
15:30	DEALING WITH CORRUPTION ALLEGATIONS IN OIL & GAS ARBITRATION DISPUTES
16:00	MULTI-TIER DISPUTE RESOLUTION CLAUSES: DRAFTING AND ENFORCING?
16:25	MANAGEMENT OF DISPUTES AND CHALLENGES FACED BY IN-HOUSE COUNSEL
17:10	ADJOURN
19:30	RECEPTION AND DINNER AT THE LONG ROOM AT LORDS

Friday, December 6

	REGIONAL UPDATE MODULE
9:00	U.S. UNCONVENTIONAL OIL AND GAS: A CONTRACTUAL OVERVIEW - USA UPDATE
9:30	MOVING TOWARDS AFRICAN LEX PETROLEA - AFRICA UPDATE
10:00	LEBANON, ISRAEL AND CYPRUS UPDATE
10:30	COFFEE/TEA BREAK
10:45	THE FALKLAND ISLANDS: WHAT OIL & GAS LAWYERS NEED TO KNOW
11:15	CHINA UPDATE
11:45	ASIA-PACIFIC UPDATE
12:15	NETWORKING LUNCHEON
	MERGERS & ACQUISITIONS MODULE
14:00	PRIVATE COMPANY ACQUISITIONS - PRACTICAL PROBLEMS AND SOLUTIONS
14:25	UPSTREAM M&A - A STATOIL PERSPECTIVE
14:50	COFFEE/TEA BREAK
15:05	UPSTREAM M&A IN BRAZIL
15:30	DE-RISKING M&A IN HIGH GROWTH MARKETS
15:55	PANEL Q&A SESSION
16:30	ADJOURN

SCHEDULE December 4

19:00 OPENING RECEPTION AT ST JOHN'S MUSEUM

Dress code: Casual
This social function is included in the delegate and guest registration fee.
Please indicate on the registration form if you wish to attend.

SCHEDULE December 5

9:00 WELCOME, OVERVIEW AND INTRODUCTIONS

— Paul Stockley, Conference Co-Chair, Bond Dickinson LLP, London, United Kingdom, Publications Officer, IBA Oil and Gas Law Committee

— Alex Msimang, Conference Co-Chair, Vinson & Elkins LLP, London, United Kingdom

INTERNATIONAL REGULATORY UPDATE MODULE

Module Chairs: David Isenegger, Centrica plc, Windsor, United Kingdom and Kristine Robidoux, QC, Gowling Lafleur Henderson LLP, Calgary, Canada

9:15 LEGISLATION AND ENFORCEMENT UPDATE: CORRUPTION, SANCTIONS AND ECONOMIC CRIME

Our panel will discuss important updates in international economic crime legislation and enforcement.

PANEL MODERATOR:
— Kristine Robidoux, QC, Gowling Lafleur Henderson LLP, Calgary, Canada

PANELISTS:
— Mary C. Spearing, Baker Botts, L.L.P., Washington, D.C., USA

— Linda Szymanski, Chief Ethics and Compliance Officer, Royal Dutch Shell, The Hague, The Netherlands

— Sam Tate, Senior Counsel, BP plc, London, United Kingdom

10:30 COFFEE/TEA BREAK

10:50 HYDRAULIC FRACTURING REGULATION AROUND THE WORLD

Shale oil and gas, horizontal drilling, and in particular the technology involved in hydraulic fracturing, have received mixed responses around the world. Our panel considers how governments have decided to regulate hydraulic fracturing in different jurisdictions.

PANEL MODERATOR:
— David Isenegger, Centrica plc, Windsor, United Kingdom

PANELISTS:
— Vanessa Havard-Williams, Global Head of Environment, Linklaters LLP, London, United Kingdom

— Alex G. MacWilliam, Dentons, Calgary, Alberta, Canada

— Piotr Spaczyński, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A., Warsaw, Poland

Associate Social Event Sponsors
Bond Dickinson DEBEVOISE & PLIMPTON HERDEM&Co. ATTORNEYS AT LAW

Conference Refreshment Break Sponsor
ODUJINRIN & ADEFULU SINCE 1972

SCHEDULE December 5

11:50 WHAT TO EXPECT IN A NORTH SEA MACONDO DEEP WATER EXPLOSION SCENARIO

This panel will review the regulatory and industry responses to the Macondo blowout, comparing the challenges of a subsea well incident with other major hazards such as gas releases. Delegates will be invited to consider how well their companies/ clients are now organised to prevent - or respond to - a major offshore incident and to comply with the changes in the regulatory environment.

— Sam Dunkley, Consultant Lawyer, Centrica Storage, Centrica plc, Windsor, United Kingdom, and Acting General Counsel, Oil Spill Response Limited, London, United Kingdom

— Ewan Parsons, Commercial Lead, Subsea Well Response Project Limited, London, United Kingdom

— Judith Aldersey-Williams, CMS Cameron McKenna LLP, Aberdeen, United Kingdom

12:30 HOSTED LUNCHEON

The Purpose of Investment Protection Treaties Is Not To Protect Investments

— Professor Jan Paulsson, Michael Klein Distinguished Chair, University of Miami School of Law, Miami, Florida, USA

DISPUTE RESOLUTION MODULE
Presented in cooperation with The Institute for Transnational Arbitration

HOT TOPICS AND RECENT CASES IN OIL & GAS ARBITRATION

Module Chairs: Elisabeth Eljuri, Norton Rose Fulbright, Caracas, Venezuela and Laura M. Robertson, ConocoPhillips, Houston, USA

14:00 WHEN AN AGREEMENT ADMITS TWO INTERPRETATIONS, SHOULD ECONOMIC LOGIC HAVE A BEARING ON PROPER INTERPRETATION?

Often within the four corners of an agreement contract language allows some latitude for interpretation. This can create fertile ground for discussion or worse, dispute. Sometimes, purely legal interpretations are not sufficient to resolve divergent views clearly. Also, reliance on "industry standards and practices" or "good oilfield practices" can fall short or this too may lend itself to disparate interpretations.

Tests of reasonableness and fairness may therefore turn on which interpretation: (a) makes the most business sense, or is based on the strongest economic logic, (b) maintains, promotes or is consistent with greatest alignment and harmony between all or most parties, or (c) is mathematically sound.

— Daniel Johnston, Johnston & Co., Hancock, New Hampshire, USA

14:40 DAMAGES IN THE SHALE BUSINESS: ANYTHING DIFFERENT FROM THE USUAL OIL AND GAS DISPUTE?

Obtaining natural gas from shale formations has quickly become an important component of the world's future energy plans, not only due to the estimated volume of shale gas but also due to the use of technologies, such as horizontal drilling and hydraulic fracturing. These technologies have changed the legal landscape of oil and gas disputes and the damages sought. Horizontal drilling creates issues about subsurface trespass, pooling, unitization, and royalty payments; hydraulic fracturing raises questions about contamination of drinking water resources, wastewater disposal, fracking fluid chemicals, air pollution, and induced earthquakes. These issues and questions have been brought to the legal forefront by landowners, environmental groups, and others who have filed complaints with government agencies and lawsuits against oil and gas operators seeking to enjoin further horizontal drilling and hydraulic fracturing and requesting compensation for damaged

Conference Luncheon Sponsors

ÆLEX

MATTOS FILHO >
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados

Associate Social Event Sponsors

Bond Dickinson

DEBEVOISE & PLIMPTON

HERDEM&Co. ATTORNEYS AT LAW

SCHEDULE December 5

property, personal injury, lost royalties, and other expenses. Landowners also request amendments to their oil and gas leases, many of which were signed before the shale gas boom and which do not have pooling or unitization provisions or which pay low royalty rates. This session will explore the unique claims and legal disputes created by the current shale gas boom and the new types of damages being sought.

— John Connor, GSI, Houston, Texas, USA

— Barclay Nicholson, Norton Rose Fulbright, Houston, Texas, USA

15:15 COFFEE/TEA BREAK

15:30 DEALING WITH CORRUPTION ALLEGATIONS IN OIL & GAS ARBITRATION DISPUTES

The regulatory and compliance burdens for oil and gas multi-nationals are great, and have implications for dispute resolution practice. Our speakers will consider issues such as the "equality of arms", and the current practices for dealing with issues of bribery and corruption in commercial and investment treaty arbitration as well as in national courts, and will also review examples and recent cases where corruption or bribery issues have been a factor in a dispute.

— Dr. Evgeny Raschevsky, Egorov Puginsky Afanasiev & Partners, Moscow, Russia

— Thomas K. Sprange, King & Spalding, London, United Kingdom

16:00 MULTI-TIER DISPUTE RESOLUTION CLAUSES: DRAFTING AND ENFORCING?

Multi-tiered dispute resolution clauses are particularly important and complex in major energy contracts. These clauses raise significant practical issues, as well as difficult legal issues. It is critical, both in drafting dispute resolution and in resolving disputes under such clauses, to be aware of these issues.

— Gary Born, WilmerHale, London, United Kingdom

16:25 MANAGEMENT OF DISPUTES AND CHALLENGES FACED BY IN-HOUSE COUNSEL

This panel of distinguished in-house arbitration counsel will debate the growing criticisms to international arbitration in general, and investment arbitration in particular. These experts will share their views and experiences on controversial topics, such as the increasing number of challenges to arbitrators, the need for clear and predictable standards, abuse of the annulment system, time and costs of proceedings, as well as new developments towards improving efficiency through mediation and the new IBA State-Investor Mediation Rules.

PANEL MODERATOR:
— Laura M. Robertson, Managing Counsel, Arbitrations and Claims, ConocoPhillips Company, Houston, Texas, USA

PANELISTS:
— Mimi M. Lee, Managing Counsel, Litigation, Chevron Upstream, San Ramon, California, USA

— Kevin Smith, Senior Legal Counsel, Global Litigation, Shell International Limited London, United Kingdom

— Alberto F. Ravell, Senior Counsel, ConocoPhillips, Houston, Texas, USA

17:10 ADJOURN

19:30 RECEPTION AND DINNER AT THE LONG ROOM AT LORDS

Ticket price: £100 • Dress code: Strictly jacket and tie

Associate Social Event Sponsors
Bond Dickinson DEBEVOISE & PLIMPTON HERDEM&Co. ATTORNEYS AT LAW

Conference Refreshment Break Sponsor
ODUJINRIN & ADEFULU

SCHEDULE December 6

REGIONAL UPDATE MODULE

Module Chairs: Marco Bollini, Eni UK Limited, London, United Kingdom and Nicolas Bonnefoy, Ashurst LLP, London, United Kingdom

9:00 U.S. UNCONVENTIONAL OIL AND GAS: A CONTRACTUAL OVERVIEW – USA UPDATE

- Sale and Purchase Agreements – how are they structured?
- The interplay between the Joint Venture Agreement and the Joint Operating Agreement
- Government Approvals (CFIUS and HSR)

— Andrew B. Derman, International Energy Practice Group Leader, Thompson & Knight LLP, Dallas, Texas, USA

9:30 MOVING TOWARDS AFRICAN LEX PETROLEA – AFRICA UPDATE

- Analysis of the legal and contractual regime applicable to hydrocarbons exploration and exploitation in the Member Countries of the African Petroleum Producers Association
- Model Production Sharing Agreement
- Contribution to African Lex Petrolea

— Nicolas Bonnefoy, Ashurst LLP, London, United Kingdom

10:00 LEBANON, ISRAEL AND CYPRUS UPDATE

- Update on licensing opportunities in the East Mediterranean Sea
- Overview of how hydrocarbon opportunities are shaping relationships of surrounding states
- Description of the maritime boundary dispute between Lebanon and Israel and its impact on petroleum operations

— Stephen Millar, CMS Cameron McKenna, Aberdeen, United Kingdom

10:30 COFFEE/TEA BREAK

10:45 THE FALKLAN D ISLANDS: WHAT OIL & GAS LAWYERS NEED TO KNOW

Following years of speculation, significant quantities of oil & gas have now been found offshore the Falkland Islands. Exploration was led in the main by small independents listed on London's AIM stock market. But as we move towards production, bigger players are moving in.

In this talk we give a brief history of the industry in the Falklands, an overview of the regulatory regime and a lawyer's overview of the unique political and operational challenges faced by those operating there.

— Danielle Beggs, Dentons, London, United Kingdom

— John Stockdale, Dentons, London, United Kingdom

11:15 CHINA UPDATE

Our speaker will give an update on legal issues affecting oil and gas development in China, as well as discussing issues affecting Chinese companies operating abroad.

— Lu Jing, Deputy Director, Legal Affairs Department, China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC), Beijing, China

Associate Social Event Sponsors

Bond Dickinson DEBEVOISE & PLIMPTON HERDEM&Co. ATTORNEYS AT LAW

Conference Refreshment Break Sponsor

ODUJINRIN & ADEFULU

SCHEDULE December 6

11:45 ASIA-PACIFIC UPDATE

- The growth of LNG and its changing markets
- Portfolio re-structuring and regional exits
- The development of Asian NOCs
- The promise of shale and unconventionals

— Paul Griffin, Allen & Overy LLP, Hong Kong, China; Vice-Chair, IBA Oil and Gas Law Committee

12:15 NETWORKING LUNCHEON

MERGERS & ACQUISITIONS MODULE

Module Chairs: Stephen Rees, Shell Upstream International, The Hague, The Netherlands and Brian A. Bradshaw, Morgan, Lewis & Bockius LLP, Houston, USA; Chair, IBA Oil and Gas Law Committee

14:00 PRIVATE COMPANY ACQUISITIONS – PRACTICAL PROBLEMS AND SOLUTIONS

The presentation will look at some problem issues that can arise in negotiating Sale and Purchase Agreements and provide practical advice and guidance on how to deal with these issues.

— Nigel Boardman, Slaughter & May, London, United Kingdom

14:25 UPSTREAM M&A - A STATOIL PERSPECTIVE

An overview of recent M&A trends with special focus on legal issues relating to transactions on the UK and Norwegian Continental Shelves.

— Leo Csaky, Senior Legal Counsel, Global Strategy & Business Development, Statoil (U.K.) Limited, London, United Kingdom

14:50 COFFEE/TEA BREAK

15:05 UPSTREAM M&A IN BRAZIL

Recent M&A trends and legal issues in transactions involving Brazilian E&P assets.

— Giovani Loss, Mattos Filho Advogados, Rio de Janeiro, Brazil; Membership Officer, IBA Oil and Gas Law Committee

15:30 DE-RISKING M&A IN HIGH GROWTH MARKETS

An update on recent trends in international upstream M&A.

— Jonathan Lamb, Principal Counsel Corporate Finance, Legal Department, BG Group, Reading, United Kingdom

15:55 PANEL Q&A SESSION

All speakers from the M&A module will join a Panel to answer questions from the audience on their presentations or on other topical Upstream M&A issues.

16:30 ADJOURN

Conference Luncheon Sponsors

ÆLEX

MATTOS FILHO >
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados

Associate Social Event Sponsors

Bond Dickinson

DEBEVOISE & PLIMPTON

HERDEM&Co. ATTORNEYS AT LAW

Conference Refreshment Break Sponsor

ODUJINRIN & ADEFULU

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

OFICIO CON EL QUE REMITE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, EL INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2013.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.

COMUNICACIONES DE COMISIONADOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS.

DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS WANDA SIGRID ARZT COLUNGA, GERARDO LAVEAGA, MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO Y ÁNGEL TRINIDAD ZALDÍVAR, POR LAS QUE PRESENTAN SENDAS SOLICITUDES PARA FORMAR PARTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DISPONE EL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES DEL 7 DE FEBRERO DE 2014.

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
ÓRGANISMO AUTÓNOMO
OFICINA DEL COMISIONADO

OFICIO: IFAI-OA/ATZ/001/14

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2014

Senador Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
P r e s e n t e.

En atención al Tercero de los Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* con fecha siete de febrero del año en curso, presento ante ustedes mi solicitud para ser ratificado y concluir el encargo de Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) al que fui nombrado con fecha 18 de junio del 2009 con vigencia hasta el año 2016.

Mi candidatura encuentra sustento en diversos antecedentes que hago de su conocimiento relacionados con mi trayectoria profesional, desarrollada a lo largo de 30 años como servidor público, en particular en cuanto a mi formación y experiencia en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Ello a fin de que cuenten con mayores elementos al momento de llevar a cabo su evaluación.

Primero.- En el año 2003, siendo Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia en la Secretaría de Turismo, bajo mi coordinación, se puso en práctica un sistema informático (único en su momento) denominado SISI-Tur, que fue utilizado por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para gestionar y responder solicitudes de información a partir de la entrada en vigor la Ley Federal de Transparencia.

Segundo.- Un año después, en mayo del 2004, mediante riguroso examen de selección, ingresé como Secretario Ejecutivo del IFAI, cargo que ocupé hasta junio de 2009 en que fui nombrado Comisionado. A partir de mi incorporación como Secretario Ejecutivo, impulsé y coadyuve en la creación de la "Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública" (COMAIP), organismo que agrupa a todos los institutos garantes del acceso a la información pública del país, desempeñándome como Secretario Técnico de dicho organismo.

Página 1 de 4

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
ÓRGANISMO AUTÓNOMO
OFICINA DEL COMISIONADO

OFICIO: IFAI-OA/ATZ/001/14

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2014.

Tercero.- En 2005 promoví el proyecto para incorporar los conceptos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en los libros de texto gratuito de primaria. Esa iniciativa concluyó favorablemente en 2008 con la inclusión de esos contenidos en el libro de *Formación Cívica y Ética* de cuarto grado. Estoy convencido de que para lograr un verdadero avance en la materia y que estos temas se vuelvan de uso cotidiano y se incorporen en el ánimo de los ciudadanos, es indispensable comenzar con los niños. Creo firmemente que la mejor manera de construir ciudadanos es a través del proceso educativo.

Cuarto.- La Secretaría Ejecutiva a mi cargo fue la responsable, al interior del IFAI, de coordinar los trabajos para llevar a buen puerto la reforma al artículo sexto constitucional que se publicó en el año 2007. Esta reforma representó un significativo avance en materia de transparencia en México, al estar orientada a armonizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el país, contribuyendo a eliminar asimetrías entre las distintas regiones y zonas.

Quinto.- Además de diversos artículos en periódicos y revistas como El Universal, Excélsior, Voz y Voto, Etcétera, he publicado dos ensayos: en 2006, "*La Transparencia y el acceso a la información como política pública y su impacto en la sociedad y el gobierno*" bajo el sello de Miguel Ángel Porrúa en coedición con la Cámara de Diputados; y en 2013 el libro "*Libertad de expresión y responsabilidad social, Estudios en homenaje al doctor Jorge Carpizo*", ed. OXFORD-UNAM contiene el ensayo denominado: "¿Autonomía Constitucional al IFAI?".

Sexto.- Finalmente, en lo que se refiere a mi desempeño como Comisionado, considero que me he conducido con apego a los principios que marca la Constitución, siempre en favor del desarrollo democrático de nuestro país. Mis 30 años en el servicio público me han permitido conocer distintos ángulos de la Administración Pública Federal, en instituciones tan diversas como las Secretarías de Educación Pública; Comunicaciones y Transportes; Gobernación y Turismo, así como en PEMEX, CONASUPO, LICONSA y en la Presidencia de la República, lo que me permite hacer un balance y discernir adecuadamente entre el legítimo interés que pueden tener algunas instituciones del Estado por clasificar información y la necesidad de la ciudadanía de conocer la información que sustenta el actuar público y que permita la rendición de cuentas. Las experiencias que he tenido en el sector público me han brindado conocimientos, habilidades y sensibilidad para encontrar, caso por caso, la manera de

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
ÓRGANISMO AUTÓNOMO
OFICINA DEL COMISIONADO

OFICIO: IFAI-OA/ATZ/001/14

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2014.

resolver o plantear posicionamientos que armonizan el ejercicio del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad y fortaleza de las instituciones del Estado.

Una visión, una propuesta.

Tengo certeza de que nuestra democracia se consolidará en la medida en que los gobiernos, sin distingos partidistas, se comprometan con la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí radica la trascendencia de las reformas impulsadas y aprobadas por ustedes, que buscan convertir el tema en una verdadera Política de Estado que, ajena a los vaivenes sexenales, responde a uno de los más sentidos reclamos de la sociedad: que los servidores del Estado trabajen a la luz del día. Gracias al nuevo marco normativo, podemos afirmar que, finalmente, el derecho humano de acceso a la información se aplicará de manera uniforme a nivel nacional.

Al garantizar el acceso a la información, el Estado propicia condiciones favorables para la acción de ciudadanos más libres, más conscientes y más responsables de la vida de su comunidad. Una sociedad más informada se vuelve exigente e impulsa a los gobiernos a generar políticas públicas responsables.

La participación de la sociedad civil no significa, bajo ninguna circunstancia, suplantación del poder público o la desaparición de éste, sino el fortalecimiento de ambos actores gracias a la coordinación surgida del diálogo necesario entre gobernantes y gobernados que se da, entre otras formas, a través de los mecanismos de comunicación e información. Más sociedad civil no implica menos gobierno, sino mejor gobierno. Más eficaz, incluyente. Un gobierno que sea coordinador de los esfuerzos de todo el conglomerado social. Sociedad y gobierno deben conformar una sólida red que dé sustento al Estado. En palabras de Alain Tourraine: "La democracia se define no por la separación de los poderes sino por la naturaleza de los vínculos entre sociedad civil, sociedad política y Estado".

La transparencia trae beneficios a todos: a los ciudadanos les permite elevar el conocimiento de los problemas y proponer soluciones sustentadas; a la clase política y a las autoridades, ganar confianza y legitimidad en el ejercicio del poder. El acceso a la información es un instrumento de justicia, de igualdad social, pues pone en el mismo plano de conocimiento a todos, tanto a los más favorecidos como a aquellos que no tienen privilegios.

Página **3** de **4**

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
ÓRGANISMO AUTÓNOMO
OFICINA DEL COMISIONADO

OFICIO: IFAI-OA/ATZ/001/14

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2014.

La transparencia ha acreditado que, desde la política, se pueden construir coincidencias, conciliar lógicas divergentes y equilibrar visiones e intereses contrapuestos. Esto se hizo evidente con la reforma al artículo sexto constitucional recién aprobada, en que actores políticos de todos los partidos dejaron de lado enconos y mezquindades y alcanzaron un gran acuerdo para dotar al ciudadano de un derecho humano potenciado y, al país en su conjunto, le entregaron una Política de Estado, de esas que hacen mucha falta. Está claro que la transparencia no es monopolio de ninguna fuerza política sino el resultado de un vasto consenso nacional. La transparencia trasciende partidos, ideologías e intereses para comprometernos a todos, sin distingos partidistas, ni zonas geográficas, ni demarcaciones políticas.

Finalmente, la coordinación que mandata la Constitución entre el IFAI y distintas autoridades como el INEGI, el AGN y la ASF, marcan la ruta de inicio de un verdadero sistema de rendición de cuentas. Ahí se encuentra el mayor reto: transitar del acceso a la información a la rendición de cuentas. Rendición de Cuentas implica conocer no sólo los costos de una obra pública o los proyectos de desarrollo social, sino conocer las razones que llevaron a tomar esas decisiones.

Hoy que se ha vuelto común hablar de virus, el de la opacidad es uno que produce despilfarro, discrecionalidad e impunidad. La mejor vacuna para inocular la necesaria austeridad republicana es la transparencia.

Atentamente

Ángel Trinidad Zaldívar

Cc.p. Sen. Pablo Escudero Morales.- Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Presente.
Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, Presente.
Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Presente.

Página 4 de 4

Ciudad de México. 17 de febrero de 2014.

Senador Dr. Raúl Cervantes Andrade.
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Presente.

Estimado Señor Senador:

Con fundamento en el artículo tercero transitorio del *"Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia"*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del presente año, expongo a usted lo siguiente:

Que por su conducto presento al Senado de la República, mi solicitud para formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, referido en el citado Decreto.

Por tal razón, solicito tenga en consideración esta petición, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del transitorio mencionado, con el propósito de robustecer la experiencia del nuevo órgano colegiado y garantizar su continuidad institucional; elementos indispensables para que el organismo garante afronte con éxito los retos que impone su creación.

Ante esta trascendental reforma constitucional, deseo colaborar en este nuevo organismo, con la experiencia y conocimiento que he acumulado, desde el año 2003, en mi desempeño como Consejera Ciudadana del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal; Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; y Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Cargos de alta responsabilidad, con los que he sido distinguida y en los que siempre me he desempeñado con profesionalismo, compromiso, imparcialidad, independencia y con una profunda convicción, garantizando los derechos humanos de acceso a la información pública y el de la protección de datos personales.

Por lo expuesto y fundado, y estando dentro del plazo previsto, solicito a esa soberanía tenga a bien aprobar mi petición.

Atentamente,

María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Cc. Senadora Arely Gómez González.- Presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República

GERARDO LAVEAGA

México, D.F., 13 de febrero de 2014.

C. Senador Dr. Raúl Cervantes Andrade,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Presente

Estimado Señor Senador:

En los términos del Artículo Tercero transitorio del *Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Transparencia*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 7 de febrero de este año, por este conducto me permito formular mi petición para formar parte del nuevo organismo garante que establece el artículo 6° Constitucional.

Como lo señalé durante la ceremonia en la que el Presidente de la República promulgó el citado Decreto, considero que el IFAI es un detonador de la participación ciudadana. Pero un detonador institucional: un tribunal administrativo, un órgano del Estado que debe conducirse en los términos constitucionales y legales. Bajo esta premisa, estimo que cuento con las características profesionales y la experiencia para defender los derechos de acceso a la información y protección de datos, como lo he venido haciendo durante los últimos años.

Tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) –por citar sólo las dos últimas instituciones en que laboré antes de ingresar al IFAI–, impulsé la apertura judicial, los juicios orales y la modernización de

...#

GERARDO LAVEAGA

- 2 -

nuestro sistema de justicia... Lo mismo he hecho en mis libros, en mis artículos académicos, en las clases que imparto y, desde luego, en mi encargo como comisionado y comisionado Presidente del IFAI.

Estoy convencido de que, en la rendición de cuentas, se benefician tanto la sociedad civil como los sujetos obligados: la primera, porque puede participar de forma más informada, más crítica y más activa en la construcción de nuestro Estado Democrático de Derecho; los segundos, porque fortalecen su legitimidad. Esto los vuelve más confiables y eficaces.

En caso de que ustedes me permitan formar parte del nuevo organismo por el tiempo que me resta, de acuerdo con el nombramiento que se me entregó el 12 de abril de 2012, me comprometo a actuar con independencia, imparcialidad, eficacia, profesionalismo, transparencia y serenidad en el ejercicio de mis funciones.

En espera de la decisión que emita el Senado, y sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

C.c.p. Senadora, Mtra. Arely Gómez.- Presidente del Comité de Gestión y Acceso a la Información del Senado de la República

C. Senador Dr. Raúl Cervantes Andrade,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
P r e s e n t e.

Estimado Señor Senador,

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 2014, en legales y tiempo y forma, respetuosamente elevo a la consideración de esa H. Soberanía la presente petición, con el objeto de ser ratificada como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) por el tiempo que resta al honroso nombramiento de que fui objeto el 12 de septiembre de 2009.

Antes de precisar y fundamentar las razones por las que respetuosamente solicito terminar el período para el que fui votada por el Senado en octubre de 2009, es relevante subrayar el trabajo que el IFAI ha hecho como garante del derecho a la información sin tener que probar interés jurídico alguno. Una de las fortalezas más grandes de nuestro marco jurídico, y en particular del mecanismo de solicitud de información, es que el solicitante no tiene que justificar el propósito,

1

motivo o razón para solicitar información de los sujetos obligados en los términos que establece nuestro marco jurídico.

En sus 10 años de existencia, se han registrado más de un millón de solicitudes de información a diferentes dependencias del gobierno federal, de las cuales el Instituto ha procesado 53 mil recursos de revisión 441 recursos al mes en promedio solicitados principalmente por los sectores académico y empresarial, así como por los propios funcionarios públicos y por profesionales de los medios de comunicación.

Sólo durante el año pasado, se registró una **cifra histórica de 142 mil ,382** solicitudes de información, consultas de información gubernamental y recursos de revisión atendidos por el IFAI; estos últimos, con un **aumento de 20 %** respecto a 2012, atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Estas cifras reflejan la creciente tendencia a ejercer un derecho ciudadano esencial, cuya práctica fortalece una condición crucial para transitar con paso más firme hacia la consolidación de nuestra democracia.

La otra facultad clave que por ley tiene el IFAI es la protección de datos personales, tema en el que aún nos falta, como sociedad, tener conciencia de su importancia y trascendencia para salvaguardar la defensa del derecho más elemental y preciado que los individuos pueden ejercer en un mundo cada vez más interconectado y avanzado por las tecnologías de la informática: el derecho a la privacidad.

2

En materia de protección de datos, las solicitudes pasaron de 19 mil 598 en 2009, a 37 mil 781 en 2013; un aumento de casi el doble en los últimos cuatro años, interpuestas en el marco de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Si bien hemos tenido algunos avances en esta materia, es mucho lo que nos falta por hacer para generar una cultura de la defensa y la protección de datos personales, asignatura en la que, espero, el IFAI, junto con los actores relevantes de este campo, actúen con la consonancia necesaria para cumplir con lo que nuestra legislación garantiza en materia de privacidad.

El IFAI es una institución fuerte y dinámica, integrada no sólo por los cinco comisionados del Pleno, sino por cuatrocientos funcionarios, mujeres y hombres que día a día hacen posible el desahogo de resoluciones dentro de los tiempos que impone la ley.

Un dato relevante sobre el trabajo de los comisionados en el Pleno es que el **98%** de nuestras resoluciones **se han votado por unanimidad.** Esta cifra es una prueba elocuente de que, a pesar de las naturales diferencias en criterios, formación y perfiles de los integrantes de un órgano colegiado como el Pleno del Instituto, la dinámica institucional es sólida, lo que quizás contrasta con las posibles percepciones y apreciaciones negativas acerca de su funcionamiento y conducción.

Una vez referido el hecho de la solidez institucional con la que opera el IFAI, me permitiré expresar cuatro razones por las que solicito mi ratificación en el



encargo. Ellas son, **la responsabilidad** con la que he desempeñado mi cargo; **la experiencia y el conocimiento de la materia** que es de competencia del IFAI, garantía de acceso a la información y protección de datos personales; **la institucionalidad** con la que me he conducido durante mi encargo y, finalmente, **la inexistencia de causales reales, fundadas, y probadas** que me impidan concluir el período para el que fui designada como Comisionada en septiembre de 2009.

Responsabilidad:

- Durante los cuatro años y cuatro meses que llevo como Comisionada no he faltado a ningún Pleno, salvo en contadas excepciones por motivos de viaje de comisión al extranjero, que en total han sido (19 comisiones en total, ver Anexo 1) pero que cuya duración en promedio, de cinco días, en ocasiones me permitieron cumplir con mi asistencia.

  He efectuado un total de **28 mil votaciones**, de las cuales en el **99% por ciento de los casos he votado con la mayoría del Pleno** y sólo he emitido **85 votos disidentes, es decir, menos de 1% de las veces (0.3%).**

  Los factores que me han llevado a disentir se relacionan y fundamentan en mi conocimiento y experiencia en el sector de la seguridad nacional o pública, y en aquellos casos en los que considero debe prevalecer la reserva de nombres de funcionarios que trabajan en instancias de seguridad, o porque se encuentran en la operación cotidiana y especializada contra la delincuencia organizada en cualquiera de sus manifestaciones.

4

Me he **excusado de participar en 39 votaciones; es decir, menos de 0.2% del total,** por dos razones principales: por tratarse de información sobre mi persona, o porque la información solicitada se relacionaba con la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional durante el período en que fui su titular: de diciembre de 2006 a abril de 2009.

Puedo decir que mi trabajo en la institución lo respaldan la constancia, la dedicación y el profesionalismo con el que lo he desempeñado, e invariablemente mi actuación ha sido guiada por los más claros principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, honestidad y lealtad, tal y como lo ordena nuestra Carta Magna.

Conocimiento y experiencia en la materia:

- Desde antes de ser honrada con el cargo de Comisionada del IFAI, como académica especializada en asuntos de seguridad nacional, en particular en el análisis del diseño y operación del aparato institucional del estado en esa materia y como fundadora de una organización no gubernamental ("Democracia, Derechos Humanos y Seguridad"), fui una asidua usuaria de los servicios del IFAI. De hecho, entre 2004 y 2009 elaboré más de **271 solicitudes de información** para la realización de artículos académicos y mi tesis doctoral en relaciones internacionales, así como para los trabajos propios de una ONG interesada en difundir información que consideraba relevante en materia de seguridad nacional y que, en mí podía y debía transparentarse en beneficio de una cultura de transparencia y rendición de cuentas dentro del marco de la ley. En el anexo 2 a la presente, incluyo más

información acerca de mi formación y trayectoria, a efecto de ofrecer una referencia completa de mi perfil profesional.

Mi experiencia como funcionaria pública en el área de seguridad nacional ha contribuido a hacer más intensas y fructíferas las deliberaciones que sobre la materia ha tenido el Pleno, así a fortalecer la advertencia sobre riesgos e implicaciones de las decisiones tomadas en un ámbito cuya trascendencia e importancia es de obvia relevancia para el Estado.

Mi asistencia a foros y conferencias nacionales y en el extranjero, ha enriquecido mi conocimiento y mi experiencia en la materia que es competencia del IFAI. Entre esos eventos las participaciones en la Conferencia Internacional en Computación, Privacidad y Protección de Datos, el Congreso Internacional de Protección de Datos; y la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, Cumbre Global de Privacidad, en la que nuestro país, a través del IFAI, trabaja su posible adhesión al Convenio 108 del Consejo de Europa, para consolidar las garantías de protección y respeto de los datos personales de los mexicanos, dentro y fuera del territorio nacional.

Institucionalidad:

La responsabilidad en el cumplimiento de mis obligaciones la he acompañado siempre con absoluto respeto a la institucionalidad con la que todo funcionario debe actuar en el servicio público, sin importar que en el seno de reuniones con mis colegas del Pleno haya expresado diferencias de opinión y criterio en asuntos

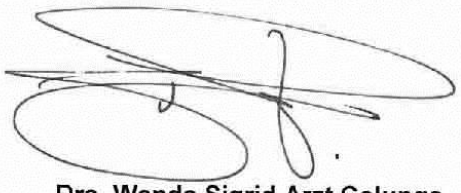
6

propios y pertinentes a la conducción de la Institución y que, por otra parte, son parte inherente de todo órgano colegiado.

Finalmente, es relevante afirmar que, más allá de las valoraciones y ponderaciones que se sirvan tener los honorables Senadores de la República, no existen factores o causales reales, fundadas y probadas que me impidan concluir el período para el que fui designada Comisionada en septiembre de 2009.

En este sentido, y en todos los que pudieran ser de su interés, comunico respetuosamente mi disposición a comparecer ante ustedes para aclarar cualquier punto que consideren de relevancia para las deliberaciones a que esta petición pudiera dar lugar, así como para ejercer la alta responsabilidad de designar a los integrantes de un nuevo órgano constitucional autónomo, que seguirá siendo un factor clave para la consolidación de la democracia, y para el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en su gobierno.

Respetuosamente,



Dra. Wanda Sigrid Arzt Colunga

C.c.p. Senadora, Mtra. Arely Gómez González.- Presidente del Comité de Gestión y Acceso a la Información del Senado de la República.

7

ANEXO 1

VIATICOS

De enero de 2010 a diciembre de 2013, he realizado **24** viajes, 5 nacionales y 19 internacionales.

Similar a la cantidad de viajes realizados por otros Comisionados. Por ejemplo, la Comisionada MEPJZ ha viajado en 31 ocasiones en total, 23 internacionales y 8 nacionales; el Comisionado ATZ en 26 ocasiones, 21 nacionales y 5 internacionales.

En el caso de la entonces Presidenta Jacqueline Peschard se entiende dicho numero se eleve a 60 viajes, 30 internacionales y 30 nacionales, siendo la representante legal del Instituto.

He erogado en estos 24 viajes 468 mil 970 pesos.

En promedio he erogado en los viajes nacionales **mil 527** pesos con una duración promedio de un día.

En promedio he erogado en los viajes realizados al extranjero **24 mil 280** pesos (incluyen boletos de avión, hospedaje y comidas). Dichos viajes han tenido una duración promedio de 5 días.

Seis de estos viajes tuvieron como temas centrales la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas.

En el resto de los eventos se trataron temas relacionados con la protección a la privacidad y acceso a la información (catorce viajes).

Véase tabla a continuación.

	LUGAR	ORGANIZADOR	TEMA	MONTO
1	PARIS, FRANCIA	OCDE	Protección a la Privacidad	27103.02
2	Querétaro, Querétaro	Municipio de Querétaro	Transparencia y rendición de cuentas	1650.00
3	Ottawa, Canadá	Oficinas y Agencias de la Privacidad y Acceso a la información del gobierno canadiense	Protección a la privacidad y acceso a la información	19192.20
4	París, Francia	Agencias de Protección a la Privacidad Europeas y el Parlamento Europeo	Protección a la privacidad y acceso a la información	35319.14
5	Victoria B.C., Canadá	Oficinas y Agencias de la Privacidad y Acceso a la información del gobierno canadiense	Protección a la privacidad	3279.04
6	Estrasburgo, Francia	Autoridades del Buró del Comité Consultivo del Convenio 108	Acceso a la información y Protección de Datos	11445.87
7	La Antigua, Guatemala	Red Iberoamericana de Protección de Datos	Acceso a la información y protección de Datos	2807.07
8	Cancún, Quintana Roo	CANADEVI	Derecho de Acceso a la Información	2063.82
9	Londres y Cambridge Reino Unido	St. Jhon´s Cambridge College	Acceso a la Información Pública, Seguridad Nacional y Pública	21676.16
10	Ottawa, Canadá	Oficinas y Agencias de la Privacidad y Acceso a la información del gobierno canadiense	Acceso a la Información	30654.35
11	Bruselas, Bélgica	Parlamento Europeo	Privacidad, Protección de Datos y el Ciberespacio	17895.95
12	Washington, EUA	Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad	Protección de Datos Personales	6186.07
13	Bruselas, Bélgica y Estrasburgo, Francia	OCTUPUS	Rendición de cuentas, acceso a la información	26329.55
14	Punto del Este, Uruguay	Red Iberoamericana de Protección de Datos	Protección de Datos Personales	19098.83

	LUGAR	ORGANIZADOR	TEMA	MONTO
15	Querétaro, Querétaro	Asociación Nacional de Protección Civil	Protección de Datos Personales	1650.00
16	Oaxaca, Oaxaca	La Red de Rendición de Cuentas	Transparencia y Acceso a la Información	1040.00
17	Bruselas, Bélgica	Parlamento Europeo	Privacidad, Protección de Datos y el Ciberespacio	16678.51
18	Santa Marta, Colombia	DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA Y EL CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP. EN EL MARCO DE ESTE CONGRESO SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS.	Protección de Datos Personales	2220.99
19	Toluca, EDO MÉX.	XIV ASAMBLEA DE LA COMAIP CON EL FIN DE INTEGRAR LOS TRABAJOS QUE ESTÁ REALIZANDO EL IFAI EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES.	Protección de Datos Personales	1235.70
20	VARSOVIA, POLONIA	35a. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD	Privacidad y Protección de Datos Personales	30458.63
21	LONDRES, REINO UNIDO	SEMINARIO " CREATING DATA ECOSYSTEM CENTRE ON THE INDIVIDUAL CONTEXT AND POLICY".	Protección de Datos Personales	47242.92
22	CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA	XI SEMINARIO IBEROAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DATOS.	Protección de Datos Personales	28060.11
23	ESTRASBURGO, FRANCIA	COMITÉ AD HOC DE PROTECCIÓN DE DATOS (CAHDATA) - DIVERSAS REUNIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS	Protección de Datos Personales	50392.82
24	PARÍS, FRANCIA	35ava: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD (WPSIP), DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)	Protección de Datos Personales	65290.00
		TOTAL		468970.75

Promedio de gasto en viajes nacionales	1527.9
Promedio de gasto en viajes internacionales	24280.6

TOTAL GASTOS VIAJES INTERNACIONALES	**461,331.23**
TOTAL GASTOS VIAJES NACIONALES	**7,640**

Wanda Sigrid Arzt Colunga

Curriculum Vitae

ANEXO 2

Estudios

2002-06	Mayo	Doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, Florida. EUA. Tesis: "Democracia, Seguridad y Militares en México".
1990-91	Agosto	Maestría en Relaciones Internacionales y Estudios por la Paz . Kroc Institute on Peace Studies Universidad de Notre Dame South Bend, Indiana. EUA
1986-90	Agosto	Licenciatura en Relaciones Internacionales Universidad Iberoamericana Tesis: "La Política Norteamericana en el Combate al Narcotráfico: México-Colombia" Mención Honorífica Cédula Profesional: 1428226
1983-85	Agosto	Bachillerato Internacional Colegio del Mundo Unido del Adriático Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades Trieste, Italia
1972-83	Agosto	Preparatoria, secundaria y primaria Instituto Educativo Olinca México, D.F.

Otros estudios

1999	Noviembre	Programa México-Centroamerica. Entrenamiento en política de defensa para civiles. Relaciones cívico-militares. ITAM-Universidad Torcuato Di Tella. Ford Foundation. México.
1997	Enero-Junio.	Diplomado en Mercadotecnia Política Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
1993	Noviembre	Seminario de Financiamiento de Partidos Políticos en México Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
1992	Noviembre	Diplomado en Negociaciones Internacionales Conflict Management Group Harvard Negotiation Project Universidad Iberoamericana

Experiencia Laboral/Académica

2009	Octubre	Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI.
2009	Septiembre	Pacific Scholar Fellowship. Center of U.S.-Mexico Studies UCSD, San Diego, California.
2009	Junio-Agosto	*Fellowship* en el Woodrow Wilson Instituto México. Proyecto. "Cooperación México-Estados Unidos: Iniciativa Mérida".
2006-2009	Diciembre-Abril	Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional nombrada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Adscripción Presidencia de la República.
	Septiembre	Coordinadora de las políticas de seguridad para el equipo de Transición del C. Presidente Electo Felipe Calderón Hinojosa. Sept.-Diciembre.
2005	Febrero	Consultora del Banco Mundial en la realización de un diagnóstico del sistema de seguridad pública del Estado de Chihuahua.
		Miembro del Grupo de Especialistas de Seguridad Nacional, grupo que trabajo para que no hubiese retrocesos de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de la seguridad nacional. (GESNA)
2003-2006	Septiembre	Socia-Fundadora de "Democracia, Derechos Humanos y Seguridad", organización de la sociedad civil dedicada al estudio y planteamiento de políticas públicas en materia de seguridad, prevención, rendición de cuentas y transparencia, con una visión de derechos humanos. (Co-Directora). Durante esta administración la asociación recibió apoyos de la Hewlwett; la Unión Europea y la Ford Foundation.
2003-2006		Electa Consejera Ciudadana Suplente, segundo lugar de prelación. Instituto Federal Electoral.
2002	Julio	Directora de Análisis. Fundación Rafael Preciado
	Abril	Investigadora invitada al proyecto Binacional U.S.-Mexico Justice and Security. Georgetown and UCSD, Colmex-CIDE.

2003 2002	Mayo Agosto	Centro de Investigación y Seguridad Nacional, (CISEN) Coordinación Asuntos Internacionales asesoría en relación a la seguridad entre México-Estados Unidos.
1994-1996	Diciembre	Secretaria Técnica del Procurador General de la República.
1994	Agosto	Observadora electoral en los procesos electorales federales de 1994.
1991	Mayo-Dic.	Asistente de investigación del Dr. George López. J. Kroc Institute for Peace Studies. Universidad de Notre Dame, Indiana

Publicaciones nacionales e internacionales

2010	"Violencia en México, realidades y perspectivas", ISTOR. Año 11. No. 42. Otoño. Colaboración con Guillermo Vazquez del Mercado.
2008	"La militarización de la Procuraduría General de la República: riesgos para la democracia mexicana" Compilador Arturo Alvarado *La Reforma de Justicia en México* El Colegio de México México
2007	"The militarization of the Attorney General´s Office: Risks for Mexican Democracy", Editado por Wayne Cornelius & David Shirk *Reforming the Administration of Justice in Mexico* San Diego Press & Notre Dame Press.
2006	"Participación ciudadana y policía en México" Compilador Gustavo Fondevila *Instituciones, legalidad y Estado de derecho en el México de la transición democrática* Fontamara
2006	**"Democracia, Seguridad y Rendición de Cuentas. Retos para México"**. Memoria XV Aniversario de la Contraloría 1991-2006 Poder Legislativo del Estado de México. Revista: *Recta Ratio.* Año II, No. 4, Enero-Junio de 2006.
2005	"Un sistema de justicia para combatir el narcotráfico y la delincuencia en México", *Diálogo Político*. Konrad Adenauer Stiftung, Año XXII-no.4, Diciembre 2005.
	"Un sistema de seguridad y justicia democrático, retos para México", Revista *Bien Común*. Diciembre 2005. No. 132

"Transparencia y rendición de cuentas: Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública, un estudio de caso". Seminario de Transparencia y Rendición de Cuentas, Retos del Sistema de Seguridad Nacional en México. Auspiciado por el CIDE, Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, A.C. Octubre.

"La iniciativa presidencial de reformas a la Ley Federal vs Delincuencia Organizada: tres apuntes".
Revista *Bien Común*. Agosto. No. 132

"Apuntes sobre la Ley de Seguridad Nacional",
Revista *Bien Común*. No. 123. Marzo.

2004 "Narco, elecciones y política".
Revista *Bien Común*. No. 120. Diciembre.

Arzt, Sigrid & Amalia Mena "Transparencia y combate a la corrupción: el acceso a la información pública en México".
Revista *Nueva Sociedad*.
Noviembre-Diciembre del 2004. No. 194.

"Shevardnaze, la Revolución de Terciopelo, y Georgia", en
Revista *Bien Común*, Año 10, no. 109. Enero.

2003 "El dilema del voto mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU: una lectura desde la realpolitik", en
Revista *Bien Común*, Año. 9. No. 100. Abril.

2002 "Estados Unidos, la guerra contra el terrorismo y la seguridad internacional", en
Revista *Bien Común*. Año 8. no. 95. Noviembre.

2001 "The fight against organized crime in Mexico, an (im)possible mission"
Editado por John Bailey & Jorge Chabat
Publisher University of San Diego University Press.
Center of U.S.-Mexican Studies.

2001 "El combate a la delincuencia organizada, una misión (im)posible"

		Editado John Bailey & Jorge Chabat *Crimen Trasnacional: Desafíos para México y los Estados Unidos.* Editorial Plaza y Janes Editores S.A.
2001		Sigrid Arzt y Arturo Alvarado. *El desafío democrático de México: Seguridad y estado de derecho.* El Colegio de México.
2000		"Scope and Limits of an Act of Good Faith: the PAN´s Experiences at the Head of the Office of the Attorney General of the Republic" Editado por Dr. John Bailey & Dr. Roy Godson. *Organize Crime and Democratic Governability. Mexico and the U.S. Mexican borderlands.* University of Pittsburgh Press
2000		"Alcances y limites de un acto de buena fe: la experiencia Panista al frente de la Procuraduría General de la República", Editado por Dr. John Bailey & Roy Godson. *Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática. México y la franja fronteriza.* Editorial Grijalbo
1999	Enero	Documento de Trabajo. No. 237 " The Complexities of a U.S-Mexican National Security Threat: Mexico´s weak institutions versus powerful organized crime syndicates" Woodrow Wilson Center. Washington D.C.

Conferencista

2014	Enero	**"La protección de Datos Personales como Elemento Modernizador del Estado"**, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2013	Octubre	**"Creating a Data Ecosystem Centre don the Individual: Context and Policy"**, *International Communications Center*, Londres, Reino Unido.
		"México, el Derecho al Olvido en Internet: Ejercicio de los Derechos de Cancelación y Oposición, Derecho al Olvido versus Derecho a la Libertad de Información, su incidencia en los Medios de Comunicación", Cartagena, Colombia
	Septiembre	"Privacy Affinity or Diversity", 35º Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos. Varsovia, Polonia.
	Junio	**"El Cumplimiento a la Normatividad en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Caso México".** 1er Congreso Internacional de la Protección de Datos Personales, Repensando Paradigmas.
	Enero	**"La Modernización del Convenio 108, ante la Revolución Informática"**, en 6ª Conferencia Internacional de Computación, Privacidad y Protección de Datos. Bélgica, Bruselas.
2012	Noviembre	**"Autonomía y Federación: su funcionamiento en materia de transparencia"**, 6º Seminario Internacional: Autonomía y Funcionamiento de los Órganos Garantes de la Transparencia en la agenda gubernamental". México, D.F.
	Octubre	**"Datos Personales en México"**, X Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales en la 34ª Conferencia Internacional de Autoridades en Protección de Datos y Privacidad. Punta del Este, Uruguay.
		"La Transparencia y Rendición de Cuentas: Presupuestos y Seguridad, Desafío de la Rendición de Cuentas en América Latina", México, D.F., Junto con Flasco y CIDE.

CVitaeSAC Feb2014 9

2012		**"Data Protection and Cybercrime Challenges",** Conferencia "Octopus 2012: Cooperación Ciberdelincuencial. Estrasburgo, Francia.
	Junio	**"Transparencia en México, 10 años de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental",** Foro Regional de los Órganos Autónomos y sus Propuestas para una política pública de rendición de cuentas. Oaxaca.
	Marzo	**"La protección de los datos personales en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares", Consejo Empresarial del Valle de Toluca, Estado de México.**
	Febrero	**"2.0 El siguiente paso protección de datos personales en situaciones de emergencias y desastres naturales",** 1er Congreso Nacional de Protección Civil.
2011	Octubre	**"La Justicia Internacional, la Transparencia y la Protección de Datos Personales. Análisis de casos prácticos",** 5°. Seminario Internacional Transparencia Protección de Datos Personales en la Procuración e Impartición de la Justicia. InfoDF.
	Agosto	"El nuevo sistema de justicia penal en México, desde la perspectiva constitucional"., Consejo de la Judicatura.
	Julio	**"Mexico´s privacy law, including both EU and APEC elements",** 24a Conferencia Internacional, "Aligning Privacy, Accountability with your business strategy"
	Mayo	**"Medio Ambiente, sustentabilidad y transparencia",** Foro Sustentabilidad y Transparencia. Cancún, QR. 1er Foro Taller Hacia la Sustentabilidad Regional.
	Abril	**"La incidencia del derecho al acceso a la información pública y protección de datos personales en el sector de seguridad nacional",** en Seminario Acceso a la Información Pública y

		Protección de Datos de la Red Iberoamericana.
	Marzo	**"Ley Modelo Interamericano sobre acceso a la información pública y su aplicación regional en México".** Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
	Febrero	**"Security and Privacy in the Mexican Context",** 12a Annual Privacy and Security Conference. Victoria, Canadá.
		"Seguridad Nacional y Transparencia" Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. CEEFA.
2010		
	Octubre	**"Transparencia en México" 1er** Simposium Municipal "Derecho Disciplinario, Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información. Qro.
	Septiembre	**"Security Challenges for the Mexican State",** University of Pittsburgh.
	Marzo	**"Instrumento de políticas en material de transparencia presupuestal",** Seminario Propuesta para una efectiva Transparencia presupuestaria de análisis y comentarios. Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM.
	Febrero	**"Edificando la Transparencia",** Tec de Monterrey, Nvo. León.
2009	Agosto	**"Seguridad Nacional y Transparencia"** Woodrow Wilson Center.

2006		
	Septiembre	"El estado que guardan los agentes del orden público", seminario organizado por Casa San Diego, sede de la Universidad de San Diego, California. México, D.F. 21.09
		"La Profesionalización, un compromiso y fortaleza para la seguridad pública", Instituto de Formación Policial Estado de Guanajuato, Sede: Celaya. 11 de septiembre.
	Agosto	"Mitos y realidades del combate al narcomenudeo". Seminario Multidisciplinario para reflexionar sobre las complejidades de salud, seguridad e impactos sociales del narcomenudeo. UNAM. 15.08
		"Los medios de comunicación y la policía", en el marco de la conferencia: *Seguridad Ciudadana, retos para el desarrollo y democracia en México*. Conferencia celebrada en Querétaro, Qro auspiciada por DDHS y la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. 11.08
	Julio	"La profesionalización policial: carrera policial en México". Seminario a miembros de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y cuerpos policiales en el marco de los Foros de Difusión y Participación Ciudadana para la Implementación del Servicio Policial de Carrera. Evento realizado en conjunto con el Instituto de Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado. 07.07
	Junio	"Alcances y limites al Estado de Derecho en México", seminario en la Fundación Boell, sede México. 20.06
		La Seguridad América del Norte y Centroamérica, un balance para la cooperación", en el marco de la representación del Programa Seguridad y Democracia en las Américas auspiciado por la Organización de Estados Americanos, (OEA) en alianza con la Facultad de Estudios Latinoamericanos, FLACSO-Chile. 14 y 15.06
		"Seguridad y justicia, retos para la democracia mexicana". Universidad de San Andrés, Argentina. 13.06
		"Retos para la procuración de Justicia en México". Conferencia realizada por Washington Office of Latin America y el Woodrow Wilson Center. 10.06
	Junio	"Una perspectiva histórica de la inseguridad en México" Guadalajara, Jalisco. "Un balance de la falta de cultura de

		la legalidad en México" Seminario organizado por la Universidad de San Diego, CA., y el Instituto Estudios Sociales ITESO.6.06
	Mayo	Integración y presentación. Colectivo por la Seguridad, Derechos Humanos y Democracia. Grupo de expertos en Seguridad y Derechos Humanos. Casa Lamm. 31 de mayo.
		Integración al Grupo de Estudio FLACSO-Chile. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Santiago de Chile. Seguridad y Democracia en México. 4 y 5 de Mayo.
	Abril	Ponencia. **"Democracia y Seguridad: Rendición de cuentas, retos para México".** Congreso Local del Estado de México y la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de México. 3 de abril.
	Marzo	Comentarista. Ponencia del Dr. Luis Astorga. UNAM 28 de marzo.
		Participación en el marco del Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, Querétaro, Qro. Ponencia: "Actuación policial y derechos humanos". 10.03.06
		Capítulo: "The militarization of the Attorney General´s Office: Risks for Mexican Democracy", en *Reforming the Administration of Justice in Mexico*. Editado por Wayne Cornelius / David Shirk. San Diego Press & Notre Dame Press. (En prensa).
		Participación 2ndo Congreso de Prevención de las Adicciones en Guanajuato, Gto. Ponencia: "La prevención de la violencia y adicciones a través del fortalecimiento local", Acámbaro, Guanajuato. 28.02.06.
2006	Enero	Participación en el marco del Curso "México-E.U.A., relaciones bilaterales", organizado por la Universidad de Miami. Ponencia: "Retos de la democracia mexicana: seguridad y justicia".
2005	Diciembre	Coordinadora general e instructora del curso: "Capacitación para autoridades locales en prevención de la violencia en zonas urbano-marginadas", realizado conjuntamente con el Banco Mundial, Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaria de Seguridad Pública Federal. (Talleres se realizaron del 28 nov al 2 de dic., y

		del 5 al 9 de diciembre en la ciudad de México)
	Noviembre	Presentación y participación en el marco del Foro Internacional "Intercambio de prácticas exitosas de participación ciudadana en prevención social del delito". "Taller especial de formación de gestores locales en prevención al delito y la violencia", Puebla, Pue. SSPF.
		"Seguridad y cuerpos fronterizos, México-Estados Unidos", seminario en el marco del Diplomado "Entendiendo a México-Estados Unidos", convocado por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, CIDE.
		"Public Insecurity, challenges at the U.S.-Mexico border", at the Transborder Institute at the University of San Diego, CA.
2005	Octubre	Ponencia. "Transparencia y rendición de cuentas: Fondo de aportaciones federales en seguridad pública, un estudio de caso". En el marco del seminario convocado por el CIDE-DDHS: "Transparencia y rendición de cuentas, retos del sistema de seguridad nacional en México".
		Impartición del modulo "Seguridad nacional y delincuencia organizada, retos para las instituciones federales de seguridad", en el marco del Diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana.
		Ponencia. "La participación ciudadana, la democracia y la seguridad en México", en el marco del encuentro nacional de Pastoral Social-Caritas México, en San Luis Potosí, SLP. "Participación ciudadana hacia la justicia social.".
	Septiembre	Directora tiempo completo de la asociación civil. "Democracia, Derechos Humanos y Seguridad", A.C.
		Ponencia. "La inseguridad pública en México, ¿amenaza a la seguridad nacional?", en el marco del Seminario de Perspectivas Políticas convocado por el ITAM.

	Agosto	Participación como evaluador en el premio que otorga la *Ford Foundation* y el CIDE. Gobierno y Gestión Local. Edición 2005.
		Ponencia. "Retos de la Agencia Federal de Investigaciones, policía federal", en el marco de la conferencia "México-Chile, experiencias de la reforma policial", convocado por el Colegio de México y DDHS.
		Ponencia."Los consejos de participación ciudadana en las instituciones de seguridad pública federal", en el marco de las experiencias internacionales convocado por el INSYDE-CIESAS.
	Julio	Impartición modulo: "Seguridad y derechos humanos", en el marco del Diplomado de Derechos Humanos, UIA-León, Guanajuato y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
	Junio	**Ponencia: "Transparencia y rendición de cuentas en las instituciones de procuración de justicia" en el marco del Foro "Drogas y democracia en México", convocado por WOLA, la UNAM, y la cátedra de la UNESCO sobre el impacto del narcotráfico en México. (21 de junio)**
	Mayo	Impartición modulo: "Seguridad y derechos humanos", en el marco del Diplomado de Derechos Humanos, UIA-León, Guanajuato. (27-28 de mayo y 8)
		Ponencia: "Seguridad, ciudadana y violencia, desafíos de la democracia mexicana" en el marco del Foro "Seguridad, derechos humanos y sociedad", convocado por DDHS, CIDE y Universidad de San Diego. (20 de mayo)
	Marzo	Impartición curso: "Seguridad pública y el papel de los medios de comunicación", en el marco con Instituto Mexicano de la Radio (IMER) (28 de febrero al 3 de marzo)
	Febrero	Ponencia: "Policía y sociedad", en el marco del Foro de Justicia Cívica convocado por DDHS, UNICEF, Colmex y la Universidad de San Diego. (2 de febrero)
2005	Enero	Impartición seminario: "El narcotráfico, desafíos para México", en el marco del XV aniversario de la diócesis de Nuevo Laredo, Tamaulipas. (11 de enero)

2004	Diciembre	Impartición seminario: "La policía fronteriza y la relación México-Estados Unidos. Diplomado Entendiendo México-Estados Unidos. Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, CIDE. 13 de diciembre.
		Impartición seminario: "Retos a la Seguridad Nacional: Delincuencia Organizada Trasnacional" Diplomado de Seguridad Nacional. Universidad Iberoamericana. 13 de noviembre.
		Impartición seminario: "Ley de Seguridad Nacional, alcances y límites" ante la Red de Organismos no gubernamentales en conjunto con el Instituto de Acceso a la Información (IFAI). 8 de noviembre.
	Octubre	Impartición seminario: "Alcances y límites de la Ley de Seguridad Nacional", Secretaria de Seguridad Pública Federal y el Instituto de la Administración Pública INAP. 28 de Octubre.
		Conferencia "Policía y Sociedad" dentro del marco de la mesa de trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 26 de Octubre.
	Septiembre	Impartición conferencia: "Derechos Humanos y Seguridad", en el marco del Segundo Diálogo Permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Sociedad Civil. Del 9 al 11 de septiembre.
	Julio	Impartición seminario: "La seguridad nacional y pública en un contexto democrático", en el marco del diplomado de Análisis Político de la UIA-Querétaro.8 y 9 de Julio.
	Marzo	Impartición seminario: "Las relaciones cívico-militares en un contexto democrático: México", Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.
2004	Enero	Impartición seminario: "Desafíos a la democracia mexicana: inseguridad pública ", FRPH. Seminario se impartió a grupo de estudiantes de la Universidad de Miami

	Marzo	Impartición de seminario: "Las relaciones cívico-militares en México y América Latina: desafíos a la consolidación democrática" ITAM. Diplomado de Seguridad Nacional.
	Marzo	Impartición de los siguientes seminario para los integrantes del Diplomado en Análisis Político en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Escuela Militar de Inteligencia : • "Desafíos a la democracia mexicana: las relaciones cívico-militares" • "Retos y perspectivas en la lucha contra el narcotráfico con su impacto en las instituciones políticas principalmente partidos políticos en México" • "La relación México-Estados Unidos y sus esfuerzos bilaterales en la lucha contra el narcotráfico." • "La lucha contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero como un problema de seguridad nacional" • "Reordenamiento internacional a partir de los sucesos del 11-septiembre"
2001	Julio	Impartición de seminarios en el Modulo de Análisis Político. Temática: " • "Relaciones cívico-militares en México y América Latina"; "El reto de la consolidación de instituciones políticas (partidos políticos e IFE) de cara a la fragilidad del estado de derecho"; • "Prospectiva en la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad y consolidación democrática". Escuela Militar de Inteligencia. Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Secretaria de la Defensa Nacional

CVitaeSAC Feb2014 17

2000	Julio	Impartición del Modulo de Relaciones México-Estados Unidos; Sistema de procuración de Justicia y retos al combate del crimen organizado. Escuela Militar de Inteligencia. Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Secretaria de la Defensa Nacional
1999	Julio	Impartición del Modulo de Relaciones Internacionales en en México. Diplomado de Análisis Político. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México
	Mayo	Impartición en el Modulo de Análisis Político. Temática: "Los Retos de la Globalización y su impacto en México"; "La globalización y su impacto político en los partidos políticos en México"; "Las instituciones políticas en proceso de consolidación en México: el IFE" Escuela Militar de Inteligencia Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea. Secretaria de la Defensa Nacional
	Febrero	Co-organizadora del seminario: "Narcotráfico: un análisis interdisciplinario". Evento auspiciado por la Academia Mexicana de Ciencias y el Centro de Investigación y Docencias Económicas.
	Enero	Relatora del seminario internacional: "La Agenda Bilateral de Seguridad Internacional entre México y Estados Unidos", celebrada en la Cd. De México el 12 de enero. Auspiciada por el Woodrow Wilson Center en Cd. de México. Esto como Investigadora-Asociada del CIDE.
1998-2000		Investigadora-Asociada de la División de Estudios Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) Durante la estancia como investigadora en el CIDE además de que participe y coordine dos proyecto de investigación CIDE-Georgetown con el Dr. John Bailey y el Mtro. Jorge Chabat sobre temas de seguridad y la relación bilateral México-Estados Unidos. Trabaje el tema de investigación de los derechos humanos desde el análisis de los derechos electorales y su desarrollo en el caso México. Por último, como investigadora realice trabajos de análisis político sobre los partidos políticos y su relación con el IFE.

1998	Noviembre	Ponente en el Foro sobre Corrupción y Vida Pública en México. Tema: "Corrupción y narcotráfico, una disyuntiva para un estado autoritario y los partidos políticos". Organizado por la Fundación Rafael Preciado Hernández. ITAM, y la Fundación Konrad Adenauer.
	Enero-Agosto	Investigadora Invitada bajo el *Fellowship for Junior Scholar* del Woodrow Wilson Center en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. Documento de trabajo: "The Complexities of the U.S.-Mexican National Security Threats: Mexico´s Weak Institutions versus Powerful Organize Crime Syndicates".
		Investigadora invitada en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown. Co-titular con el Dr. John Bailey del proyecto de investigación: "Democracia y Estado de Derecho en México". Ensayo: "Un Acto de Buena Fe, la experiencia panista al frente de la Procuraduría General de la República, 1994-96". (Editorial University Pittsburgh Press y Editorial Grijalbo)
1997	Febrero-Dic.	Directora de Análisis Político para el área de comunicación social del PAN.
	Agosto-Dic.	Impartición de la cátedra: "Problemas Actuales de la Política Exterior Mexicana". Departamento de Relaciones Internacionales. Universidad Iberoamericana.
1997	Mayo	Impartición del seminario: "El Partido Acción Nacional: retos para sus gobiernos estatales y su relación con el Ejecutivo Federal". Escuela Militar de Inteligencia. Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. Secretaria de la Defensa Nacional.
1996	Octubre	Impartición del seminario: "México y la globalización". Modulo de Relaciones Internacionales. Diplomado de Análisis Político. Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz.
1996	Julio	Impartición del seminario: "Retos a la democracia mexicana: la seguridad nacional y la política estadounidense sobre el narcotráfico". Escuela Militar de Inteligencia. Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. Secretaria de la Defensa Nacional.

1992	Sept.-Dic.	Impartición del curso: "Negociaciones Internacionales". Departamento de Relaciones Internacionales. Universidad Iberoamericana.
1991		Ponente en el seminario: "Las Mujeres en la Política" con el ensayo: *El papel de la mujer mexicana en la política.* Universidad de Notre Dame, Indiana.

Becas y Reconocimientos

2009		*Pacific Fellowship. Center of U.S.-Mexico Studies, UCSD, San Diego, CA. EUA.*
2009		*Fellowship. Woodrow Wilson Center. Instituto México.*
2007	Noviembre	Universidad Iberoamericana por su desempeño en el ámbito académico y público en México en el marco del Foro de Nuevas Generaciones de Mujeres y Hombres del Siglo XXI
2000	Mayo	*Seed money*. Centro de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Miami, Florida. EUA. Financiamiento para realizar investigación de campo en México por un periodo de dos meses.
1999	Mayo	North-South Center. *Fellowship for Graduate Studies*. Universidad de Miami. Beca para realizar estudios de doctorado en política comparada y relaciones internacionales.
	Ene.-Ago.	*Fellowship* Junior Scholars Training Program. Latin American Program. Woodrow Wilson Center. Washington, D.C.
1993	Abril	Mención honorífica. Tesis de licenciatura: "La Política Norteamericana en el combate al narcotráfico: México y Colombia".
1990-91		Beca para realizar estudios de maestría en Relaciones Internacionales y Estudios de Paz. Universidad de Notre Dame, Indiana.
1986-90		Beca-Crédito para realizar estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana.
1983-85		Beca para estudios de Bachillerato Internacional. Collegio del Mondo Unito Del´Adriatico. Trieste, Italia. UWC Adriatic.

CÁMARA DE DIPUTADOS

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 62-II-2-1136
Exp. 2849

Cc. Secretarios de la Cámara
de Senadores
P r e s e n t e s .

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 12 de febrero de 2014.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario

2014 FEB 13 PM 12:39
RECIBIDO
000737

JJV/gym*

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA

PROYECTO DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 61, fracción IV y 71, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 61. ...

I.a **III. ...**

IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados **y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados;** y

V. ...

ARTICULO 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos equivocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. **Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

...

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. México, D.F. a 12 de febrero 2014.

Dip. Ricardo Anaya Cortés
Presidente

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario

Se remite a la H. Cámara de Senadores,
Para sus efectos constitucionales.
México, D.F., a 12 de febrero de 2014.

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios
JJV/gym*

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE AMNISTÍA DE 1978.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. DGPL 62–II-5-1451
Exp. No. **2323**

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 13 de febrero de 2014.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario

JJV/jg*

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE AMNISTÍA.

Artículo Único.- Se abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 13 de febrero de 2014.

Dip. Ricardo Anaya Cortés
Presidente

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales.
México, D. F., a 13 de febrero de 2014.

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios de la
Cámara de Diputados

JJV/jg*

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. DGPL 62–II-5-1460
Exp. No. 2991

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del Código Penal Federal, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 13 de febrero de 2014.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal
Secretaria

JJV/jg*

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Artículo Único.- Se reforma el último párrafo y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381. ...

I. a **XV. ...**

XVI.- Cuando se cometa en caminos o carreteras;

XVII.- Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, **y**

XVIII.- Cuando el objeto del robo sea cable de cobre y a consecuencia de ello se produjera la interrupción de servicios públicos y básicos.

...

En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XVI, XVII **y XVIII,** de dos a siete años de prisión.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 13 de febrero de 2014.

Dip. Ricardo Anaya Cortés
Presidente

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal
Secretaria

JJV/jg*

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales.
México, D. F., a 13 de febrero de 2014

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios de la
Cámara de Diputados

JJV/jg*

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 62-II-7-1275
EXP. **2932**

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, y del Código Federal de Procedimientos Civiles, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 13 de febrero de 2014.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario

JJV/rgj

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Artículo Primero.- Se reforma el primer párrafo del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Articulo 149 Ter.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, **discapacidad**, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas.

I. a **III. ...**

...

...

...

...

...

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 28, primer párrafo; 31; 74, primer párrafo; 87; 95, fracción III; 103, párrafo segundo; 124 Bis; 128, fracción IV; 141, apartado A, fracción X; 154, primer párrafo; 155; y 388, fracción II Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 28.- Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, **o sean personas con alguna discapacidad**, se les nombrará a petición de parte o de oficio, uno o más **intérpretes** o traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el traductor haga la traducción.

...

Artículo 31.- Si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere **persona con discapacidad visual, auditiva y/o silente**, se le **proporcionará un intérprete que tenga conocimiento de su lengua o medio de comunicación**, siempre que sea mayor de catorce años; y en este caso se observará lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 74. Las citaciones podrán hacerse verbalmente, o por cédula, o por telégrafo, **o mediante sistema de escritura braille, si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con discapacidad visual**, anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente.

...

Artículo 87.- Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor, y en su caso, **el intérprete o** la persona de su confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal.

En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia **del intérprete**, del defensor quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar.

En el supuesto a que se refiere el artículo 124 Bis de este Código, no podrán llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado **sin el intérprete** o traductor a que dicho precepto se refiere.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 95.- ...

I. a **II. ...**

III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma **o medio de comunicación,** residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.

IV. a **VI. ...**

Artículo 103.- **...**

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este Código, y asistiéndose **de intérprete** o traductor si la persona por notificarse **presenta alguna discapacidad o** no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano.

Artículo 124 Bis.- En la averiguación previa en contra de personas **con discapacidad o** que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará **un intérprete o** traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor.

El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor, **intérprete** o el traductor que mejoren dicha comunicación.

Tratándose de personas **con discapacidad o** pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su lengua, **medio de comunicación** y cultura.

Artículo 128.- **...**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

I. a **III. ...**

IV. Cuando el detenido **sea una persona con discapacidad o** perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará **un intérprete o** traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose **de personas con discapacidad o** indígenas, **el intérprete** o traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua, **medio de comunicación** y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y

V. ...

Artículo 141.- ...

A. ...

I. a **IX. ...**

X. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, **o tratándose de personas con discapacidad que les impida ver, oír o hablar**;

XI. a **XIX. ...**

...

...

...

...

B. y **C. ...**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 154.- La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, **la discapacidad que presente,** el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.

...

...

...

...

...

Artículo 155.- La declaración preparatoria se rendirá en forma oral, escrita **y en el caso de persona con discapacidad con auxilio de intérprete o persona que conozca su medio de comunicación,** por el inculpado, quien podrá ser asesorado por su defensor. El inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia. Cuando haya diversos inculpados que deban rendir declaración, el juez adoptará las medidas precautorias previstas en el artículo 257.

Artículo 388.- **...**

I. y **II. ...**

II Bis. Por haberse omitido la designación del **intérprete o** traductor al inculpado **con discapacidad** o que no hable o entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señale la ley;

III. a **XV. ...**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo Tercero.- Se reforman los artículos 107, párrafos primero y tercero; 180, párrafo tercero; 271, párrafos primero y tercero; y 342, párrafo tercero y cuarto, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como siguen:

ARTICULO 107.- En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente **presenta alguna discapacidad o** no hablare el español, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, se asentará también su declaración en su propio idioma, con intervención del intérprete.

...

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, **Lengua de Señas o Escritura Braille,** en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.

ARTICULO 180.- ...

...

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, **Lengua de Señas o Escritura Braille,** en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete.

ARTICULO 271.- Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero **o Escritura Braille** se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

...

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Las promociones que **las personas con discapacidad**, los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

...

...

ARTICULO 342.- ...

...

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, **Lengua de Señas o Escritura Braille**, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para **las personas con discapacidad visual, auditiva o silente** ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente Decreto se traducirá a las lenguas indígenas.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

-8-

Cuarto. Todos los entes competentes deberán desarrollar las políticas públicas y acciones señaladas en el presente Decreto, adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos en congruencia con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 13 de febrero de 2014.

Dip. Ricardo Anaya Cortés
Presidente

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales.
México, D.F., a 13 de febrero de 2014.

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios

JJV/rgj

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 62-II-7-1274
EXP. **2051**

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 13 de febrero de 2014.

Dip. Ángel Cedillo Hernández
Secretario

JJV/rgj

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.

Artículo Único.- Se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o. Son objetivos de esta Ley:

I. a **IV. ...**

V. Garantizar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, en los términos de la presente Ley, de los lugares que ocupen y habiten;

VI. a **XV. ...**

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 13 de febrero de 2014.

Dip. Ricardo Anaya Cortés
Presidente

Dip. Ángel Cedillo Hernández
Secretario

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales.
México, D.F., a 13 de febrero de 2014.

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios

JJV/rgj

INICIATIVAS

DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.



SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA MARTES 11 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 2º Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y IX DEL ARTÍCULO 4°, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.



SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE VIVIENDA.



SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SEN. DAVID MONREAL ÁVILA

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAR EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente**:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las características más importantes en un Estado democrático es el equilibrio entre los poderes que lo conforman. El Constituyente Original de la República declaró en la Constitución de 1917 que el poder no debía estar concentrado en una sola persona, y para su ejercicio se dividiría en tres Poderes de la Unión, y así, el artículo 49 constitucional establece que "el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial."
Esto se traduce en la necesidad de no caer en actos de autoritarismo, y buscar que entre los mismos poderes exista equilibrio, es decir un contrapeso a la actuación de los otros dos.
El ejercicio público de los poderes presupone ante todo un justo equilibrio natural como imperativo categórico y un principio constitucional como factor indiscutible,[1]es decir, el poder público en sí mismo es legítimo sólo en la media que existe un equilibrio entre los poderes del Estado.

El fenómeno del poder ha sido una inmensa disputa desde tiempos inmemorables,[2] la historia de México está caracterizada por una lucha constante para obtener el poder público y con ello el control de las masas. Desde la formación de la nación mexicana el poder se ha debatido entre liberales y conservadores o por ideologías de derecha o izquierda.

Desde el inicio del movimiento de Independencia, hasta el triunfo de la Revolución Mexicana, la lucha política y social se centró, principalmente, entre quienes deseaban para la nación un control centralista del poder, y aquellos que buscaban descentralizar el poder público de los monarcas y dictadores para que fuera ejercido a través de la división de poderes y dejará de estar concentrado en una sola persona, buscando garantizar un Estado democrático, pues la única alternativa frente a autoritarismo, como lo señaló Montesquieu, el poder debe ser quien frene al poder mismo, esto significa que entre los mismos poderes debe existir vigilancia frente la actuación de sus iguales.

En este sentido la historia ha demostrado que el poder absoluto es una perversión, que deja sin libertad de acción a los ciudadanos y por ende a merced de las decisiones de los gobiernos autoritarios. Y de ahí la necesidad de generar Estados democráticos en los que el poder "está distribuido, limitado, controlado y se ejerce en rotación,"[3] y con ello una sociedad se puede encaminar hacia una verdadera democracia.

En la Constitución de Apatzingán de 1824 "surgen los documentos que postulan el federalismo con lo que se

[1] Delgadillo, Carrillo, Fortino, "El equilibrio de poderes,"[en línea], Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, [consultado 30-01-2014] disponible en internet:http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/93/10.pdf
[2] Ídem.
[3] Véase Sartori, Giovanni, "Aspectos de la democracia," México, Edit., Limusa, 1965.

establece específicamente una nueva forma de gobierno,"[4] entre otras características instituyó la soberanía nacional, estableció algunos derechos a favor de los ciudadanos y sobre todo declaró el principio fundamental de toda república democrática, la división de poderes.

Posteriormente entre 1835 y 1843 México volvió a vivir un periodo centralista, encabezado por Antonio López de Santa Anna; a través de las "Siete Leyes Constitucionales" y de las "Bases Orgánicas de 1843" dieron origen a un gobierno centralista que buscaba concentrar la toma de decisiones y eliminar la división de poderes.

Con gran influencia de la "Revolución de Ayutla", el 1º de marzo de 1854 es proclamado el Plan de Ayutla en lo que "se cesaba del ejercicio del poder público a Antonio López de Santa Anna, se convocaba a elegir un presidente interino de la República por representantes de cada Estado y territorio, y se convocaba a un Congreso Extraordinario para construir a la nación bajo la forma de república representativa popular,"[5] a partir de este movimiento que buscó derrotar la visión centralista de la República, surge de nueva cuenta la posibilidad de retomar los ideales olvidados en las "Siete Leyes" y re direccionar el rumbo del país.
La Constitución de 1857 retoma los principios establecidos en la Constitución de 1824, buscando plasmar en ella el principio de división de poderes y restaurar el equilibrio en la toma de decisiones.

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, la historia de la democracia en México nuevamente entra en una crisis al vivir una nueva etapa de autoritarismo. Díaz tomó la presidencia en varias ocasiones desde 1877, sin embargo su periodo más largo fue de 1884 hasta 1911 con el triunfo de la Revolución Mexicana. Durante este periodo el poder nuevamente se volvió a centralizar, pues a pesar de que había elecciones "libres" y siempre resultaba ganador el general Porfirio Díaz, no existían organismos de control y vigilancia electoral que determinarán la transparencia de las elecciones.

Ese descontento social finalmente desembocó en la Revolución Mexicana, y como resultado de este movimiento se logra la creación de la Constitución de 1917,en la que se retoman los principios establecidos en la Carta Magna de 1857 como son: forma de gobierno, soberanía popular, división de poderes y derechos individuales; pero la nueva Constitución se fortaleció con las demandas sociales que dieron origen al movimiento revolucionario.

Es decir, la historia de México muestra que la disputa por centralizar o democratizar el poder ha sido una lucha constante; pero la misma historia demuestra que la mejor manera de gobernar, es aquella que otorga mayores beneficios y certezas a la mayoría del pueblo, una forma de gobierno federal en la que existe una división de poderes y el equilibrio en la toma de decisiones es lo que permite que haya paz social.

Posterior al decreto de la Constitución de 1917, México ha vivido una etapa de relativa paz social, pues se han logrado contener los descontentos sociales y se institucionalizó la vida democrática del país, pero esto no ha significado que exista una verdadera democracia.
Terminada la lucha armada de masas, fruto de la Revolución Mexicana, se institucionalizó en México la democracia a través de la creación de un partido de Estado que agrupara todas las organizaciones sociales, el cual después de un proceso interno, 1946 se transformaría en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esos antecedentes llevarían a México a vivir por más de 70 años bajo un régimen presidencialista dominio de un partido de Estado.
Debido a esto el país viviría bajo una simulación de "democracia", donde aparentemente había partidos políticos que participaban en las elecciones, pero donde siempre resultaba ganador el partido de Estado, el PRI. En este sentido el partido oficial no buscaba "disputar el poder con sus adversarios políticos en las urnas",[6] más bien sólo simulaba la institucionalidad de la democracia, es decir a pesar de que México aparentemente había transitado hacia un régimen democrático, el poder siguió centralizado por décadas,

[4] Rabasa, Emilio, "Historia de las Constituciones mexicanas", [en línea], Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, citado [30-01-2014], disponible en internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=234
[5] Ídem.
[6] Meyer, Lorenzo, p. 68

donde las decisiones provenían del Presidente en turno, lo mismo para la administración pública que para el Poder Legislativo, los gobernadores o los Congresos estatales.

Es hasta a principios de la década de los 90 cuando el régimen presidencialista comenzó a perder cierta fuerza, la sociedad comenzó a reclamar una verdadera democracia y sustituir la simulación de los procesos electorales; reclamaba la independencia del Congreso de la Unión y la toma de decisiones descentralizada, por una verdadera democracia, donde los tres Poderes de la Unión fueran en los hechos independientes y autónomos, pero sobre todo trabajaran en beneficio del bien común de las mayorías y se respetara la voluntad popular. Además de establecer un marco jurídico de control entre los poderes.

Con la llegada de estos reclamos sociales fue que el principio de división de poderes comenzó a tomar un verdadero sentido, comenzó una etapa de buscar un equilibrio en la toma de decisiones y sobre todo de vigilancia en su actuación. En las elecciones del 1º de septiembre del año 1997, fue la primera vez que el partido oficial (PRI) perdió la mayoría en el Congreso de la Unión al obtener 239 diputados frente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien ganó el 25% de los votos y contara con 125 diputados, mientras que el Partido de Acción Nacional (PAN)obtuvo 121 diputados; el Partido Verde Ecologista (PVEM)tendría 8 diputados y el Partido del Trabajo (PT) contara con 7 diputados.[7] Por primera vez la toma de decisiones tendría que ser fruto del consenso y con aprobación de otros partidos.

A partir de entonces el Congreso de la Unión comenzó a tener un papel más proactivo en vigilar que las actuaciones del Poder Ejecutivo fueran con apego al marco Constitucional y sobre todo en beneficio del pueblo mexicano. Pero sobre todo, a partir de esa década el Congreso tuvo mayores atribuciones a fin de vigilar e investigar la actuación del Ejecutivo, así como en el ejercicio del presupuesto que se le otorga, y se amplió el marco jurídico para evaluar el desempeño del gobierno, de la transparencia y rendición de cuentas.

De esta manera, a partir de 1994, el artículo 93 constitucional comenzó a sufrir una serie de reformas encaminadas a dar mayor equidad en la actuación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y buscar mayor control entre los poderes, sobre todo delegando mayores facultades de vigilancia al Congreso de la Unión, a fin de dar certeza y transparencia en el manejo de recursos públicos, sin menoscabar el principio de división de poderes.
Este principio de control parlamentario tiene sus antecedentes originales en la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 125 establecía que "en los casos en que los secretarios del Despacho hagan a las Cortes algunas propuestas a nombre del Rey, asistirán a las discusiones cuando y del modo que las Cortes determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes en la votación"[8]; posteriormente en las Constituciones de 1824, 1836 y 1857 se preveía la figura de la comparecencia por parte de ministros o secretarios de despacho. Finalmente en la Constitución de 1917 se establece en el artículo 93 que "Los Secretarios del Despacho, luego que éste abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley, o se estudie un negocio relativo a su Secretaría".[9] Sin embargo, a la luz de lo que ha sido expuesto anteriormente, esta figura había resultado ser una simulación bajo el partido de Estado que gobernaba a México.

Las primeras reformas que sufrió este precepto constitucional fueron en el gobierno del Presidente Luis Echeverría, en el que se incorporó a su figura original la obligación de comparecer no sólo a los secretarios de despacho, sino también a los Jefes de Departamentos Administrativos, y se otorgó la facultad al Congreso de la Unión de citar además de los secretarios de despacho a Jefes de los Departamentos Administrativos, así como a los Directores y Administradores de los Organismos Descentralizados Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.

[7] Véase Carmona, Doralicia, "El PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados", Memoria Política de México, México, [citado 30-01-2014], disponible en internet: http://www.inep.org/Efemerides/9/01091997.html
[8]http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SAPI-ISS-04-12.pdf
[9] Ídem

Otra modificación importante al artículo 93 en cuestión fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, el 31 de diciembre de 1994, en la que se ampliaba la facultad de citar a comparecer al Procurador General de la República; finalmente en el año 2008, bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se decretó una quinta reforma a este precepto Constitucional, señalando que el Congreso también podría citar a comparecer a los titulares de órganos autónomos y se otorgaba la facultad de pedir información y documentación a los comparecientes a fin de aclarar al Legislativo el estado que guardan sus respectivos ramos.

En este sentido, el proceso para lograr obtener una verdadera división de poderes en México, ha llevado más cien años, y asimismo avanzar en materia de vigilancia entre poderes, es un logro para la sociedad mexicana, dotar de atribuciones de vigilancia al Congreso de la Unión respecto del Poder Ejecutivo ha sido una son esfuerzos encaminados hacia una verdadera independencia de los Poderes y sobre todo, una revés para aquellos que desean centralizar el poder de nueva cuenta.

Las facultades y responsabilidades que ha adquirido el Congreso de la Unión son amplias, pero no bastas, más aun frente a la reforma energética aprobada en diciembre de 2013, en la que se crea una nueva figura para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), dejando de ser empresas paraestatales, para ser consideradas jurídicamente como Empresas Productivas del Estado.

El pasado 7 de enero del presente año, Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alertaba de la necesidad de regular jurídicamente la vigilancia por parte del Congreso de la Unión hacia estas empresas productivas del Estado, y argumentaba que con la Reforma Energética "se contrajo aún más la débil estructura de controles susceptibles de ser ejercidos por el Congreso."[10]

En el dictamen de la Reforma Energética se manifiesta que las empresas productivas del Estado en cuanto a su propiedad y control estarán bajo el control del Gobierno Federal, a efecto de llevar a cabo actividades de exploración y extracción y petróleo y otros hidrocarburos del subsuelo. Con esto se crea una nueva figura de empresa que controlará y rendirá cuentas al Ejecutivo, pero con características diferentes a una empresa paraestatal.

De ahí nace la necesidad de modificar la Constitución Política Federal a fin de que el Congreso de la Unión tenga la facultad de exigir rendición de cuentas a los directores de este nuevo modelo de empresa productiva, de lo contrario se encontraría en estado de incompetencia pues toda autoridad debe apegarse al principio de legalidad, en el que no puede actuar fuera del marco de la ley, y en el caso de las empresas productivas del Estado al pertenecer a un marco jurídico diferente no estarán bajo la vigilancia del Congreso de la Unión.

En este mismo sentido, la Reforma Energética modifica el monopolio en hidrocarburos por parte del Estado, y abre la puerta a la inversión extranjera en esta área estratégica para la nación, otorgando asignaciones para la exploración y extracción en petróleo, gas o cualquier otro hidrocarburo a empresas privadas. La misma reforma Constitucional reconoce que tanto el petróleo como los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos siguen siendo propiedad de la nación, y con ello advierte que son un área estratégica para el país.

Asimismo, es necesario que las empresas privadas que deseen invertir en esta área estén en el entendido de antemano, que están sujetas al escrutinio del Poder Legislativo, pues estarán manejando un recurso que pertenece a la nación mexicana y por ende su vigilancia se extiende tanto a las empresas productivas del Estado, como a las empresas privadas que deseen invertir en el ramo.
Legislaciones como la Constitución española prevén un mecanismo similar, en su artículo 128 señala que "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", es decir, se otorga la facultad de intervenir o investigar empresas privadas, cuando el interés general está por encima de los intereses particulares de las empresas.

[10] Valadés, Diego, "Petroleras fuertes. Congreso débil", periódico Reforma, México, 07-01-2014, [citado 14-02-14].

En un sentido muy similar, la Constitución Federal de la República de Panamá tiene plasmado como derecho de los ciudadanos "solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley, así como para exigir su tratamiento leal y rectificación." Mientras que su artículo 116 señala la atribución de la Asamblea Nacional "Nombrar, con sujeción a lo previsto en esta Constitución y en el Reglamento Interno, las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y las Comisiones de Investigación sobre cualquier asunto de interés público, para que informen al Pleno a fin de que dicte las medidas que considere apropiadas".

Es claro que la Constitución de la República de Panamá contempla que el poder Legislativo puede emprender acciones de investigación incluso a empresas privadas cuando se trata de un asunto de interés público.

En este sentido, es necesario que a luz de una Reforma Energética, la cual cambiará drásticamente el papel del Estado en materia de energéticos, se instrumenten los mecanismos necesarios para regular la actuación tanto de las empresas productivas del Estado, como de las empresas privadas que participen en áreas estratégicas.

Lo menos que puede esperar la sociedad mexicana, después de no ser escuchada, ni tomada en cuenta para la aprobación de la Reforma Energética, es un marco jurídico que permita tener certeza y transparencia en el manejo de la extracción y exploración de los hidrocarburos hacia las empresas productivas del Estado y las privadas, es necesario que el derecho a la información se extienda a empresas que incursionen en áreas estratégicas para la nación.

Así como los artículos transitorios prevén un lapso de 120 días para la aprobación de la legislación secundaria, es necesario que el Congreso de la Unión tenga las atribuciones necesarias para vigilar la administración de los recursos hidrocarburos de la nación, antes de que se otorguen "asignaciones" (contratos-licencias) a particulares. La reforma en cuestión, debe ser discutida y aprobada a la brevedad de lo contrario los costos para la nación pueden ser irreversibles.

Derivado de lo anterior someto a esta Soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAR EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

Único.- Se modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93.-…

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, **de empresas productivas del Estado y directores de empresas privadas de áreas estratégicas para la nación**, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados**,** empresas de participación estatal mayoritaria, **las empresas productivas del Estado y empresas privadas de áreas estratégicas para la nación**. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

…

…

Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que	**Artículo 93.-**Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que

guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.	guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, **de empresas productivas del Estadoy directores de empresas privadas de áreas estratégicas para la nación**, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.	Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados**,** empresas de participación estatal mayoritaria, **las empresas productivas del Estado y empresas privadas de áreas estratégicas para la nación**. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en untérmino no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.	Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en untérmino no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Dado en el salón de sesiones a los dieciocho días del mes de febrero de 2014.

DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS.



SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SENADORA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 73 FRACCIÓN XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 8.1 FRACCIÓN II, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A ESTA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES LA SIGUIENTE **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS SE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 10 Y 11, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º, 5º, 6º, 16 Y ARTÍCULO IV TRANSITORIO**, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Penitenciario

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo segundo del artículo 18 lo siguiente:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Del párrafo constitucional mencionado se deducen los siguientes aspectos:

El sistema penitenciario se organizará sobre el respeto a los derechos humanos de los presos, principalmente el derecho al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte;

El principal objetivo del sistema será la *reinserción* a la sociedad de la persona sentenciada, con el fin de que no vuelva a delinquir.

El Estado mexicano, a través del sistema penitenciario, tendrá como fin la *reinserción* a la social de todo aquel individuo que haya sido sentenciado por la comisión de un delito, pero dicho objetivo se basará con apego irrestricto al respeto a los derechos humanos.

La última reforma constitucional modificó el término *readaptación* por la de *reinserción*, lo que se puede entender como aquel procedimiento para dotar al individuo de herramientas éticas para que no vuelva a delinquir, es decir, que el individuo al cumplir su pena tenga las bases suficientes para reintegrarse a la sociedad y se pueda conducir de acuerdos a la norma establecida.

Cabe aclarar que el texto constitucional trae consigo un problema de interpretación, ya que sólo se refiere a la *reinserción* a la sociedad de los sentenciados, dejando de lado a las personas que se encuentran en proceso penal, con la agravante que en nuestro país, los procesos penales al no ser rápidos ni expeditos, la mayoría son inconstitucionales, por lo que estamos ante un procedimiento o juicio violatorio del debido proceso,

sujetando a los procesados a permanecer privados de su libertad durante larga temporada.

Ahora bien, el artículo primero constitucional, párrafos primero y tercero, sanciona lo siguiente:

> En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
>
> Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De lo anterior se debe considerar que las personas que son sentenciadas por la comisión de un delito, consecuentemente sufren una modificación en su situación jurídica, que no significa que pierden todo derecho humano o fundamental, según sea el caso.

Lo anterior se destaca por el hecho que en nuestra sociedad a las personas que están sujetas a proceso penal o los que ya cuentan con sentencia firme, son c*riminalizadas* por algunos sectores de la sociedad y de las propias autoridades; es claro que si bien han atentado contra la sociedad y por ende se actualiza el *ius puniendi* por parte del Estado.

Ello no necesariamente tiene relación con la violación a los derechos humanos de los presos. Así, en el texto "Derechos Humanos y Sistema Penitenciario" (CDHDF 2006), expone que:

> Los espacios carcelarios se han caracterizado por la violación sistemática de tales derechos [humanos], de manera que la práctica cotidiana ha conducido a la creencia errónea de que en los centros de reclusión los derechos humanos están totalmente excluidos.
>
> Dicha creencia está equivocada, pues permanecer en reclusión no implica la pérdida de la dignidad humana en la cual descansan los derechos humanos, sino que más bien significa la limitación de ciertos derechos, pero de ninguna forma de todos.
>
> Cabe aclarar que poco a poco las organizaciones de la sociedad civil se han interesado en el tema de los reos a favor de no sólo reconocer los derechos humanos de ellos, sino de potenciarlos.
>
> Asimismo, la cárcel, en tanto espacio de privación de la libertad, representa para el Estado la obligación de garantizar que todos aquellos derechos de los que los internos no han sido legalmente privados y que forman parte de la vida sana adulta de cualquier persona les *sean garantizados*.
>
> De este modo, el Estado tiene obligaciones especiales con respecto a los derechos humanos de internos e internas.

En este orden de ideas, se desprende que si bien una persona se encuentra en una situación jurídica diferente, a consecuencia de una sentencia firme producto de la comisión de un delito, no significa que debe verse menoscabada en sus derechos humanos, antes debe considerarse que por el hecho de ser persona, la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier medida legal y social.

Por su parte Mercedes Peláez Ferrusca menciona que:

> La idea hondamente arraigada no sólo en el sistema penal sino en el social y cultural de que poco

importa o debe importar la persona de los delincuentes, se resiste a la influencia de la cultura de derechos humanos para todos.

No sólo por lo que tiene que ver con la reflexión taliónica: si el delincuente no considera los derechos de la víctima, por qué habría que respetar sus derechos; sino fundamentalmente porque, lejos del escrutinio público, la autoridad penitenciaria estatal ha favorecido el establecimiento del imperio del terror y el autoritarismo, en un medio que por su delicada naturaleza debe de estar sujeto a la legalidad y al respeto de la condición humana.

Se impone por tanto la reflexión inversa, sólo en la medida que el Estado fomente y respete la legalidad y el respeto por la dignidad de la persona reclusa, estará en condiciones de influenciar positivamente tanto en el delincuente preso como en la sociedad.

Se entiende, que lo expuesto es difícil de comprender para la población que ha sido víctima de la delincuencia y por parte de las personas sensible a los problemas de inseguridad y de injusticia en nuestro país; no obstante, la presente iniciativa de Ley pretende sumar a la labor que se da en los centros penitenciarios, ya que desafortunadamente en las cárceles de México hay personas que sin ser autores de delitos hoy en día purgan sentencias condenatorias cuando en realidad son inocentes; basta ver los documentales: *El Túnel* y *Presunto Culpable*.

No obstante, el objeto principal de esta iniciativa de reforma es contribuir a que se cumpla lo establecido por la Constitución, es decir, la *reinserción* de los sentenciados a la sociedad, con el fin de que una vez que salgan de los centros penitenciarios tengan una conducta conforme a las que rigen a la sociedad y no vuelva a delinquir.

Ya se ha mencionado el problema de interpretación del artículo 18 constitucional en su segundo párrafo, en cuanto a los receptores de las características en que debe basarse el sistema penitenciario en México.

En este caso, la idea que señala que el respeto a los derechos humanos no solamente debe ser para los sentenciados, sino también para los que están sujetos a proceso penal, ya que en muchos centros penitenciarios la población en esta situación es considerable.
Como lo demuestra una investigación "En México, la autoridad abusa indiscriminadamente de la prisión preventiva. Más del 40% de las personas privadas de su libertad dentro de las cárceles están todavía en espera de que sus procesos concluyan. Esto quiere decir que personas señaladas como "presuntos culpables" son encarceladas previo a la sentencia condenatoria, es decir, no sabemos si realmente cometieron o no un delito".[11]

La Norma Internacional

Respecto a la normatividad internacional de los derechos humanos de las personas recluidas o presos, son varios los instrumentos internacionales que los protegen, entre los cuales están.

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 25 y 26);

b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 9, 10 y 14, principalmente). De este instrumento cabe destacar lo establecido en el artículo 10 numeral uno: toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano;

c. Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 24 y 25). Aquí se

[11] Cárceles mexicanas: bodegas humanas injustas e inseguras.
Página Web. http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-valua/2011/05/26/carcel-mexic/#axzz2feT9Mu3E. (Consultada 09 febrero 2014)

destaca lo plasmado en el artículo 6, que menciona que "Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados";

d. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 3, 4, 5, 6, 10, 12 y 13);

e. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. I, II, III, V, VI, XI, XII, XIV, XVIII, XXIV, XXV y XXVI). Este documento y para efectos de la presente iniciativa destaca en su artículo XXV que "[todo individuo] tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad"; y

f. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (arts. 1 y 10, principalmente);

NOTA: Existe un instrumento no vinculante para el Estado Mexicano que establece una serie de reglas y mecanismos relacionados con las personas que son sujetas de prisión, este documento se le conoce como "Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos (Reglas de Tokio)".

Respecto de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos es importante señalarlos por dos aspectos importantes:

1. Porque con base en la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, estos tratados tienen plena vigencia en nuestro país y son exigibles; y

2. Para el caso de las personas sujetas a encarcelamiento les son aplicables -recordemos-, por el hecho de ser personas y de ser sujetos de protección a su dignidad humana, principalmente.

En este sentido, se puede clasificar los derechos de las personas sujetas a privación de la libertad por parte del Estado de la siguiente manera:

a. Humanos, por su calidad de personas humanas;

b. Fundamentales, por ser reconocidos por nuestra Constitución y por diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos; y

c. Especiales, porque son exclusivos y dirigidos a las personas que estás en situación de reclusión y que tienen vínculo con los Derechos Humanos.

Una vez que se ha expuesto lo relacionado a los Derechos Humanos de las personas que se encuentran en situación de detención y para efectos de la presente iniciativa, se hace un breve análisis de tres temas fundamentales que deben ser considerados por las autoridades mexicanas y que se tienen que plasmar en la legislación vigente. Nos referimos al derecho de trabajo, la educación y la salud.

El Trabajo

Entre los derechos mencionados por el artículo 18 constitucional se encuentra la capacitación y acceso al trabajo de las personas que se encuentren privadas de su libertad; asimismo, el párrafo tercero del artículo quinto constitucional establece que: nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

Respecto a lo establecido por el artículo 123 constitucional en sus fracciones I y II, se refieren al respeto a la jornada de trabajo y a las actividades industriales peligrosas. No obstante, se debe considerar para efectos de las personas que se encuentran en las cárceles, debería establecerse la retribución de los trabajos que se

desarrollen dentro de los centros penitenciarios, para así tener una retribución económica que pueda sumar a la satisfacción de las necesidades básicas de las familias del reo.

Por otro lado, para poder cumplir este derecho de acceso al trabajo, el Estado mexicano debería retomar lo que se conoce como *Industria penitenciaria*, la cual pueda establecer mecanismos de inclusión laboral para los reos y celebre convenios con otras autoridades que necesiten de la fabricación de algún determinado objeto, para que los reos puedan ser productivos y, consecuentemente, generar ingresos que puedan beneficiar a sus familias.

En este orden de ideas, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 6, punto 3 establece que: "No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, […] los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado".

Con base en esto último, algunas voces legítimamente mencionan que el poner a trabajar a las personas de las cárceles se le puede considerar como un trabajo forzoso, sin embargo no es así, ya que al recibir el pago por una actividad que se realice y, también, recibir capacitación, no se tienen rasgos de este tipo de trabajo ilegal.

Al contrario, una vez que las personas cumplan su pena y queden en libertad, se está ante la posibilidad que encuentren una actividad económica que beneficiará a su familia y a ellas mismas. Pero principalmente, el trabajo, la capacitación y su organización contribuirán directamente a lo establecido por el texto constitucional: la reinserción social del sentenciado.

La Educación

Aunado a lo establecido por el ya citado numeral constitucional, la Constitución en su artículo 3ª, establece el derecho a todo individuo a recibir educación.

En este sentido, no se puede entender la pérdida de este derecho fundamental en contra de los reos o sentenciados, al contrario, la reinserción social tiene sus bases en la formación en valores y la educación de las personas que por diferentes actos delictivos y circunstancias purgan una pena en los diferentes centros penitenciarios.

Por lo que, el Estado debe generar una serie de mecanismos y procedimientos tendientes a establecer un sistema educativo dentro los diferentes centros de reinserción social, en los diferentes niveles educativos, sean primaria, secundaria y nivel medio superior, y también podría dar facilidades y celebrar convenios para que aquellas personas que tengan estudios de nivel superior los concluyan. Por lo expuesto, los centros penitenciarios deben garantizar la infraestructura necesaria donde se puedan llevar a cabo las actividades docentes.

El maestro Antonio Sánchez Galindo hace la siguiente crítica entorno a la educación en el sistema penitenciario: Los redactores del nuevo texto constitucional, así como hicieron una crítica del concepto de *readaptación* social y lo eliminaron, deberían haber poseído también la capacidad autocrítica y pensar en extirpar también la educación, porque ésta se encuentra prácticamente eliminada en el contexto de nuestro "sistema penitenciario" y sólo existe, como dijimos, la contra educación, es decir, la profesionalización en el delito.

No obstante, hay que buscar la forma de lograr una educación integral que no sólo implique la asistencia a una escuela que tiene capacidad para informar a todos, sino que forme a los internos verdaderamente dentro

de una axiología moral que los haga disentir de continuar en el sendero del delito".[12]

Estamos seguros que no es necesario llegar a tal extremo, al contrario debemos propiciar las medidas necesarias para rescatar el sistema educativo dentro de las cárceles, y como bien menciona el maestro, principalmente formar a los internos en valores.

La Salud

El párrafo IV del artículo 4º constitucional indica que: toda persona tiene derecho a la protección de la salud, este enunciado también se relacionado con lo establecido en el artículo 18 constitucional.

Es imprescindible por tanto, garantizar que en los centros penitenciarios la salud de los internos sea uno de los ejes fundamentales en la *reinserción* de los internos a la sociedad. De la salud dependerá el desarrollo físico y emocional de la población penitenciaria, por lo que se deben llevar a cabo acciones tendientes a que en todo centro penitenciario se establezcan mecanismos, infraestructura, personal y complementos que favorezcan la salud de los internos.

Es preciso recalcar que el derecho a la salud se vincula directamente con la vida y viceversa, donde no basta con la conservación de la misma salud, sino que debe ser de calidad, esto es, que a través de medidas óptimas se cuiden las condiciones físicas de los individuos, se genere la creación de un sano ambiente colectivo, una alimentación adecuada y otros factores; tareas exclusivas que corresponden realizar al Estado mexicano.

En este sentido, la maestra Mercedes Peláez Ferrusca afirma que:

> Los factores que se deben atender para asegurar el derecho a la salud están, la alimentación suficiente en cantidad y calidad; sin embargo, muchos arguyen una problemática económica, misma que no debe servir de pretexto al Estado para no cumplir con dar una alimentación adecuada; no obstante, con este derecho puede ligarse el segundo en cuestión, el derecho al trabajo, donde a través de una industria penitenciaria y del pago debido, se puedan dar estos alimentos a cambio de una cuota que no sea total, ya que dicha cuota servirá para el sostenimiento de las familias de los presos.
>
> Esta idea parecerá que no tiene suficiente base legal y social, pero al final se debe considerar como una guía para resolver los problemas de salud que actualmente se enfrenta en el sistema penitenciario.

Entre los factores o medidas que deben tomar en cuenta las autoridades para garantizar este derecho están:

1. Contar con médicos, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras y profesores de educación física en los centros penitenciarios;

2. Establecer un sistema de medicina preventiva, curativa y quirúrgica;

3. Incorporar diferentes áreas como la dental, la oftalmológica, psicológica, psiquiátrica y de educación física; y finalmente

4. Hacer alianzas con dependencias de salud y del deporte para que contribuyan con el objeto del presente apartado.

Al respecto el maestro Antonio Sánchez Galindo menciona que:

> Es preciso reestructurar todos los servicios médicos de nuestras instituciones penales y darles el

[12] Situación General de las Prisiones en la Actualidad a Nivel Nacional.
Página Web. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/25.pdf. (Consultada 09 febrero 2014)

funcionamiento adecuado con profesionistas previamente capacitados, motivados y con ética, que dejen de ir a su obligación profesional sólo para dormirse o recetar aspirinas para todas las enfermedades.

Además de que puedan atender adecuadamente todas las intervenciones quirúrgicas y padecimientos, urgentes o no, que se presenten en la población que les corresponda. No es posible olvidar que a pesar de la detención preventiva y de la privación o restricción de la libertad por condena, cualquier interno, por grave que haya sido su delito, tiene el derecho a la salud física y mental.[13]

Es preciso citar lo expuesto por la Comisión de Derechos del Distrito Federal en relación al respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentren privados de su libertad:

Sólo son legítimas las restricciones a los derechos fundamentales de los internos que cumplan con las siguientes condiciones: debe tratarse de un derecho fundamental que, por su naturaleza, admita restricciones en razón de las necesidades propias de la vida carcelaria; la autoridad penitenciaria debe estar autorizada, vía legal o reglamentaria, a efectuar la restricción; el acto restrictivo de un derecho fundamental de los internos sólo puede estar dirigido al cumplimiento y preservación de los fines esenciales de la relación penitenciara, esto es, la resocialización del recluso y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de los establecimientos carcelarios; la restricción de un derecho fundamental de los internos por parte de la autoridad penitenciaria debe constar en acto motivado y en principio público; y la restricción debe ser proporcionada a la finalidad que se busca alcanzar.

En conclusión, la presente iniciativa propone reformar la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° consagra los derechos humanos de todas las personas, no sólo los contenidos en su propio texto, sino aquellos contemplados en los Tratados Internacionales, que reconocen el principio "*pro persona*".

Que los derechos humanos son inherentes al "Ser Humano", independientemente de su origen étnico o nacional, de su género, edad, discapacidades, condición social, o cualquier otra que pudiera implicar una limitación al ejercicio pleno de su dignidad, derechos y libertades.

Que una persona privada de su la libertad, compurgando una sentencia, como lo establece la Ley; no significa la pérdida de su calidad humana.

Que el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley.

Que la readaptación social se concibe como un derecho, sinónimo de oportunidad de servicio, trabajo y estudio, opciones que se deben ofrecer a todas las personas en reclusión.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

[13] Situación General de las Prisiones en la Actualidad a Nivel Nacional.
Página Web. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/25.pdf. (Consultada 09 febrero 2014)

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS; SE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 10 Y 11, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º, 5º, 6º, 16 Y ARTÍCULO IV TRANSITORIO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA:

Artículo 2º. El sistema penal se organizará sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos, la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del delincuente.

Artículo 5º. Los miembros del personal penitenciarios quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de formación y de actualización que se establezcan, talleres en el respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria, así como de aprobar los exámenes de selección y permanencia que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el servicio de selección y formación de personal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Artículo 6º. El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reinserción social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de sus domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

Todos los centros penitenciarios se establecerán un sistema de salud de medicina preventiva, curativa y quirúrgica; así como, la inclusión de expertos en nutrición, psicología, psiquiatría, oftalmología, odontología, educación física y aquellos expertos que contribuyan a mantener y mejorar la salud de los sentenciados. En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste.

Asimismo, se deben construir espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

Artículo 10. El trabajo dentro de los centros penitenciarios se basará en el respeto a las jornadas de trabajo, como lo establece el artículo 123 fracciones I y II. Asimismo, se procurará que derivado de las actividades de trabajo realizadas por los internos, éstos puedan recibir un pago para el apoyo a la economía de las familias o seres cercanos.

Artículo 11. La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico, ético y en el respeto de los derechos humanos hacia la sociedad en general. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.

Las autoridades penitenciarias deberán llevar a cabo las medidas necesarias para brindar educación en sus niveles básico y medio superior como mínimo; asimismo, para aquellos sujetos que cuenten con estudios de nivel superior se buscarán los mecanismos para que puedan concluir dichos estudios.

Artículo 16. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva reinserción social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la

reinserción social.

Artículo IV Transitorio. El Departamento de Prevención Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, se denominará en lo sucesivo Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social. Para la asunción de las nuevas funciones a cargo de este organismo, la Secretaría de Gobernación adoptará las medidas administrativas pertinentes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

REFORMAS Y ADICIONES
LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS

TEXTO ACTUAL VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
Título de la Ley: Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados.	**Título de la Ley:** Ley que establece las normas mínimas sobre **reinserción** social de los sentenciados.
Artículo 2º.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.	**Artículo 2º.-** El sistema penal se organizará sobre **el respeto irrestricto a los derechos humanos,** la base del trabajo, la capacitación para el mismo**, la educación, la salud y el deporte** como medios para **lograr** la **reinserción** social del delincuente.
Artículo 5º.- Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de formación y de actualización que se establezcan, así como de aprobar los exámenes de selección y permanencia que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el servicio de selección y formación de personal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.	**Artículo 5º.-** Los miembros del personal penitenciario quedan sujetos a la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el desempeño de éste, los cursos de formación y de actualización que se establezcan, **talleres en el respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria**, así como de aprobar los exámenes de selección y permanencia que se implanten. Para ello, en los convenios se determinará la participación que en este punto habrá de tener el servicio de selección y formación de personal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Artículo 6º.- El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto	**Artículo 6º.-** El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la **reinserción** social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de sus domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto

último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad. […] En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste. […] Asimismo, se deben de contemplar espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.	último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad. […] **En todos los centros penitenciarios se establecerán un sistema de salud de medicina preventiva, curativa y quirúrgica; así como, la inclusión de expertos en nutrición, psicología, psiquiatría, oftalmología, odontología, educación física y aquellos expertos que contribuyan a mantener y mejorar la salud de los sentenciados.** En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste. […] Asimismo, se deben **construir** espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.
Artículo 10.- […]	**Artículo 10.-** […] **El trabajo dentro de los centros penitenciarios se basará en el respeto a las jornadas de trabajo, como lo establece el artículo 123 fracciones I y II. Asimismo, se procurará que derivado de las actividades de trabajo realizadas por los internos, éstos puedan recibir un pago para el apoyo a la economía de las familias o seres cercanos.**
Artículo 11.- La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados. […]	**Artículo 11.-** La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico**, ético y en el respeto de los derechos humanos hacia la sociedad en general.** Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados. […] **Las autoridades penitenciarias deberán llevar a cabo las medidas necesarias para brindar educación en sus niveles básico y medio superior como mínimo; asimismo, para aquellos sujetos que cuenten con estudios de nivel superior se buscarán los mecanismos para que puedan concluir**

	dichos estudios.
ARTÍCULO 16.- Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado. La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social. **ARTÍCULO CUARTO.-** El Departamento de Prevención Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, se denominará en lo sucesivo Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. Para la asunción de las nuevas funciones a cargo de este organismo, la Secretaría de Gobernación adoptará las medidas administrativas pertinentes.	**ARTÍCULO 16.-** Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva **reinserción** social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado. La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la **reinserción** social. **ARTÍCULO CUARTO.-** El Departamento de Prevención Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, se denominará en lo sucesivo Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y **Reinserción** Social. Para la asunción de las nuevas funciones a cargo de este organismo, la Secretaría de Gobernación adoptará las medidas administrativas pertinentes.

DE LOS SENADORES MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, OMAR FAYAD MENESES Y JOEL AYALA ALMEIDA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 6, 8 Y 71 DE LA LEY DE VIVIENDA.



SEN. MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO



SEN. OMAR FAYAD MENESES



SEN. JOEL AYALA ALMEIDA

Los que suscriben, **MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO**, **OMAR FAYAD MENESES** y **JOEL AYALA ALMEIDA**, Senadores de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II y, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1, fracción II; 164 numeral 1 y 2, numeral 1 del 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado la presente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 2, 6, 8 Y 71 DE LA LEY DE VIVIENDA** al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático está afectando a todo el planeta, provocando cientos de miles de víctimas cada año e impactando diversas actividades económicas. Se trata de un fenómeno tan complejo que sus causas e impactos están relacionadas con todos los ecosistemas y con diversos ámbitos de la actividad humana: los océanos y los ecosistemas marinos; los bosques y la rica biodiversidad que albergan; las formas en que producimos nuestros alimentos (agricultura y ganadería); el agua dulce; las formas de producir, distribuir y consumir la energía, por mencionar algunos.

Aunque el cambio climático es un proceso normal en nuestro planeta, el problema es que se ha incrementado rápidamente por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI), emitidos por actividades humanas.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha indicado que no hay duda alguna de que los incrementos en la temperatura global del planeta tienen su origen en actividades antropogénicas, particularmente en aquellas relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación, así como en aquellos procesos que consumen energía donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero.

De las numerosas consecuencias que el cambio climático está teniendo y va a tener sobre nuestro planeta, es importante señalar que sus efectos no inciden por igual en todas las regiones del mundo, siendo las más desfavorecidas y densamente pobladas las más vulnerables.

En este sentido, México no es una excepción, su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que el país sea una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad nacional.

Debe destacarse que las consecuencias más graves de los fenómenos hidrológicos afectan mayoritariamente a los sectores más pobres, quienes, debido principalmente a su condición de pobreza, habitan en viviendas precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo, y son quienes precisamente mayores pérdidas humanas y económicas reportan.

Durante las dos últimas décadas hemos sido testigos de dramáticas situaciones derivadas de la llegada de un huracán o tormenta tropical a las costas mexicanas y a pesar del vertiginoso avance de los satélites, que

permiten localizar geográficamente un fenómeno de esta naturaleza, hacer el seguimiento de su trayectoria y predecir la línea y fuerza de su corta vida, todo resulta inútil si desde tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se pone en práctica un política activa de prevención antes, durante y después de su paso.

Los ciclones tropicales constituyen una de las mayores amenazas para diversas regiones de México, así como para Centro América y el Caribe. Baste recordar los devastadores efectos en México de huracanes como: el Gilberto en 1988, el Paulina en 1997 y hace unas semanas Manuel e Ingrid.

Las estadísticas indican que a nivel mundial los daños que producen estos fenómenos han estado aumentando, tanto en los países en vías de desarrollo, como en los más avanzados. Esto se debe, principalmente, al aumento de la población que se asienta en las costas expuestas al impacto directo de estos fenómenos y en las laderas y cañadas afectadas por las fuertes lluvias que a ellos se asocian.

Uno de los pasos más importantes que puede dar un país para mitigar el impacto de los huracanes es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación a la planificación para el desarrollo. El diseño de medidas básicas de mitigación comienza con la compilación de todos los registros históricos de la anterior actividad de los huracanes en el país, determinando la frecuencia y severidad de ocurrencias en el pasado.

El diseño de medidas de mitigación seguirá a continuación del análisis estadístico y considerará los efectos a largo plazo. Las medidas de mitigación tanto estructurales como no estructurales deben ser consideradas tomando en cuenta las dificultades de su implementación.

Las medidas no estructurales consisten en políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para evitar el riesgo. Por ejemplo: lineamientos para uso de tierras, predicción y alertas, y conciencia pública y educación.

Las medidas estructurales de mitigación incluyen el desarrollo de códigos de construcción para controlar el diseño de edificios, métodos y materiales. La construcción de rompeolas, canales de diversión y compuertas contra mareas de tormentas, así como el establecimiento de líneas de árboles, son algunos ejemplos de mitigación desde el punto de vista de obras públicas.

Sin embargo, como ya se mencionó, el riesgo no sólo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores sociales, económicos y políticos, que vuelve vulnerable a la población y que complica la recuperación frente a los desastres. Entre esos factores puede destacarse que 17 entidades federativas cuentan con zonas costeras donde, en 2009, vivían 49 millones 197 mil 975 personas; las cinco entidades con mayor porcentaje de pobreza se encuentran entre ellos.

De acuerdo con el último documento de la serie *Impactos socioeconómicos de los desastres en México,* del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), hay una tendencia hacia el aumento en la incidencia de los fenómenos hidrometeorológicos y en la magnitud de los daños, y más aún si se prevén los riesgos debido al cambio climático. El documento indica que en 2007, murieron en el país 187 personas por sucesos hidrometeorológicos y 2 millones 997 mil 258 personas resultaron damnificadas, principalmente en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Quintana Roo y Puebla. Las pérdidas económicas ascendieron a 49 mil 147.5 millones de pesos. En esta cifra se consideran los gastos que representó la atención a heridos, desalojados y damnificados.

Respecto de los daños en infraestructura, el Cenapred contabilizó que en 2007 se presentaron afectaciones en 225 mil 835 viviendas, en 5 mil 463 escuelas y en 529 hospitales. Por otra parte, la dependencia señala que en ese año 18 mil 474 kilómetros de carretera y 723 mil 899 hectáreas de cultivo fueron afectados.

En un recuento preliminar de daños por el Huracán "Ingrid" y la Tormenta Tropical "Manuel", se provocaron afectaciones de distintas magnitudes en 552 municipios de 26 estados de la República Mexicana.

58 mil personas, tuvieron que ser evacuadas para ponerlas a salvo y más de 52 mil personas permanecen en 392 albergues instalados en 19 estados de la República.

En casi tres cuartos de siglo no había llovido como llovió el pasado 15 de septiembre en todo el territorio nacional. La Secretaria de Gobernación emitió declaratorias de emergencia para 312 municipios de 14 estados del país. Se trata de una de las mayores emergencias por un fenómeno natural en México.

De un total nacional de 22 millones de hectáreas de cultivos, 613,000 quedaron en situación de pérdida absoluta de la siembra anual. Además, en las ganaderías de traspatio –bovinas, ovinas, caprinas, porcinas, aves, colmenas–, 40,000 animales fueron afectados.

Las devastadoras tormentas dejaron al menos 157 personas muertas y aproximadamente 57 desaparecidos, con daños por más de 75,000 millones de pesos (mdp), según cifras estimadas por aseguradoras.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se han detectado afectaciones a 14 mil 564 viviendas ubicadas en **22 estados del país**, de las cuales 3 ,850 requieren una reconstrucción total.

La magnitud de los daños ocurridos a causa de las lluvias, se deben principalmente a que muchos fraccionamientos de zonas urbanas se han asentado en áreas irregulares y en los cauces de ríos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaria de Gobernación, reconoció que hay "omisiones históricas de los tres órdenes de gobierno" que contribuyeron a que el paso simultáneo de dos fenómenos meteorológicos dejara la peor devastación en 50 años en el territorio nacional.

El coordinador Nacional de Protección Civil, aseguró que se está investigando para establecer quién es responsable del cambio de uso de suelo y permisos de construcción en zonas de riesgo.

En 2010, se reconoció que en algunos estados 80 por ciento de los desarrollos habitacionales se ubican en áreas susceptibles de sufrir algún evento natural catastrófico

De lo anterior resulta importante destacar que las autoridades responsables del sector vivienda en México, han reconocido públicamente la problemática que se presenta por la construcción en zonas de riesgo, además de que la tendencia estriba en evitarla de conformidad con el principio de la gestión proactiva en materia de vulnerabilidad poblacional por riesgo.

De acuerdo con Omar Darío Carmona, *Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos,* tesis doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC Barcelona 2001, sostiene que la literatura técnica hace énfasis en el estudio de la vulnerabilidad y en la necesidad de reducirla mediante medidas de prevención-mitigación; sin embargo, lo que realmente se intenta de esta manera es la reducción del riesgo. El análisis del riesgo puede entenderse de manera general como el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y consecuencias en un área determinada.

Según el autor, ha sido común que el riesgo sea valorado solamente en términos fijos, dado que la vulnerabilidad social es difícil de evaluar en términos cuantitativos. Esto no significa que no sea factible

analizar la vulnerabilidad en forma relativa o mediante indicadores, lo que permite proponer "riesgos relativos" que igualmente permiten la toma de decisiones.

Ahora bien, una vez valorado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo en su totalidad, para efectos de planificación, protección y diseño de obras de infraestructura ha sido común que se defina un nivel de "riesgo aceptable". Se alude al riesgo aceptable como las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera, por considerar que son poco factibles y, usualmente, a cambio de un beneficio inmediato.

Desde el punto de vista técnico, corresponde a un valor de probabilidad de unas consecuencias de un periodo de tiempo, que se considera admisible para determinar las mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con fines de protección y planificación ante posibles fenómenos peligrosos.

Coincidimos con el autor que la sociedad toma sus propias decisiones con base en información fragmentada y proveniente de muchos puntos de vista diferentes. Las personas tanto de manera individual como colectiva, simplemente no perciben la amenaza o el riesgo de una manera cuantitativa y que este es el fundamento sobre el cual descansan la mayoría de las normas de construcción sismorresistente y el argumento de las ciencias aplicadas, en cuanto a que el nivel de riesgo aceptable debe ser definido por expertos en el estudio de las amenazas y el comportamiento de los sistemas sometidos a la acción de los fenómenos que las caracteriza. Sin embargo, con frecuencia los tribunales se convierten en jueces finales de sí una acción propuesta para reducir el riesgo es aceptable o no.

La lección que se ha aprendido con todos los datos que sintetizan a nuestro país con la siguiente frase "México: alto riesgo ante desastres naturales", es que hay que dar congruencia al marco normativo del sector vivienda, respecto de la severidad del riesgo.

Al decir del mismo autor, en muchas legislaciones se dan como ejemplos de la fuerza mayor o caso fortuito (suceso sobre el cual no se tiene control) a sucesos de la naturaleza, por lo cual no es extraño que la definición de desastre natural haya sido acomodada a la definición de fuerza mayor. Se reconoce, bajo esta figura, que obran circunstancias no atribuibles al actuar humano y por lo tanto que no existe posibilidad de culpa. Se argumenta que sin voluntad no hay culpa, la cual es y sigue siendo la piedra angular del sistema de responsabilidad. Dicha responsabilidad se inicia con la constatación de la existencia de un daño y de un nexo causal entre ese daño y un hecho generados del mismo, que prosigue con la atribución de ese hecho generador a un agente (encontrando culpa). Se cierra este circuito de la responsabilidad con el reconocimiento de la responsabilidad en cabeza del culpable, cuya responsabilidad conducirá a un resarcimiento. Este planteamiento se funda en el principio rector de que no existe responsabilidad sin culpa, que fue aceptado hasta el siglo XIX. Aunque en el último siglo, la ocurrencia de "accidentes mayores" aceptados como estadísticamente inevitables, derivados de la concurrencia de nuevos factores, como la tecnología y la exacerbación de factores existentes, como la urbanización acelerada y la acción del hombre han conducido a figuras de:

a) Negligencia o culpa negativa, que implica que existe la posibilidad de daño tanto por omisión como por acción; y

b) Presunción de culpa, que se establece por daños inferidos por acción de personas cargo o por cosas inanimadas o energías.

Estos planteamientos de manera implícita involucran la vulnerabilidad, que muchas veces ha sido creada, acumulada o estimulada, incluso, por agentes que deben garantizar la seguridad o protección.

Visto de esta forma, coincido con el autor de que habría circunstancias atribuibles al actuar humano o nexos

de culpabilidad y responsabilidad. En ese sentido ¿qué tan responsable es el Estado por los desastres? La respuesta depende de la previsibilidad de tales situaciones y sobre todo de la posibilidad del Estado de evitarle daños a la sociedad. La posición durante años ha sido y sigue siendo en muchos lugares –y México no es la excepción– que la prevención de desastres está más allá de las funciones y responsabilidades del Estado.

Es la razón por la cual se sigue relacionando también intencionalmente el concepto de desastre con la figura jurídica de la fuerza mayor o el caso fortuito, que en el caso de México la Ley General de Protección Civil asocia el riesgo a los llamados fenómenos perturbadores, tal y como lo establece la fracción XLVIII en su artículo 2.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XLVII. ...

XLVIII. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador;

Retomando la citada tesis, se afirma que la paulatina migración de la visión "atencionista" o de respuesta a los desastres hacia el enfoque de la prevención-mitigación o gestión del riesgo, que no sólo involucra la preparación para emergencias sino la reducción de la vulnerabilidad, ha respaldado la necesidad de hacer ajustes a la legislación para armonizarla con las nuevas concepciones.

No es extraño que entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas. De igual forma, y más grave aún, no es tampoco extraño que entidades competentes, que tienen a cargo la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, no formulen ni ejecuten debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la comunidad. Se han dado casos incluso de excusas extravagantes, como por ejemplo la "ira divina" o el fatalismo, mediante las cuales funcionarios y autoridades gubernamentales han evadido la responsabilidad o han justificado la falta de prevención de desastres.

El evadir no sólo la responsabilidad jurídica sino también la responsabilidad política ha sido una práctica común en países pobres, en los cuales la vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de desarrollo aún no resueltos. Se han dado casos en los cuales ciertas autoridades gubernamentales, han diluido su responsabilidad no sólo ante la población afectada sino también ante la comunidad internacional.

En ocasiones se ha argumentado, por ejemplo, que el desastre ocurrido era factible "prevenirlo", cuando las consecuencias se sabe, no sólo dependen de la ocurrencia del fenómeno que lo origina sino de la vulnerabilidad de los elementos afectados. Desafortunadamente, las condiciones de vida de muchas comunidades, en los países de desarrollo, se asemejan a una situación de desastre y por eso cuando un desastre ocurre tales comunidades no le es fácil discernir los niveles de protección a los cuales tenían derecho de acuerdo a su propia legislación.

Tal y como se mencionó, el riesgo se percibe para los demás y en muchas ocasiones, curiosamente se rechaza o se minimiza sin fundamento hacia sí mismo; particularmente en relación con las amenazas de la naturaleza.

Otra coincidencia con la tesis doctoral citada, esta en el sentido que hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población es una tarea compleja que exige un cuidado especial, porque es por demás común que las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención de emergencias tengan innumerables instrumentos de divulgación, que comúnmente se utilizan a la hora de evaluar su desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo. A parte que en la mayoría de los casos se centran en el hecho, es

decir en el desastre, y no en la causa, es decir en el riesgo, pocas veces se hacen sondeos para averiguar acerca de su cobertura, su recepción y entendimiento.

De igual forma, aún cuando la descripción de los fenómenos que pueden causar desastres es un tema ineludible a la hora de comprender el riesgo, es común no abordar la vulnerabilidad y sólo se menciona como causa de los desastres a las amenazas. Esta situación favorece que se entienda como riesgo la posibilidad de que ocurra un fenómeno intenso, que usualmente se interpreta como algo contra lo cual no es posible hacer algo para evitarlo.

Este tipo de situación es más contraproducente de lo que aparenta, si lo que se desea lograr es tomar conciencia acerca del riesgo ya que ante lo que no es posible intervenir o resulta inevitable, la población asume usualmente una actitud pasiva y de resignación.

Consideramos urgente que las instancias responsables, los sectores social y privado integrantes del sector vivienda y área prioritaria para el desarrollo nacional, tomen en cuenta que los enfoques actuales de educación formal, de capacitación e información pública, son necesarios para poder explicar e identificar el riesgo como causa de la vulnerabilidad y por lo tanto del desastre natural o provocado.

Es necesario que las personas tomen conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, reducir las condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en la medida que los asentamientos humanos son vulnerables.

En Nueva Alianza, consideramos indispensable el reconocimiento del riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos en la Ley de Vivienda, como un conjunto ordenado de "objetos", procesos, principios y soluciones tecnológicas racionalmente enlazados entre sí con un fin común: evaluar el riesgo en los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa en México.

Por lo anterior, el objeto de la presente iniciativa pretende reformar el artículo 2 de la Ley de Vivienda, para modificar el concepto de vivienda digna y contemplar criterios de riesgo de desastres de acuerdo al atlas nacional de riesgos; de igual forma, reformar la fracción I del artículo 6 para incorporar en la política nacional de vivienda, la promoción de oportunidades de acceso a la vivienda para la población que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.

Por último, en el mismo sentido es oportuno reformar la fracción V del artículo 8 del citado ordenamiento con la finalidad que en el Programa Nacional de Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, se destinen preferentemente a aquella en situación de pobreza y riesgo.

En el siglo XXI, la prevención del riesgo de desastres naturales o provocados por el ser humano debe ser una responsabilidad objetiva del Estado mexicano y una tarea de todos. En ese entendido la prevención, debe ser sinónimo de una respuesta por lo sucedido, no por lo que se hizo o se dejó de hacer.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Senadora de la República de la XLII Legislatura, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda

ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios **de riesgo de desastres, de conformidad con el altas nacional de riesgos, su prevención** y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 6. ...

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad **y riesgo;**

II. a **IX.** ...

Artículo 8. ...

I. a IV. ...

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza **y riesgo,** así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI. a **XVIII.** ...

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, **la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo** y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislación en término de 180 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día jueves 13 de febrero de 2014.

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO
Senadora de la República

DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY MINERA.



SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA MARTES 11 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO G) Y SE ADICIONA EL INCISO H) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 11, FRACCIÓN I DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA.



SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE **REFORMA EL INCISO G) Y SE ADICIONA EL INCISO H) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 11, FRACCIÓN I DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA**.

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

l. Durante los últimos 50 años las refinerías de petróleo, las industrias químicas y petroquímicas así como las industrias de combustibles sintéticos, han empleado el hidrógeno gaseoso en grandes cantidades como materia prima. Ejemplos significativos de este uso son la producción de amonio para fertilizantes o la desulfuración de los productos derivados del petróleo.

ll. De igual modo la industria del gas ha hecho uso del hidrógeno en forma líquida y en forma gaseosa para múltiples aplicaciones con un envidiable historial de seguridad. También la industria eléctrica ha empleado el gas de hidrógeno con objeto de enfriar el rotor y el estator de grandes turbinas.

lll. La presencia del hidrógeno en la historia del hombre se remonta a su misma existencia como parte de la naturaleza. Sin embargo, fue descubierto hasta 1766 por Henry Cavendish en el agua y después Lavoisier le bautizó como generador de agua o hidrógeno.

IV. A pesar de ello, fue a finales del siglo XVIII que se le dio su primera aplicación práctica en el ejército francés al usar globos de reconocimiento, y un siglo después lo emplearon los alemanes en los dirigibles que cruzaban el Atlántico. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, el hidrógeno fue empleado como combustible para vehículos de todo tipo, incluso submarinos. Y así, con el auge del carbón y el petróleo, las posibilidades de la investigación y uso del hidrógeno como combustible se vieron disminuidas, solamente recuperando protagonismo hasta el surgimiento de la industria aeroespacial.

V. Hoy en día el interés por este gas se ha acrecentado, principalmente por la preocupación del deterioro ambiental y los efectos sobre el clima, además del posible agotamiento de los combustibles fósiles que hoy representan el principal combustible de todo lo que hacemos y movemos. Esto ha llevado a la comunidad científica a considerar este gas como posible solución a la búsqueda de una fuente limpia, renovable e inagotable de energía. Además de ello, su principal ventaja es que su combustión produce agua, lo que se traduce en la mínima o prácticamente nula emisión de gases causantes de efecto invernadero.

Vl. El hidrógeno es un gas y es el elemento más abundante del Universo, siendo incluso el combustible de las estrellas, incluido el Sol; lamentablemente no está disponible fácilmente en la Tierra, ya que está mayormente combinado con el agua, debiendo obtenerse siempre mediante una reacción química. Lo anterior

nos lleva a confirmar que el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, tal como es el carbón o el gas natural, pero si es un elemento que puede usarse en sistemas energéticos tradicionales.

Vll. Es una realidad, que el hidrógeno es una alternativa para sustituir combustibles tradicionales y con ello no sólo disminuir las emisiones de carbono que dañan al planeta, sino también incentivar el desarrollo de economías más fuertes, nuevas formas de generación de energía limpia y niveles altos de vida, tal como está sucediendo en países como Islandia.

Vlll. El uso de hidrógeno no debe sustentarse únicamente en las posibles soluciones a los problemas de contaminación y abasto de energía, sino que también debe sustentarse en proyectos de investigación que nos permitan desarrollar su manejo y uso adecuado para en un futuro cercano, usarlo en vehículos, aviones, trenes o en la generación electricidad. Pero esto solo se logrará si las sociedades y sus gobiernos realizan fuertes inversiones en el campo científico y crean mecanismos o instituciones para incentivar la investigación sobre los usos posibles del hidrógeno.

ANTECEDENTES.

l. Islandia, representa para el mundo un lugar muy pequeño en el mapa, pero también uno de los países más desarrollados y limpios del mundo; posee una sociedad desarrollada con un cómodo estado de bienestar y tecnológicamente avanzada, particularmente por la situación en que se encuentran. Este país se ubica al noroeste de Europa y muy cerca de Groenlandia, y es uno de los países más pobres de Europa, que desde hace dos siglos se depende de la industria pesquera. Al no contar con petróleo ni gas para explotar, se vio forzado a buscar la forma de ser autosuficiente sin comprometer su ambiente. Es así que estableciendo un sistema educativo completo e incentivando la investigación científica, logró pasar a ser una de las sociedades ideales para vivir de todo el mundo.

ll. Los islandeses tuvieron que proveerse de electricidad por métodos diferentes a los convencionales, creando así una industria de energía geotérmica e hidráulica con el objeto de ser completamente autosuficientes para el año 2050, siendo que ahora su producción se destina a cubrir la demanda del país con un 80% y 20% restante es para importar combustibles usados en el transporte y la navegación. Además no se han quedado estáticos, ahora buscan introducir el uso del hidrógeno en los vehículos, convirtiéndose así en uno de los pocos países del mundo con estaciones de hidrógeno para este tipo de transporte.

lll. Asimismo, otros países han tratado de seguir el modelo islandés de investigación y desarrollo de energías limpias y renovables, pero particularmente en el uso del hidrógeno, la comunidad científica de países como Paraguay y Argentina pretenden generar el interés en sus gobiernos para adecuar el marco jurídico nacional e incentivar el desarrollo de investigaciones encaminadas al uso del hidrógeno como combustible limpio o generador de energía renovable.

lV. En Paraguay recientemente se creó el Centro de Innovación en Tecnología del Hidrógeno, con el objeto de realizar estudios, capacitación y procesos de innovación en la producción de hidrógeno como combustible alterno y ecológico; otro caso, en Argentina desde el año 2006 se promulgó la Ley 26.123 de Promoción del hidrógeno para declarar de interés nacional el desarrollo de tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía con la inclusión de inversionistas privados y la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno que pretende financiar proyectos de investigación. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad por llevar adelante su aplicación, a la fecha sigue pendiente la emisión de su Reglamento para poder entrar debidamente en su aplicación.

V. También existen investigaciones, incluso más desarrolladas, en países como Canadá, líder en investigación y desarrollo de tecnologías del hidrógeno, Estados Unidos quien cuenta con estaciones de servicio de hidrógeno, Brasil con el programa I+D+i en tecnologías del hidrógeno y España quien creó el Centro Nacional del Hidrógeno. No obstante en ninguno de ellos se cuenta con un marco legal para la explotación

del hidrógeno, pese a que su principal uso a diferencia del caso de México que se usa como materia prima para productos químicos, el hidrógeno es considerado y aplicado como combustible limpio.

En México contamos con la presencia de Instituciones como el CONACyT, UNAM, IPN, CINVESTAV y la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, quien en conjunto cuentan con más de 100 especialistas mexicanos que realizan investigaciones en temas relacionados con el hidrógeno No obstante, el vacío legal persiste, toda vez que nuestro marco jurídico nacional no considera el aprovechamiento del hidrógeno como vector de energía o combustible limpio.

CONSIDERANDOS

l. Tema puntual de esta iniciativa, es incluir la investigación y el desarrollo de tecnologías como elementos importantes para el aprovechamiento sustentable de la energía. Particularmente aquella que es generada por el uso del hidrógeno, sea como combustible o como vector energético. Así, un combustible es toda sustancia que puede quemarse, produciendo calor; estos a su vez pueden ser sólidos, líquidos o gases, sea en estado natural o preparado; y un vector energético, es un concepto aplicado a las sustancias o dispositivos que almacenan y entregan fácilmente energía, de forma tal que pueda liberarse de manera controlada.

ll. Como en cualquier otra gran industria, han existido accidentes, pero la gestión de la seguridad en la industria del hidrógeno puede calificarse de satisfactoria. La seguridad debe ser considerada en todos los aspectos del ciclo energético del hidrógeno: producción, transporte, almacenamiento y distribución y utilización.

lll. Esta tendencia a aprovechar las ventajas del hidrógeno en los procesos industriales se ha ido extendiendo a lo largo de los años sin que se hayan presentado problemas de mayor importancia. En el mercado del transporte están surgiendo proyectos innovadores relacionados con automóviles, camiones, autobuses y aviones que emplean el hidrógeno para su propulsión, lo que supone sin duda alguna un paso hacia delante en la difusión del hidrógeno dentro de nuestra sociedad.

lV. El hidrógeno se utiliza también en el sector de la alimentación, para la hidrogenación de los aceites y grasas vegetales y animales. Además tiene aplicación en el campo metalúrgico por su habilidad para reducir los óxidos metálicos y prevenir la oxidación en tratamientos térmicos de ciertos materiales y aleaciones. Además tiene uso en el corte y la soldadura de metales. Por otro lado, y como ya se ha comentado anteriormente, el hidrógeno es extensamente empleado en la síntesis del amoniaco y en las operaciones de refino del petróleo. A su vez el hidrógeno líquido se emplea como combustible primario de los cohetes espaciales, junto con oxígeno o fluoruros y como combustible en los cohetes de propulsión nuclear y los vehículos espaciales.

V. La excepcionales características físicas y químicas del hidrógeno le hacen muy valioso para muchas industrias, y sus usos varían enormemente desde aplicaciones en la industria alimentaria hasta semiconductores, abriéndose cada día más el ya de por si amplio abanico de posibilidades existentes. La producción y uso del hidrógeno poseen un largo historial de seguridad y muchas de las directrices, modos de operación y reglamentación aplicada en la industria convencional, pueden ser muy útiles a la hora de valorar las nuevas situaciones que se presentan con los nuevos usos, del hidrógeno. Estos nuevos usos como los vehículos propulsados por motores de combustión interna o pilas de combustible, o las pilas de combustible que generan electricidad y calefacción en sectores industriales, comerciales o residenciales, repercuten positivamente sobre la visión que el público en general y la propia industria tienen sobre el hidrógeno. Además el producto de combustión del hidrógeno es agua, que es la base de las ventajas medio ambientales del hidrógeno.

Vl. En el futuro, el hidrógeno producido a gran escala, podría ser distribuido mediante tuberías de gas en zonas donde haya una gran demanda de hidrógeno, tal y como se hace actualmente en el Sureste de EE.UU. donde actualmente hay una mayor utilidad de hidrógeno como materia prima para la industria química. La

producción "in situ" también puede ser en el caso de equipos de reformado a pequeña escala, actualmente en desarrollo, o electrolizadores a pequeña escala. El hidrógeno también puede ser producido a partir de fuentes renovables de energía, como la biomasa, y a largo plazo a partir de la luz del sol y el agua, mediante dispositivos fotoeléctricos. En cada caso la seguridad variará en función del proceso productivo, el tamaño, la localización y otras consideraciones específicas de la instalación de producción.

Vll. El uso de la energía suele clasificarse en cinco sectores: industrial, comercial, residencial, generación de electricidad y transporte. Aproximadamente el 25% del uso de la energía en Norteamérica corresponde al sector del transporte. Este sector produce una gran parte de las emisiones causantes de la contaminación en las áreas urbanas y de los efectos adversos sobre el clima a nivel global. La energía empleada en este sector es casi totalmente dependiente del petróleo. Las emisiones y la dependencia del petróleo hacen del sector del transporte el más problemático cuando se proyectan futuros escenarios para sistemas de energía que son renovables, sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y económicos.

Vlll. Los nuevos usos del hidrógeno, presentan nuevas condiciones de funcionamiento y nuevas tecnologías. Esta diversificación de las aplicaciones del hidrógeno también conlleva sistemas de hidrógeno a gran escala, nuevos "ciclos de vida" y costos. Presumiblemente el contexto de seguridad evolucionará dando lugar a un amplio espectro de nuevas, avanzadas y fiables tecnologías de seguridad. Otras variables a destacar son los factores humanos relacionados con la seguridad industrial y la gestión de sistemas de seguridad, así como la imagen que sobre el hidrógeno tenga la opinión pública. El uso del hidrógeno como energía a gran escala y como combustible de cara al público, plantea nuevas preguntas sobre riesgos y medidas de seguridad específicas. Por otra parte, la ausencia de efectos nocivos para la salud o el medio ambiente frente a otras industrias que manipulan combustibles tradicionales, supone un atractivo de indudable importancia.

lX. En los proyectos relacionados con el hidrógeno hay una necesidad de implementar medidas de seguridad que permitan identificar los peligros que presenta el hidrógeno, de manera que puedan evaluarse y compararse con aquellos que presentan otros combustibles. A través de la aplicación de normativas, códigos y reglamentaciones, la sociedad se asegura que la gestión de riesgos se ha llevado a cabo correctamente.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente:

P R O Y E C T O D E D E C R E T O

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO G) Y SE ADICIONA EL INCISO H) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 11, FRACCIÓN I DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA.

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
…
…
…
…
…
…
…
…
g) Hidrógeno, como combustible o vector energético;
h) Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría, cuya fuente cumpla con el primer párrafo de esta fracción;

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social. Tiene como objeto propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, **desde su investigación, desarrollo, explotación y hasta su consumo.**

Artículo 11**.** La Comisión tendrá las facultades siguientes:
I. Propiciar el uso óptimo de la energía, **desde su investigación, desarrollo, explotación y hasta su consumo**;
…

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones a los 17 días del mes febrero de de 2014.

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 119 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA MARTES 11 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.



SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 2 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.



SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES Y SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

La suscrita, Senadora **GABRIELA CUEVAS BARRON**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 numeral 1 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales, y se reforman los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos representó, sin duda alguna, un auténtico cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano. Se actualizó el sistema de protección de derechos humanos mediante la "constitucionalización del derecho internacional" y se enriquecieron los mecanismos de garantía de esos derechos para que pudieran ser exigidos adecuadamente.

Pasaron muchos años para que, de manera paulatina, el Estado mexicano modificara la postura que había adoptado frente al régimen internacional de derechos humanos. Durante mucho tiempo, nuestro país adoptó una "posición nacionalista" que anteponía la protección de su soberanía al régimen internacional de derechos humanos: "el régimen de partido hegemónico, aunque formalmente democrático, se fincó en el uso endémico y extenso de prácticas autoritarias, que no resistían la prueba del escrutinio internacional en materia de derechos fundamentales —en especial los civiles y políticos—. Por el mismo motivo, tampoco interesaba al gobierno que los ciudadanos mexicanos tuvieran acceso a foros de denuncia o a tribunales internacionales después de agotar las instancias jurídicas internas".[14] De hecho, México se tardó en reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y se opuso, en un principio, a la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esa posición nacionalista comenzó a modificarse en la década de los noventa y ya en pleno siglo XXI se reconoció la competencia de otros organismos como el Comité contra la Tortura y se ratificaron diversos instrumentos como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Así, el Estado mexicano fue cambiando "su posición respecto a los mecanismos de petición individual que permitirían a sus nacionales recurrir directamente a los órganos de supervisión previstos en los diferentes tratados internacionales de derechos humanos después de agotar todos los recursos internos".[15]

[14] Cfr. Saltalamacchia Ziccardi, Natalia y Covarrubias Velasco, Ana, *La Dimensión internacional de la reforma de derechos humanos: antecedentes históricos*, en "La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma", Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (Coord.), UNAM-IIJ, Serie Doctrina Jurídica Núm. 609, México 2011, p. 6.
[15] *Ibíd.*, p. 27.

Este avance en la protección de los derechos humanos ha sido más notorio en los últimos años. A partir de la reforma constitucional de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado en temas tan importantes como el control de convencionalidad y la obligatoriedad de las resoluciones emitidas por cortes internacionales. En específico, es de mencionarse la resolución que dictó el Tribunal Pleno en el expediente Varios 912/2010, el 14 de julio de 2011, en la que se resolvió que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) son vinculantes, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por lo tanto, lo único que procede es acatar y reconocer -en sus términos- la totalidad de sus sentencias.[16] Asimismo, el máximo tribunal manifestó que las resoluciones de dicha instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado mexicano en sus respectivas competencias.

En adición a lo anterior, la SCJN aprobó el 13 de mayo de 2013 el Acuerdo General Número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución. En dicho acuerdo, la Corte acordó que el Tribunal Pleno conservará para su resolución: "Los asuntos en los que se recepcionen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en los que el Estado Mexicano sea parte".

A estas decisiones, que representan avances significativos en la ejecución de resoluciones emitidas por la CoIDH, debemos agregar aquellas disposiciones que están contenidas en el marco legal de la Administración Pública Federal y que hacen referencia a la implementación de las sentencias y también de las recomendaciones que emiten los organismos internacionales. Dentro de dichas disposiciones podemos mencionar las siguientes:

- Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación:

  Artículo 24.- La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos tendrá las siguientes atribuciones:…
  … VI. Someter a consideración del superior jerárquico la forma en que serán atendidas las **recomendaciones y sentencias dictadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos** cuya competencia, procedimientos y resoluciones sean reconocidos por el Estado mexicano…

- Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

  Artículo 29. Corresponde a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia:…
  … X. **Dar seguimiento**, en coordinación con las dependencias nacionales y organismos internacionales, **a la implementación de las medidas cautelares y provisionales emitidas por los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos**; …

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

  Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:…
  … b) **Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones** de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y **de organismos internacionales de protección de derechos humanos** cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las normas aplicables…

- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

[16] Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011.

> Artículo 62. Al frente de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de Derechos Humanos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:..
> … V. **Atender y dar seguimiento**, en coordinación con las autoridades correspondientes, **los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos realicen**, respecto de casos que sean competencia de la Procuraduría.

De todo lo anterior se colige que los Ministros de la SCJN, los legisladores y las dependencias de la Administración Pública Federal han intentado diseñar un andamiaje legal que permita ejecutar las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales. Sin embargo, los esfuerzos han sido aislados y no se han diseñado mecanismos para facilitar su plena implementación.

Esto representa un grave problema si reconocemos que el cumplimiento de las decisiones emitidas por organismos supranacionales se topan con las mismas dificultades que las sentencias dictadas por los jueces nacionales. Por ello, en muchas ocasiones las personas no encuentran justicia ni ven resarcidos sus derechos, incluso cuando acuden a una instancia internacional. Esto sucede debido a que las decisiones son ignoradas por el Estados, ya sea porque las autoridades no tienen la voluntad política para implementarlas o simplemente porque no cuentan con las herramientas para dar cumplimiento a las mismas.

En el año 2010, un informe de *Open Society Justice Initiative* concluyó que había una "crisis de implementación" que estaba afectando a los organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos y se encontró que pocos estados disponían de infraestructuras eficaces para asegurar la rápida ejecución de las sentencias o para evitar la repetición de las violaciones de los derechos humanos.[17] De hecho, la gran mayoría de los países implementan las resoluciones internacionales de manera *ad hoc*, es decir, que al carecer de una estructura legal e institucional que les permita sistematizar y coordinar la manera en que se dará cumplimiento a las decisiones y recomendaciones internacionales, brindan respuestas desarticuladas para cada caso en concreto, dejando que las autoridades en turno decidan la manera y los tiempos en que se cumplirán las resoluciones.

Ante este panorama, se corre el riesgo de que las resoluciones no se ejecuten de manera plena ni en un tiempo razonable, sobre todo tomando en cuenta que en muchas ocasiones se imponen medidas de distinta naturaleza cuyo cumplimiento depende de diversos actores estatales. En el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, las resoluciones comprenden medidas que van más allá de las indemnizaciones compensatorias: como la obligación de investigar y castigar a los responsables; la construcción de monumentos; la necesidad de modificar leyes o políticas; la localización de los restos de una victima; la capacitación de funcionarios y cuerpos de seguridad; la difusión de la verdad; la obligación de otorgar el nombre de la victima a calles, plazas o escuelas; o bien, la realización de actos de reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado y de desagravio de las víctimas con presencia de altas autoridades del Estado.[18]

México, además de ser el país con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),[19] ha hecho evidente que un alto grado de incumplimiento de las sentencias de la CoIDH. De hecho, en las supervisiones que esta instancia realiza de sus decisiones encontramos pendientes como los siguientes:

Caso	Puntos resolutivos pendientes de cumplimiento
	En la Supervisión de cumplimiento de sentencia del **21 de agosto de 2013** se señalaron las siguientes obligaciones:[20]

[17] *De los derechos a las reparaciones. Estructuras y estrategias para la implementación de decisiones internacionales sobre derechos humanos*, Open Society Foundations, Nueva York 2013, p.15.
[18] *Implementación de las Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias* nacionales, Viviana Krsticevic y Liliana Tojo (coord.), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 2007.
[19] *Revista Proceso, 20 de agosto de 2013. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=350609*

Cabrera García y Montiel Flores Vs. México **Sentencia: 26 de noviembre de 2010**	a) Conducir, en un plazo razonable, eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. b) Adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como adoptar las reformas legislativas pertinentes para permitir que las personas que se vean afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo para impugnar su competencia. c) Adoptar, en un plazo razonable y en el marco del registro de detención que actualmente existe en México, las medidas complementarias para fortalecer el funcionamiento y utilidad del mismo.
González y Otras ("Campo Algodonero") Vs. México **Sentencia: 16 de noviembre de 2009**	En la Supervisión de cumplimiento de sentencia del **21 de mayo de 2013** se señalaron las siguientes obligaciones:[21] a) Conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos. b) Investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables. c) Realizar, dentro de un plazo razonable, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los responsables de los hostigamientos de los que han sido objeto algunos familiares de las víctimas. d) Adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo. e) Crear o actualizar una base de datos que contenga información personal, genética de las mujeres y niñas desaparecidas, familiares de las personas desaparecidas, así como de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua. f) Brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a los familiares de las víctimas.
Radilla Pacheco Vs. México **Sentencia: 23 de Noviembre de 2009**	En la Supervisión de cumplimiento de sentencia del **14 de mayo de 2013** se señalaron las siguientes obligaciones:[22] a) Conducir eficazmente con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación, y en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar eficazmente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. b) Continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales. c) Adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para

20 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cabrera_21_08_13.pdf
[21] Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gonz%C3%A1lez_21_05_13.pdf
[22] Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radillapacheco_14_05_13.pdf

	compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. d) Adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. e) Brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaradas en el Fallo que así lo soliciten.

De las supervisiones de cumplimiento hechas por la CoIDH observamos un denominador común: el incumplimiento por parte del Estado mexicano de diversos resolutivos de dichas sentencias. La CoIDH indica que México, en todos los casos, ha incumplido en llevar a cabo una investigación eficaz, en un plazo razonable, para determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones correspondientes. Pasaron más de tres años desde que la Corte emitió sus fallos y parece que el tiempo no fue suficiente para que el Estado mexicano cumpliera lo mandatado.

Esto es un claro indicador de que existe una falla sistémica en la ejecución de las resoluciones internacionales: desde la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional y la instrumentación de acciones encaminadas a garantizar que las violaciones no vuelvan a ocurrir, hasta la adecuación del marco legal nacional con los estándares internacionales.

Por lo anterior, en nuestro país se hace imprescindible diseñar un andamiaje legal y una estructura institucional que nos permita asegurar el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de aquellas instancias internacionales cuya competencia ha sido reconocida por el Estado mexicano.

Ciertamente, se requiere de la voluntad política de los actores estatales para implementar decisiones internacionales. Sin embargo, esto no es suficiente y también es necesaria la existencia de una estructura administrativa con la capacidad de hacer esto posible [23] Con esa estructura institucional no sólo garantizaremos que el cumplimiento de las sentencias deje de politizarse, sino también que las autoridades logren internalizar una cultura receptiva de las determinaciones que emanen de entes supranacionales.

En primer lugar, es importante solucionar los problemas de coordinación y coherencia, asignando funciones y responsabilidades claras a las autoridades del Estado, pues "aunque todos los poderes y niveles de gobierno tienen la obligación de proteger los derechos humanos, la implementación depende de instituciones políticas específicas dentro del estado".[24] En segundo lugar, se requiere designar a una autoridad que se encargue de cumplir la función de facilitador o interlocutor. Y en tercer lugar, es necesario establecer mecanismos de comunicación claros y plazos para la oportuna ejecución de las sentencias, contando con un fondo presupuestario que permita pagar lo que determinen las sentencias internacionales. Así pues, dentro de las propuestas que incluye esta iniciativa se encuentran las siguientes:

1. El ente coordinador

De acuerdo con la práctica internacional, y tomando en cuenta que algunos estudios sugieren que el Ministerio de Justicia es el más idóneo para realizar una tarea de coordinación y garantizar que la implementación de las sentencias internacionales sea una prioridad política,[25] se propone designar a la Secretaría de Gobernación (Segob) como interlocutor para que el Estado mexicano ejecute debidamente dichas resoluciones.

[23] *Op. Cit.*, Open Society Justice Initiative.
[24] *Ibíd.*, p. 28.
[25] *Cfr*. Open Society Justice Initiative, p. 54.

Así, con la finalidad de evitar la duplicación de esfuerzos y la desorganización en el proceso de implementación de las sentencias y recomendaciones internacionales, la Segob se encargará de emitir un "dictamen de cumplimiento" en el que dispondrá la forma, términos, tiempo y modo en que las dependencias de la Administración Pública Federal darán cumplimiento a la resolución que corresponda. Por la naturaleza de las violaciones, este dictamen también podrá incluir un exhorto a los otros poderes y órdenes de gobierno para lograr el efectivo cumplimiento de la resolución, tomando en cuenta que por lo general el Poder Ejecutivo es quien interactúa con otros actores legislativos y judiciales para gestionar la implementación de decisiones internacionales. De hecho, la CoIDH ha ordenado a los estados en varias ocasiones que identifiquen o designen representantes del Poder Ejecutivo para implementar sus decisiones.[26]

Esta facultad de coordinación se otorgaría a la Segob en pleno acatamiento de nuestro marco legal, tomando en cuenta que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone, en su artículo 27, que dicha dependencia tiene a su cargo las siguientes funciones: 1) conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales; y 2) vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, así como coordinar trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, dictando "las medidas administrativas necesarias para tal efecto". No obstante lo anterior, y con el propósito de fortalecer las facultades de la Secretaría de Gobernación, se propone reformar al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para disponer de manera expresa su competencia y facultad como ente coordinador en el proceso de cumplimiento de las resoluciones internacionales.

Asimismo, es importante tomar en cuenta que la Ley General de Víctimas en vigor establece que la *Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas* tiene dentro de sus facultades y funciones la de "asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales" (art. 88, fracción IX).

Atendiendo a lo anterior, en la presente iniciativa se propone que dicha Comisión pueda hacer recomendaciones a la Segob respecto a las medidas que deben implementar las autoridades para ejecutar las resoluciones internacionales. Con ello garantizaremos que los mecanismos contenidos en este ordenamiento se despoliticen y que se abra un espacio de diálogo y participación plena de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos reclamantes.

2. Participación del Senado

Los legisladores juegan un papel relevante en la implementación de las resoluciones internacionales por el contrapeso que ejercen al Poder Ejecutivo. En primer lugar, el parlamento se constituye en un foro natural para que las víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos planteen sus preocupaciones y externen sus inquietudes sobre las acciones que se llevan a cabo para cumplir con las resoluciones internacionales; en segundo lugar, puede fungir como un órgano de revisión o supervisión respecto al avance que presenta el Estado en el cumplimiento de las resoluciones; y en tercer lugar, es el espacio propicio para que el titular de la Segob rinda un informe o, en su caso, comparezca con el propósito de explicar los tiempos y la forma en que se están ejecutando las sentencias y recomendaciones, tomando en cuenta que las interpelaciones parlamentarias son un mecanismo significativo de investigación y vigilancia cuando funcionan correctamente.[27]

[26] *Cfr*. Open Society Justice Initiative, p. 32.
[27] *Parliament and Democracy in the Twenty-First Century*, 133-135, citado en Open Society Justice Initiative, "De los derechos a las reparaciones. Estructuras y estrategias para la implementación de decisiones internacionales sobre derechos humanos", Open Society Foundations, Nueva York 2013.

Atendiendo lo anterior, en la iniciativa se otorgan facultades a la Cámara de Senadores para que, a través de las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, estudie el informe que la Segob rendirá anualmente sobre la situación que guarda la implementación de las resoluciones internacionales. Asimismo, los integrantes de las mencionadas Comisiones podrán citar a comparecer al Titular de la dependencia para que ilustre su juicio en el despacho de dichos asuntos y, en caso de que consideren insatisfactorias las acciones del gobierno, contarán con la facultad de emitir las recomendaciones que consideren pertinentes.

3. Participación del Poder Judicial

Una de las funciones que deben cumplir los tribunales nacionales es la de garantizar que las decisiones que emitan los tribunales supranacionales tengan efectos a nivel nacional. Al respecto, es importante recordar que la CoIDH al resolver el caso *Cabrera García y Montiel Flores vs. México*, determinó que tanto a los jueces como a los órganos vinculados a la administración de justicia de todos los niveles les corresponde ejercer el control de convencionalidad *ex officio* en los siguientes términos:

> "225. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero **cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin**. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer *ex officio* un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana".[28]

A ello se suma la resolución de la SCJN en el expediente Varios 912/2010, en el que se señala que la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, "tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos".

Por todo lo anterior, es importante que los jueces y los demás órganos estatales estén familiarizados y tengan un mejor conocimiento de los convenios internacionales y de la jurisprudencia que emana de ellos, pues sólo así cumplirán debidamente con la obligación que les confiere la Constitución de respetar y garantizar los derechos humanos.

Es por ello que en la presente iniciativa se propone que la SCJN emita de manera bimestral un boletín que incluya las sentencias y recomendaciones emitidas por los organismos internacionales en torno a los asuntos en los que el Estado mexicano sea parte y también sobre aquellos que involucren a otros Estados pero que sean relevantes para México con el propósito de evitar violaciones similares a los tratados internacionales. De igual manera, se prevé que en coordinación con los otros Poderes de la Unión, la SCJN diseñe e imparta cursos de capacitación y actualización para funcionarios públicos sobre el contenido de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Con estas medidas se busca lograr que las resoluciones internacionales se conviertan en una fuente efectiva de nuestro derecho interno.

4. Fondo para la Reparación Integral

[28] Caso Cabrera García y Montiel Flores *VS.* México, Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf

Desde hace tiempo el gobierno mexicano ha impulsado iniciativas que le permitan contar con recursos presupuestarios suficientes para atender las obligaciones que derivan de las resoluciones internacionales. Un primer paso se dio en 2010, año en el que el Congreso mexicano aprobó un presupuesto de 30 millones de pesos que se asignó a la Segob para crear el "Fondo de reparaciones e indemnizaciones a causa de violaciones a los derechos humanos decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado".

Dos años después se expidió la Ley General de Víctimas, ordenamiento que dispuso la creación de un *Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral* para que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos sean compensadas en los términos y montos que determine la resolución emitida por un órgano jurisdiccional internacional, o bien, por un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México. Tomando en cuenta lo anterior, y con el objetivo de contar con un sistema de pago centralizado que permita simplificar y acelerar los pagos que ordenen las resoluciones internacionales, en esta iniciativa se prevé que a través de ese Fondo se efectúe la reparación económica a las víctimas o beneficiarios según lo determinen las resoluciones internacionales. Y, en consecuencia, se plantea reformar también la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado a fin de suprimir en el artículo 2 la referencia que se hace a los fallos de la CoIDH y a las recomendaciones de la CIDH.

Compañeros legisladores:

En la última década, nuestro país ha adoptado una posición internacionalista, colaborativa y de protección a los derechos humanos. Sin embargo, todavía hacen falta algunas reformas que nos permitan asegurar que la actuación del Estado mexicano cumpla con las normas internacionales de derechos humanos y justamente ese es el propósito de la presente iniciativa: dotar al Estado mexicano de un marco normativo que defina los mecanismos mediante los cuales se facilitará la plena implementación de las decisiones internacionales, tomando como principios de la ejecución de las sentencias internacionales la inmediatez, la eficacia directa y la vinculatoriedad.

Además de ello, estaremos atendiendo el principio de efectividad de la protección internacional que ha acuñado la CoIDH para exigir a los Estados que aseguren el cumplimiento de sus decisiones en los términos siguientes: "(…) los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (*effet utile*) en el plano de sus respectivos derechos internos. **Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos** (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), **sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte**. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente el carácter especial de los tratados de derechos humanos."[29]

El Estado justifica su existencia cuando garantiza la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de derechos humanos en cumplimiento de una resolución internacional hace realidad la tutela comprometida por los Estados. Por eso, sin ejecución de las sentencias internacionales no es posible hablar de una verdadera tutela de los derechos humanos.[30]

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES Y SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

[29] *Caso Baena Ricardo y otros*, Cumplimiento de Sentencia, 28 de noviembre 2005, Considerandos Párr. 6, citado en "Implementación de las Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, Normativa y Experiencias Nacionales", Viviana Krsticevic y Liliana Tojo (coord.), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Buenos Aires 2007, p. 39.

[30] *Implementación de las Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias* nacionales, Viviana Krsticevic y Liliana Tojo (coord.), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 2007.

Artículo Primero.- Se expide la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales:

LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular la ejecución de las resoluciones y recomendaciones que emitan los órganos jurisdiccionales internacionales y los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, cuya competencia haya reconocido el Estado mexicano de conformidad con la Constitución Política y los tratados internacionales.

Las resoluciones y recomendaciones que emitan los órganos jurisdiccionales internacionales y los organismos internacionales, serán ejecutadas y cumplidas bajo el principio de unicidad internacional del Estado.

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I.- Dictamen de cumplimiento: El dictamen que emita el titular de la Secretaría de Gobernación, en donde se disponga la forma y términos en que la Administración Pública Federal debe dar cumplimiento a la resolución o recomendación internacional que corresponda y, en su caso, el exhorto a los distintos poderes y órdenes de gobierno para su efectivo cumplimiento.
II. Órgano jurisdiccional internacional: Aquel órgano cuya competencia ha sido reconocida por el Estado mexicano, que tiene la facultad de resolver sobre responsabilidad internacional del Estado y, en su caso, sobre actos específicos tendientes a la reparación de derechos de víctimas o beneficiarios.
III.- Organismo internacional: Aquel organismo de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.
IV.- Resolución internacional: Resolución de carácter vinculante que emita un organismo internacional, por medio de la cual se resuelva la responsabilidad internacional del Estado o se determinen actos concretos a cargo del Estado tendentes a la reparación de derechos de víctimas o beneficiarios.
V.- Recomendación internacional: Recomendación que emita un organismo internacional, por medio de la cual se sugiera la adopción de medidas cautelares, provisionales, progresivas o de reparación en favor de los derechos humanos.
VI.- Reparación: Todos aquellos actos a cargo del Estado encaminados a reparar de forma integral la o las violaciones a los derechos humanos de la víctima o beneficiario que, de forma enunciativa, consisten en la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y las medidas de no repetición.
VII.- Víctima o beneficiario: la persona o grupo de personas que son objeto de restitución de un derecho vulnerado, de conformidad con las resoluciones internacionales que emita el organismo internacional correspondiente.

Artículo 3.- Las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales internacionales a que se refiere esta ley, deberán ser cumplimentadas y ejecutadas por el Estado mexicano bajo el estricto apego a los principios de estricta interpretación, inmediatez, eficacia directa y vinculatoriedad.

En los actos que lleven a cabo las autoridades encargadas de la ejecución de las resoluciones internacionales a que se refiere esta Ley, no se podrá variar el sentido y finalidad de la misma, sino simplemente se limitarán a su ejecución en sus términos. Las recomendaciones se acatarán, en la medida de lo posible, en los términos señalados por el organismo internacional y dentro del marco de las disposiciones constitucionales.

CAPÍTULO II
DEL REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL Y DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN

Artículo 4.- En la conducción de la política exterior, corresponde al Presidente de la República representar al Estado mexicano en aquellas controversias de donde pudiera derivar responsabilidad internacional para el Estado. Dicha facultad será ejercida por conducto del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 5.- En caso de que un órgano jurisdiccional internacional haya emitido una resolución en la que se resuelva la responsabilidad internacional del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin dilación alguna, dará aviso al titular de la Secretaría de Gobernación, quien emitirá dentro de los cinco días siguientes a aquel en que le sea notificada la resolución o recomendación internacional, el dictamen de cumplimiento.

Artículo 6.- El titular de la Secretaría de Gobernación, por medio del dictamen de cumplimiento, dispondrá la forma, términos, tiempo y modo en que las dependencias de la Administración Pública Federal darán cumplimiento a la resolución internacional, tomando en cuenta la naturaleza de las sanciones o acciones correspondientes.

En caso de que la resolución internacional disponga como sanción al Estado la reparación económica a las víctimas o beneficiarios, el pago se hará a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en los términos de lo dispuesto por los artículos 65, 101, 110 y 152 la Ley General de Víctimas y su respectivo Reglamento.

Artículo 7.- El dictamen de cumplimiento será obligatorio para las autoridades de la Administración Pública Federal que estén encargadas de su ejecución. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Si en la determinación de responsabilidad del Estado mexicano resultaren involucrados los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, o los poderes públicos de los órdenes estatal y municipal, el dictamen de cumplimiento tendrá la naturaleza de exhorto indicativo sobre la forma, términos, tiempo y modo en que se deberá dar cumplimiento a la resolución.

Artículo 8.- El dictamen de cumplimiento deberá ser notificado a todas las autoridades que en él se señalen, así como de forma personal a las víctimas o beneficiarios en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 9.- En la elaboración del dictamen de cumplimiento, la Secretaría de Gobernación escuchará las recomendaciones que realice la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a fin de asegurar la participación de las víctimas en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano.

Artículo 10.- En el caso de las resoluciones internacionales de carácter no vinculante, que fueran emitidas por órganos internacionales jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales, la Secretaría de Gobernación emitirá el dictamen de cumplimiento, en los términos previstos en esta ley, con la finalidad de que se dé cumplimiento a las mismas, bajo los principios establecidos en el artículo primero de la Constitución.

TÍTULO SEGUNDO
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

CAPÍTULO I
DE LA ACCIÓN DE INDEBIDA EJECUCIÓN

Artículo 11.- Las víctimas o beneficiarios y, en su caso, las autoridades involucradas en el cumplimiento de la resolución internacional, podrán interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de indebida ejecución dentro del término de 10 días contados a partir de la notificación que se realice del dictamen de cumplimiento El objeto de la misma será únicamente disponer si el dictamen de ejecución se encuentra apegado a lo dispuesto por la resolución internacional.

En la acción de indebida ejecución se expondrán en forma de agravio las razones por las que se considera que el dictamen de cumplimiento no se encuentra apegado a lo dispuesto por la resolución internacional correspondiente. A dicho escrito se deberán agregar todas las pruebas que la parte accionante estime necesarias para acreditar los extremos de sus pretensiones.

Artículo 12.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación dará vista a las partes involucradas y a la Procuraduría General de la República, para que en el término de 10 días manifiesten lo que a su derecho convenga, exhiban pruebas y alegatos. Con o sin ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará cerrar la instrucción y resolverá sobre lo planteado en un término no mayor a diez días.

La resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará el apego del dictamen de ejecución a lo dispuesto por la resolución internacional respectiva y, en lo que corresponda, dispondrá la forma, términos, tiempo y modo en que se deberá dar cumplimiento a la resolución internacional.

Dicha resolución será obligatoria para todas las autoridades del país que ahí se dispongan.

Artículo 13.- La resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación suplirá, en lo que corresponda, al dictamen de ejecución.

CAPÍTULO II
DE LOS PLAZOS Y PRÓRROGAS

Artículo 14.- El dictamen de cumplimiento o, en su caso, la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser cumplido por las autoridades responsables en el plazo que se disponga en los mismos.

Las autoridades involucradas podrán solicitar en un término no mayor a diez días a partir del cual se realizó la notificación, al titular de la Secretaría de Gobernación o en su defecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prórroga del plazo para dar cumplimiento con sus obligaciones.

En dicho caso, la autoridad requirente deberá fundamentar su petición de prórroga alegando las razones de hecho por las cuales no es posible dar cumplimiento con el dictamen en el plazo establecido.

El titular de la Secretaría de Gobernación o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa vista que se le otorgue a las víctimas o beneficiarios y a la Procuraduría General de la República, resolverá sobre la petición, la que no podrá ser objeto de prórroga por una segunda ocasión.

Artículo 15.- Fenecido el plazo dispuesto en el dictamen de cumplimiento para acatar lo dispuesto por la resolución internacional, o antes, si resulta evidente que la autoridad correspondiente no está realizando los actos tendentes para su cumplimiento, las víctimas o beneficiarios y la Procuraduría General de la República, podrán inconformarse vía la acción de indebida ejecución, para el efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, en términos de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10 y 11 de esta ley.

Dicha resolución tendrá el efecto de determinar si se ha ejecutado el dictamen correspondiente o si existen acciones pendientes por realizar. En éste último caso determinará la forma, términos, tiempo y modo en que se deberá de dar cumplimiento a la resolución internacional y resolverá, a su vez, sobre la responsabilidad administrativa que corresponda.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO I
DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS

Artículo 16.- El Senado de la República, supervisará el estado que guarda el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones internacionales por parte del Estado mexicano y dará seguimiento a las medidas que se adopten como consecuencia de las mismas.

Para ello, la Secretaría de Gobernación remitirá, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, un informe detallado en el que se dé cuenta de los avances y los pendientes que se registren en los procesos de cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones internacionales.

El informe contendrá:

I. El número de resoluciones y recomendaciones que se han emitido al Estado mexicano;
II. Los puntos resolutivos que se han atendido y los que están por atenderse en cada una de las resoluciones;
III. Las medidas que se han adoptado como consecuencia de las recomendaciones internacionales hechas al Estado mexicano y, en su caso, las razones por las que no se han atendido;

En el análisis de dicho informe, se escucharán los planteamientos de las víctimas y de los organismos defensores de derechos humanos respecto a la implementación de las resoluciones y recomendaciones internacionales.

Artículo 17.- En caso de considerarlo pertinente, el Senado podrá citar a comparecer al Titular de la Secretaría de Gobernación para solventar las dudas y preocupaciones que se desprendan del informe a que hace referencia el artículo anterior.

Si los Senadores consideran insatisfactorias las acciones del gobierno, podrán proponer acciones que estén encaminadas a la pronta y oportuna atención de las resoluciones y recomendaciones internacionales.

CAPÍTULO II
DE LOS TRIBUNALES NACIONALES

Artículo 18.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación elaborará y publicará un informe anual con la jurisprudencia que emitan los tribunales internacionales. Dicho informe contendrá las resoluciones emitidas en contra del Estado mexicano, así como aquellas resoluciones que, a pesar de afectar a otros estados, sean relevantes para nuestro país.

Artículo 19.- En colaboración con organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizará e impartirá cursos de actualización a los jueces y a los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, sobre el contenido de los tratados internacionales y la jurisprudencia que de ellos se desprenda.

TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20.- Una vez que se haya dado cumplimiento a la resolución internacional que corresponda, el titular de la Secretaría de Gobernación expedirá el acuerdo respectivo, que notificará al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos que correspondan.

Artículo 21.- En la interpretación y aplicación de esta ley, se estará a los principios en materia de derechos humanos a que refiere el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a X. …
… XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención **y al cumplimiento** de las recomendaciones **y resoluciones** que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto **y emitir los dictámenes de cumplimiento a que se refiere la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales**;…

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Artículo 2.- …

Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás disposiciones de esta Ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptadas por los entes públicos federales, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones.

La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el ente público federal que haya sido declarado responsable.

…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en esta Ley.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los noventa días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de febrero de 2014.

SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE LAS REDES PÚBLICAS DE INTERNET DE BANDA ANCHA.



SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD.



SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 15; Y SE ADICIONA EL 26 BIS, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA.



SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, QUE PRESENTA EL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito Senador **DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ**, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral I, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta soberanía:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 15; y se adiciona el 26 bis, de la Ley Federal de Defensoría Pública, con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La asesoría jurídica pública en México es un derecho de las personas, una obligación del Gobierno y un instrumento del sistema jurídico fundamental para garantizar a la población en general, y a los jóvenes[31] en lo particular, el respeto y ejercicio del conjunto de derechos humanos y sociales de los que son beneficiarios.

Asesor, es un término que proviene del latín: *assessor*, que significa "el que se sienta al lado" y *assidere* que significa "asistir". El asesor en la época de Roma era el que se sentaba al lado del asesorado generalmente conocido como "ayudante o asistente".

Dentro de la sociedad los que tienen los conocimientos para asesorar en materia jurídica son los licenciados en derecho, los abogados. Son éstos quienes tienen la capacidad y posibilidad de brindar orientación jurídica a quien necesite solucionar asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes jurídicas en cualquier materia de derecho.

En efecto, el Diccionario Jurídico Mexicano[32] refiere que el asesoramiento jurídico es el patrocinio que proporcionan los abogados, tanto los privados como los que presten sus servicios en el sector público, a las personas que requieren de sus conocimientos técnicos para resolver problemas jurídicos y procesales.

De acuerdo con lo anterior se puede hablar de dos tipos de asesoría jurídica: pública (gratuita) y privada (gratuita o remunerada).

La asesoría jurídica pública es un derecho social de contenido prestacional a cargo del Estado; es el mecanismo del Estado para garantizar que ninguna persona pueda quedarse desprotegida, en estado de indefensión, o verse privada de la posibilidad de acceder al sistema de impartición de justicia por razones económicas, culturales, ideológicas, y de cualquier otro tipo.

[31]Esta referencia se hace en consideración de que la juventud conlleva una etapa de cambio de la minoría de edad a la mayoría de edad; al final de este proceso la persona adquiere un conjunto de derechos, obligaciones y responsabilidades jurídicas que durante la minoría de edad no se tienen, y naturalmente se tiene poco conocimiento, experiencia y consciencia para hacerles frente, con el riesgo latente de su incumplimiento.

[32]MANTEROLA MARTÍNEZ, Alejandro E. *Diccionario Jurídico Mexicano; Asesoramiento jurídico*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2013, pp 848-858, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/836/45.pdf

En este sentido, la asesoría jurídica debe vincularse con las propias estructuras del estado de bienestar, con el propósito de consolidarse como el instrumento del derecho fundamental, garante del conjunto de derechos humanos y sociales de los que las personas son beneficiarias.[33]
La asesoría jurídica comprende, a manera de ejemplo, los servicios siguientes:

a) Asistencia en cualquier problema legal.
b) Elaboración de documentos jurídicos.
c) Representación legal.
d) Elaboración de dictámenes.
e) En general, cualquier servicio en materia legal que una persona solicite.

Estas consideraciones muestran la trascendencia de que la legislación mexicana contemple este "instrumento de garantía" de los derechos de la juventud.

De una revisión del derecho mexicano encontramos que ha existido y existe legislación tanto federal como estatal que se refiere al tema en estudio; sin embargo, es necesario rediseñarlo para ampliar sus alcances.

El derecho de asesoría y defensa se reconoció por vez primera en la Constitución de 1857, con el objeto de que no existiera desamparo jurídico de los ciudadanos y evitar violaciones a las Garantías Constitucionales.

Posteriormente, en la Constitución de 1917 vigente, se reconoció el derecho a la defensoría y a la justicia.

Derivado de este reconocimiento constitucional el 28 de mayo de 1998 se creó la *Ley Federal de Defensoría Pública*, una ley que da vida jurídica al "Instituto Federal de Defensoría Pública" con la finalidad de establecer y "regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica"; ley que ahora constituye mi objeto de estudio.

Lamentablemente la legislación federal vigente, como más adelante se expone, carece de las disposiciones necesarias para otorgar a los jóvenes las herramientas básicas para la defensa de sus derechos y el acceso a una verdadera impartición de justicia en las diferentes ramas del derecho. Por esta razón y con el propósito de garantizar a la juventud el acceso a una defensa legal de sus derechos en cualquier materia del derecho, resulta necesario reformar la Ley Federal de Defensoría Pública.

En esta revisión resulta importante mencionar que a nivel estatal también encontramos instituciones públicas creadas por el derecho para brindar a la población asesoría jurídica gratuita en algunas materias, lo que fortalece la urgencia de rediseñar la legislación federal para ampliar los alcances de protección a los jóvenes, en todos los ámbitos del derecho.

Un ejemplo lo encontramos en el Distrito Federal, donde el 18 de junio de 1997 se creó la *Ley de Defensoría de Oficio del Distrito Federal* con el objetivo de establecer y "regular la Institución de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal y proveer a su organización y funcionamiento, así como garantizar el acceso real y equitativo a los servicios de asistencia jurídica, para la adecuada defensa y protección de los derechos y las garantías individuales de los habitantes del Distrito Federal".[34]

[33]Véase: Capítulo cuarto. Dimensión constitucional de la asistencia jurídica gratuita a la luz de la eficiencia y la equidad. I. Características constitucionales de la asistencia jurídica gratuita p. 207, Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. http://www. bibliojuridica.org

[34]Artículo 1 de la Ley de Defensoría de Oficio del Distrito Federal.

Otro caso lo encontramos en el estado de México, entidad que en 2010 creó la *Ley de la Defensoría Pública* con el objetivo de "proporcionar orientación jurídica y defensa penal, así como patrocinio civil, familiar, mercantil, de amparo y de justicia para adolescentes en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, a las personas que lo soliciten"; a cargo de una institución pública denominada "Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México".[35]

El estado de Yucatán, entidad que represento en esta Cámara de Senadores, promulgó en 2010 la *Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán;* ordenamiento que da vida jurídica al "Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán", con el propósito de "garantizar el derecho a la defensa penal pública, gratuita y profesional", y "asegurar el derecho de acceso a la justicia en asuntos civiles, familiares, administrativos, mercantiles y de amparo, mediante la asesoría jurídica, siempre que lo soliciten y acrediten que carecen de medios económicos para sufragar los gastos correspondientes", principalmente.[36]

Asimismo, encontramos instituciones públicas y privadas que por iniciativa propia y con gran responsabilidad social brindan el servicio de asesoramiento jurídico gratuito (en algunas materias) como:

a) Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y

b) Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Panamericana, entre otras.

La importancia del tema no es exclusiva de nuestra sociedad, se trata de una prioridad que rebasa fronteras y naciones.

En el contexto internacional, los derechos a la asesoría jurídica y a la defensa se encuentran regulados y protegidos por varios instrumentos internacionales, entre los que destacan:[37]

A. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
B. La Convención Europea de Derechos Humanos.
C. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
D. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Al respecto Gabriela Knaul, jueza brasileña y relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló el 30 de mayo de 2013:

> "La asistencia gratuita es un derecho esencial de sistemas imparciales; insto a los gobiernos a desarrollar y mantener servicios eficaces de ayuda legal como un componente esencial de un sistema judicial imparcial y eficaz basado en el estado de derecho.
>
> Ese tipo de asistencia es un derecho en sí mismo, y una condición indispensable para el ejercicio y el goce de varios derechos humanos, incluidos los relacionados con las garantías judiciales.
>
> La ayuda jurídica debe ser lo más amplia posible debe contribuir a la eliminación de obstáculos que impiden el acceso a la justicia a personas que no pueden pagar una representación legal.

[35]Véase: http://portal2.edomex.gob.mx/idefensoria/acerca_instituto/antecedentes/index.htm
[36]Artículo 1 de la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
[37]Véase: Derechos humanos, *Recopilación De Instrumentos Internacionales*, Volumen I, Instrumentos de carácter universal, Naciones Unidas, 2002. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1sp.pdf

> La asistencia letrada no sólo debe incluir el derecho a la asesoría jurídica gratuita en los procedimientos penales, sino también la prestación de consejería judicial efectiva en cualquier procedimiento judicial o extrajudicial que busque determinar derechos y obligaciones". [38]

Nótese la trascendencia de la asesoría jurídica. Dos puntos que destacan en la exposición de Gabriela Knaul, mismos que establecen líneas de trabajo legislativo, son:

Primero, la asistencia legal constituye un derecho en sí mismo, que lleva de la mano la salvaguarda de varios derechos humanos, pero además, de varios derechos sociales.

Segundo, el ámbito de aplicación no sólo debe ser en los procedimientos penales; debe extenderse a todos los asuntos de derecho, judiciales y extrajudiciales.

Por otro lado, en países como España también encontramos instituciones creadas con la finalidad de asesorar a los jóvenes, aunque de manera incipiente; destaca el Centro de Información Juvenil (INFORMAJOVEN), que presta sus servicios a través de diversas acciones tales como la orientación especializada, mediante la atención personalizada de cada caso efectuada por un abogado, así como acciones formativas y de divulgación de los temas jurídicos que afectan a la condición social de los jóvenes.

En América Latina, Ecuador es una nación que se destaca en esta materia por contar con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual cuenta con una Dirección de Relación con la Ciudadanía, cuya función principal consiste en brindar asesoría legal y procesal a la ciudadanía en general, en las diferentes ramas del Derecho.

Más aún, el país cuenta con una "Ley de la Juventud", muestra del compromiso con el desarrollo integral de los jóvenes, con propósitos específicos como:

1) Reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos y deberes.

2) Involucrarlos en los procesos sociales, culturales, económicos y políticos del país, por lo que crea organismos autónomos de participación de los jóvenes.

3) Promover el mejoramiento de la calidad de vida, la educación, la recreación, la salud, el trabajo, la participación y la convivencia como presupuesto de desarrollo integral de la juventud.[39]

Todas estas consideraciones confirman la trascendencia de la **asesoría jurídica** para cualquier sociedad moderna, como un instrumento para salvaguardar el desarrollo personal y colectivo de la juventud, en lo particular, y de la población en general.

Ahora bien, en el contexto nacional la realidad social de la juventud mexicana confirma la necesidad de reformar el sistema jurídico, con propuestas como la que se plantea en la presente iniciativa, para crear las condiciones que permitan mejorar sus condiciones de vida. A continuación algunas razones:

El Consejo Nacional de Población (Conapo) refiere que cuando se presenta el fenómeno de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor a la dependiente, entonces el potencial productivo de la economía nacional es mayor.

---

[38]Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), "La asistencia gratuita es un derecho esencial de sistemas imparciales", 30 de Mayo 2013.
http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-asistencia-gratuita-es-un-d/
[39]Ley de la Juventud, Ecuador, 1997

Pues bien, hoy en día la juventud mexicana representa una tercera parte de la población nacional total (al contar con más de 36 millones de personas entre 12 y 29 años de edad) constituyendo, en términos del Conapo, un verdadero bono demográfico y, por lo tanto, uno de los motores más importantes para su desarrollo. De aprovecharse puede ser una oportunidad histórica de desarrollo humano y económico para nuestra nación pero, de no aprovecharse, podría convertirse en problema de desarticulación del tejido social, con graves consecuencias.

Desafortunadamente la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral, sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día se incrementa.

La carencia de una adecuada política pública en materia de juventud, aparejada de la escasez de instrumentos jurídicos suficientes para impulsar su inclusión y desarrollo en la sociedad se suman a los factores que han potencializado la situación actual de la juventud: deserción escolar, desempleo, pobreza, pérdida de valores y principios, e incremento de la criminalidad, entre otros.

En diferentes ámbitos de incidencia directa en la juventud encontramos realidades como las siguientes.

En materia educativa, la falta de cobertura origina que cada año miles de jóvenes se queden sin la oportunidad de estudiar, por ejemplo, sólo en el nivel medio superior para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente ingresó el 27.6% de la población en edad de cursarla.

A esto se suma la deserción escolar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud de 2005, de los jóvenes que dejaron de acudir a la escuela el 42% la tuvo que abandonar para ingresar a un trabajo, mientras que el 30% la dejó por falta de interés. Este dato evidencia dos tipos de problemas: las dificultades económicas de las familias mexicanas para mantener a sus hijos en el sistema educativo, así como el deterioro en la valoración que los alumnos hacen hacia su formación educativa.[40]

En educación y empleo, 8 millones de jóvenes, no estudian y no trabajan[41]. De éstos, algunos son migrantes (2 millones[42]), otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón[43]) como el subempleo con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad laboral y perspectivas de mejora laboral negativas. Otros más están en los reclusorios (119 mil[44]), y el resto, poco más de 4 millones, expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir.

Otra consecuencia de la demanda laboral y la pérdida de empleos durante los últimos años debido a las crisis económicas, ha sido la pérdida de la calidad del empleo en México, que paulatinamente se ha ido deteriorando. Si consideramos la creación y destrucción neta de empleo por nivel de remuneración se obtienen las siguientes cifras: entre el tercer trimestre de 2008 y el segundo de 2010, aumentó en 877 mil el número de ocupados que perciben menos de un salario mínimo; asimismo, aumentaron en 1 millón 617 mil los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos. En cambio, el número de trabajadores que ganan entre dos y tres salarios mínimos se redujo en 925 mil, y la caída entre los que perciben más de 5 salarios mínimos fue de 1 millón 224 mil. Lo anterior, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México[45]. Situación que evidentemente ha empeorado durante los últimos 4 años.

[40]Véase tabla 6: distribución porcentual de la población mayor de edad encarcelada en México por género y edad, 2009.
[41]Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.
[42]INEGI, conteo 2005.
[43]Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.
[44]SEP-SSP. *Sistema penitenciario mexicano, 2008*. Conferencia del Episcopado Mexicano, *Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009*.
[45]Memorándum de Política económica y Presupuestal para 2011. Págs. 27 y 28.

Respecto de la salud, el 50% de los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud y, adicionalmente el 70% de los jóvenes, como grupo etario, tienen contacto con alcohol y drogas[46] convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud. Por ejemplo, entre 2002 y 2008 el consumo de mariguana creció en un millón de adictos y el de cocaína en un millón 350 mil adictos[47]. Y de acuerdo con la *Encuesta Nacional de Adicciones 2011*, de 2008 a 2011, el consumo de mariguana en los jóvenes varones pasó del 2.5 al 3.0%, y el de cocaína pasó del 0.7% al 2.2%, por lo que sigue siendo un problema de salud pública.

En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca del 50% de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes[48]. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.

Todos estos factores acrecientan las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad que enfrentan una gran parte de jóvenes y en contraste, la exclusión social, la carencia de oportunidades de desarrollo, el poco o nulo acceso a actividades educativas, deportivas, recreativas, culturales, laborales y sociales, incentivan su exclusión y los hace proclives a involucrarse en actividades antisociales.

Ante este panorama es claro que la juventud no es la responsable de la descomposición social que se percibe, sino víctima del sistema social.

Como respuesta para contribuir a resolver el problema, desde lo legislativo, es necesario hacer las reformas necesarias a nuestra legislación.

Por todas estas razones y dada la trascendencia del tema planteado, presento esta propuesta legislativa para reformar la Ley Federal de Defensoría Pública, la cual se suma a las iniciativas de reforma que he venido planteando a diversas leyes (bajo una visión transversal) con la finalidad de ir adecuando el sistema jurídico a las necesidades de la juventud.

La presente iniciativa tiene como propósito mejorar y garantizar a la juventud el acceso y respeto a sus derechos humanos y sociales; medios fundamentales para impulsar verdaderamente su desarrollo integral, a saber:

La Ley Federal de Defensoría Pública vigente:

a) Regula la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, "a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica".

b) Establece que el servicio de defensoría pública es gratuito y se presta bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo, de manera obligatoria.

c) Para la prestación de los servicios de defensoría pública, se crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y operativa en el desempeño de sus funciones.

d) Establece la relación de personas a las que preferentemente se brindará el servicio, tales como: las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos; los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges; los trabajadores eventuales o subempleados; los indígenas, entre otros.

[46]Encuesta Nacional de Salud 2006
[47]Encuesta Nacional de Adicciones 2008.
[48]Conferencia del Episcopado Mexicano, *Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009*.

Sin embargo, en dicho ordenamiento encontramos vacíos legales de suma trascendencia para el tema planteado, tales como:

Primero, no prevé a la juventud como sector objeto de los servicios de asesoría, es decir, queda excluida de la protección jurídica gratuita, siendo que en nuestra actualidad es innegable la necesidad de salvaguardar sus derechos.

Segundo, no establece con claridad las materias del derecho en las que se brindará el servicio de asesoría y representación jurídica gratuita, excepto la penal.

Tercero, la ley carece de disposición alguna que establezca la responsabilidad de difundir ampliamente entre los destinatarios de la ley los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública.

Por lo tanto, propongo reformar los artículos 1, 4, 15 y adicionar el artículo 26 bis de la Ley Federal de Defensoría Pública, con las finalidades específicas siguientes:

a) Incluir a los jóvenes como sujetos destinatarios de los servicios de asesoría y representación jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública.

b) Establecer en la ley, con claridad, la obligación de impartir asesoría jurídica en todas las materias del derecho mexicano.

c) Garantizar el acceso de los jóvenes a la impartición de justicia.

d) Informar y asesorar a la población joven, en cuestiones de índole legal, a fin de que cuenten con los elementos que le permitan prevenir y enfrentar problemáticas legales en cualquier materia de derecho.

e) Remover los obstáculos que impidan a los jóvenes tener un conocimiento auténtico y concerniente de sus derechos.

f) Establecer las bases para la difusión de los derechos de la juventud y, paralelamente, facilitar propuestas sociales que eviten que la realidad de los jóvenes y la ley caminen separadas.

g) Intensificar y potenciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestra sociedad.

La propuesta es imprescindible; debemos dotar a la juventud las herramientas de defensa y promoción de sus derechos humanos, y garantizar que las autoridades asuman la obligación, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, tal como está previsto en los instrumentos del derecho internacional y nacional.

Con esta modificación, estaremos fortaleciendo las instituciones del Estado a favor de los jóvenes, pues estaremos garantizando la defensa legal a aquellos jóvenes que no tienen recursos para pagar un abogado ni mucho menos una representación en una controversia judicial en cualquier materia.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 15; Y SE ADICIONA EL 26 BIS, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA:

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 4, 15; y se adiciona el 26 bis, de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como siguen:

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en **las demás materias de derecho, en** los términos que la misma establece.

…

Artículo 4. …

I. …

II. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal.

Artículo 15. …

I. a IV. …

V. Los indígenas**;**

VI. Los Jóvenes, y

VII. …

26 bis. El Instituto Federal de Defensoría Pública difundirá los servicios que presta valiéndose de los medios de comunicación y de los medios tecnológicos.

Cuando menos una vez al año realizará la semana nacional de asesoría jurídica dirigida preferentemente a las personas previstas en el artículo 15.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública realizará las adecuaciones necesarias a las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Senado de la República, a 12 de febrero de 2014.

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REDES PÚBLICAS DE INTERNET DE BANDA ANCHA.



SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DE LA SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 85 Y 101 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.



SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 85 Y 101 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA ARMONIZARLA A LO QUE ESTIPULA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La que suscribe Senadora **IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I; 76 numeral 1 fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. Consideraciones Generales

Al inicio de esta LXII Legislatura, el Congreso de la Unión analizó y dictaminó la iniciativa de carácter preferente enviada por el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón. Este proyecto fue promulgado el 30 de noviembre del 2012, en donde se actualizaron las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma tuvo como ejes fundamentales detonar la competitividad y productividad del sector laboral.

La regulación de la subcontratación o el también llamado *outsourcing*, el pago por hora, los contratos de prueba y capacitación inicial, el establecimiento del Comité Nacional de Productividad, la equidad de género e igualdad de oportunidades, así como la ampliación de la protección laboral fueron algunos de los elementos aprobados por el Congreso de la Unión y promulgados por el Ejecutivo Federal. En el rubro de igualdad de oportunidad y equidad de género, la reforma laboral contempló la prohibición de exigir certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, así como la prohibición de despido de una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.

Ahora bien, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el 74%de los mexicanos se encontró dentro de la población en edad de trabajar –alrededor de 88 millones con 14 años o más–; de este universo cerca de 52.6 millones es considerada como Población Económicamente Activa –PEA– y 35.6 millones como Población Económicamente Inactiva.Dentro de la PEAel 38.4% –como lo muestra la Tabla 1– son mujeres, siendo la industria manufacturera, el comercio y otros las ramas económicas en donde más se ocupan.

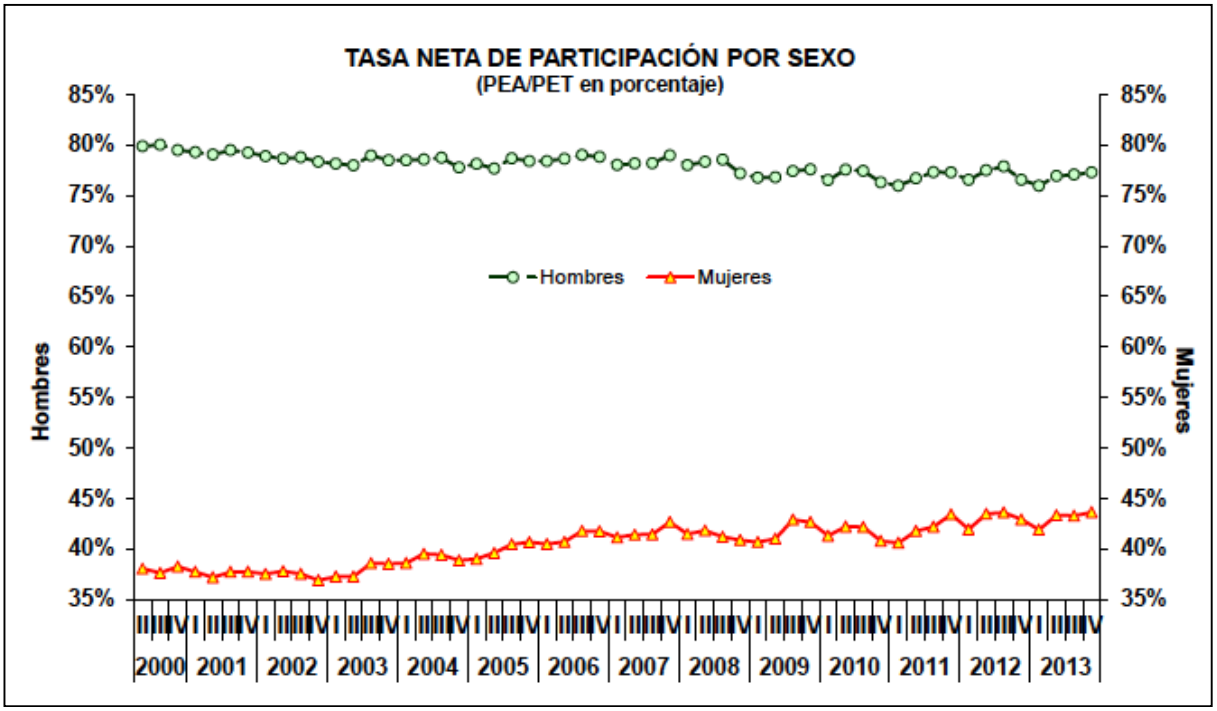
Tabla 1

CONCEPTO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Población Económicamente Activa	52, 675, 784	32, 459, 238	20, 216, 546
Ocupados	50, 243, 493	30, 974, 359	19, 269, 134
Desocupados	2, 432, 291	1, 484, 879	947, 412

Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social

El aumento de la mujer en la PEA ha sido paulatino. En el último trimestre del 2000 al 2013, el aumento fue significativo al pasar del 35% en el 2000, a 38% en el 2013; es decir un aumento del 3%. Ahora bien, como lo muestra la Gráfica 1 la tasa neta de participación por sexo, la cual mide el grado de participación de la población en el mercado de trabajo, a pasado del 38% en el 2000 a 44% en el 2013.

Gráfica 1



Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social

En la reforma del 2012, en el Congreso de la Unión aprobamos cambios al Artículo 170 Párrafo IIpara que quedara como sigue

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. …;

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. **A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.**

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo buscó dar el apoyo necesario a las mujeres trabajadoras, para que pudiéramos transferir hasta cuatro semanas de las seis previas al parto para después del mismo. Pese que la Ley antes mencionada establece esta posibilidad –la de transferencia de semanas– han surgido casos en donde personal del Instituto Mexicano del Seguro Social no autoriza la transferencia,ya que argumentan que la Ley del Seguro Social no contempla este escenario.

En la Ley del Seguro Social, en el Capítulo IV denominado *Del Seguro de Enfermedades y Maternidad* Sección Primera *Generalidades*en el Artículo 85 señala que

> **Artículo 85.** Para los efectos de este seguro se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad, aquélla en que el Instituto certifique el padecimiento.
>
> El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo de los cuarenta y dos días anteriores a aquél, para los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos de esta Ley.

De la misma manera, en la Sección Tercera *De las Prestaciones en Dinero*, en su Artículo 101 señala

> **Artículo 101.** La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al mismo.
>
> En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes por cuarenta y dos días posteriores al mismo, sin importar que el período anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el período anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana.

En ambos artículos la Ley del Seguro Social, como lo he mencionado, no contempla la posibilidad de transferir, como sí lo establece la Ley Federal del Trabajo, cuatro de las seis semanas previas al parto para después del mismo.

B. Propuesta de reforma

Por lo anteriormente expuesto y a fin de armonizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Artículo 85 y 101 de la Ley del Seguro Social

TÍTULO SEGUNDO
DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO

CAPITULO IV
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD

SECCIÓN PRIMERA
GENERALIDADES

Artículo 85. Para los efectos de este seguro se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad, aquélla en que el Instituto certifique el padecimiento.

El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo de los cuarenta y dos días anteriores a aquél, para los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos de esta Ley.

La asegurada, previa autorización escrita del médico del Instituto o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que

desempeñe la asegurada, podrá disfrutar del subsidio de hasta veintiocho días de los cuarenta y dos días anteriores al parto previas al parto para después del mismo.

…
…
…

SECCIÓN TERCERA
DE LAS PRESTACIONES EN DINERO

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al mismo.

A solicitud expresa de la asegurada, previa autorización escrita del médico del Instituto o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe la asegurada, se podrán transferir hasta veintiocho días de los cuarenta y dos días anteriores al parto de descanso previas al parto para después del mismo.

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta cincuenta y seis días posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente por parte del Instituto.

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes por cuarenta y dos días posteriores al mismo, sin importar que el período anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el período anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de**siete días**.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en la presente Ley.

ATENTAMENTE

IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA
SENADORA DE LA REPÚBLICA

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21-B DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.



SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 254 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 368 QUINQUIES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.



SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS



SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 254 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 368 QUINQUIES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los suscritos, **RENÉ JUÁREZ CISNEROS** y **MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA**, senadores de la República en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 254 y se adiciona un artículo 368 Quinquies al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El robo de energía eléctrica en México causa importantes pérdidas económicas ya que existen millones de conexiones irregulares en viviendas y negocios. Esta situación genera inestabilidad financiera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y desalienta nuevas inversiones en el sector eléctrico. Los principales factores que agravan esta clase de pérdidas son la presencia de una creciente actividad de robo y evasión del pago de energía.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierde anualmente por los "diablitos" tres veces más del monto que ingresa a sus arcas por concepto del pago de alumbrado público en todo el territorio nacional, pues mientras sus pérdidas anuales por el robo de energía eléctrica se estiman en al menos 30 mil millones de pesos anuales, sus ingresos por alumbrado público son de nueve mil 597 millones de pesos.

Con la Reforma Energética quedó establecido que el Estado deberá llevar a cabo actividades estratégicas y abrirá la competencia a los particulares.

Al primer caso corresponden los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica, puesto que ya existen las redes y es conveniente conservar el dominio del Estado. La generación y comercialización de energía eléctrica serán abiertas a la competencia entre particulares, quienes comercializarán su energía a través de las redes de transmisión y de distribución del Estado.

Cabe mencionar que el operador estatal, bajo criterios de seguridad y calidad, garantizará el acceso abierto y equitativo a la red de transmisión y a las redes de distribución, para que la energía pueda ser suministrada bajo los principios de transparencia, no discriminación, continuidad, y al mejor precio para los consumidores.

Con ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante una mayor flexibilidad operativa y de organización,será capaz de reducir costos en beneficio de sus finanzas y de los propios usuarios.

Acorde con los artículos 253, 254 y 254 bis del Código Penal Federal, la afectación a los ingresos públicos que significa la falta de pago de la tarifa correspondiente, a través de cualquier alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica, esconsiderada como delito contra el consumo y riqueza nacionales.

La redacción actual del último párrafo del artículo 254 establece que las penas se aumentarán en una mitad más cuando el responsable sea trabajador o servidor público de la industria eléctrica y suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.

Sin embargo, no se considera a los ex trabajadores de la industria eléctrica que pudieran estar inmiscuidos en la comisión de los delitos en perjuicio del consumo y riqueza nacionales.
De ahí que la redacción propuesta para reformar el último párrafo del artículo 254 tenga por objeto aumentar las penas cuando el delito contra el consumo y riqueza nacionales lo cometan aquellos ex trabajadores que,habiendo prestado sus servicios en la industria eléctrica, realicen cualquier sustracción, alteren equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica,o suministren información de la operación de la misma que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.

COMPARATIVO DE REFORMA AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 254 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 254. …	Artículo 254. …
I a IX. ….	I a IX. …
Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo, se aumentarán en una mitad más para el trabajador o servidor público que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.	Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo, se aumentarán en una mitad más ***cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público*** que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.

Por otro lado, y si bien es cierto que el robo equiparado de fluido eléctrico ya se encuentra tipificado en el artículo 368 del Código Penal Federal y se sanciona conforme al artículo 370 del mismo Código, consideramos que sería oportuno adicionar un artículo 368 Quinquies al propio Código, para aumentar las penas hasta en una mitad cuando el responsable del acto punitivo de robo de energía eléctrica sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria eléctrica.

ADICIÓNDEL ARTÍCULO 368 QUINQUIES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 368. …	Artículo 368. …
I a II. …	I a II. …
Artículo 368 Bis. …	Artículo 368 Bis. …

Artículo 368 Ter. …	Artículo 368 Ter. …
Artículo 368 Quarter.	Artículo 368 Quarter.
I a IV. …	I a IV. …
	Artículo 368 Quinquies.- Las sanciones que correspondan a la fracción II del artículo 368 de este Código, tratándose de energía eléctrica, se aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria eléctrica.

El robo de energía eléctrica es un problema de preocupante magnitud económica, pero también representa un asunto de carácter social, ya que ocasiona onerosos costos adicionales que son pagados directamente por los usuarios vía tarifas, o indirectamente por los contribuyentes a través de mayores impuestos y el aumento de los subsidios al sector.

Lo anterior, es contrario a algunos de los objetivos de la reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal y aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión, consistentes en bajar los costos de las tarifas, resolver los problemas de energía alterna ymultiplicar las inversiones en el sector para un óptimo suministro eléctrico.
Desafortunadamente existen funcionarios públicos y ex trabajadores del sector eléctrico, quienes se han prestado para cometer fraudes contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, que a través de actos de corrupción, modifican o alteran las tomas de corriente o medidores para hacer ajustes al consumo eléctrico de algunos usuarios en perjuicio del interés general, o que proporcionan información y planos estratégicos de la paraestatal para la comisión de los delitos.

Si queremos éxito en la implementación de la reforma energética en el sector eléctrico, tenemos que garantizar un marco legal para los nuevos inversionistas que les dé certeza en la generación y comercialización de electricidad,ya sea a través del gas natural o la transformación de la energía eólica, solar ogeotérmica, que además de ser limpias, podrán convertirse en elementos indispensables para garantizar la transmisión ininterrumpida del suministro eléctrico.

La baja en tarifas eléctricas y precios del gas deben reflejarse en los bolsillos de toda la población a precios competitivos de manera particular a la población menos favorecida. De ahí la importancia de que el código punitivo aumente el castigo al robo de energía eléctrica cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria eléctrica.

De lograr desalentar el robo de energía eléctrica y evitar actos de corrupción, podremos abonar en favor de la estabilidad financiera de la Comisión Federal de Electricidad y del público en general, al evitar costos adicionales para los usuarios y hacer más eficiente el proceso de generación, distribución y comercialización de electricidad.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 254 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 368 QUINQUIES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Artículo único.- Se reforma el último párrafo del Artículo 254 y se adiciona un Artículo 368 Quinquies al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 254.- …

I. a IX. …

Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo, se aumentarán en una mitad más ***cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público***que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.

Artículo 368 Quinquies.- Las sanciones que correspondan a la fracción II del artículo 368 de este Código, tratándose de energía eléctrica, se aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria eléctrica.

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18días del mes de febrero de 2014.

S u s c r i b e n ,

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS.

SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA.

DEL SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del Senado de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es necesario corregir la desigualdad electoral a través de un apropiado equilibrio, entre los ciudadanos registrados en el padrón electoral y la representación legislativa en la Cámara de Diputados.

La primacía de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, ciudadanos en términos constitucionales en concordancia al Artículo 34 Constitucional, refiere a la capacidad para concurrir a los sistemas de votación democrática, para formar parte de una sociedad y determinar la representación política. Actualmente, el Artículo 53 Constitucional da esa representación a la densidad poblacional que es determinada por la constitución de los 300 distintos electorales federales, mediante el censo de población.

Así, la voluntad general ciudadana se manifiesta en las urnas y se traduce en representación Nacional. La representatividad no se trata de un tema exclusivo de partidos, sino también, de los actores políticos.

La libertad civil y la actividad política de los mexicanos está delimitada por el Derecho Positivo Constitucional, que define obligaciones y derechos políticos. De esta manera, deja solamente a los ciudadanos la participación político-electoral junto con la autoridad representativa.

El Congreso constituye justamente un terreno donde la representación política y la representatividad social confluyen. Los principios y métodos utilizados para convertir los votos en escaños en un sistema de votación como procedimiento técnico en la elección, necesita de la calidad ciudadana, como el ejercicio y derecho al voto, en una comunidad de iguales que participan directa o indirectamente del poder político.

Por lo tanto, debe considerarse la calidad de ciudadano como rectora de la voluntad política, comprendida en contextos sociales y económicos. No todas las personas son votantes y no todos pueden expresar sus opiniones sobre sus preferencias políticas mediante un sistema de votación.

¿Qué otorga la calidad política de ciudadano de la República? El Artículo 34 Constitucional que establece, haber cumplido dieciocho años y tener un modo honesto de vivir. La capacidad de ejercicio como facultad manifiesta en el poder o aptitud que tiene una persona de participar electoralmente.

Todo ciudadano mexicano es jurídicamente nacional del país, pero no todo mexicano es ciudadano (por no tener dieciocho años cumplidos o por pérdida o suspensión de la ciudadanía). La ciudadanía es, la capacidad o reconocimiento jurídico para intervenir en la política interna de México y un derecho o prerrogativa que sólo puede ser ejercitado directamente por su titular, los ciudadanos.

Queda únicamente en la nacionalidad mexicana, el uso exclusivo de los derechos políticos, tanto el sufragio activo como pasivo. El primero se refiere a la capacidad de votar, el segundo hace mención a la posibilidad de que un ciudadano se pueda presentar a las elecciones para ser elegido como representante del pueblo.

Pero ¿qué es la incapacidad política? La carencia de facultad o inexistencia idónea para ejercitar por sí mismo al sistema de elección democrática. Por ejemplo, compurgar una sentencia privativa de la libertad, pierde sus derechos políticos, como lo son, el poder votar o ser votado.

El tercer párrafo del Artículo 33 Constitucional, prohíbe expresamente a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos del país. Calidad dada sólo a los ciudadanos nacionales que integran el padrón electoral. La misma historia política del país, es razón para tener esta conformación.

No tienen capacidad de sufragio pasivo, los nacidos en el extranjero pero hijos de madre o padre mexicano, los naturalizados, calidad que acredita la Secretaria de Relaciones a la mujer o varón extranjero que contraiga matrimonio con pareja mexicana y con domicilio establecido dentro del territorio nacional.

Solamente gozan de derechos políticos de sufragio activo y pasivo, los individuos que sean nacionales de un estado y que tengan, además la calidad de ciudadanos. Los nacidos en el territorio de la República, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional y los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas.

Estas razones nos obligan a reconocer la realidad política, para que la capacidad de ejercicio político-electoral, que se da al accionar derechos y al hacer valer fines legales como electorales, sea la forma de integrar los escaños en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La cantidad de escaños no debe depender del total de la densidad poblacional. Porque no todas las entidades federales cuentan con un número proporcional a la cantidad de votantes respecto al de sus electores. Por ejemplo, el estado de Zacatecas, cuenta con una mayor cantidad de niños, debido al alto grado de migración, sólo aproximadamente un 50% del total poblacional puede votar, en cambio el Distrito Federal, de sus 8 millones y medio de habitantes solamente millón y medio no tiene esa posibilidad.[49]

Internacionalmente, existen muchos sistemas como ejemplos alrededor del mundo, que han implementado la representación ciudadana mediante una Lista Nominal de Electores, estos con sistemas que van desplazando a los meramente poblacionales. No fue hasta finales del siglo antepasado que se adoptó por primera vez este método, en Bélgica y Suiza (1899), posteriormente en Finlandia (1906), Suecia (1909), Países Bajos (1917) Alemania- República de Weimar (1919-1920), Francia (1919) y Noruega (1920).

Estos sistemas que asignan a la conformación de circunscripciones o distritos electorales, la calidad de "la extensión territorial en la cual exclusivamente los votos de los electores son el fundamento para la distribución de los escaños, a los candidatos con independencia de los votos que se hayan emitido en otros lugares del país (…) Por otra parte, la dimensión de las circunscripciones electorales influye en la relación de porcentajes de votos y escaños de los partidos. A medida que las circunscripciones son más pequeñas, es menor la relación de porcentajes de votos y escaños de los partidos. Cuanto más grande es la circunscripción, mayor es la proporcionalidad".[50]

Se busca un sistema que mediante los órganos de representación ciudadana, sea lo más característico de la voluntad civil, exclusivamente, no meramente poblacional, individual o personal, es decir, sólo de los porcentajes de votación obtenidos para cada partido en la elección según la Lista Nominal de Electores.
De esta forma los ejemplos internacionales citados, muestran la intención de que el votante del padrón electoral, sea exclusivamente aquel ciudadano que tiene la validez oficial de elegir libre y democráticamente a sus gobernantes, y no así que sea un sistema de representación puramente poblacional.
Esta Iniciativa pretende modificar el criterio de representación poblacional en los distritos electorales a uno de Lista Nominal de Electores, tomando como ejemplo la práctica política cotidiana, que llevará al equilibrio de la forma democrática mexicana, para una representación más adecuada del sistema de cómo los ciudadanos aptos para elección popular designan su forma de gobierno.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[49] http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf

[50] Diéter Nohlen, *Sistemas electorales del mundo*, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España, 1981, citado en Humberto Nogueira Alcalá, "*Consideraciones sobre los sistemas electorales a principios del Siglo XXI",* Revista Estudios Constitucionales, Año 5, N º 2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 2007, p. 313.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población **inscrita en el padrón electoral** entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el **padrón del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional de Electores**, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos Diputados de mayoría.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente,

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 14 del mes de febrero del 2014.

DE LA SEN. MARCELA GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.



SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN MATERIA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y DE OPERADORES PREPONDERANTES O CON PODER SUSTANCIAL.

La suscrita, **MARCELA GUERRA CASTILLO**, Senadora de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Honorable Soberanía, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EN MATERIA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y DE OPERADORES PREPONDERANTES O CON PODER SUSTANCIAL**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de la evolución que ha experimentado el hombre y derivado de la necesidad de comunicarse con sus congéneres, fue desarrollando medios de comunicación a distancia que fue perfeccionando con el pasar de los años.

Han contribuido para este desarrollo los factores económico, regulatorio, tecnológico y los fenómenos sociales que han marcado al mundo, por lo que en diversos países Europeos y del continente Americano, inventores y científicos fueron sistematizando las telecomunicaciones, que propiamente nacieron a principios del Siglo XIX con la creación del telégrafo óptico, años más tarde en 1851, en Europa se desarrollo el telégrafo eléctrico, para extenderse después por todo el mundo.

Al principio este servicio era propiedad del Estado pero posteriormente, se permitió la participación de empresas privadas en su prestación, haciendo notar que este servicio que se fue desarrollando a la par de las líneas férreas y del tendido de cables para el servicio de electricidad.

Hacia 1870 se empiezan a tender cables submarinos intercontinentales que significaron cuantiosos gastos económicos por lo que los Gobiernos de los Países que se beneficiaban con dichos servicios se vieron en la necesidad de permitir que compañías privadas participarán en la inversión y posteriormente en la prestación del Servicio de Telégrafo, en el mismo siglo surge el teléfono que permitió facilitar las necesidades de la comunicación, pero en sus inicios, su costo era alto por lo que solo algunos eran los beneficiados por este servicio.

Al pasar de los años, el servicio telefónico se fue volviendo un poco más accesible económicamente y surgió la necesidad de conectar entre sí a diversas poblaciones, situación que genero problemas por las características técnicas de las redes locales por lo que en varios países fue el propio Estado el encargado de la prestación de este servicio.

A finales del siglo XIX, en Estados Unidos de América surgen las primeras compañías privadas que mediante concesión que les daba el estado, prestaban el servicio de telefonía como Western Unión, Bell Telphone, así como ATT, la primera de ellas fue acusada de monopolio, pero lo que fue más importnate y que marco un

presente para la prestación de este servicio, es que surgieron entre ellas los primeros acuerdos de interconexión.

En los primeros años del siglo XX, surgieron los primeros organismos reguladores en distintos países como en Estados Unidos, como la Comisión de Comercio Interestados (Interstate Commerce Commision) y la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commision).

Por lo que hace a América Latina, en la mayoría de los países que contaban con el servicio telegráfico, este era prestado por el Estado y el servicio telefónico fue concesionado, pero muchas de esas concesiones estaban en poder de compañías Europeas o Norteamericanas, o bien, lo prestaban compañías nacionales que contaban con capital de compañías extranjeras y también se hacían cargo de las comunicaciones internacionales por cable submarino y por radiotelegrafía.

Al presentar el servicio telefónico severos problemas de interconexión, se hizo necesario invertir grandes cantidades de dinero y tomar diversas decisiones para tratar de solucionarlos. En México hacía 1925, la Compañía Ericsson, Teléfonos de México (TELMEX) y el Estado realizaron un acuerdo para suministrar el servicio y para vender los equipos.

Por lo que respecta al sistema de Radio, inventada por Marconi, esta fue usada inicialmente en las comunicaciones para la navegación y científicos de otras naciones crearon sus propios sistemas, por lo que a principios del Siglo XX surgen las primeras disposiciones para reglamentar su uso y para otorgar los permisos para su utilización.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), implicó para los países involucrados el desarrollo no solamente armamentista, de tácticas militares y de inventos para usarlos en el conflicto bélico, sino que marco el inicio del desarrollo del uso de la Radiotelefonía y de la Radiodifusión, servicio que era prestado por compañías del sector privado a través de la figura de la concesión.

En los años siguientes a la primera guerra mundial, se descubrió que las ondas electromagnéticas se propagaban por la ionosfera, por estar estas capas de la atmosfera dotadas de una fuerte ionización a causa de la radiación solar, lo que permitió dar auge a la explotación de las ondas cortas y de las comunicaciones intercontinentales, por lo que dicho medio de comunicación fue explotado por diversas compañías, lo que implicó una competencia comercial de tarifas entre las mismas que hoy conocemos como "Competencia Liberalizada del Mercado".

Para el periodo comprendido de 1939 a 1945 en el que se llevo a cabo la Segunda Guerra Mundial, se descubrió la forma de generar ondas de menor longitud y con grandes anchuras de banda a través de las cuales se podían transmitir múltiples comunicaciones y señales de televisión mediante el uso de cables coaxiales submarinos, de cables coaxiales terrestres y de radioenlaces, por lo que la prestación de este servicio necesitaba de grandes inversiones por lo que se fueron creando Consorcios de Operadores y se dio paso al uso de Satélites artificiales permitiendo el auge de las comunicaciones comerciales internacionales.

Entre 1956 a 1960, Rusia y Estados Unidos comienzan sus lanzamientos de los primeros satélites artificiales colocados en orbitas relativamente bajas entre los 800 y 5 mil Kilómetros de altura y posteriormente se colocaron en órbita geoestacionaria a alturas superiores a los 30 mil kilómetros y en 1965 se puso en órbita geoestacionaria el primer satélite para comunicaciones comerciales por Intelsat.

En los años 70´s, surge la necesidad de normar los parámetros, características de la tecnología y de los aparatos empleados en las telecomunicaciones, situación en la que intervino la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), situación que permitió crear la Red Conmutada Automática facilitando las conexiones a distancia y en esta misma década se crea el Internet y se crean redes de transmisión de datos y se regulan los servicios de datos y derivado de la competencia entre consorcios se van abriendo paso a las redes automáticas.

De igual forma, en la década de los setentas, se desarrolla en Estados Unidos y Europa la tecnología celular, pero se esta tecnología se pudo comercializar hasta 1983 considerando el primer servicio de telecomunicación liberalizado y los Operadores de este servicio implementaron la tarifa aire.

En la década de los 80´s, se crea el facsímil que permite inmediatez en la comunicación, la tecnología digital se aplica a la telefonía y se desarrolla la fibra óptica lo que permite tener un medio de transmisión que posibilita miles de transmisiones digitales y permitió tener usuarios determinados para los tipos de servicios de telecomunicaciones de donde surgen las empresas prestadoras de telefonía local, de larga distancia, comunicaciones vía satélite, compañías de televisión por cable y si bien se tenía sobre todo en los Estados Unidos de América un libre mercado, había compañías que buscaban conseguir una posición dominante, incluso monopolios, además de que surgen alianzas internacionales entre compañías para captación de nuevos mercados.

Y en los años 90´s, se utilizaron en la telefonía móvil tanto tecnología analógica como tecnología digital. Por lo que hace a México, en 1990, a raíz de la privatización de la empresa pública paraestatal TELMEX, se alcanzaron acuerdos de interconexión y de acceso y en 1996 se liberalizó el mercado.

En México las telecomunicaciones han ido evolucionando a la par de ciertos fenómenos económicos y sociales como en otros países del mundo, por lo que el telégrafo eléctrico fue el primer servicio de comunicación a distancia que se utilizo en nuestro país, marcando el inicio de las telecomunicaciones en el 1851, con el tendido de la primera Red de telégrafos entre la Ciudad de México y Nopalucan, Puebla, la primera concesión para operar dicho servicio se le dio a un empresario llamado Juan de la Granja y la red creció constantemente durante los siguientes 20 años y la población veía con aprecio el uso de dicho servicio por ser un medio que transmitía mensajes breves en corto tiempo.

En 1880 el servicio de telégrafo se centraliza y el Estado se hace cargo de la prestación del servicio, durante los cinco años posteriores se dio un gran desarrollo de este servicio, toda vez que las líneas de telégrafo se construían a la par de las vías férreas, por lo que para 1887, ya se tenía establecida comunicación telegráfica entre México y Guatemala, además de que se contaba con enlaces con las oficinas de la empresa Norteamericana Western Union Telegraph.

En 188 la telefonía llega a nuestro país y la primera línea telefónica fue tendida entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional; en 1883 se realizó la primera llamada telefónica internacional, saliendo del Estado de Tamaulipas, al Estado de Texas en la Unión Americana, más tarde, en los primeros años del siglo XX, se implementa la transmisión de datos por medio de ondas electromagnéticas (radiotelegrafía).

En 1882, la Compañía Telefónica Mexicana era el proveedor único del servicio telefónico y en 1905 inició sus operaciones la Compañía Mexicana Telefónica Ericsson, generando competencia entre ambas empresas concesionarias, pero sus redes no se encontraban interconectadas, por lo que los clientes de una empresa no podían comunicarse con los de la otra y hasta 1947 se realizó la interconexión.

En los albores de la Revolución Mexicana, las telecomunicaciones jugaron un papel importante para las estrategias y tácticas de los militares como de los alzados, destacando el telégrafo que fue el servicio más utilizado por lo que cada bando destruía o tendía líneas de cableado a efecto de evitar que fluyeran o a fin de reconectar las comunicaciones de cada bando.

En 1916, el presidente Venustiano Carranza expide un decreto por el cual se prohibía explotar estaciones radiotelegráficas sin autorización del Gobierno Federal y en la Constitución de 1917 se incluyó a la radiotelegrafía como una excepción a la prohibición de monopolios que establecía el artículo 28 constitucional; en 1920 se inician en el país las primeras transmisiones de Radio y diez años más tarde, se contaba ya con 71 estaciones y para 1942 ya se tenían 240.

En 1926 se expidió la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que regulaba las comunicaciones a través de la telegrafía, radiotelegrafía, telefonía y radiotelefonía, así como cualquier otro sistema de transmisión o recepción, con hilos conductores o sin ellos, de sonidos, signos o imágenes; mientras que en 1940 se promulgó la Ley de Vías Generales de Comunicación en la que se previó que toda vía de comunicación era de utilidad pública, por lo que su construcción, establecimiento y operación, así como los servicios conexos, requerían de concesión o permiso del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

De 1930 a 1950, se da la experimentación de la televisión y se le da la primera concesión a la estación XHTV que en ese entonces el canal 4.

En 1947 se crea Teléfonos de México, S.A. que se constituyó con los activos de la empresa Mexeric y en 1950 la empresa telefónica "La Mexicana" se fusiona con TELMEX.

En 1958, la telefonía da un gran paso cuando las compañías extranjeras controladoras de Telmex venden sus acciones a inversionistas mexicanos y en 1972 Telmex se convierte en una compañía del Estado cuando el Gobierno Federal adquiere el 51% de las acciones de dicha compañía y para 1981 se convierte en la única compañía prestadora de servicios de telefonía y esta década se inicia el servicio de telefonía móvil.

En 1977 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibe la primera solicitud de concesión para instalar, operar y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en la Ciudad de México y hasta 1981 se inició la comercialización de este servicio.

En 1960 se expidió la Ley Federal de Radio y Televisión en donde ya se incluían las concesiones y permisos para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de prestar servicios de radio y televisión abierta; en 1973 los canales 2, 4, 5 y 8 se agruparon en Telesistema Mexicano para luego convertirse en el consorcio TELEVISA; para 1989 había en el país 567 estaciones cuya cobertura abarcaba el 70% de la población, de ahí surgen los canales XEIPN-Canal 11, la Televisión Rural del Gobierno Federal, el sistema de Telesecundaria e IMEVISIÓN operaba los canales 7, 13 y 22.

En 1962, la UNAM comenzó las primeras investigaciones espaciales para contar con servicios de comunicación vía satélite y nuestro país se adhiere al INTELSAT para adquirir mayor capacidad satelital y comenzar la construcción de estaciones terrenas para servicios satelitales y para 1985 se lanzan los primeros satélites mexicanos, Morelos I y Morelos II, los servicios satelitales eran prestados por el organismo descentralizado del Gobierno Federal denominado TELECOMM.

En 1987 a la empresa Radiomóvil DIPSA, integrada a TELMEX para administrar la radiotelefonía móvil se le permite prestar el servicio de telefonía celular en Mexicali, Baja California y un año después de le autoriza prestar el servicio a nivel nacional, de donde surge la compañía TELCEL como operador de radiotelefonía móvil, en 1990 se empieza a comercializar la tecnología celular en la Ciudad de México y en el área metropolitana y también comienza a prestar este servicio la la empresa IUSACELL.

En el año de 1989 en el Gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari se da la desincorporación de TELEMEX y en 1990 se privatiza la empresa para contar con mayores oportunidades de financiamiento, la mejora en la calidad de los servicios y la promoción de una competencia equitativa con otras empresas de telecomunicaciones.

Cuando México suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se compromete en el tema de liberalización de las telecomunicaciones del control estatal y se establecen medidas relacionadas con acceso, uso de redes y servicios de telecomunicaciones, se crean obligaciones sobre monopolios, privilegios exclusivos, de transparencia y publicidad en las medidas vinculadas con el acceso a Redes y servicios de telecomunicaciones.

En agosto de 1990 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una nueva concesión a Telmex, dando a la empresa un monopolio en el servicio de larga distancia nacional e internacional hasta 1996.

En octubre de 1990 se adoptó un nuevo marco regulador (Reglamento de Telecomunicaciones), en el que se especificaban las responsabilidades de la SCT, y se preveía el otorgamiento de nuevas concesiones en todas las áreas, excepto las reservadas al gobierno.

En 1993 la Ley de Inversión Extranjera aumentó la participación de la inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones. Los cambios permitieron la inversión extranjera con derecho de propiedad hasta de 49% en operadores de red fija y mayores niveles de inversión extranjera en las empresas de telefonía celular, siempre que la parte inversora obtuviese una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

En enero de 1994, México celebró un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN). El capítulo XIII del tratado incluyó las telecomunicaciones, el acceso a las redes de telecomunicaciones y su uso, así como los circuitos privados sobre una base razonable y no discriminatoria.

En julio de 1994 la SCT publicó una resolución sobre la correcta celebración de convenios de interconexión entre las empresas de larga distancia y el incumbente. La misma resolución planteó un calendario para abrir la competencia con igualdad de acceso, empezando con 60 ciudades en 1997, y extendiéndose a todo el país para el año 2000. En la resolución también se estableció que la interconexión se orientaría a los costos y sería acorde a las normas y parámetros internacionales.

Después de la crisis económica de 1994, IUSACELL se enfoca a clientes de alto poder adquisitivo con planes de renta a precios elevados y TELCEL concibió planes a precios medianamente accesibles, ambas empresas impulsaron los primeros planes de prepago y en los últimos años de la década de los 90´s surgen otros operadores del servicio que invirtieron masivamente para incrementar y modernizar la infraestructura usada hasta ese momento y el tamaño de los teléfonos se fue reduciendo a la par del precio del servicio.

En marzo de 1995 la Constitución mexicana se modificó para permitir la inversión extranjera privada en las comunicaciones satelitales.

En junio de 1995 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones en sustitución de gran parte de la antigua Ley de Vías Generales de Comunicación, que se aplicaba desde 1940.

En 1995 se reforma el artículo 28 constitucional para permitir la participación del sector privado en la comunicación satelital, pasando de ser un área estratégica a un área prioritaria y la tendencia liberalizadora se concreta con la Ley Federal de Telecomunicaciones, en 1995 que establece un cambio radical en el papel del Estado como regulador de las telecomunicaciones.

Por ello, se establece en la Constitución que le corresponde al Estado, ser rector de la economía y promotor del desarrollo, establecer las condiciones que permitan la concurrencia de la iniciativa e inversión de los particulares, bajo un marco regulatorio claro y seguro por lo que se genera la transición hacia mercados más abiertos y de promoción de la competencia en las telecomunicaciones aprovechando su avance tecnológico.

La Ley Federal de Telecomunicaciones estableció obligaciones en el tema de las interconexiones para fomento de la competencia y de la libre competencia, se faculta a la autoridad para imponer obligaciones en cuanto a tarifas, calidad e información, así como el tratamiento a los concesionarios declarados como agentes económicos con poder sustancial en algún mercado de las telecomunicaciones y permitía el ingreso del sector privado a la prestación de servicios satelitales.
En 1995 y 1996 se otorgaron concesiones a entrantes para servicios fijos de larga distancia nacional e internacional. En 1996 la SCT intervino en la primera disputa sobre interconexión y emitió un fallo (resolución), en ese mismo año, un decreto presidencial estableció un regulador específico del sector, siendo

este la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), por mandato de ley y se estipularon las normas para preseleccionar las empresas que prestarían servicios de larga distancia nacional e internacional.

En enero de 1997 dio inicio la competencia en el mercado de larga distancia cuando comenzaron a operar seis nuevas empresas y en diciembre de ese mismo año, la Comisión Federal de Competencia (COFECO), determino que Telmex tenía "**poder sustancial de mercado**", y en marzo de 1998 confirmó su resolución.

En diciembre de 1998 la COFETEL publicó una resolución que detallaba las tarifas de interconexión que se aplicarían en 1999 y 2000. La resolución redujo dichas tarifas e introdujo el sistema "***el que llama paga***" para teléfonos móviles. Además, el Órgano Regulador publicó normas para la separación contable, reducciones del número de áreas de servicio local y un programa para que los números nacionales aumentaran de ocho a diez dígitos, conforme al Plan Técnico Fundamental de Numeración.

En 1998 la licitación de espectro (banda de 1.9 GHz) permitió la entrada de un tercer y un cuarto participantes: UNEFON, que más tarde se fusionó con IUSACELL, y PEGASO, que después fue adquirido por TELEFÓNICA.

En el año 2000 inicia la evolución tecnológica de las redes en México y la telefonía móvil da un giro radical toda vez que dejó de ser considerado un artículo de lujo y pasa a ser un artículo necesario, para el año 2002 algunas compañías utilizan el sistema GSM y otras desarrollaron redes iDEN.

En 2003 se permitió a las compañías de cable ofrecer servicios de internet con señales bidireccionales.

En 2005 la COFECO intentó introducir topes máximos de espectro para la licitación de éste. Hubo una impugnación y los tribunales rechazaron la medida.
En octubre de 2006 el Acuerdo de Convergencia de 2006, expuso las condiciones en las que los operadores de telecomunicaciones podrían ofrecer televisión de paga, y las televisoras podrían ofrecer telecomunicaciones.

De 2006 y 2008 se implementan en la telefonía móvil los servicios de tercera generación, bajo el estándar UMTS y HSDPA mejorando sus servicios de datos e implementando GPS, videollamadas, entre otros.

Desde 1996, TELMEX incursionó en el servicio de internet al comprar IBM, SEARS y el proveedor de internet Prodigy Comunications, posteriormente se convierte en SBC Yahoo!, por lo que para el 2004 Prodigy ya contaba con más del 70% de acceso a internet vía telefónica y el 40% en DSL en México, en el 2009 Telmex unifica su servicio de internet mediante la marca INFINITUM y para diciembre de 2010 inicia la construcción de la red FTTH para brindar servicios de Triple Play.

En julio de 2008 la COFETEL introdujo la portabilidad de los números fijos y móviles y en ese mismo año, la SCT resolvió la disputa sobre interconexión entre AXTEL y TELCEL, y TELEFÓNICA y IUSACELL, reduciendo las tarifas en 50%.

En 2010 la COFETEL completó la licitación del espectro para servicios de 3G+. La adjudicación del espectro se retrasó debido a los juicios, y luego fue otorgada a la alianza Televisa-Nextel. Sin embargo, otros juicios fueron motivo de que Televisa se retirara, en marzo de 2010 la COFECO emitió una decisión que confirmaba que TELCEL tenía ***poder sustancial de mercado***. Sin embargo, la regulación asimétrica permitida por esta determinación no se materializó debido a las impugnaciones presentadas ante los tribunales, en julio de ese mismo año, la SCT modificó la concesión de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad, permitiéndole ampliar la cobertura de servicio de su red de fibra óptica de 71 a 200 ciudades.

En julio de 2010 la fibra óptica no utilizada de la Comisión Federal de Electricidad fue otorgada en licitación a GTAC (*consorcio conformado por Megacable, Telefónica y Televisa*), por 884 millones de pesos, lo que

permitió una alternativa a la infraestructura de la red de Telmex y se estima que GTAC podría dar acceso a otros operadores.

En agosto de 2010 la COFETEL licitó 80 MHz del espectro de 1.7 GHz. Los licitadores ganadores fueron NEXTEL y TELEVISA (30 MHz), TELCEL (20 MHz en 7 regiones y 20 MHz en dos regiones) y TELEFÓNICA (10 MHz en seis regiones).

Durante 2011 la COFETEL se comprometió a lograr reducciones en las tarifas de interconexión de reventa en telefonía fija y móvil y por su parte, la COFECO impuso una multa de 1 000 millones de dólares (*12 000 millones de pesos*) a TELCEL por abusar de su posición dominante al hacer cargos excesivos por el acceso a la red, en mayo de ese año, la Suprema Corte determinó que las decisiones reguladoras respecto a la interconexión no podían suspenderse mediante impugnaciones presentadas ante los tribunales ni por la interposición de amparos, por lo que la COFETEL pudo rebajar en 70% las tarifas de terminación de telefonía fija (de 0.01 dólar a 0.003 dólar) y redujo en 95% las tarifas de terminación de larga distancia en las áreas rurales.

En junio de 2011 se impuso a TELMEX una multa de 86 millones de dólares (91.5 millones de pesos) por negar a MOVISTAR el acceso a su red fija en 2007 y 2008 y se adoptó la facturación por segundo sólo para la interconexión, en julio de ese año la COFETEL publicó el ***Plan Técnico Fundamental de Calidad de Redes Móviles*** y dos meses más tarde, inició el proceso de consulta pública para la regulación asimétrica de los operadores dominantes en el mercado de enlaces dedicados y sobre los términos de una Oferta de Interconexión de Referencia para el incumbente fija.

Es de hacer notar que el concepto Triple Play ha dominado las telecomunicaciones en los últimos 14 años ya que los operadores ofrecen servicios que incluyen voz, banda ancha y televisión de paga.

El 12 de marzo del año de 2013, derivado de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, siendo una de las más importantes reformas para México.

El 21 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6°, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su minuta se remitió al Senado de la República para su estudio y dictaminación.

El 19 de abril del 2013, el Senado de la República aprobó con modificaciones la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones y el 25 de abril la Cámara de Diputados aprueba la minuta remitida por el Senado y la devuelve a dicha cámara con modificaciones.

El 30 de abril de 2013, el Senado de la República aprobó la modificación aplicada la Minuta por la Colegisladora y la remitió a las Legislaturas de los Estados y el 22 de mayo del mismo, la Comisión Permanente realizó la declaratoria de aprobación del Decreto que reforma y adiciona los artículo 6°, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones por haberlo aprobado 23 Congresos Locales y finalmente el 11 de junio de 2013 se público en el Diario Oficial de la Federación el mencionado decreto.

De manera breve, en el cuadro que se reproduce a continuación, se hace mención de las normas que se incluyeron en las reformas y adiciones aplicadas a la Constitución General en materia de Telecomunicaciones:

ARTÍCULO CONSTITUCIONAL	ASPECTO SOBRE EL QUE VERSAN LAS REFORMAS Y ADICIONES.
6°	Regular el derecho a la información y la protección de datos personales; se garantiza la inclusión de la población a la sociedad de la información y del conocimientos, acceso a tecnologías de las información y a servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones incluida la banda ancha e internet.
7°	Establece la inviolabilidad de la difusión de opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.
27	Establece que las concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de la radiodifusión y de las telecomunicaciones las otorgará el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
28	Prevé el castigo la concentración o acaparamiento de servicios o el impedir la libre concurrencia o la competencia, crea dos nuevos órganos autónomos constitucionales, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este último regulará la competencia económica de los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, además establece la competencia y atribuciones de cada estos órganos autónomos.
73	Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de tecnologías de la información, la comunicación, la radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
78	Suprime la facultad de la Comisión Permanente de ratificar los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
94	Se determina que el Consejo de la Judicatura determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones, competencia económica de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
105	Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos constitucionales autónomos, entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

El mencionado decreto tiene dieciocho artículos transitorios entre los cuales establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días naturales para legislar en diversos temas, a efecto de realizar las adecuaciones o modificaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias, y sobre todo deberá expedir un solo ordenamiento legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Sin duda la reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones del 2013, es la más importante en esta materia de los últimos años, pero lo más complicado será realizar las acciones que deberá de llevar a cabo el

Gobierno Federal y el Congreso de la Unión para poder incluir en las leyes secundarias, en los reglamentos y en los actos administrativos todos los efectos que lleva implícita la multicitada reforma constitucional.

Algunos de los plazos para modificar y expedir las leyes secundarias que determinarán las nuevas reglas del sector ya se vencieron o están por vencerse, tal es el caso de la expedición de un solo ordenamiento jurídico que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, entre otros rubros, toda vez que dicho ordenamiento debía estar elaborado, aprobado, promulgado y publicado a más tardar el día 9 de diciembre de 2013.

Para realizar la adecuación y expedición de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, debemos tomar muy en cuenta que lo que se debe de fomentar es su crecimiento y que se mantengan competitivos.

Los Órganos Autónomos que regulan la competencia en nuestro país, pueden incidir en un desarrollo más satisfactorio de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México, observando una actuación eficaz en la promoción de un sector de telecomunicaciones más competido y más competitivo, que desarrolle todo su potencial en beneficio de los ciudadanos que se sirven de dichos servicios públicos, del progreso de las propias telecomunicaciones y de toda la economía nacional.

En la experiencia internacional, la competencia intensa que se ha dado en los últimos treinta años entre las empresas de telefonía, como también se ha dado en México han impactado los precios de manera importante, ya que se han dado reducciones sustanciales en comparación con los vigentes durante las etapas en que han existido monopolios de los derechos sobre la invención, como ha sido el caso de México y lo que es muy evidente es el impacto positivo de la competencia en el crecimiento del sector de las telecomunicaciones.

Si bien en todos los países se ha observado un crecimiento de las telecomunicaciones, en los países en desarrollo que tienen una mayor competencia el avance ha sido más rápido, en la experiencia nacional, pese a la apertura en teoría de las telecomunicaciones a la competencia, TELMEX sigue siendo una empresa absolutamente dominante, que ha conservado un poder casi monopólico, ya que conserva el 94% del mercado de telefonía fija y en telefonía celular, a través de TELCEL, ostenta cerca del 80% del mercado, no obstante las incursiones de diversas empresas que han intentado hacerle competencia.

Actualmente en nuestro país se cobra más por las telecomunicaciones, en especial la telefonía, que cuando ésta era un monopolio del Estado y si bien ha habido una reducción del precio real de las telecomunicaciones, esta reducción se queda muy por debajo de la registrada en otros países, lo importante no es que se reduzcan los precios, sino que se reduzcan de manera paralela o similar a los que registran otros países a efecto de que México se mantenga competitivo.

Hemos podido darnos cuenta que de 1995 al 2013, en México ha privado la ausencia de una regulación eficaz en materia de telecomunicaciones y la posición dominante de una sola empresa es absoluta.

La industria de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los motores de la sociedad, así como para el desarrollo económico de los países, por lo que es tal la importancia de esta industria, que es evidente la ventaja que tienen las naciones con una industria de las telecomunicaciones competitiva y madura, con respecto a las naciones que carecen de ella.

Sobre las telecomunicaciones tiene injerencia factores como la economía, los mercados, las políticas públicas y la regulación por afectar de manera directa dicho sector y su comportamiento es resultado de la interacción de esos factores que incidirán sobre su estructura y ellos moldearán su futuro en las próximas décadas, además de que también influyen en el sector componentes como el entorno tecnológico, el entorno conformado por todos los agentes que intervienen en la regulación y las políticas de la industria, así como el entorno del mercado integrado por los elementos relacionados con los modelos y las estrategias de negocio y,

por los modelos que determinan la oferta y la demanda de servicios y todos estos elementos se ven afectados, a su vez, por el entorno económico nacional e internacional.

En México conviven multitud de tecnologías, entre las cuales destacan las relacionadas con servicios de telefonía móvil (de segunda, tercera y cuarta generaciones), telefonía fija (en todas sus modalidades), televisión y radio abiertas y restringidas y, por supuesto, el acceso a Internet, por lo que en las regiones más pobladas del país, las empresas más importantes han empezado a migrar sus redes hacia alternativas más modernas que permitan proveer algunos servicios avanzados, pero que en poco tiempo serán insuficientes para el nuevo contexto de convergencia.

Las redes de telefonía local están siendo modificadas para ofrecer servicios digitales basados en banda ancha (xDSL, WiMAX, etc.) y servicios alternativos de telefonía (VoIP) o televisión (TVIP), así como todos los otros servicios basados en Internet, mientras que las redes de televisión restringida, están siendo reconvertidas para ofrecer servicios bidireccionales de voz y de datos, en tanto que las redes de telefonía móvil están migrando a las tecnologías de tercera y cuarta generación, con lo cual se logrará tener acceso a Internet con velocidades de varios Megabits por segundo.

De acuerdo a diversos estudios, existen tres tecnologías que entrañan un gran potencial para la industria en México, ya que pueden ser usadas con el propósito de llevar servicios a lugares incomunicados o con comunicaciones deficientes y son la tecnología inalámbrica de banda ancha WiMAX, los sistemas celulares CDMA operando en bajas frecuencias y el uso de la red de suministro de energía eléctrica para comunicaciones PLC, lo más importante de estas tecnologías es que pueden ser desplegadas rápidamente sin la necesidad de inversiones excesivas; las dos primeras por su naturaleza inalámbrica y la tercera por la enorme cobertura de la red eléctrica.

En lo referente al entorno del gobierno, en México ha habido avances sustantivos en las últimas dos décadas, tales como la creación de Órganos Constitucionales Autónomos reguladores de la industria, la introducción de competencia y la apertura de recursos públicos para ser utilizados por los operadores, pero el reto generado por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, implica dejar atrás las limitantes que afecten negativamente a la industria, por lo que se debe de desechar la regulación inadecuada y/o deficiente que se tiene actualmente y se debe de dotar a los órganos autónomos reguladores de herramientas legales para que puedan hacer cumplir la legislación que vaya entrar en vigor, de igual forma se deben de diseñar los mecanismos necesarios para evitar el excesivo uso de recursos jurídicos a fin de impedir la adecuada aplicación de la ley o para aprovechar los vacíos existentes en el marco normativo.

El mercado mexicano de telecomunicaciones muestra altos niveles de concentración, ya que en telefonía fija, móvil e internet y banda ancha existe un agente con amplia ventaja sobre sus competidores cuyas participaciones son mayores al 70%, en los últimos años, la entrada de distintos agentes en nuevos servicios está reduciendo la diferencia que en el mediano plazo, podría resultar en un reequilibrio de fuerzas.

La adopción de servicios de telecomunicaciones en México está condicionada por factores como la disponibilidad de equipos, la cobertura del servicio y las capacidades de los usuarios y estos factores pueden ocasionar consecuencias importantes sobre el crecimiento de los mercados y el futuro de la industria, siendo un ejemplo de esto la banda ancha fija que si continúa con el ritmo de crecimiento de los últimos años en el mercado, en menos de tres años se podría cubrir el total de hogares que cuentan con una computadora.

De acuerdo al estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México elaborado entre 2011 y 2012, se señala que desde la perspectiva tecnológica, las redes de telecomunicaciones han dado origen a tres tendencias globales: la conectividad de gran capacidad que se refiere a un mayor ancho de banda, la movilidad total y la interoperabilidad relacionado con plataformas y redes interconectadas y por el hecho de que las redes más avanzadas están evolucionando a lo que se denomina “Redes de Nueva o Siguiente Generación” (*NGN - Next Generation Networks*), basadas en transporte con el protocolo IP.

En lo referente a la regulación, se puede observar que los organismos normativos están centrando su atención en impulsar a las redes de banda ancha mediante la implantación de normas que buscan mantener la competencia entre dichas redes, sin frenar su evolución hacia las Redes de Nueva o Siguiente Generación, así como en el aprovechamiento óptimo del espectro a través de la reasignación de frecuencias para nuevos servicios (conocido como spectrum refarming), la redistribución del espectro disponible o "liberado" por las nuevas tecnologías, y la concesión de licencias con condiciones distintas a las tradicionales (espectro secundario, neutralidad tecnológica, etc.).

En el ámbito de los servicios, destaca la aparición de una nueva clase de servicios innovadores, conocidos como mservices que pueden dividirse en dos grupos, el primero generado tras adaptar los servicios tradicionales a dispositivos y acceso móviles –TV y videoconferencia móvil, Internet móvil, etc.–, y el segundo, centrado en el desarrollo de servicios específicos para ambientes de movilidad, destacándose los que se basan en la localización del equipo terminal (publicidad y búsquedas por contexto, alarmas de presencia, etc.). lo que ha originado elementos característicos de la siguiente generación de servicios y que son la ubicuidad de los servicios para contar con todo ellos en todo momento y en todo lugar, y la digitalización extremo-a-extremo.

Debemos tomar en cuenta para la elaboración y adecuación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que las tendencias del mercado en el ámbito internacional se han centrado en los procesos de consolidación y por la incursión de los agentes en nuevos mercados, situación que ha dado como resultado el empaquetamiento de servicios (cuádruple, quíntuple y séxtuple play), así como la evolución del papel del usuario, que ha pasado de tener una actitud pasiva, de "consumidor" de servicios, a una activa, de productor de contenidos.

De acuerdo a diversos estudios, la competitividad de la industria de las telecomunicaciones está relacionada con las "capacidades competitivas" de los elementos que intervienen en ella, como la capacidad tecnológica, la capacidad institucional, la capacidad de inversión, la capacidad de los mercados y la capacidad de los usuarios, por lo que los elementos que afectan cada una de tales capacidades pueden actuar como habilitadores o como impulsores.

Los impulsores fundamentales que podrían ayudar a incrementar la competitividad de la industria de las telecomunicaciones en México son la innovación tecnológica, la inversión en redes y equipos, el impulso a la competencia en los mercados y el uso y la adopción intensiva de los servicios y como habilitadores serían necesarios la estabilidad regulatoria, la colaboración entre los actores que integran la industria y centros de Innovación, Investigación y Desarrollo (I+D+i), la disponibilidad de recursos humanos y materiales para actividades de I+D+i y, por último, la asequibilidad de los servicios y la alfabetización digital.

Lo que hay que evitar para el sector, es que siga con las debilidades caracterizadas por la baja competencia en la oferta de los servicios, el no fortalecer a los órganos autónomos reguladores, evitar dualidad de atribuciones, la resolución de conflictos que pasen por alto el interés y tener un marco normativo inadecuado.

Ha llegado el momento de que el Estado tiene que intervenir de manera firme para generar mayores oportunidades favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, poniendo a disposición del mercado la capacidad ociosa de las redes de propiedad pública (como la fibra oscura de CFE) e impulsando el correcto aprovechamiento del espectro radioeléctrico, no hay que pasar por alto que la industria podría verse amenazada si no se consigue instrumentar una regulación eficiente y estable, capaz de atraer inversiones con el objeto de evitar que sean desviadas a otros países.

De igual forma, el Estado debe implementar un Plan Integral en el que la industria tenga un papel bien definido, toda vez que México se encuentra en desventaja en el campo de la innovación, en la aplicación de la regulación y en el fortalecimiento de una competencia efectiva en la oferta de servicios.

Las telecomunicaciones sirven como herramienta para mejorar la productividad y el crecimiento económico, además de que generan la posibilidad de que los gobiernos mejoren la prestación de los servicios públicos y México no es la excepción, ya que lo que este país necesita es el impulso socioeconómico generado por un mayor acceso a servicios de comunicaciones eficientes, en particular a la banda ancha de alta velocidad.

De acuerdo a información generada por la OCDE, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estimo para el periodo comprendido de 2005 al 2009, en 129 200 millones de dólares, que equivalió al 1.8% del producto interno bruto anual, por ello, dicha organización recomienda que en México se eliminen los límites o topes existentes a la inversión extranjera, se simplifique el sistema para otorgar concesiones, convirtiéndose en un régimen de título de concesión único, salvo en los casos en que existan restricciones asociadas a recursos escasos, como el espectro radioeléctrico.

De igual manera, la OCDE recomienda para efectos de impactar la industria de manera positiva, que cuando se impongan obligaciones a un operador, éstas deben cumplirse y vigilarse de manera efectiva, se debe simplificar y alentar la entrada de revendedores, así como facilitar la entrada de operadores de redes móviles virtuales (mvno) mediante la imposición de obligaciones de roaming nacional.

El agente dominante en los rubros de telefonía fija y móvil y de banda ancha de nuestro país, ha hecho uso abusivo de la figura jurídica de la suspensión del acto reclamado, lo que le ha permitido interponer ante el poder judicial demandas de amparo en las que se han suspendido y anulado de manera sistemática las decisiones de política y regulación, sin que el Poder Judicial tome en cuenta que se está dañando el interés público y por ello la necesidad de especializar Tribunales y Juzgados Federales.

En la ley que tenga a bien expedirse en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión se deben establecer con claridad las funciones de regulación y de supervisión de mercados de la autoridad reguladora que garantice la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y el logro de los objetivos de las políticas públicas que requiere el sector.

De igual manera se debe incluir en la nueva legislación multas significativas que sean lo bastante elevadas que sean realmente un instrumento disuasorio y garanticen la observancia de la regulación, así como el cumplimiento de sus objetivos y en el ámbito de sus atribuciones, se debe de dotar al órgano autónomo regulador de la facultad para requerir información a las empresas a fin de cumplir con sus obligaciones, así como para sancionar a aquellas que no respondan a los requerimientos razonables.

El IFETEL deberá de estar facultado para regular ex ante las tarifas de interconexión, con el fin de fomentar la competencia entre operadores, así como para facilitar el desarrollo y crecimiento del sector, proporcionando certeza reguladora e igualdad de condiciones en el mercado móvil y para declarar cuellos de botella e infraestructuras esenciales, toda vez que el acceso a estas últimas debe llevarse a cabo en condiciones no discriminatorias que incluyan la desagregación del bucle local del incumbente y comprendida la coubicación con precios orientados a los costos.

Por otro lado, se coindice con la opinión de diversos actores relacionados con la industria, de que a Telmex no se le debe dar la autorización para prestar servicios de televisión, a menos que esté sujeto a una adecuada regulación asimétrica, que exista el mecanismo para asegurar que cumplirá con la misma y de que no recurrirá a impugnaciones o apelaciones judiciales para demorar o suspender su cumplimiento.

Otro aspecto que se debe de incluir entre las atribuciones del IFETEL, es el que pueda imponer la separación funcional o en caso de ser necesario, la estructural, de cualquier operador que continúe abusando de su poder de mercado, y ayudar a asegurar la igualdad de acceso y equivalencia de insumos de los operadores.

Además, deberá liberarse suficiente espectro para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos en banda ancha móvil, por lo que el diseño de una licitación de dicho espectro debe ser cuidadoso de garantizar que no sea una sola empresa la que domine este mercado y como medida que puede adoptar el Gobierno

Federal, es la de facilitar el desarrollo del mercado de banda ancha licitando más "fibra oscura" de la Comisión Federal de Electricidad.

Otro aspecto que debe procurar el IFETEL es el promover la compartición eficiente de infraestructuras y eliminar las barreras para la obtención de derechos de paso o derechos de vía, ya que en México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a nuestra economía y que inciden de manera negativa en el bienestar de la población.

El sector de telecomunicaciones mexicano se ha caracterizado por altos precios, situándose entre los más elevados de los países miembros de la OCDE, y por la falta de competencia, lo que genera una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.

Si bien es cierto que los mercados de telefonía móvil y fija, de banda ancha y de televisión de paga han crecido en nuestro país, este hecho resulta minimizado cuando se le compara con otros países de la OCDE que han desarrollado mercados más abiertos y competitivos, y que han distribuido los beneficios resultantes a los consumidores.

Como ya hemos establecido, el mercado mexicano de telecomunicaciones está dominado por una sola compañía que tiene 80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil. La deficiente competencia ha dado por resultado una escasa penetración en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha, lo que coloca a México en los lugares 34, 33 y 32, respectivamente, de los 34 países de la OCDE, por lo que en relación con estos países, México ocupa el último lugar en términos de inversión per cápita, mientras que los márgenes de rentabilidad del incumbente casi duplican el promedio de la OCDE.

Desgraciadamente hasta hace poco, en México las decisiones en favor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia de la regulación administrativa o por los vacios de la ley, por ello, hay que cuidar que las nuevas concesiones de espectro se diseñen con el objetivo de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil.

México necesita un plan nacional de banda ancha con visión prospectiva que garantice un mercado competitivo para el acceso a las redes de nueva generación, para lo cual se requiere en primer lugar hacer un diagnóstico sobre el estado que guarda México en términos de acceso de la población y las empresas a redes de banda ancha, el grado de competencia por región en los diferentes segmentos, alámbrico e inalámbrico, de los precios y velocidades que se observan en los distintos mercados, los problemas de calidad que enfrentan los usuarios que contratan servicios de acceso a banda ancha, entre otras cuestiones.

Una vez que se tenga este diagnóstico, habrá que enfocarse a determinar las metas de largo plazo para México en términos del porcentaje de hogares con acceso a redes de banda ancha, a velocidades específicas y así el IFETEL podrá determinar las modificaciones necesarias a las reglas que dependen de la actuación de ese órgano y las modificaciones que será necesario aplicar al marco legal que deberán de proponerse al Congreso de la Unión.

Se requiere modificar la ley para lograr una regulación efectiva en materia de dominancia, así como para replantear la forma en que se regula la interconexión en un contexto de redes de nueva generación, dándole un papel protagónico al consumidor, de igual forma hay que replantear un cambio de fondo al concepto de servicio universal en nuestro país y la forma de financiarlo y operarlo.

Otros retos por vencer, son la provisión de capacidad y el logro de una estructura del sector telecomunicaciones más competitiva y equilibrada, por lo que las nuevas concesiones de espectro deben diseñarse con el objetivo de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil.

En los últimos tres años se han realizado acciones tendientes a favorecer la competencia del mercado de backhaul, como la licitación de fibra oscura perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad que fue un paso importante, por lo que se debería de poner más fibra a disposición del mercado.

También hay que realizar esfuerzos para eliminar las barreras que enfrentan los operadores entrantes en el mercado mexicano para la compartición de infraestructura, como los múltiples y tardados trámites para la obtención de permisos, la solicitud de derechos de paso y el hecho de que no sea exigible a los operadores que compartan su propia infraestructura pasiva, como conductos y estaciones base de telefonía celular, lo que hace del despligue de las redes un gran obstáculo para la competencia.

Por lo que respecta a la transición a la televisión digital, está va a contribuir de forma significativa a liberar espectro para que sea utilizado en la prestación de servicios de banda ancha móvil de alta velocidad, de igual forma, los operadores de telecomunicaciones han ingresado al sector audiovisual como proveedores de servicios de televisión, y las empresas de radio y televisión están cada vez más dispuestas a prestar servicios de telecomunicaciones lo que genera un ambiente de oportunidades tanto para los participantes en el mercado como para los reguladores.

Por ello, se deben realizar esfuerzos coordinados para que el sector de las telecomunicaciones de nuestro país deje atrás lo que hasta nuestros días lo ha caracterizado, con son el tener una alta concentración, una débil competencia, un nivel deficiente de desarrollo de infraestructura, precios altos y la escasa demanda de servicios.

Los precios de la telefonía fija en México aún son de los más caros entre los países de la OCDE, lo que impacta de manera directa a los consumidores y en particular impacta el costo de las comunicaciones comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas, que predominan en nuestro país.

Por lo que respecta al espectro, su asignación era esporádica, lo que provocó escasez y brindó ventajas comerciales a las compañías que tenían recursos de espectro, la administración del espectro en México está condicionada a dos elementos, el operador móvil dominante, que es TELCEL, actualmente tiene más del 70% de las suscripciones móviles y el otro elemento es que el tráfico de datos móviles en México crecerá en 65 veces de 2010 a 2015, de 918 terabytes a 60 peta-bytes mensuales, pero debido a la cobertura incompleta de las redes fijas en México, es probable que las tecnologías inalámbricas proporcionen un gran componente de servicios de banda ancha, por lo que son clave para alcanzar los probados beneficios para el crecimiento económico que ésta puede aportar.

Es por esto que los principales retos para la política en materia de espectro son, el proporcionar la capacidad para lograr los objetivos de banda ancha del país y el alcanzar una estructura competitiva más equilibrada en el sector de las comunicaciones móviles.

El IFETEL tiene el deber de administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente, y elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, así como proponer su actualización, ya que el crecimiento esperado en datos móviles en países de la OCDE requerirá más frecuencias disponibles para evitar la "crisis del espectro".

El apagón analógico crea oportunidades para la liberación del espectro entre los países integrantes de la OCDE con fines de comunicación móvil, más servicio digital terrestre u otros servicios, por este motivo es importante para nuestro país avanzar rápidamente en los planes para implementar el cambio a la televisión digital.

El espectro es el medio para dar servicios de radiodifusión, tanto terrestres abiertos como satelitales de paga por lo que las nuevas atribuciones de espectro deberán diseñarse con el objetivo de conseguir una estructura más competitiva en el sector móvil, por lo que una mayor competencia, que reduzca los precios, multiplique

las opciones, mejore la calidad de los servicios, fomente el empoderamiento del consumidor y amplíe la cobertura de la red, favorecerían enormemente los intereses de la economía y de los consumidores.

El espectro radioeléctrico y sus frecuencias utilizadas como medio de transmisión para los distintos servicios de telecomunicaciones que van desde la Radio, la televisión, la telefonía móvil, la comunicación satelital, el acceso WiFi, entre otros, son un recurso natural, finito y escaso, por lo que su uso debe de ser eficiente y óptimo de acuerdo a los avances tecnológicos, por ello la presente iniciativa se basa en la contribución que la suscrita realiza a los cambios de las disposiciones normativas que se necesitan implementar a las leyes secundarias, específicamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones, misma que tendrá que ser reformulada para integrar la radiodifusión y que dichos rubros sean regulados de manera convergente.

Por ello, nuestra propuesta legislativa tiene como principal objetivo, hacer un uso eficiente del espectro, por lo que se proponen definir los tipos de concesiones que podrán ser para uso comercial, pública y social y redefinir el uso del espectro en primario, secundario y libre.

El uso del espectro primario contará con protección de cualquier tipo de interferencia, el Secundario no deberá de causar interferencias al primario ni sus usuarios podrán reclamar protección contra interferencias de primarios o secundarios ya establecidos, ejemplo de esto serían las Microondas punto a punto y por lo que respecta al uso libre, este podrá ser utilizado por el público en general, un ejemplo sería el WiFi (wireless fidelity).

De igual forma se proponen disposiciones que contengan reglas en materia de **Certidumbre Jurídica**, en cuanto a las asignaciones de espectro vía licitación y la posibilidad de su renovación automática, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones del título y aceptado los nuevos términos y condiciones.

También se propone integrar a la ley que regula las telecomunicaciones, normas que regulen las siguientes figuras:

Spectrum Caps (Límite a la acumulación del espectro), para efecto de establecer límites de espectro que aseguren la competencia pero que permitan el crecimiento de los operadores actuales; **la Neutralidad de servicios**, que incluirá a todos los servicios técnicamente factibles; **el Spectrum Trading/Leasing**, que incluye la posibilidad de ceder o arrendar el espectro de uso comercial; **el Refarming**, como la obligación de reordenar frecuencias por interés público o a solicitud de dos o más concesionarios; y el establecimiento de un programa de licitaciones anual bajo consulta pública.

Otro rubro que la suscrita considera importante incluir dentro de las nuevas disposiciones que deberá contener la ley que regula las telecomunicaciones, es el de los **operadores preponderantes o con poder sustancial**, determinando al operador preponderante como cualquier agente económico que cuente con una participación nacional mayor al 50% en la prestación de uno o más servicios, que pueden incluir telefonía fija, telefonía móvil, acceso fijo a Internet / banda ancha, acceso móvil a internet / banda ancha, transporte de datos, enlaces privados / dedicados locales, nacionales, televisión restringida, Radio, televisión radiodifundida, mientras que el Operador con Poder Sustancial de Mercado es el agente económico que tendría la capacidad de fijar precios o restringir el abasto en algún mercado de telecomunicaciones en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, haciendo notar que un mismo operador puede o no, tener al mismo tiempo la condición de preponderante en un servicio y de Operador con Poder Sustancial de Mercados al que pertenece dicho servicio.

Por ello se propone incluir en la ley de la materia, normas para eliminar eficazmente las barreras a la competencia y libre concurrencia, se definen las figuras de operador preponderante y de operador con poder sustancial de mercado, se prevén obligaciones en materia de información, oferta y calidad de servicios; exclusividades; uso de equipos terminales entre redes; y separación contable, así como la regulación On-Net/Off-Net para evitar el efecto comunidad.

De igual manera se incluyen disposiciones jurídicas para evitar exclusividades en terminales, contenidos, servicios, puntos de venta y de recarga electrónica, acceso a edificios y derechos de vía, entre otros, se prevé la prohibición de que los teléfonos vengan bloqueados y se determinan obligaciones en materia de tarifas e Infraestructura de red (*interconexión*), así como tarifas de interconexión asimétricas, por lo menos con un diferencial del 60%, se prevén disposiciones sobre el Convenio Marco de Interconexión, sobre las obligaciones en materia de desagregación de elementos esenciales y compartición de infraestructura; sobre procedimientos para la determinación de preponderancia y poder sustancial ya sea abierto, transparente y con derecho de audiencia y sobre las sanciones y acciones adicionales que podrá llevar a cabo el Órgano Regulador como la separación funcional, estructural y revocación del título de concesión.

Por último, la presente iniciativa propone integrar disposiciones a la ley de la materia sobre el rubro de la Transparencia con el propósito de incluir reglas y procesos de transparencia que deban contener toda resolución, acto u omisión del IFETEL para dar certidumbre jurídica a los regulados, además de que se incluyen principios de claridad, previsibilidad, autonomía, rendición de cuentas, participación y acceso abierto a la información.

Se proponen disposiciones que deberán cumplir los Comisionados del IFETEL, como son la de estar impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, serán sujetos del régimen de responsabilidades de la Constitución y de juicio político; la asignación aleatoria de asuntos del Pleno a un Comisionado con responsabilidad de llevar al Pleno el proyecto de resolución correspondiente con una anticipación de al menos 5 días hábiles a la fecha en que serán discutidos en el Pleno, se integra la obligación de hacer públicas las fechas de la sesiones del Pleno con su respectiva agenda, así como publicar las resoluciones y versiones estenográficas de los Plenos al día hábil siguiente.

También se prevén disposiciones para el caso que existan desacuerdos entre operadores, que los comisionados solamente puedan recibir a las partes involucradas previa cita y de forma conjunta, por lo que en caso de que una de las partes no asista, no obstante haber sido citada, se tendrá por cumplida esta condición, y sobre todo por el hecho de que los comisionados deberán informar al Pleno de los temas abordados y dichos informes serán turnados al expediente del asunto o del proceso.

Se propone incluir la obligación para el órgano regulador de publicar en el Diario Oficial de la Federación, previo a su aplicación, las normas generales y políticas públicas que emita el IFETEL así como avisos previos a emisión de regulación, además de que se incluyen causas para efectos de la remoción del cargo de los Comisionados por haber incurrido en la abstención de voto sin causa justificada o por la falta de presentación de los informes trimestrales o su presentación deficiente, o por la de cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el programa de trabajo.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN I, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LAS ACTUALES SECCIONES III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL CAPÍTULO II, PARA PASAR A DENOMINARSE CAPÍTULO III CON LAS SECCIONES I, II, III, IV, V Y VI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Banda de frecuencias: segmentos del espectro radioeléctrico que comprenden un determinado rango de frecuencias. Estas frecuencias presentan similitudes en sus

características propias, como pueden ser las de propagación o longitud de onda, factores que incluyen en la determinación de los tipos de servicios que se pueden prestar en esos rangos.

II. … a XVII. …

Capítulo II
Del espectro radioeléctrico.

Sección I
Disposiciones Generales

Artículo 10. El uso del espectro radioeléctrico deberá sujetarse a los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ajustarse a lo dispuesto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias deberá promover el desarrollo eficiente y convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. A dichos efectos, garantizará la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para nuevos servicios así como para actividades relacionadas con seguridad nacional, conectividad y cobertura social.

Los servicios atribuidos al espectro radioeléctrico serán aquellos que establezca el Instituto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. La atribución de bandas del espectro radioeléctrico se hará:

I. A título primario: servicios que contarán con protección contra interferencias perjudiciales, y

II. A título secundario: servicios cuyas estaciones radioeléctricas no deben causar interferencia perjudicial a la estaciones de un servicio a título primario, ni pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio a título primario; sin embargo, tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de otra estación secundaria posteriormente autorizada.

El Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación, antes de finalizar el primer trimestre de cada año, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias con sus respectivas adecuaciones y actualizaciones.

Artículo 11. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar la mejor operación de los servicios y la utilización y aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico. En cualquier caso de interferencia perjudicial el Instituto actuará con la debida oportunidad para tomar las medidas necesarias que garanticen la continuidad de los servicios de telecomunicaciones afectados.

Artículo 12. El Instituto emitirá reglas para establecer límites aplicables a las diferentes bandas de frecuencias para evitar la concentración de espectro. Los límites que al efecto se establezcan deberán fomentar la libre competencia en el sector en general y permitir que los concesionarios establecidos puedan atender el crecimiento del mercado y acceder de manera continua a nuevas generaciones tecnológicas.

El Instituto podrá modificar o ampliar la atribución de una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en aras del interés público, de los tratados internacionales o regionales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los avances tecnológicos disponibles.

Los concesionarios podrán solicitar al Instituto, la modificación o ampliación de la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Si el Instituto no contesta en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud, se entenderá que la autorización ha sido concedida.

Sección II
De las concesiones del espectro radioeléctrico.

Artículo 13. Se requiere concesión del Instituto para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional.

Artículo 14. Las concesiones del espectro radioeléctrico podrán ser para uso comercial, público, privado y social, de conformidad con lo siguiente:

I. Uso Comercial: Bandas de frecuencias que tengan por destino la prestación de cualquier clase de servicios con fines de lucro;

II. Uso Privado: Bandas de frecuencias utilizadas de manera exclusiva por una o más personas, sin fines de lucro;

III. Uso Público: Bandas de frecuencias utilizadas por la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, organismos autónomos constitucionales y concesionarios de otros servicios públicos distintos a las telecomunicaciones y la radiodifusión, en éste último caso, cuando sean necesarias para la operación o seguridad del servicio de que se trate;

IV. Uso social: Bandas de frecuencias utilizadas para la comunicación con fines sociales, de carácter educativo, cultural, entre otros similares, sin fines de lucro; y

Artículo 15. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial se otorgarán mediante licitación pública conforme a lo señalado en la presente ley.

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, previa opinión no vinculante de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la opinión, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Los concesionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial podrán, previa notificación al Instituto, ceder y arrendar en todo o en parte, las bandas de frecuencias a ellos concesionadas.

El término del arrendamiento o cesión de bandas de frecuencias no podrá superar aquél por el que las bandas de frecuencia hayan sido concesionadas.

Artículo 16. Las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa.

Los titulares de bandas de frecuencias de uso público que requieran bandas adicionales para satisfacer necesidades internas de telecomunicaciones, deberán acreditar que dichas necesidades no pueden ser atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias con las que ya cuenta y que se encuentre aprobado el presupuesto para la instalación de la infraestructura adicional correspondiente.

Artículo 17. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite a partir del inicio de la última quinta parte de vigencia de su concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables. El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales. Si cumplido el plazo el Instituto no resuelve lo conducente, se entenderá que fue resuelto en sentido afirmativo.

Artículo 18. El título de concesión sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico contendrá como mínimo lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del concesionario;

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, y zona o región geográfica en que pueden ser utilizadas;

III. Las características técnicas y operativas del proyecto;

IV. El período de vigencia;

V. Las contraprestaciones que, en su caso, deberán cubrirse por el otorgamiento de la concesión, y

VI. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado.

Las concesiones de uso público, privado y social serán intransferibles y estarán sujetas a lo dispuesto en esta Ley y en título de concesión correspondiente.

Artículo 19. El Instituto deberá fomentar la utilización neutra de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas. Para dichos efectos, el Instituto deberá procurar la reasignación regulada de los servicios atribuidos a las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a fin de que los concesionarios estén en posibilidad de prestar toda clase de servicios convergentes.

Artículo 20. El Instituto podrá intercambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada, en los siguientes casos:

I. Cuando lo exija el interés público;

III. Por razones de seguridad nacional;

IV. Para la introducción de nuevas tecnologías;

V. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;

VI. Para asignarlas a servicios que generen mayor beneficio económico o social; y

VII. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos efectos, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados o, en su caso, procederá la indemnización, previo estudio técnico y económico.

El Instituto deberá intercambiar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada cuando así sea solicitado por dos o más concesionarios de espectro radioeléctrico.

Sección III
Del programa de licitaciones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Artículo 21 El Instituto expedirá, cuando menos una vez al año, un programa de licitaciones públicas sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, susceptibles de ser concesionadas, en el cual se indicarán las coberturas geográficas de las bandas disponibles para dichos efectos.

Para la elaboración del programa a que se refiere este artículo, el Instituto seguirá el procedimiento de consulta pública que se describe a continuación:

I. Del 1 al 30 de agosto de cada año, establecerá un procedimiento para que cualquier persona pueda presentar propuestas, debidamente justificadas, para la integración de los programas anuales. Entre otros mecanismos, estas propuestas podrán presentarse por vía electrónica y a distancia, y serán públicas desde el momento de su presentación;

II. Con sus propias propuestas y las que considere convenientes de las que hubiere recibido conforme a la fracción anterior, el 1 de octubre siguiente el Instituto publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el anteproyecto de programa anual de licitaciones a la opinión pública;

III. El Instituto recibirá comentarios sobre su anteproyecto, a más tardar, el 1 de diciembre siguiente;

IV. Con los ajustes que, en su caso realice al anteproyecto de programa anual, el Instituto, a más tardar el 15 de enero de cada año, publicará en su sitio de Internet y en el Diario Oficial de la Federación el programa anual de licitaciones públicas; y

V. A más tardar el 31 de enero, el Instituto hará disponible, para consulta electrónica y a distancia, un informe en el que exprese de manera general las razones por las que consideró conveniente incluir o desechar, total o parcialmente, las propuestas y la opinión a que se refieren las fracciones I y II anteriores, mismas que en ningún caso serán vinculantes para el Instituto.

Para la integración del programa anual de licitaciones, el Instituto buscará el beneficio del público usuario, el uso eficiente y convergente del espectro radioeléctrico, el desarrollo de la competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones.

Los servicios a prestar con las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico incluidas en el programa anual, serán todos los contemplados en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para la respectiva banda de frecuencias, salvo que existan interferencias perjudiciales significativas o en razón de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 22. El Instituto podrá emitir resoluciones por las que declare bandas del espectro radioeléctrico específicas como bandas de uso libre, sujetas a los requisitos operativos y a las especificaciones técnicas que se prevean en la propia resolución.

Los interesados en ofrecer servicios a terceros sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso libre, requerirá concesión para la prestación de los servicios.

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por los tratados internacionales correspondientes, el Instituto podrá determinar una o más bandas del espectro radioeléctrico como bandas internacionales para efectos de radionavegación, comunicaciones radio marítimas, radio aeronáuticas, de auxilio y salvamento, entre otros.

Artículo 23. El Instituto podrá otorgar concesiones de uso comercial por periodos específicos para que personas físicas o morales interesadas puedan utilizar una o más bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico con fines experimentales. En ningún caso, este derecho podrá ser superior a dos años a partir del otorgamiento de la concesión.

Capítulo III
Sección I
De las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones

Artículo 24. …

Sección II
De las concesiones para comunicación vía satélite

Artículo 29. ….

Sección III
De los permisos

Artículo 31. …

Sección IV
De la cesión de derechos

Artículo 35. …

Sección V
De la terminación y revocación de las concesiones y permisos

Artículo 37. …

Sección VI
De la obligación de colaborar con la justicia

Artículo 40 Bis.- …

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO: **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO X INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS QUE VAN DEL 75 AL 89, A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

Capítulo X
De los operadores preponderantes o con poder sustancial

Artículo 75. Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto eliminar eficazmente las barreras a la competencia y libre concurrencia, derivadas de la condición de los operadores preponderantes y de los operadores con poder sustancial de mercado, mediante la regulación a que deberán sujetarse dichos operadores a fin de garantizar la competencia efectiva en los servicios y mercados de televisión, radio, telefonía y datos.

Artículo 76. Se entiende por operador preponderante, el agente económico que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en la prestación de uno o más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, entre los que se incluyen los siguientes:

I. Servicios de telefonía fija;

II. Servicios de telefonía móvil;

III. Servicios fijos de banda ancha para acceso a internet;

IV. Servicios móviles de banda ancha para acceso a internet;

V. Servicios de transporte de datos;

VI. Servicios de televisión restringida;}

VII. Servicios de radio; y

VIII. Servicios de televisión radiodifundida.

Para la determinación del porcentaje a que este artículo se refiere se tomará en cuenta, indistintamente cualquiera de los siguientes conceptos: número de usuarios o suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad utilizada de la red; de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto.

Artículo 77. Se entiende por operador con poder sustancial de mercado, el agente económico que, en ausencia de regulación, tendría la capacidad de fijar precios o restringir el abasto unilateralmente en algún mercado relevante de telecomunicaciones o radiodifusión, en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 78. La condición de operador preponderante no prejuzga sobre la condición de operador con poder sustancial de mercado, por lo que un mismo operador puede o no tener al mismo tiempo la condición de preponderante en un servicio y de operador con poder sustancial en el mercado al que pertenece dicho servicio. Las disposiciones de este Capítulo aplicarán por igual al operador que tenga una o ambas condiciones.

Artículo 79. En materia de información, oferta y calidad de servicios; exclusividades; uso de equipos terminales entre redes; y separación contable, funcional o estructural, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado deberán:

I. Abstenerse de ofrecer a sus usuarios condiciones de servicio, calidad y precio para comunicarse dentro de su propia red, incluyendo cualquier tipo de oferta, empaquetamiento, promoción, política comercial,

regalo, bonificación o descuento, , más favorables que las correspondientes a comunicaciones destinadas a las redes del resto de los operadores.

II. Ofrecer a los demás operadores, mediante oferta pública, servicios mayoristas respecto de cualquier servicio que ofrezcan a sus usuarios finales;

III. Abstenerse de aplicar al resto de los operadores tarifas y condiciones menos favorables que las ofrecidas a sus usuarios finales, debiendo hacer extensivos los beneficios de las menores tarifas a dichos operadores, incluyendo las tarifas implícitas por servicios, capacidades y funciones desagregadas, como la terminación de llamadas en su red;

IV. Abstenerse de establecer tarifas que de cualquier forma limiten la competencia o libre concurrencia de los demás operadores;

V. Cumplir con los estándares mínimos de calidad que defina el Instituto tanto para los servicios finales a los usuarios como para los servicios mayoristas que presten a los demás operadores.

VI. Abstenerse de establecer cualquier tipo de exclusividad para la comercialización de terminales, contenidos, servicios, redes de distribución y recargas de tiempo aire, publicidad y demás productos y servicios que defina el Instituto;

VII. Abstenerse de establecer exclusividades para instalar, operar u ofrecer servicios de telecomunicaciones en inmuebles, fraccionamientos, colonias o cualesquiera otros sitios que determine el Instituto;

VIII. Abstenerse de establecer cualquier tipo de bloqueo sobre las terminales que comercializan, y de limitar el uso y acceso de las mismas en redes de otros operadores;

IX. Proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, y

X. Sujetarse a las obligaciones específicas que en estas materias establezca el Instituto.

Artículo 80. Las siguientes tarifas de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado, por los servicios a que se hace referencia en el artículo anterior, deberán ser aprobadas por el Instituto previamente a ser ofrecidas a sus usuarios finales:

I. Las que pretendan cobrar por cualquier conjunto o subconjunto de servicios, incluyendo aquellas tarifas que, para estos mismos servicios, formen parte de cualquier tipo de oferta, promoción, política comercial, regalo, bonificación o descuento, ya sean de carácter permanente o temporal;

II. Las de cualquier servicio o paquete de servicios que pretendan comercializar en donde cualquiera de los componentes que integran el paquete de servicios, se encuentre disponible para cualquier persona física que así lo solicite, de forma desagregada y al precio imputado en la solicitud que, en su caso, apruebe el Instituto;

III. Las demás que establezca el Instituto.

Las tarifas serán aprobadas conforme a la metodología de evaluación y al procedimiento que para tal efecto establezca el Instituto, siempre que no contravengan las disposiciones u objetivos previstos en este Capítulo.

Artículo 81. En materia de infraestructuras de red, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado deberán:

I. Aplicar las tarifas asimétricas de interconexión que fije el Instituto, con base en un modelo de costos que considere las economías derivadas de su mayor escala de operación, las cuales podrán ajustarse a la baja en cualquier tiempo para asegurar condiciones de equidad en el proceso de competencia.

II. Abstenerse de aplicar a otros operadores por los conceptos de interconexión y uso de otros servicios e insumos esenciales, tarifas superiores a los cargos implícitos en las tarifas a los usuarios finales por funciones que utilizan la infraestructura de red de manera similar. En caso contrario, las tarifas aplicables a los operadores deberán ajustarse a la baja para cumplir con esta obligación;

III. Ofrecer al menos un punto de interconexión en cada área de servicio local en donde presten servicios. Los puntos de interconexión deben tener la capacidad requerida para cursar el tráfico de interconexión con otras redes, así como contar en todo momento con la capacidad de ampliación para soportar los crecimientos de tráfico que se presenten. El número total de áreas de servicio local será definido por el Instituto;

IV. Ofrecer el servicio de roaming nacional de voz, SMS y datos a otros concesionarios en los mismos términos y condiciones en los que prestan los servicios de interconexión móvil o los que determine el Instituto. En ningún caso, las tarifas cobradas por roaming nacional podrán ser superiores a la mínima tarifa que ofrezcan en el mercado minorista, menos los costos evitables.

V. Ofrecer interconexión directa en todas las localidades en donde se presten servicios de telecomunicaciones;

VI. Proporcionar a los demás operadores, en la forma y plazos que determine el Instituto, la información en materia de interconexión que éste determine, la que deberá incluir, al menos, la relativa a capacidad, infraestructura y coubicaciones disponibles;

VII. Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto.

Artículo 82. El operador preponderante o con poder sustancial de mercado deberá presentar al Instituto, para su aprobación, un convenio marco de interconexión que contenga los términos y condiciones a que se obligue con los demás operadores y que les permita a éstos conocer los servicios de interconexión que se ofrecen, los tiempos para la atención de solicitudes de servicios de interconexión, las condiciones técnicas para la interconexión, los principios aplicables a las tarifas de interconexión prevalecientes; así como las tarifas aplicables en su momento, las cláusulas de responsabilidad y obligaciones de no discriminación.

Artículo 83. En materia de desagregación de elementos esenciales, los operadores preponderantes o con poder sustancial deberán:

I. Poner a disposición de los demás operadores, en condiciones de mayoreo, cualquier servicio, función o elemento de red que ofrezcan a sus usuarios. Las condiciones de mayoreo no podrán ser menos favorables en calidad, disponibilidad y precio que las ofrecidas por el operador preponderante o con poder sustancial a sus usuarios o a sus propias operaciones, filiales, subsidiarias o cualesquier integrante del grupo de interés económico al que pertenezcan;

II. Ofrecer mediante oferta pública a los demás concesionarios el acceso a los insumos esenciales que permitan la prestación del servicio. Se consideran como insumos esenciales los elementos, servicios, funciones, capacidades o instalaciones de una red pública de telecomunicaciones, que un concesionario, o un grupo de concesionarios posee o provee de modo predominante, y cuya duplicación por parte de otro concesionario no es técnica o económicamente factible, pero son necesarios para proveer sus servicios;;

III. Garantizar la desagregación efectiva de la red, de manera que otros operadores puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red

pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red del operador preponderante o con poder sustancial;

IV. Acatar los precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como el calendario de implantación que fije el Instituto; y

V. Sujetarse a las obligaciones específicas que en esta materia establezca el Instituto.

Artículo 84. Los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado están obligados a presentar toda la información y documentación relacionada con sus servicios que le sea requerida por el Instituto, en los medios, forma y tiempos que éste determine.

Artículo 85. El Instituto determinará mediante declaratoria la condición de operador preponderante en uno o más servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, conforme a lo siguiente:

I. El procedimiento iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado, entendiéndose como tal, cualquier usuario, cliente u operador que peste o pretenda prestar los mismos servicios que el operador sobre el cual se pretenda recaiga la declaratoria;

II. La solicitud se formulará por escrito, debiendo el interesado:

   a. Señalar su nombre, denominación o razón social, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, personas autorizadas para tales efectos;

   b. Señalar a las personas que en su caso autorice para realizar promociones en su nombre y representación;

   c. Acompañar el documento con que se acredite la personalidad, en caso de que la solicitud se formule por conducto de representante legal; y

   d. Expresar las razones por las que considere que el operador de que se trate tiene la condición de preponderante en uno o más servicios y acompañar la información y documentación que al efecto estime pertinente.

III. El Instituto podrá prevenir al interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito, para que precise o aclare su solicitud o presente la información o documentación faltante;

IV. La prevención deberá desahogarse en un plazo de cinco días. Si la prevención no se desahoga en tiempo y forma, el Instituto desechará la solicitud y notificará personalmente al interesado el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo que para el desahogo de la prevención se señala esta fracción;

V. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud o al debido desahogo de la prevención, según corresponda, el Instituto dictará el acuerdo de inicio del procedimiento, el cual contendrá un proyecto de declaratoria que será elaborado con base en los datos que obren en poder del Instituto. Si el procedimiento inicia de oficio, el acuerdo podrá ser emitido en cualquier tiempo;

VI. Dentro de los cinco días siguientes a su emisión, el instituto publicará el acuerdo de inicio en sus medios de difusión, lo notificará personalmente al operador que pretenda declararse como preponderante y mandará publicar un extracto en el Diario Oficial de la Federación;

VII. El operador al que pretenda declararse como preponderante, y los interesados a que se hace referencia en la fracción I de este artículo, incluido el solicitante del procedimiento, contarán con un plazo de diez días para manifestar lo que a su derecho convenga sobre el acuerdo de inicio y los razonamientos expresados por el instituto en el proyecto de declaratoria. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y,

para el operador al que pretenda declararse como preponderante, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y

VIII. Dentro de los veinte días siguientes a que concluya el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente la resolución al operador preponderante.

Artículo 86. La condición de operador con poder sustancial en uno o más mercados relevantes de telecomunicaciones o radiodifusión será determinada por declaratoria del Instituto, con base en los criterios establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Competencia Económica, sin que sea aplicable el artículo 33 bis de dicho ordenamiento, sujetándose a lo siguiente:

I. El procedimiento iniciará de oficio o a petición de cualquier interesado, entendiéndose como tal, cualquier usuario, cliente u operador que peste o pretenda prestar los mismos servicios que el operador sobre el cual se pretenda recaiga la declaratoria;

II. La solicitud se formulará por escrito, debiendo el interesado:

a. Señalar y acompañar la información y documentación a que se refieren los incisos a, b y c del artículo 85; y

b. Aportar los elementos que puedan ser de utilidad al Instituto para determinar el poder sustancial.

III. El Instituto podrá prevenir al interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito, para que precise o aclare su solicitud o presente la información o documentación faltante;

IV. La prevención deberá desahogarse en un plazo de cinco días. Si la prevención no se desahoga en tiempo y forma, el Instituto desechará la solicitud y notificará personalmente al interesado el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo que para el desahogo de la prevención se señala esta fracción;

V. Dentro de los cinco días siguientes, el Instituto dictará el acuerdo de inicio y mandará publicar un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación;

VI. En un término de sesenta días contados a partir de la publicación del extracto, el Instituto formulará los requerimientos de información que estime pertinentes y, con la información recabada y la que obre en su poder, emitirá un dictamen preliminar que será publicado en sus medios de difusión y notificado personalmente al operador al que pretenda declararse con poder sustancial. Los datos relevantes de dicho dictamen se mandarán publicar en el Diario Oficial de la Federación;

VII. El operador al que pretenda declararse con poder sustancial, así como los interesados a que se refiere la fracción I de este artículo, incluido el solicitante de la declaratoria, en su caso, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, respecto de la información contenida en el dictamen preliminar. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador al que pretenda declararse con poder sustancial, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después; y

VIII. En un plazo de cuarenta días contados a partir de la integración del expediente, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la publicará en sus medios de difusión y mandará publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Si la declaratoria resultó procedente, notificará personalmente la resolución al operador con poder sustancial.

Artículo 87. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado quedarán sujetos a lo dispuesto en este Capítulo, a los noventa días siguientes a la

publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los datos relevantes de la resolución que contenga la declaratoria correspondiente.

Artículo 88. El instituto establecerá para cada operador preponderante o con poder sustancial, las obligaciones específicas conducentes a la eliminación de las limitaciones a la competencia y libre concurrencia derivadas de tal condición, conforme al siguiente procedimiento:

I. En el término de sesenta días hábiles contados a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto publicará en sus medios de difusión y notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado, el proyecto de resolución correspondiente, debiendo publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación;

II. El operador preponderante o con poder sustancial y los interesados, entendiéndose como tales a los usuarios, clientes o competidores de dicho operador, contarán con un plazo de veinte días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto del proyecto de resolución. Este plazo comenzará a contar, para los interesados, a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo de inicio en el Diario Oficial de la Federación y, para el operador preponderante o con poder sustancial de mercado, a partir del día siguiente al de dicha publicación o del que surta efectos la notificación del acuerdo, lo que ocurra después;

III. En un término de treinta días contados a partir del vencimiento del plazo previsto en la fracción anterior, el instituto emitirá, notificará personalmente al operador preponderante o con poder sustancial de mercado y ordenará la publicación de la resolución definitiva en el Diario Oficial de la Federación. La resolución contendrá la forma y plazos en que deberán cumplirse las obligaciones específicas.

Artículo 89. Cuando debido a la evolución tecnológica o a cualquier otra causa, se presenten cambios en las circunstancias prevalecientes al momento en que se hayan establecido las obligaciones específicas, el Instituto, mediante el desahogo del procedimiento previsto en el artículo anterior, deberá ampliar dichas obligaciones o realizar las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en este Capítulo.

Artículo 90. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere esta Ley, el Instituto establecerá todas aquellas medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para:

I. Contrarrestar los efectos de la concentración de mercado;

II. Limitar el ejercicio indebido de la capacidad de los agentes preponderantes o con poder sustancial de mercado y fomentar el equilibrio entre los diversos operadores;

III. Garantizar la eficiente operación e interoperabilidad de lar redes, garantizando el acceso a los insumos esenciales de los operadores preponderantes o con poder sustancial, en condiciones de equidad;

IV. Permitir a los operadores la integración de ofertas competitivas bajo condiciones de eficiencia operativa; y

V. En general, garantizar condiciones de competencia efectiva en los servicios y mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.

Artículo 91. Las obligaciones previstas en este Capítulo, así como las que establezca el Instituto en los términos del mismo, se extinguirán en sus efectos una vez que el operador de que se trate deje de tener la condición de preponderante o de operador con poder sustancial de mercado, previa declaratoria que emita el Instituto conforme al procedimiento previsto en el artículo 85 o en el artículo 86, según corresponda.

Artículo 92. La autorización a los operadores preponderantes para la prestación de nuevos servicios, adicionales a los que son objeto de su concesión, o para transitar al modelo de concesión única, se

condicionará al cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo y a las medidas que determine el Instituto conforme a sus facultades.

El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este artículo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y determinará las contraprestaciones correspondientes.

Artículo 93. Los operadores preponderantes o con poder sustancial en los servicios o mercados de telecomunicaciones o televisión radiodifundida, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios.

Estos operadores deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto determinará la tarifa bajo principios de libre competencia y concurrencia.

El Instituto sancionará con la revocación de la concesión a los operadores preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros operadores, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos.

Artículo 94. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores preponderantes o con poder sustancial de mercado dará lugar a las sanciones establecidas en la presente Ley. En caso de reincidencia, el Instituto ordenará la separación funcional o estructural y, en su caso, la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de dichos operadores o de los agentes que pertenezcan al mismo grupo de interés económico, en las proporciones que sean necesarias para eliminar su condición de preponderantes o su poder sustancial de mercado. Estas facultades correctivas también serán ejercidas por el Instituto en caso de que las medidas de fomento a la competencia en su conjunto resulten insuficientes para garantizar la competencia efectiva en los servicios o mercados de telecomunicaciones o radiodifusión.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en el presente decreto, no serán aplicables a las declaratorias y obligaciones específicas cuyos procedimientos hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

TERCERO. Los operadores a quienes se declare preponderantes o con poder sustancial de mercado, podrán continuar aplicando a sus usuarios finales las tarifas que efectivamente les cobraban hasta antes de la entrada en vigor de esta Ley, sin que se requiera la previa aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Dado en el Senado de la República, el dieciocho de febrero del año dos mil catorce.

Suscribe.

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO.

DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.



SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE MIGRACIÔN.

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo establecido en el último Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a la *Situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y Lugares Habilitados por el Instituto Nacional de Migración (INM)*[51], el Estado mexicano ha tolerado la violación flagrante, permanente y sistemática de los derechos humanos de los extranjeros que, en el marco del procedimiento administrativo migratorio, son privados de su libertad y "alojados" en la estaciones migratorias y en otros lugares habilitados para los mismos efectos por el Instituto Nacional de Migración.

La marginación, la discriminación, la extorsión, la tortura, los malos tratos y una lista creciente de conductas que atentan y vulneran la dignidad y la integridad de personas -cuya única falta ha sido ingresar sin documentos a nuestro territorio-, constituyen elementos que dan forma a una realidad cotidiana inaceptable para cualquier democracia y letal para la vigencia del estado de derecho.

De esta manera, a pesar de que existen algunos programas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, la mayoría de ellas continúan careciendo de elementos mínimos de dignidad para el adecuado alojamiento diario de los migrantes que ahí permanecen asegurados, lo que deriva en una constante y permanente violación a los derechos humanos de este sector.

Aunado a ello, existe en estos establecimientos administrativos, una concepción netamente carcelaria: celdas, rejas metálicas, aldabas, candados y bases de cemento que se usan como camas; todas ellas características que corresponden más a un reclusorio[52], que a un alojamiento temporal.

Y lo anterior se agrava si tomamos en cuenta que los periodos de aseguramiento de personas que han ingresado a nuestro territorio sin autorización, por mandato de ley, puede prolongarse durante semanas o meses.

Al respecto, el Observatorio de la Frontera Sur y Sin Fronteras (IAP), sostienen que las garantías jurídicas de los extranjeros alojados en estaciones migratorias son menores a las de las personas que han sido sentenciadas por la comisión de delitos y cumplen condenas en las cárceles de México. Y más grave aún, es el hecho de que esta situación no distingue edades ni géneros, por lo que las niñas, los niños y las mujeres resultan particularmente afectados.

[51] http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales

[52] http://fronterasurmx.org/2012/11/18/estaciones-migratorias-similar-a-carceles-de-mexico-con-menores-garantias-juridicas-sin-fronteras-iap/

Tan sólo durante el 2012, en México se detuvieron y alojaron en estaciones migratorias y en lugares habitados como tales, a 85 mil 100 personas extranjeras: 69 mil 340 hombres; 9 mil 928 mujeres mayores de edad; y 5 mil 832 menores de 18 años (4379 hombres y 1453 mujeres).

En relación con las cifras de 2011, el 2012 representó un aumento en el número total de personas extranjeras alojadas de 34.9 % y un incremento de 50.4 % en el número de menores de 18 años privados de su libertad en estaciones migratorias o en lugares habilitados para los mismos fines.

De los 85 mil 100 expedientes correspondientes a personas extranjeras alojadas en estaciones migratorias o lugares afines, el 50 % se radica en una sola entidad federativa: Chiapas. El porcentaje restante se concentró en cuatro entidades federativas más: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Distrito Federal.

En el mismo sentido, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, en México existen 32 estaciones migratorias, con una capacidad de alojamiento para 3,671 personas; y 26 estancias provisionales, con capacidad de alojamiento para 753 personas.

Por lo tanto, si dividimos a las 85 mil 100 personas que fueron "alojadas" en una estancia migratoria durante 2012, entre la capacidad instalada reportada por el Instituto Nacional de Migración, el resultado sería de alrededor de 7 mil personas internadas por mes (el doble de la capacidad instalada).

Como se puede apreciar, el número de personas extranjeras a las que anualmente el Estado mexicano priva de su libertad y somete a circunstancias degradantes por el simple hecho de haber ingresado de manera irregular o no documentada a nuestro territorio, se ha convertido en una situación de violación grave y sistemática a los derechos humanos.

Y por si esto no fuera poco, al hacinamiento, a la discriminación, a la extorsión y a la insuficiencia de servicios y condiciones dignas elementales, se suma la imposición de una sanción privativa de la libertad que va de los 15 hasta los 60 días hábiles.

En efecto, el artículo 111 de la Ley de Migración vigente, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación data del 25 de mayo de 2011, establece lo siguiente:

> ***Artículo 111.*** *El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo* ***no mayor de 15 días hábiles****, contados a partir de su presentación.*
>
> *El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder* ***de los 15 días hábiles*** *a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos:*
>
> ***I.*** *Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;*
>
> ***II.*** *Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;*
>
> ***III.*** *Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;*
>
> ***IV.*** *Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y,*
>
> ***V.*** *Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de*

amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de ***60 días hábiles.***

Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

Lo anterior, no sólo es contraproducente en términos de la situación y de las condiciones ya relatadas, sino que constituye una violación flagrante al texto constitucional y a diversos compromisos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

El primer párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala con claridad que:

Artículo 18. *Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.*

…
…
...
…
…
…
...
…

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte, estipula lo siguiente:

Artículo 19.*Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas,* *a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.*

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes *para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.*

…
…
…

…

…

…

Resulta evidente que el plazo establecido por la Ley de Migraciónpara mantener a una persona extranjera alojada y privada de su libertad en una estación migratoria carece de sustento constitucional y resulta absolutamente desproporcionada. Una persona sujeta a proceso penal por la comisión de un delito, puede permanecer detenida hasta 72 horas, a menos de que un periodo mayor se justifique con un auto de vinculación a proceso.

Mientras tanto, las personas extranjeras que han ingresado sin permiso a territorio nacional o que no tienen forma de acreditar su situación migratoria, además de estar alojadas en condiciones peores a las de quienes han cometido un delito, pueden pasar privadas de su libertad de 360 a 1440 horas.

En este contexto, la presente iniciativa tiene como objeto acotar el plazo al que debe sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento congruente con nuestro texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.

De igual forma, busca derogar el supuesto que castiga con una privación de la libertad más larga a aquellos extranjeros que interpongan un recurso administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional;que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

Lo anterior, además de dotar de una mayor certidumbre jurídica a los actos de la autoridad migratoria mexicana, será un paso más en el proceso de descriminalización de la migración indocumentada.

Un proceso que ha tenido como punto de quiebre la afortunada expedición de la Ley de Migración vigente y la derogación de la disposición de la Ley General de Población que consideraba a la inmigración indocumentada como un delito y que concebía a los inmigrantes sin papeles como delincuentes.

No obstante lo anterior, mientras sigamos dando un trato vejatorio a quienes aún privamos de la libertad por el simple hecho de haber ingresado a nuestro territorio sin autorización, México seguirá siendo visto como un país incapaz de garantizar la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Por ello, resulta indispensable reformar el texto del artículo 111 de la Ley de Migración en los términos aquí propuestos.

El Estado mexicano debe revisar y perfeccionar el procedimiento administrativo migratorio, a efecto de estar en condiciones de determinar la situación migratoria de una persona extranjera que se encuentra privada de su libertad, en el marco de los plazos constitucionales y de conformidad con los criterios y lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La detención y la privación de la libertad de migrantes indocumentados deben ser una situación excepcional y justificada, y no una constante. Según los estándares interamericanos, la autoridad migratoria debe garantizar de la manera más amplia y expedita posible el otorgamiento de documentación que facilite el tránsito de los migrantes e instrumentar mecanismos eficaces alternativos a la detención.

Tal y como lo establece el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Inmigración: Detenciones y debido Proceso[53]:

> *"Una de las principales preocupaciones de la Comisión Interamericana es el creciente uso de la detención, partiendo desde la presunción de que la misma es necesaria, cuando precisamente esa debería ser la excepción. Es bastante cuestionable la constitucionalidad de la detención obligatoria para los procesos de inmigración pendientes de resolución, dada la naturaleza civil de las violaciones allí alegadas y la pérdida de la libertad que supone.*
>
> *La CIDH está convencida de que en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, la detención constituye una medida desproporcionada y los programas de Alternativas a la Detención configurarían una opción más equilibrada a fin de dar cumplimiento al interés legítimo del Estado de asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria.*
>
> *Para aquellos casos en que la detención sea estrictamente necesaria, la Comisión Interamericana considera preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano, así como aquellas condiciones especiales propias de una detención no punitiva. Asimismo, la CIDH observa con preocupación que para la administración y el cuidado personal de las personas migrantes detenidas, se recurre con frecuencia a contratistas privados, sin que se cuente con información suficiente sobre los mecanismos de supervisión".*

Finalmente, deben quedar claros los compromisos internacionales vinculantes para el Estado mexicano, derivados de su sujeción a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.

> ***Artículo 16***
>
> *1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán* ***derecho a la libertady la seguridad personales.***
>
> *2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la* ***protección efectiva del Estadocontra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.***
>
> *3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.*
>
> ***4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad,****salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca.*
>
> *5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado.*

[53] http://cidh.org/countryrep/Immigration.esp/Cap.I.htm

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención:

a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa medida;

b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas autoridades;

8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal.

En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.

9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.

Artículo 17

1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.

3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas.

4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia.

6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.

7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren en igual situación.

8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, y porque el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos de las personas migrantes debe comenzar a hacerse realidad en el trato y en las instituciones del propio Estado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, EL ARTÌCULO 111 DE LA LEY DE MIGRACIÒN.

ARTÌCULO ÙNICO.- Se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de las **personas extranjeras** presentadas en un plazo no mayor de **05 días hábiles**, contados a partir de su presentación.

La autoridad migratoria instrumentará las medidas cautelares y alternativas necesarias a fin de que las personas extranjeras sujetas a un procedimiento administrativo migratorio no sean privados de su libertad.

El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los **05 días hábiles** a que se refiere el párrafo anterior, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

I. – IV.- …

V. Se deroga

En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de las personas extranjeras en las estaciones migratorias no podrá exceder de **10 días hábiles.**

Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

TRANSITORIOS

ÙNICO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

SUSCRIBE
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

DE LOS SENADORES ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ROMO MEDINA, ROBERTO GIL ZUARTH, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MANUEL CAMACHO SOLÍS, ENRIQUE BURGOS GARCÍA Y MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5°, 28 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COLEGIACIÓN Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIAS.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

Senador Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Senadores
LXII Legislatura

P R E S E N T E

Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la **Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias**, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las funciones del Estado es la de asegurar a la población que cuando acuda a solicitar los servicios de un profesionista, los reciba con certeza de calidad y conforme a los parámetros de conducta ética y profesional para cada disciplina. Las condiciones sociales actuales exigen la ordenación del ejercicio de ciertas actividades profesionales sobre bases comunes para todo el territorio nacional, considerando, asimismo, los estándares internacionales que permitan la movilidad de los prestadores de tales servicios.

La libertad del ejercicio profesional se encuentra contemplada en el Artículo 5 de la Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos, que reconoce con carácter general el derecho de cada persona a la libre elección de la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, señalando que habrá en cada estado una ley que establezca las profesiones para cuyo ejercicio se requiere título profesional, cuáles son las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Esta libertad tiene hondas raíces y vastos antecedentes en nuestro régimen jurídico. Ya en la Constitución de 1857 esta libertad estaba consagrada en el Artículo 4. Posteriormente, la Constitución de 1917 lo retoma con algunas modificaciones al texto. Esta disposición permaneció intocada hasta el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1974, por el cual el texto del Artículo 4 fue trasladado al Artículo 5 de la Constitución, lugar en el que permanece desde entonces.

Casi 100 años después de la concepción de esta libertad en sus términos modernos, existen varias aristas que afectan al ejercicio profesional y a la sociedad en su conjunto, que han

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

ido desarrollándose a lo largo de las décadas y que generan la percepción de que la realidad ha rebasado con creces al ámbito formal instituido por nuestra Constitución. La facultad que el citado Artículo 5 Constitucional confiere a las entidades federativas para regular la expedición de los títulos profesionales, ha convertido el otorgamiento de la patente de ejercicio, en muchos casos, en un mero trámite administrativo, pero no en un instrumento que regule el ejercicio profesional, como es el propósito de dicho precepto constitucional.

En los siguientes párrafos se identifican algunos de los problemas relacionados con el ejercicio de las profesiones, los cuales hacen evidente el cambio que se requiere en esta materia.

1. Disparidad académica de los estudios superiores.

En primer lugar, si bien es cierto que el título profesional acredita que el profesionista ha cursado los estudios necesarios, existe una enorme disparidad en los planes de estudio de las instituciones educativas en el país, tanto en duración, la denominación de la carrera, materias y el plan curricular en su conjunto, por lo que la preparación de los nuevos profesionistas no es ni remotamente homogénea. No obstante la disparidad en la calidad de la preparación, la obtención del título da lugar a la emisión de la cédula profesional que habilita para el ejercicio de la profesión, confiriendo el mismo derecho a todos, lo que coloca a los receptores de los servicios en una posición de incertidumbre que puede conducir a su vulnerabilidad, pues carecen de elementos objetivos para juzgar sobre las calidades del profesionista.

2. Necesidad de certificación de conocimientos.

Una vez que los profesionistas se integran al mercado laboral, salvo excepciones muy localizadas, en nuestro país no existen mecanismos de control que permitan que esos prestadores de servicios permanezcan actualizados en la materia de su actividad como profesionistas. La autorización que para el ejercicio profesional significa la cédula profesional correspondiente es permanente. Cuando se obtiene el título se concluyen todos los procedimientos de evaluación necesarios para ejercer una profesión y, en consecuencia, una gran parte de los profesionistas no vuelve a tomar cursos de actualización o de mejora de sus conocimientos y habilidades.

Toda profesión es dinámica. El conocimiento, sino se adapta a las nuevas realidades, pierde su vigencia. Por ello, es necesario que toda persona esté al día a través de la actualización académica y profesional frente al desarrollo científico y a los nuevos descubrimientos en el estado del arte de su materia, con el consiguiente beneficio a los ciudadanos que confiando en que dichos profesionistas están legalmente acreditados para ejercer gracias al título y cédula profesionales que ostentan, depositan en manos de éstos bienes o valores fundamentales, tales como patrimonio, salud, seguridad, libertad e incluso la vida, en el entendido de que cuentan con las capacidades óptimas para atenderlos.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

3. Necesidad de control en el desempeño ético.

A la libertad de industria se le ha asociado, incorrectamente, una mal entendida absoluta autonomía para determinar la licitud ética en el comportamiento profesional. Ante la ausencia de normas vinculantes que establezcan los estándares permisibles en el ejercicio profesional, la rectitud en el obrar depende, exclusivamente, de la buena voluntad de los intervinientes. Esto ha conducido a graves y preocupantes abusos frente a los cuales el Estado no debe permanecer ajeno, sobre todo con relación a ciertas actividades profesionales que, por la enorme importancia de los bienes jurídicos involucrados, tienen trascendencia más allá del caso particular.

Una correcta y adecuada normatividad sustantiva en materia de ética profesional, que establezca las normas básicas de conducta y los procedimientos e instituciones adecuados para hacerlas valer de manera vinculante, constituye por tanto, la segunda parte de la ecuación indispensable para fortalecer la protección al público usuario, a la sociedad, en general. Dicha normatividad ética debe ser instrumentada por las diversas actividades profesionales en el ámbito de sus respectivos campos de actuación, para lo cual se requiere del establecimiento de bases legales claras que propicien o fortalezcan la creación y operación de organizaciones de profesionistas que sean el conducto de expresión de las actividades profesionales para salvaguardar los respectivos principios de actuación profesional, dotándolas de medios suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, coadyuvando así a las tareas del Estado en beneficio de la sociedad receptora de los servicios.

4. Falta de participación activa de los profesionistas en actividades del Estado.

En México, pocas organizaciones o colegios de profesionistas coadyuvan con el Estado en actividades de trascendencia social, tales como la elaboración y análisis de iniciativas de ley, participación en foros o mecanismos gubernamentales dedicados a la resolución de problemáticas sociales ligadas a sus ramas de conocimiento o en la elaboración de planes y programas de gobierno relacionados con su actividad laboral. La gran mayoría de profesionistas se encuentra alejada de todas estas actividades y con ello México está dejando de aprovechar el vasto conocimiento técnico y de la realidad social que estos pueden aportar para fortalecer su desarrollo integral.

En un régimen democrático, la voz de todos los ciudadanos en los asuntos del Estado debe ser escuchada y aprovechada. Por ello, es relevante propiciar los espacios que permitan que los profesionistas de este país coadyuven en este tipo de actividades.

5. Necesidad de mayor representatividad de las profesiones y sus miembros para promover mejores condiciones de ejercicio profesional.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

En México, al no contar con suficientes organismos que conjunten a los profesionistas de cada materia para el efecto de ejercer la representación de la profesión de que se trate, no existen mecanismos para que sus propuestas y necesidades sean elevadas a las instancias competentes.

En nuestro país, hay valerosos esfuerzos por parte de diversos colegios de profesionistas en varias materias, que han tomado la función de promover mejores condiciones de ejercicio profesional para sus agremiados. Pero esto no se ha generalizado y por ello aún no se cuenta con los organismos necesarios que realicen estas funciones a nivel nacional. Expresar las necesidades de cada profesión es un imperativo que los miembros de ellas exigen y que el Estado debe escuchar y atender.

Estos 5 puntos y muchas otras problemáticas han sido una constante en México desde hace décadas, pero en los últimos años se han recrudecido ante el incremento de instituciones de educación superior de cuestionable calidad académica y la consecuente graduación de muchos más estudiantes universitarios que se integran al mercado laboral. La experiencia demuestra que el mero título profesional no siempre es suficiente para contar con condiciones de ejercicio profesional dignas, adecuadas y que permitan a los mismos profesionistas perseguir sus objetivos de vida y, con ello, promover el bienestar y mejoramiento de la sociedad en su conjunto.

Debido a esto surge la evidente necesidad de generar un cambio de paradigma en relación al ejercicio profesional bajo un esquema de mayor control del desempeño ético y técnico. Es urgente implementar mecanismos que permitan evaluar la labor del profesionista y evitar o, en su caso, subsanar los posibles daños que éste pudiera causar por la falta de esos controles. El profesionista, como persona con estudios académicos especializados, debe contar con un marco legal e institucional que regule su actuar y que establezca la responsabilidad social que le es inherente a toda profesión.

La Colegiación Obligatoria

Una de las vías que históricamente se ha utilizado en nuestro país para lograr la seguridad y certidumbre que se pretende respecto de la correcta prestación de los servicios profesionales, es la colegiación de los profesionistas, la cual ha existido en México desde la segunda mitad del siglo XVIII.

Los colegios de profesionistas no buscan la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con una asociación civil ordinaria. La peculiaridad de los colegios de profesionistas respecto de otras organizaciones, radica en que se trata de entidades de interés público que tienen como objetivo garantizar que el ejercicio de la profesión de que se trate, se ajuste a las normas o reglas que aseguren, tanto la calidad técnica en la prestación del servicio profesional, como la eventual responsabilidad en caso de un ejercicio profesional indebido. Dichos colegios son creados por los particulares, no obstante

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

lo cual, se relacionan con la administración pública como coadyuvantes de las autoridades que tienen a su cargo la regulación del ejercicio profesional, razón por la cual deben contar con ciertas facultades para que puedan cumplir con su cometido.

La colegiación obligatoria constituye una garantía ciudadana que se justifica no solo en atención al derecho de representación de los profesionistas, a través de la cual se promoverán mejores condiciones de ejercicio en su ámbito laboral, sino como una forma de beneficiar los intereses de los destinatarios de sus servicios, que tendrán la posibilidad de defenderse ante eventuales abusos y de exigir que los servicios profesionales se presten de manera ética y eficaz. Es una forma idónea para propiciar la plena identificación de quienes ejercen una profesión, garantizar una ética profesional uniforme, la actualización profesional continua adecuada y la respuesta profesional eficiente.

De manera más específica, los fines esenciales de los colegios profesionales, en sus respectivos ámbitos, deben ser:

1. La ordenación del ejercicio de la profesión
2. La representación de la profesión
3. La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados
4. La actualización profesional continua de los colegiados
5. El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en protección de la sociedad.

La experiencia comparada demuestra la importancia de la colegiación obligatoria. En la gran mayoría de los países europeos, por ejemplo, los profesionistas están obligados a colegiarse. Lo mismo sucede en países angloparlantes como Australia, Canadá o Estados Unidos de América. En el caso de Latinoamérica, Estados como Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá, y Perú han seguido el mismo camino. En esos países, los colegios de profesionistas fungen como un garante hacia el usuario, basado en un conjunto de disposiciones por los que asegura un desempeño ético y técnico por parte del prestador del servicio, además de contribuir al desarrollo de la actividad correspondiente a cada profesión, al marcar pautas de actuación consideradas de manera unánime como éticas y que contribuyen al bien social

Certificación obligatoria

Un segundo mecanismo indispensable para la regulación de las actividades profesionales, es la certificación periódica. La velocidad en el cambio del conocimiento y la constante renovación de los instrumentos técnicos aplicados al ejercicio de las profesiones, exigen una constante actualización por parte de los profesionistas, proceso que, al no existir una regulación que obligue a ello, es sólo resultado de la buena voluntad de quienes así quieren hacerlo, lo que provoca que en muchas ocasiones los demandantes de los servicios profesionales padezcan severas afectaciones por la deficiente prestación de los mismos.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

El registro de títulos profesionales actualmente acredita que se ha cumplido con los requisitos de un determinado programa académico, sin embargo, la certificación periódica de conocimientos, junto con la colegiación obligatoria permitirán asegurar tanto al Estado, como a la sociedad, que las personas no solo han completado su formación práctica y consolidado su experiencia profesional, sino que también se preocupan por mantenerse actualizados.

Es importante hacer hincapié en que la certificación requiere de la mancuerna con la colegiación profesional para que realmente sea efectiva. ¿Quién mejor para calificar las cualidades de un profesional que sus mismos pares? En conjunto, la colegiación y certificación obligatorias apuestan a la autorregulación de los profesionistas que se agrupan en colegios. Para evitar desviaciones y propiciar procedimientos de certificación objetivos, imparciales y con propósitos claros, la autoridad supervisará y controlará el ejercicio de aquellos colegios o entes legalmente facultados para certificar.

Reformas Constitucionales

Por estas razones, se propone a esta Soberanía llevar a cabo las reformas constitucionales que permitan al Estado establecer mayores controles en el ejercicio profesional en las materias más sensibles que, por su naturaleza, trascienden el mero ámbito privado y adquieren notas de verdadero interés público, pero contando con la cooperación indispensable de los propios profesionistas de cada rama. No se pretende con esto crear más burocracia ni generar enormes estructuras orgánicas para ejercer esta labor. El Estado, en esta materia, debe establecer los lineamientos a seguir pero son los propios profesionistas organizados los que deben llevar a cabo las acciones necesarias para contar con condiciones más aptas para el ejercicio profesional, con mejores y más capacitados profesionistas y con más mecanismos de defensa para los usuarios.

Reformas y adiciones al artículo 5o. de la Constitución

Se propone reformar el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un tercer párrafo que establezca que el Congreso de la Unión determinará los casos en que, para el ejercicio profesional, se requiera de colegiación, certificación periódica o cualquiera otra condición especial, así como las modalidades y términos de cumplimiento de dichos requisitos.

Como ya se ha dicho, es importante notar que el derecho al ejercicio de la profesión no puede ser observado de manera absoluta sin que se corra el riesgo de permitir conductas que pudieran afectar los derechos de quienes contratan determinados servicios profesionales. En este sentido, habría que defender la libertad en el ejercicio de una profesión siempre y cuando esta se realice de manera responsable y sin detrimento de los derechos humanos de los contratantes o de terceros.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5°, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

Respecto a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado destacando que la libertad de profesión no es "absoluta, irrestricta e ilimitada" y que debe realizarse en cumplimiento de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de tercero; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general[1]. Bajo dichas consideraciones, la colegiación obligatoria de los profesionistas en México abonaría a la defensa de la libertad en el ejercicio de la profesión fortaleciendo un valor igualmente relevante como la protección del bienestar social.

Es importante mencionar que se eligió el término de "ejercicio profesional" y no de "profesiones", como se ha utilizado en proyectos de iniciativa similares a esta, porque puede haber profesiones que incluyan distintas actividades y en esos casos es difícil decidir cuándo se trata de una sola profesión o se trata de varias. Así mismo hay una variedad inmensa de nomenclaturas de las profesiones lo que crearía confusiones en la interpretación del texto constitucional. En este sentido, será la ley general la que acote el término de ejercicio profesional y decida en qué casos se requerirá de colegiación y certificación.

Así mismo hay que mencionar que se incluyó la certificación, y no solo la colegiación, como requisito para el ejercicio profesional ya que, aunque muchas veces van de la mano en la medida en que los colegios tengan facultades para certificar a sus miembros, son dos las condiciones distintas de relevante importancia, no necesariamente una está incluida en la otra. Como se mencionó en párrafos anteriores, la certificación es fundamental para garantizar la profesionalización y actualización de conocimientos de los profesionistas.

Por último se habla de condiciones especiales para su ejercicio porque existen actividades profesionales que de acuerdo a su naturaleza, requieren del cumplimiento de determinados requisitos propios y exclusivos de ellas. Será la ley o leyes secundarias, la que establezca en qué casos especiales se requieren ciertas condiciones.

De manera más general, cabe destacar que con la adición del tercer párrafo al artículo 5°, se pretende hacer copartícipes y corresponsables a la Federación y a los estados de la República en la mejora de las condiciones del ejercicio profesional en México. Las carencias que se han relatado a lo largo de esta Exposición de Motivos impactan a todos los órdenes de gobierno y, en ese contexto, no se puede concebir una reforma que nuevamente deje en manos de uno solo de esos órdenes la atención y resolución de esta problemática. La colegiación y certificación obligatoria requiere de la correcta coordinación entre ambos órdenes de gobierno, de manera que pueda establecerse un esquema institucional dinámico, transparente y justo para la evaluación de los profesionistas que se considere deban ser incluidos en él. En esta lógica consideramos que la regulación en la materia debe ser

[1]SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Libertad Trabajo, jurisprudencia, Contradicción de Tesis 18/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 27 de agosto de 2007, Mayoría de ocho votos, 9a. Época, Pleno; en Semanario Judicial de la Federación; Tomo XXVI; Pág. 10

planteada por los congresos locales en seguimiento de lineamientos generales que faciliten la homologación de prácticas, el intercambio de información y el logro de objetivos

Asimismo, es fundamental resaltar que será la ley general que expida el Congreso de la Unión la que establezca cuáles actividades profesionales requerirán colegiación, certificación o cualquier otra condición especial para su ejercicio. El Constituyente Permanente debe privilegiar la flexibilidad para que el Congreso de la Unión, a través de la ley general, pueda establecer en qué casos se requerirá la colegiación obligatoria y para, en su caso, modificar o ampliar los supuestos.

En ese orden de ideas, la iniciativa de ley general reglamentaria que se presentará en su oportunidad tendrá por objeto establecer los lineamientos mínimos de la colegiación y certificación obligatorias, así como el diseño estructural correspondiente, reservando a los estados la reglamentación específica sobre el ejercicio profesional no regulado por aquélla.

Se propone también adicionar un cuarto párrafo del mismo numeral constitucional para especificar que los colegios de profesionistas serán entidades privadas de interés público que coadyuvarán en las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional; se constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto por las leyes, con autonomía para tomar sus decisiones y no podrán realizar actividades religiosas o políticas, especificando que la afiliación de los profesionistas será individual.

Se sostiene que los colegios serán entidades privadas de interés público, porque crear estructuras estatales para este efecto representaría una erogación de cuantiosos recursos económicos, además de la dificultad de contar con el personal con la suficiente capacitación y conocimiento de cada profesión. Así mismo es un requisito indispensable para garantizar su independencia institucional y libertad del ejercicio de la profesión. Los colegios que se proponen estarían integrados por los propios profesionistas que son quienes mejor conocen a la rama del conocimiento que ejercen, pero tendrían una regulación normativa proveniente del Estado para evitar que una asociación privada pudiera ejercer facultades de autoridad sobre particulares. Estos colegios, al sujetarse a lineamientos dispuestos por la ley general, permitirán que la autoridad los supervise y, por su conducto, a todos los profesionistas.

Así, los colegios propuestos quedarán regulados y podrán ser supervisados por la autoridad, coadyuvando con ésta en las funciones de vigilancia y control de las actividades profesionales. En este caso el interés de la colectividad deberá ser el objetivo último de estos colegios y, por ello, dotarlos del carácter de instituciones de interés público es de capital importancia. Consideramos firmemente que el México democrático debe continuar su camino hacia la promoción de una cada vez mayor participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

Por otro lado, se establece que los colegios se constituyen como coadyuvantes del Estado para las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional, conservando estas funciones como primigenias del Estado a través del poder ejecutivo y judicial. Se enfatiza que tendrán autonomía para tomar sus decisiones para garantizar su independencia y limitar la intervención del Estado en los ámbitos que estrictamente especificará la ley secundaria. Por último, se especifica que la afiliación a dichos colegios debe ser individual ya que su fin es regular y supervisar la actividad del profesionista en su quehacer personal.

En este orden de ideas, será la ley general que expida el Congreso de la Unión la que determine los pormenores del funcionamiento de estos colegios, así como sus objetivos y funciones. A manera de ejemplo se nombran los siguientes: formar la matrícula de profesionistas que ejercen las actividades reguladas; representar al gremio que corresponda; ejercer actividades de actualización y certificación periódica de conocimientos de profesionistas; substanciar mecanismos eficientes de conciliación, arbitraje o sanción por responsabilidad profesional; brindar servicios de asesoría gratuita a personas de escasos recursos; así como participar como órganos de consulta en la conformación de planes y programas de estudios universitarios de su rama; entre otros.

Reformas al artículo 28, octavo párrafo, de la Constitución

Con la finalidad de que los colegios de profesionistas, como instituciones privadas de interés público, no sean considerados monopolios en razón de las funciones exclusivas que habrán de realizar y con ello se vulnere la prohibición constitucional sobre el tema, se propone reformar el artículo 28, octavo párrafo, de la Constitución para incluir a estos colegios en las excepciones que la misma reconoce.

Reformas al artículo 73 de la Constitución

Para lograr todo lo anterior, es necesario que las facultades del Congreso de la Unión también sean reformadas, ya que actualmente no cuenta con atribuciones para legislar sobre el tema. Por ello, se propone adicionar un inciso a la fracción XXIX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir las leyes a que se refieren los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 de esta Constitución y para establecer la concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, los estados y el Distrito Federal en estas materias.

Por lo expuesto, por el digno conducto de usted C. Presidente, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER Y CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5º; SE MODIFICA EL OCTAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL Y SE ADICIONA UN INCISO V) A LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 73 DE LA PROPIA CARTA MAGNA.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

Primero.- Se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue, recorriéndose el orden de los párrafos siguientes:

"Artículo 5.-…
El Congreso de la Unión determinará los casos en que, para el ejercicio profesional, se requiera de colegiación, certificación periódica o cualquiera otra condición especial, así como las modalidades y términos de cumplimiento de dichos requisitos.

Los colegios de profesionistas serán entidades privadas de interés público que coadyuvarán en las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional; se constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto por las leyes, con autonomía para tomar sus decisiones y no podrán realizar actividades religiosas o políticas. La afiliación de los profesionistas será individual.
…"

Segundo.- Se reforma el octavo párrafo del artículo 28 Constitucional, para quedar como sigue:

"Artículo 28.-…
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses, **los colegios de profesionistas a que se refiere el artículo 5 de esta constitución**, ni las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales.
…"

Tercero.-. Se adiciona un inciso T) a la Fracción XXIX del artículo 73de la propia Carta Magna, para quedar como sigue:

"Artículo 73…

V. ---- Para expedir las leyes a que se refieren los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 de esta Constitución y para establecer la concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal en estas materias
…"

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5°, 28 y 73 en materia de Colegiación y Certificación Obligatorias

Segundo.- Todas las leyes que regulen algún aspecto relativo al ejercicio profesional, seguirán en vigor en lo que no se opongan a ésta Constitución.

Tercero.- El Congreso de la Unión emitirá leyes o reformas legales correspondientes, para dar cumplimiento al presente Decreto, dentro de los doce meses siguientes a su publicación.

Cuarto.- Las legislaturas de los Estados deberán adecuar su legislación, ajustándose a lo dispuesto en la ley que expida el Congreso de la Unión para determinar la concurrencia y bases de coordinación en materia de ejercicio profesional, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor.

Senado de la República, a 18 de febrero de 2014

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ MIGUEL ROMO MEDINA

ROBERTO GIL ZUATH ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

MANUEL CAMACHO SOLIS ENRIQUE BURGOS GARCÍA

MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR

DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.



SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LA LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA CREAR EL PADRÓN GENERAL DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El suscrito, Senador **ADOLFO ROMERO LAINAS**, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LA LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA CREAR EL PADRÓN GENERAL DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fortalecimiento de la salud pública ha sido un reto permanente tanto como para las instituciones miembros del Sistema Nacional de Salud como para el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, debido a diversos determinantes sociales como la dinámica poblacional y geográfica del país y el pobre cumplimiento administrativo para garantizar el acceso efectivo a la salud.

Me refiero a la falta de metas claras o incluso aplicables, al mismo tiempo de la falla en la creación de nuevas normas que sean satisfactorias para garantizar de manera integral las necesidades de salud de los afiliados.

Lo que ha evidenciado esa política es que en la mayoría de casos no se logra acreditar que se canalizaron partes de la Previsión Presupuestal para atender las necesidades de atención primaria o bien que se registrara un índice alto de colisión de beneficiarios de la protección social en salud se encontraban registrados también en los padrones de instituciones de seguridad social.

Siendo así, debemos comenzar a darnos cuenta que las acciones que hasta ahora se han llevado a cabo no deben orientarse más en establecer parches jurídicos que pudieran acelerar el debilitamiento de la eficacia de los servicios; de su calidad o del ejercicio de los recursos asignados por motivos de atención médica, sino de la correspondiente construcción de una norma capaz de generar un impacto real en las condiciones de salud.

Es momento de garantizar objetivos operativos que consigan proveer herramientas capaces de mejorar los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para satisfacer de manera integral las necesidades de salud de la población.

Me refiero a una medida urgente para el sistema de salud pública múltiple y desorganizada que tenemos actualmente en nuestro país, nuevas propuestas que establezcan indicadores o metas que verdaderamente consigan cumplir el objetivo de garantizar el acceso efectivo, de calidad y sin discriminación a la población.

Por lo tanto, es apresurada una reforma para crear un Sistema de Salud Universal, que busque mejorar la eficiencia y calidad de la atención, así como tener un control más transparente de los recursos, sin antes fortalecer el sistema actual a través de las reformas que sean necesarias.

No se trata de detener reformas innovadoras que ayuden a mejorar el servicio médico con miras a la universalidad, sino de mejorar la eficiencia par establecer la universalización de elementos particulares de los

servicios de salud, es decir, el Expediente Clínico, requisitos para la compra de medicamentos o la creación de un padrón general.

Y es precisamente una propuesta fundamental para comenzar a evitar la desorganización del sistema de salud y que logrará establecer nuevas metas para que la población afiliada tenga acceso efectivo, oportuno y de calidad al momento de utilización, el padrón universal.

Actualmente, en la discusión para la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal, resulta fundamental comenzar a promover acciones para su integración mediante diversas herramientas que verdaderamente establezcan guías para garantizar el acceso efectivo a la salud universal.

El tema del Padrón Universal es un debate relativamente nuevo, de hecho a principios de 2001 se creó la Unidad Administradora de Padrones en la SEDESOL, cuyo objeto fue constituir un padrón único de familias en pobreza extrema de los programas de Abasto Social de Leche y Tortilla Gratuita operados por LICONSA.

El 1er. Congreso Internacional sobre Medicina y Salud en 2009 ya había propuesto la necesidad de contar con un padrón único de asegurados pues en ese entonces ni siquiera podíamos intercambiar el padrón del Seguro Social con el del Seguro Popular.

En ese mismo año, el entonces Secretario de Salud mencionaba las personas se encontraban afiliadas a dos o más organismos al mismo tiempo, por lo que se iniciará la elaboración del padrón universal de usuarios de los servicios de salud, con lo que se intentaba cuantificar con precisión el problema y terminar con las duplicidades.

En 2010, la SEDESOL contó con los "Lineamientos Normativos para la Integración, Mantenimiento y Consulta del Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social"; los "Lineamientos para la identificación de la condición de pobreza de los hogares que solicitan apoyo de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social", y con las "Normas Generales para los Procesos de Recolección y Captura de la Información" para la construcción de modelos de captura de las bases de datos de los padrones de beneficiarios.

En 2011 durante diversas conmemoraciones en materia de salud, diversos medios de comunicación publicaron notas en las que se asentaba declaraciones de expertos señalando la necesidad de trabajar con una base para poder contar con políticas públicas efectivas puesto que nadie tiene el padrón completo de todos los usuarios.

Así mismo, un año después, el Centro de Inteligencia en Salud punteó dentro de su Agenda de Intercambio de Información, la necesidad de crear un acuerdo de voluntades para generar un primer entregable respecto del Padrón General de Salud.

Sin embargo, las evidencias han demostrado que en realidad la guía de una política universal, de hecho fortaleció reformas y decretos particulares. Por ejemplo, la necesidad de crear un sistema de información integral sobre las familias afiliadas llevó al Seguro Popular a utilizar un padrón para identificar a de cada familia incorporada, distinto al de la propia Secretaría de Salud.

Diversos proyectos y programas que debieron mejorar la cobertura, la equidad y la calidad de los servicios de salud se están desalineando, por ejemplo, en mitad de una discusión para crear un solo padrón, el ISSSTE presentó el micro sitio "Por un ISSSTE más Transparente" con el propósito de consultar el padrón de pensionados, jubilados, derechohabientes activos o en su caso, el tablero de control de medicamentos y materiales de curación.

Además, una vez que tuvimos la oportunidad de someter a una evaluación externa y rigurosa las propuestas podemos darnos cuenta que no solamente han servido para limitar mas la acción del Estado Federal para coordinar acciones en materia de intercambio de información, sino que ha permitido uno de los más altos indicies de colisión que hemos visto hasta ahora.

Con base en la "Confronta de Seguro Popular con las instituciones de salud 2011", se demostró que alrededor de más de 5 millones de personas de 47 millones de beneficiarios del Seguro Popular se encontraban registrados en los padrones de instituciones de seguridad social, más del 11% en el IMSS.

En todos los institutos se ha comprobado al respecto, que no se proporcionó evidencia documental que garantice la procedencia legal de la concurrencia o duplicidad en los registros observados, o en su defecto evidencia de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios; así como tampoco se evidencia la confronta de los padrones o listados de los programas.

Las agregaciones por entidad federativa, municipio, localidad o por Institución; a obtenido resultados diferentes sobre información socioeconómicas de población y hogares, niveles de pobreza y en algunos casos resultados incompletos o desactualizados, que no permiten determinar el índice real de beneficiarios.

Acciones particulares no pueden permitirnos contar con un sistema oportuno e integrador, pero pretender incluir una reforma para crear un sistema universal a mitad de esta vulneración únicamente podrá en situación crítica la administración de los datos, la información y el conocimiento que sirven de apoyo para conformar un sistema de salud universal.

La implementación, ejecución y operación de un Sistema Universal, debe primero configurar un programa general de Información Básica en Materia de Salud, para lo cual IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, entre otros, acuerden el intercambio de información básica con los mismos términos y disposiciones aplicables, de conformidad con una sola norma, el que deberá elaborarse y suscribirse por las instituciones participantes.

Me refiero pues, a un documento que permita establecer aspectos técnicos, bases, compromisos y actividades homogéneas, de esa manera podremos asegurar que la implementación, ejecución y operación del intercambio de información en materia de padrón, será equitativo, de alta calidad, descentralizado y participativo.

Es importante contar con un solo Sistema Nacional para que se cuente con la información necesaria que apoye los procesos de toma de decisiones de los diferentes actores, impulsando obligaciones que se encuentran actualmente en la Ley y que parece imposible llevar a cabo, me refiero a elaborar, difundir y vigilar la normatividad para los procesos de diseño, captación, integración, procesamiento y difusión de la estadística en salud o incluso la de generar la información estadística en salud.

Es nuestro deber como legisladores analizar las presentes legislaciones con la finalidad de fortalecer a los servicios públicos prestados en aras de obtener en todo momento el Bien General y protección de los intereses de todos.

Por estas razones no podemos más que estar a favor de elementos fundamentales para garantizar los derechos de manera apropiada. La transparencia es un tema central para nuestra Nación, tema indispensable tanto para el manejo de los recursos, como para alcanzar la equidad en la relación jurídica..

Ya se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, "En Materia de Información en Salud", la cual tiene por objeto establecer los criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difundir la información en salud, y a pesar de que se dirige principalmente a la cobertura, recursos disponibles, servicios otorgados, daños a la salud y evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud, es un primer e importante paso para lo referente a población.

Es un principio básico de para todas las instituciones de gobierno, extender la obligatoriedad de la rendición de cuentas a todas aquellas personas que reciben y ejercen recursos públicos y en este caso en particular, comprobación, control y vigilancia de las personas beneficiarias de los servicios de salud.

Debido a un mal manejo del padrón de beneficiarios y a que la autorización de recursos por dicha información emitida en su momento por la CNPSS depende del envío de recursos, se afecta, el registro de los ingresos en el ejercicio y en consecuencia los documentos locales no refleja con precisión la situación financiera.

El hecho de captar, integrar, procesar, sistematizar, evaluar un padrón de beneficiarios creará un sistema de información que consiga homologar esfuerzos y obligaciones de transparencia, al mismo tiempo que se garantiza el ejercicio del derecho de salud y el desarrollo del país.

Identificar a la población afiliada mediante un registro único es lo único que actualmente nos puede ayudar a obtener estimaciones de población beneficiaria, en cuanto a su volumen, estructura y distribución en el territorio nacional, que hasta ahora no hemos logrado obtener.

La integración con una plataforma informática para la construcción de un padrón con las características requeridas y la recuperación e integración de información estadística y cartográfica.

De llevarse a cabo la propuesta que actualmente presento, se estaría llevando a cabo la primera la primera norma de padrón de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud que proporcionen servicios de atención a la salud.

Dicha propuesta permitiría contar con un sistema único, oportuno e integrador de los datos de afiliados para conformar un sistema de salud universal y equitativo, de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo.

La estrategia consiste en derogar las disposiciones de los demás Institutos en salud que les permitan llevar a cabo sus propias reglas sobre integración y administración de un padrón propio. Únicamente existirá un solo padrón General con validez en las dependencias, entidades o instituciones públicas o sociales para cualquier trámite relacionado con la atención médica y preventiva.

La obligación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud se referirá a generar una lista previa de sus afiliados e inscribirla ellos mismos al Padrón General de Beneficiarios ante las unidades administrativas que para el efecto se constituyan.

Esto permitirá que los usuarios no tengan que pasar por cansados y amplios trámites burocráticos de una instancia a otra, de esta manera podremos garantizarles un cambio que no lo sientan ni en su bolsillo ni en mayores tiempos perdidos.

La nueva propuesta se ocupa de proteger los documentos, datos e informes que se proporcionen al Padrón General, obligando a que sean estrictamente confidenciales y no puedan comunicarse o darse a conocer.

Un asunto importante es que el Padrón General de Beneficiarios se cotejará con el último censo general de población, garantizando la vigilancia y detección de índices de colisión entre distintas Entidades Federativas o en una misma.

Se les otorgará a los beneficiarios de una credencial para acudir a las unidades administrativas de su entidad y asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo, así como tomar su fotografía.

El Aseguramiento Universal es un nuevo derecho a la atención en salud que necesita de este tipo de reformas para obtener calidad y oportunidad, no debemos descuidar la atención que se le provea a la población, mucho más en tiempos como los que actualmente vivimos.

De esa manera lograremos integrar la información concerniente a personas físicas, identificadas con un solo conjunto ordenado de datos personales que estarán en posesión de la Secretaría de Salud, sin intromisión a la autonomía de los demás institutos o de su forma de acceso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se reforman diversos artículos y se adiciona un Capítulo I Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. al **X.** ...

X. Establecer los lineamientos para la integración y administración de un padrón general de beneficiarios de las instituciones de los esquemas públicos y sociales de atención médica, así como garantizar su correcta unificación;

XI. Se Deroga;

...

B) Corresponde a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

II. Identificar e incorporar beneficiarios al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para lo cual ejercerá actividades de difusión y promoción, así como las correspondientes al proceso de incorporación, incluyendo la **integración de la lista previa de usuarios y su inscripción en el Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud**, conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría de Salud;

CAPITULO I BIS

Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salu

Artículo 12 Bis 1. Con la finalidad de contar con una relación nominal general que proporcione un padrón confiable que evite el índice de colisión en el número de afiliados que están o han estado en una o más instituciones de salud, se contará con un Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 12 Bis 2. El Padrón General de Beneficiarios tendrá plena validez en las dependencias, entidades o instituciones públicas o sociales para cualquier trámite relacionado con la atención médica y preventiva.

Artículo 12 Bis 3. La Secretaría de Salud contará con una unidad administrativa en cada entidad federativa que reciba y capture la solicitud de los establecimientos de salud públicos o sociales para la inscripción de usuarios en el Padrón General de Beneficiarios.

Artículo 12 Bis 4. Todas las personas deberán estar incorporarse a cualquiera de los esquemas públicos y sociales, mediante las modalidades que esta Ley señala y cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos.

Artículo 12 Bis 5. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud están obligados a generar la lista previa de sus afiliados e inscribirla al Padrón General de Beneficiarios ante las unidades administrativas que para el efecto se constituyan, así como a informar a la Secretaría de Salud de las bajas, dentro de los treinta días siguientes a que estas ocurran.

Los solicitantes contarán con quince días hábiles del mes posterior al que corresponda la brigada de afiliación y re afiliación correspondiente a cada instituto para la entrega de lista previa de sus nuevos afiliados y actualización de vigencias.

Artículo 12 Bis 6. Los documentos, datos e informes que se proporcionen al Padrón General, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el establecimiento de salud fuese parte.

Artículo 12 Bis 7. En el Padrón General de Beneficiarios deberá contener, al menos, la información básica de los usuarios además el domicilio del usuario, así como la de la dependencia y clave del programa de salud de la que es beneficiario y el establecimiento para la atención médica de adscripción.

En todos los casos se procurará establecer el mayor número de elementos para ubicar dicho beneficiario geográficamente.

Artículo 12 Bis 8. El Padrón General de Beneficiarios se cotejará con el último censo general de población, garantizando la vigilancia y detección de índices de colisión entre distintas Entidades Federativas o en una misma.

Artículo 12 Bis 9. En su caso, se requerirá al solicitante con los medios disponibles, comprobar que el número de personas afiliadas cumplen con los requisitos de incorporación al esquema público o social de atención médica.

De continuarse registrado un índice de colisión entre la institución solicitante con otras instituciones de atención médica o comprobándose que no se alcanzaron metas de para validar la información proporcionada por los titulares de incorporación, se le otorgará una prorroga de un mes para que corrija los datos de la solicitud.

Artículo 12 Bis 10. Formado el Padrón General de Beneficiarios a partir de la información básica recabada, se procederá al aviso de usuarios para la expedición de las credenciales de identificación oficial y personal.

Artículo 12 Bis 11. Para recibir su credencial el beneficiario deberá acudir a las unidades administrativas de su entidad y asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo, así como tomar su fotografía.

Artículo 12 Bis 12. El Padrón General de Beneficiarios quedará en poder y bajo custodia de los titulares y en caso de que sea menor de edad, estará en poder de los padres, tutores o responsables de su titular hasta en tanto éste alcance la mayoría de edad.

Artículo 12 Bis 13. La carencia temporal de inscripción de la lista recabada por los integrantes del Sistema Nacional de Salud, no será impedimento para otorgar asistencia médica a sus beneficiarios.

Artículo 12 Bis 14. Una vez declarado el cierre oficial de registro del Padrón General de Beneficiarios, se procederá a establecer mecanismos para espaldar o actualizar la información, así como adoptar medidas de resguardo para preservar el récord histórico por cada periodo.

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, una vez que haya sido cotejada correctamente en el Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal. La cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el índice Nacional de Precios al Consumidor.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 8 y se derogan los artículos Transitorios Tercer y Vigésimo Sexto de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos.

Artículo Transitorio Tercero. Se Deroga.

Artículo Transitorio Vigésimo Sexto. Se Deroga.

Artículo Tercero. Se deroga el artículo 9 y el artículo Trigésimo Segundo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 9. Se Deroga.

Artículo Transitorio Trigésimo Segundo. Se Deroga.

TRANSITORIOS

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se expidan las disposiciones administrativas derivadas de esta Ley para el diseño y elaboración del Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, seguirán en vigor las que rigen actualmente la emisión de los documentos de identificación, en lo que no la contravengan.

Tercero. La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de los lineamientos del Padrón General de Beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, promoverá ante los demás integrantes del Sistema Nacional de Salud facilidades para que entreguen las listas de beneficiarios que les correspondan para conformar el Padrón General de Beneficiarios.

Cuarto. La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y teniendo debidamente integrada la información señalada en el Artículo Transitorio Tercero, deberá hacer entrega de las credenciales a las que se refiere el artículo 12 Bis 10.

SUSCRIBE

SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS

DE LOS SENADORES ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ROMO MEDINA, ROBERTO GIL ZUARTH, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MANUEL CAMACHO SOLÍS, ENRIQUE BURGOS GARCÍA Y MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUJETO A COLEGIACIÓN Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIAS.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Senador Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Senadores
LXII Legislatura

P R E S E N T E

Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Roberto Gil Zuarth, Angélica de la Peña Gómez, Manuel Camacho Solís, Enrique Burgos García y María Cristina Díaz Salazar, Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la **Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias**, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La regulación de las profesiones en general y del ejercicio de las mismas en particular ha sido tradicionalmente limitada y escasa. Era necesaria una revisión profunda del papel que se le debe reconocer al ejercicio profesional en el buen funcionamiento del Estado para proceder a regular dicho ejercicio en los términos de dignidad y respeto que las profesiones merecen y requieren.

Si bien la legislación estatal mantiene algunos elementos de uniformidad, hay aspectos en donde las diferencias son importantes. Específicamente en el papel que se les confiere a los Colegios de Profesionistas en el control ético y desarrollo profesional y de actualización de sus agremiados. La uniformización de la legislación de profesiones o en su caso la expedición de una ley general de profesiones era recomendable.

Las condiciones generales de admisión al ejercicio de una profesión deben atender a cuestiones tanto de ética, honorabilidad y probidad como de aptitud técnica para su desempeño.

No todas las leyes de profesiones obligan actualmente a los Colegios de Profesionistas a contar con un Código de Ética Profesional, el contar con él es en ciertos Estados optativo y

Página 1 de 65

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

no se incluye la obligación de crear órganos colegiales que conozcan de las faltas al código ético respectivo. En algunos Estados sí existe la exigencia, en otros ni siquiera se menciona la posibilidad de contar con él. Esta es una falla grave que debe corregirse exigiéndose a los Colegios Profesionales la adopción de un Código de Ética Profesional adecuado y un órgano de control específico.

Por su parte, el correcto desempeño técnico de la mayoría de las actividades profesionales, bajo la normatividad actual, es un acto meramente voluntario. En efecto, salvo algunas excepciones muy destacables, que la propia Ley reconoce, en la gran mayoría de las profesiones no existe mecanismo alguno que permita tener la razonable tranquilidad de que los profesionistas cuentan con las competencias mínimas requeridas para su ejercicio.

La aprobación de la reforma constitucional que restablece la colegiación y determina la certificación obligatorias para ciertas actividades profesionales, modificando para ello, los artículos 5, 28 y 73 constitucionales, el Constituyente Permanente ha otorgado un mandato expreso al Congreso de la Unión para expedir las leyes a que se refieren los párrafos tercero y cuarto del artículo 5° constitucional, así como para establecer la concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en dicha materia. La presente *Ley General para el Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias* (la "Ley", o la "Ley General") constituye el paso indispensable para el cabal cumplimiento de dicho mandato[1].

Siendo una ley general, el objetivo fundamental de la misma es doble: por un lado, establecer los requerimientos mínimos que deben observarse en todo el territorio nacional, y tanto en la jurisdicción federal como en la del Distrito Federal y los Estados, para el válido ejercicio de las actividades profesionales materia de regulación y, por otra parte, distribuir las competencias entre la Federación y las Entidades Federativas, reservando a éstas ciertas facultades o poderes que terminarán de completar el régimen regulatorio de las actividades profesionales materia de la Ley, de acuerdo con las realidades existentes en sus respectivas jurisdicciones.

[1] Otros pasos adicionales que convendrá valorar una vez que se encuentre en plena operación el modelo de colegiación y certificación obligatorias contenido en la Ley General, será elevar la especificidad de los requerimientos para el ejercicio de cada una de las actividades profesionales materia de dicho modelo, a través de la expedición de leyes generales para cada una de tales actividades profesionales.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Disposiciones Generales

Bajo esta lógica, y siguiendo el mandato constitucional, la Ley General establece los lineamientos generales para la precisa identificación de las actividades profesionales sujetas a regulación (sólo algunas "actividades" dentro de una "Profesión", pero no necesariamente la "profesión" entera, en todos los casos), señalando, con toda claridad, que lo serán aquellas que guarden relación con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas, entre las que sin lugar a dudas deberá incluirse aquellas que se desarrollen dentro de las áreas profesionales de las medicina y ciencias de las salud en general, el derecho, la ingeniería en sus diversas modalidades, la arquitectura y la contaduría, entre otras.

Sin embargo, a efecto de garantizar la adaptabilidad de la Ley a los cambios que trae consigo la evolución de la ciencia y de la tecnología, cuyos resultados son siempre desconocidos de antemano o de muy difícil anticipación, la Ley General crea un nuevo órgano administrativo, denominado Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales, al que atribuye la función de crear y mantener actualizado el Catálogo General de Actividades Profesionales sujetas a colegiación y certificación obligatorias, lo que deberá realizar siempre con base en los lineamientos contenidos en el artículo 5 de la Ley.

Al respecto, la Ley recuerda un importante precedente del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación (P.XXI/2003), que ha establecido la constitucionalidad de las cláusulas habilitantes ahí donde, como es el caso, hay necesidad de hacer frente a situaciones dinámicas y de alta especialización. Al día de hoy, la dinámica de la educación, el muy numeroso espectro de actividades profesionales y la necesidad de precisar cuáles de ellas requieren de la regulación propuesta hace inviable la determinación legislativa, pues además de la complejidad técnica que ello conlleva, de hacerse, quedaría obsoleta en muy corto tiempo, impidiendo el cumplimiento de las finalidades de la regulación. Por tal razón, permitir esa determinación con base en los análisis y recabando las opiniones conducentes de los especialistas, permitirá la permanente actualización de las actividades sujetas a regulación.

El precedente mencionado dice lo siguiente:

> CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS. En los últimos años, el Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que ha provocado transformaciones en su estructura y

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo de atribuciones de naturaleza normativa para que aquél enfrente eficazmente situaciones dinámicas y altamente especializadas. Esta situación ha generado el establecimiento de mecanismos reguladores denominados "cláusulas habilitantes", que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el hecho de que el Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente de la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad pública, al estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser reguladas, adquiere información y experiencia que debe aprovechar para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez. Además, la adopción de esas cláusulas tiene por efecto esencial un fenómeno de ampliación de las atribuciones conferidas a la administración y demás órganos del Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de un marco definido de acción, susceptible de control a través del principio de legalidad; en la inteligencia de que el establecimiento de dicha habilitación normativa debe realizarse en atención a un equilibrio en el cual se considere el riesgo de establecer disposiciones que podrían propiciar la arbitrariedad, como generar situaciones donde sea imposible ejercer el control estatal por falta de regulación adecuada, lo que podría ocurrir de exigirse que ciertos aspectos dinámicos se normen a través de una ley.

Con esa base, la Ley General adopta un modelo flexible que permitirá la constante actualización del sistema de regulación, en función de la evolución histórica, garantizando, con ello, que todas aquellas actividades que son o deben ser consideradas de interés público (ya por la materia a la que se refieren, ya por el impacto que causan en la sociedad), sean, siempre sujetas de control por parte de la sociedad en su conjunto, a través de los mecanismos de colegiación y certificación profesionales. Ahora bien, para asegurarse de que la actuación de la Comisión Interinstitucional se corresponda, en esta materia, con la realidad histórica en cada momento, la Ley, en su artículo 15, establece mecanismos de acceso para que tanto las instituciones de educación superior como las autoridades públicas y otros sujetos interesados, puedan poner en operación el procedimiento tendiente a modificar el Catálogo General de Actividades Profesionales. Con ello, se respeta el espíritu democrático que informa éste y todos los demás aspectos materia de la Ley.

Como consecuencia de ello, y a efecto de materializar el contenido de los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 constitucional, la Ley General dispone, en su artículo 5, que sólo los profesionistas que cuenten con título profesional válido, cédula profesional y, además, constancias de colegiación y certificación profesionales podrán ejercer las actividades materia de la Ley. Para dotar de efectividad a dicha disposición, la Ley faculta a las

autoridades para no autorizar, suspender, inhabilitar o impedir el ejercicio de cualquier actividad profesional, o de cualesquier facultad o función otorgada a los particulares por virtud de la propia Ley, cuando el sujeto correspondiente no cumpla con los requisitos establecidos ahí mismo. Así, la correcta operación de la ley, y la salvaguarda de los bienes que pretende proteger, es una misión compartida entre los particulares y todas las autoridades quienes, naturalmente, serán sujetos de responsabilidad en caso de no actuar a la altura de las exigencias que la correcta y armónica vida en sociedad, por lo que toca al ejercicio liberal de las profesiones de interés público, traen consigo.

Debe destacarse que, siendo de tal envergadura los valores protegidos mediante los requisitos de colegiación y certificación profesionales, la Ley extiende las obligaciones correlativas incluso a los profesionistas extranjeros que deseen ejercer en nuestro país, alguna de las actividades materia de regulación.

En el propio Título I, la Ley General define ciertos conceptos de fundamental importancia para la correcta operación de sus disposiciones, que el intérprete (profesionistas, litigantes, jueces, autoridades públicas, etc.), no debe pasar por alto a efecto de entender y desentrañar a cabalidad la razón de ser de las normas contenidas en la Ley General.

Finalmente, en esa misma sección de la Ley, se dispone que las normas supletorias para su correcta operación lo serán, conforme a su naturaleza, la Ley General de Educación, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Penal Federal. Ello no debe confundirse con la normatividad secundaria estatal (leyes, reglamentos u otro tipo de normas) que las Entidades Federativas deben poner en operación en términos de la Ley General y que, acaso, tengan también, respecto de sí mismas, ciertas reglas de supletoriedad.

De las Autoridades Competentes y de las Instituciones vinculadas a la Colegiación y Certificación Obligatorias

En el Título II de la Ley, denominado "De las Autoridades Competentes y de las Instituciones Vinculadas a la Colegiación y Certificación Obligatorias", se contienen cuatro temas fundamentales: (i) la creación del Sistema Nacional de Profesiones, (ii) la distribución de competencias entre la Federación y las Entidades Federativas, (iii) la creación de la Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales, y (iv) la creación del denominado Registro Nacional de Actividades Profesionales.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

El Sistema Nacional de Profesiones se integra por aquellas personas físicas y morales, públicas o particulares, vinculadas con el ejercicio de las actividades profesionales sujetas a colegiación y certificación profesionales.

Un reto de especial importancia que la Ley afronta es encontrar el justo balance entre las potestades federales y aquellas que deban reservarse a las Entidades Federativas. Enmarcada en la tradición de reserva estadual de nuestra Constitución, pero cumpliendo cabalmente con el mandato textual e implícito derivado de las reformas a la Carta Magna que dan razón de ser a la Ley General, el artículo 12 distribuye las competencias en tres grandes categorías: aquellas que le corresponden al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, aquellas otras que le corresponden a la Procuraduría General de la República y, finalmente, las que se atribuyen a las Entidades Federativas.

Siendo una Ley General, los poderes federales tienen por función establecer los principios mínimos que deben cumplirse en todo el país, y en todas las jurisdicciones, incluido el ámbito municipal, y a eso se refieren, por tanto, los demás títulos de la Ley General. Pero la federación no podría, sin invadir injustificadamente los sanos límites del federalismo, arrogarse de facultades regulatorias sobre temas que nadie conoce o puede conocer mejor que las autoridades locales, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Así, por ejemplo, el número mínimo de profesionistas que deba existir para que a una determinada agrupación profesional se le reconozca el carácter de Colegio de Profesionistas, dentro de un determinado Entidad Federativa, es algo que sólo las autoridades locales podrían ponderar con conocimiento de causa. De manera intuitiva se podría asumir, por ejemplo, que el número de abogados o de médicos en el Distrito Federal es por mucho superior al que existe en los estados con menor población total como, por ejemplo, Baja California Sur. Y, en actividades profesionales menos concentradas, como, por ejemplo, la realizada por los pilotos aviadores, la desproporción entre una región y otra del país es todavía mayor. Por tanto, la Ley General dispone que las autoridades de las Entidades Federativas, en el prudente arbitrio de sus facultades locales, sean las que determinen el número mínimo de integrantes por cada Colegio de Profesionistas.

Del mismo modo, los costos de operación de las instituciones, así como los costos de vida, no son los mismos en las diferentes regiones del país. Por eso, la Ley General dispone que las cuotas ordinarias que cobre cada Colegio de Profesionista deberá ser decidido por la normatividad expedida por las Entidades Federativas.

Por otra parte, la Ley General también atribuye a las autoridades de los Estados y del



Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Distrito Federal la responsabilidad de supervisar la correcta operación de los principios, requisitos y procedimientos establecidos en la misma, dentro de sus respectivas jurisdicciones e, incluso, la potestad de tipificar como delictivas, en el ámbito local, las conductas que a su juicio y con relación al ejercicio profesional de las actividades sujetas a regulación, causen especial daño en un sitio determinado.

Del mismo modo, la Ley General dispone que la normatividad local creará los denominados "Consejos Estatales de Actividad Profesional" que se conciben como los órganos que agrupen a los diversos Colegios de profesionistas que, por cada actividad profesional, operen en cada jurisdicción. Ello tiene por propósito fomentar dinámicas de comunicación institucional que faciliten el intercambio de opiniones y la contribución conjunta a la mejora constante del ejercicio profesional, en beneficio siempre del público usuario de los servicios.

Los Colegios de Profesionistas, por su parte, según indica el artículo 11, son erigidos como coadyuvantes de todas las autoridades públicas para la correcta operación de la Ley. Ello significa abandonar completamente la idea de los colegios como agrupaciones privadas o particulares meramente voluntarias, y reinstaurar en México la figura de cuerpos intermedios a los que los profesionistas estén obligados a incorporarse y que, junto con el Estado, sean corresponsables de velar por la armonía social, en lo que al ejercicio liberal de ciertas actividades se refiere. De ahí también que la regulación de los Colegios de Profesionistas contenida en la Ley sea tan estricta.

Naturalmente, ello no pretende en modo alguno ser un obstáculo para sigan existiendo tantas organizaciones voluntarias que agrupen a profesionistas cuantas se deseen, y que tengan fines académicos o sociales, pero tales agrupaciones no serán Colegios, para los propósitos perseguidos en la Ley.

Tal como se anticipó líneas arriba, la Ley General crea a la Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales (la "Comisión" o la "Comisión Interinstitucional"), regulando a detalle su naturaleza y funciones entre los artículos 13 y 21 de la Ley. Como se puede apreciar en dichos artículos, la Comisión es un órgano técnico. Esto quiere decir que su función es absolutamente apolítica, lo que tiene una especial relevancia en el cumplimiento de sus funciones, que siempre ha de estar inspirado en la protección máxima del interés público. Ello es de especialísima relevancia si se toma en cuenta que la referida Comisión tiene la doble función de (i) identificar y mantener actualizado el catálogo de actividades profesionales sujetas a colegiación y certificación obligatorias y (ii) el de regular, autorizar y revocar las autorizaciones a los Entes

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Certificadores.

Pues bien, al integrar una nueva actividad a dicho catálogo, o al autorizar la operación de un Ente Certificador, por ejemplo, la Comisión debe atender a principios exclusivamente técnicos y científicos, procurando en todo momento que sus decisiones se ajusten al mandato último de facilitar la armoniosa vida en sociedad por lo que toca al ejercicio de ciertas profesiones liberales, teniendo siempre como faro de referencia la mejor y mayor protección del público usuario de los servicios profesionales.

Ahora, para facilitar la operación de la Ley, y el correcto cumplimiento de las obligaciones atribuidas a las Comisión, sin crear más cuerpos burocráticos de manera innecesaria, la Ley General dispone que la Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Profesiones será su Secretaría Técnica, para instruir los procedimientos y para ejecutar sus decisiones. Por ello, a la Secretaría de Educación Pública Federal, en términos de los artículos transitorios, deberá dotársele de los recursos materiales y humanos necesarios, a fin de que los propósitos perseguidos con la reforma constitucional no se vean frustrados por la deficiente implementación operativa. Esto es de fundamental importancia, y debe ser puntualmente acatado por todas las autoridades.

Junto con ello, y para garantizar el más alto nivel de competencia técnica, la imparcialidad y objetividad en sus decisiones, la Ley prevé que, por lo que corresponde a la autorización para operar como Ente Certificador, la Comisión debe designar comités técnicos *ad hoc*, formados por cinco especialistas, propuestos de manear democrática y abierta, y que serán ellos los que dictaminen sobre la idoneidad del candidato. Ello pretende contribuir a que la decisión correspondiente se aleje de criterios indebidos, de corte político o de otra índole, y se base exclusivamente en el aspecto técnico y científico. Pero, adicionalmente, y para combatir la parálisis procedimental, el artículo 18 contempla la afirmativa ficta después de transcurridos seis meses, sin perjuicio de que los integrantes de la Comisión o del comité *ad hoc* puedan ser sujetos de responsabilidad civil, administrativa o penal, en su caso.

Finalmente, para garantizar que los Entes Certificadores mantengan de manera constante los más altos niveles de competencia técnica, la Ley limita la temporalidad de la validez de la constancia de idoneidad a cinco años. Transcurrido dicho plazo, la institución correspondiente tendrá que someterse nuevamente al escrutinio de la Comisión Interinstitucional quien no sólo velará porque el ente en cuestión siga cumpliendo con los requisitos técnicos inicialmente ponderados, sino también aquellos nuevos elementos que, con el trascurso del tiempo, se juzgue oportuno incluir a efecto de que los Entes Certificadores se encuentren siempre a la vanguardia de la evolución técnica y científica.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Como puede verse, el diseño estructural y operativo de la Comisión está pensado para garantizar al máximo posible que tanto la identificación de las actividades sujetas a regulación, como las dinámicas de certificación, se correspondan con estándares de objetividad, imparcialidad, bien común e interés público, puesto que no deja de reconocerse que la limitación al libre ejercicio de la industria sólo es jurídica y éticamente justificable cuando frente al derecho individual de las personas naturales para dedicarse a la industria o comercio que deseen, emerge el bien superior de la sociedad en su conjunto cuyos valores fundamentales (individuales y colectivos) deben ser protegidos aún en sacrificio del derecho individual. Es este el correcto y único sentido en que puede y debe ponderarse la interacción entre dos bienes o derechos que aparentemente entran en conflicto, pero que, en realidad, se complementan. La protección de la familia, de la integridad física, de los ahorros del ciudadano, su seguridad jurídica y personal o de su salud, por ejemplo, son, indudablemente, bienes indispensables para la armoniosa realización de la vida en sociedad y, por ello, es jurídica y éticamente válido que a los profesionistas que tienen en sus manos dichos valores, se les someta a un régimen de control especial.

La Comisión, y los comités *ad hoc*, por tanto, jamás han de perder de vista que su función es de la más alta trascendencia y que, por ello, su actuar debe ser siempre transparente, sólido, serio, verificable y responsable. Y en ello, tanto cuanto en la gestión diaria de sus operaciones, habrá de profundizar el Reglamento de la Comisión que debe expedirse en el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

En el mismo Título II de la Ley se crea un Registro Nacional de Actividades Profesionales como el mecanismo de centralización de toda la información necesaria para el correcto control técnico y ético de las actividades profesionales materia de regulación.

El Registro, que será alojado al seno de la Dirección General de Profesiones, es una institución pública, cuyos registros son públicos y, por tanto, de acceso libre para cualquier interesado, puesto que sólo así se puede lograr el control horizontal, tanto como vertical, de los profesionistas.

Por ello, todas las instituciones sujetas de la Ley (incluyendo Colegios de Profesionistas, Entes Certificadores, los profesionistas mismos, las autoridades de las Entidades Federativas equivalentes a la Dirección General de Profesiones, así como las universidades y otras instituciones autorizadas para expedir títulos universitarios, entre otros), están obligados a proporcionar al Registro la información que sea relevante para la correcta operación de la Ley con toda prontitud, es decir, tan pronto como se genere dicha

información. Para ello, no han de esperar a ser requeridas por el Registro, sino que deben actuar motu proprio, sabedoras de que, en caso contrario, el daño potencial que se genera al público usuario de los servicios es de enormes proporciones.

A fin de abonar en la lógica de distribución de competencias, la Ley prevé que por lo que toca a los Colegios de Profesionistas de jurisdicción estatal, serán las autoridades de las Entidades Federativas equivalentes a la Dirección General de Profesiones las encargadas de procesar toda la información pertinente, remitiéndola inmediatamente al Registro, con lo que se facilita la operación de dichos Colegios o de los profesionistas ahí agrupados, lo mismo que de las universidades y otras instituciones de educación superior con sede en la Entidad Federativa correspondiente.

Por tanto, junto con el Reglamento de esta Ley, las autoridades federales competentes, lo mismo que las de las Entidades Federativas, deberán expedir la normatividad necesaria para la correcta, oportuna, efectiva y eficiente operación del Registro, incluyendo los canales de comunicación institucionales, los sistemas de tecnologías de la información y cuantos otros recursos materiales y/o humanos se requieran.

De la Colegiación Obligatoria

El título III de la Ley se refiere a la Colegiación Obligatoria, regulándose de manera prolija la naturaleza y funciones de los referidos colegios, así como los derechos y obligaciones de los profesionistas colegiados.

En consonancia con el texto constitucional, se reafirma que los Colegios de Profesionistas son instituciones privadas de interés público y que tienen por propósito coadyuvar con las autoridades públicas en la mejora y vigilancia de las actividades profesionales materia de la ley.

Con ello, se reivindica la función esencial de toda agrupación profesional, que alguna vez estuvo presente en México: la de apoyar al Estado en su tarea de velar porque las actividades profesionales en ciertas áreas se desahoguen con los más altos estándares de calidad técnica y bajo los más estrictos controles éticos. Pero, además, se reafirma que la colegiación es un medio que garantiza la independencia y protección de los derechos de los profesionistas así como el acceso a los servicios por parte de los más desfavorecidos (a través del servicio social profesional). Del mismo modo, el diseño estructural previsto en la

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Ley General garantiza que los profesionistas no sean objeto de decisiones arbitrarias por parte de las directivas de los Colegios, puesto que siempre serán revisables ante las autoridades competentes aquellas que impliquen afectación a sus derechos de ejercicio profesional, al mismo tiempo que reconoce que no hay mejor manera, según la experiencia comparada, que dejar en manos de los pares la supervisión sobre la conducta digna de los propios pares.

En esta última materia, la del control ético, la Ley incluye los elementos mínimos de normatividad sustantiva que debe regir el desempeño de los profesionistas, ordenando que los Colegios elaboren y amplíen su contenido. Al mismo tiempo, dispone que todo Colegio deberá contar con un órgano de control ético, lo que constituye una verdadera novedad, largamente necesitada: dotar a las normas éticas de mecanismos de coercibilidad real para que lejos de ser meros postulados de principio, se conviertan, realmente, en directrices que guíen la manera en que los profesionistas se comportan, frente a los usuarios, frente a las autoridades, frente a los colegas, y frente a la sociedad en general, de modo que, en caso de deshonrar los cánones que rigen su profesión, dichos profesionistas sean sometidos a sanciones reales que pueden incluso llegar hasta la inhabilitación permanente.

Debe destacarse que la regulación ética que ejercerán los Colegios de Profesionistas, en coadyuvancia con las autoridades competentes, no es excluyente de la regulación civil o penal, y de las correspondientes sanciones que puedan imponerse en tales ámbitos, a que estén sujetos los profesionistas, sino que se trata de esferas competenciales distintas.

Ahora bien, la colegiación implica muchas cosas más, y por tanto, son muchas más las funciones atribuidas a los Colegios. De fundamental importancia está la supervisión técnica y el control administrativo de los colegiados.

Así, será el Colegio de Profesionistas al que libremente se haya incorporado un profesionista, el encargado de aplicar el examen de acceso a la profesión, y de inscribir, en el expediente individualizado que al efecto lleve, todos los registros pertinentes en materia de certificación profesional, debiendo en todo momento transmitir dicha información al Registro y compartirla con cualquier interesado que así lo solicite, puesto que los Colegios deben en todo tiempo actuar de acuerdo con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Por la misma razón, los Colegios estarán siempre obligados a las disposiciones derivadas de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás normas aplicables en la materia.

Ahora bien, la Ley dispone que por cada Entidad Federativa habrá hasta un máximo de

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

cinco Colegios de Profesionistas por cada actividad profesional regulada. La razón para ello es doble: por un lado, resulta poco plausible que las autoridades competentes pudieran ejercer a plenitud sus obligaciones de supervisión y control, si el número de colegios se deja abierto; por otra parte, se pretende que dicho esquema incentive la sana competencia entre los colegios autorizados, con lo que se incrementen los estándares de calidad para la membresía y para la protección del público usuario.

La contrapartida de ello radica en que, lo mismo que sucede con los Entes Certificadores, la autorización para operar como Colegio de Profesionistas tendrá una validez de cinco años, al término de los cuales se deberá verificar, por parte de la autoridad competente, si el Colegio sigue cumpliendo con los requisitos de operación establecidos den la Ley y en aquellos adicionales que de manera posterior, en la normatividad aplicable, se hayan incorporado.

En caso de que no sea así, su lugar quedará vacante, sus miembros habrán de inscribirse a cualquier otro Colegio, y cualquiera otra institución que estén interesada en recibir la autorización para operar como Colegio, y que cumpla con todos los requisitos, ocupará su lugar. Con ello, se fomenta y garantiza el acceso democrático e igualitario a las funciones ejercidas por los Colegios.

Una disposición de fundamental relevancia contenida en la Ley es la contenida en el artículo 48, que dispone que sólo podrá ostentarse como "Colegio" aquella asociación que haya obtenido su registro correspondiente de conformidad con la Ley General y las demás normas aplicables, con lo que se pretende distinguir a esta categoría de instituciones que, como se ha dicho, son de interés público, respecto de cualquiera otra asociación profesional que libremente pueda formarse pero que no tendrá tal carácter. Así, se salvaguarda el derecho a la libre asociación para cualquier otro fin lícito, y se evita la confusión en el público usuario de los servicios regulados por la Ley.

Naturalmente, en esta y en cualquiera otra materia, las autoridades competentes habrán de tomar sus decisiones con base en criterios estrictamente técnicos y operativos, y se abstendrán de incluir cualquier consideración de índole política, religiosa o que se aleje de la función que corresponde a los Colegios de Profesionistas, según la letra y el espíritu de la reforma constitucional y la Ley General.

Ahora bien, en tanto que se trata de una materia concurrente entre la Federación y las Entidades Federativas, la Ley prevé que los Colegios de jurisdicción local deberán cumplir no sólo con los mínimos indispensables establecidos en la Ley General, sino también con

aquellos otros requisitos que se deriven de las normas locales que los rijan, si el caso fuera que las autoridades locales competentes hubieren estimado incluir requisitos adicionales a los establecidos en esta Ley General.

Debe destacarse que es el profesionista individual el que libremente decidirá a qué Colegio desea pertenecer, y mantendrá, en todo momento, la potestad para cambiarse de Colegio, si así lo desea. Con ello se pretende subrayar el carácter de mínima afectación al ejercicio liberal de las profesiones, es decir, que el Estado debe salvaguardar tanto cuanto sea posible el derecho individual, restringiéndolo sólo en la medida en que lo exija el bien común.

Por otra parte, la Ley General determina que los Colegios podrán integrarse, en calidad de no ejercientes, aquellos profesionistas que no ejerzan su profesión ante autoridades de la federación, de las entidades federativas o de los municipios. Con ello se pretende extender la protección que la Colegiación trae consigo en favor de la actividad profesional en su plenitud. Así, se abre la puerta a la academia, a la judicatura y a otras categorías semejantes, que también conviene incluir bajo el amparo de los Colegios de Profesionistas, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Naturalmente, las obligaciones colegiales para los no ejercientes, han de ser menores que aquellas que pesan sobre el colegiado ordinario, más no así las funciones de protección que el Colegio debe cumplir en favor de toda su membrecía, cualquiera que sea su condición.

A efecto de reconocer las realidades existentes en nuestro país, y con el propósito de facilitar la creación de voces unificadas, si así se estimara pertinente, la Ley incluye una categoría de colegios denominados "nacionales", con reglas especiales, y distintas a las de los colegios de jurisdicción local.

Los colegios nacionales, para ser tales, han de cumplir requisitos mayores. Uno de ellos es el del número mínimo de miembros, que la Ley determina en trescientos. La inclusión de dicha cifra descansa en los datos empíricos sobre los colegios u organizaciones profesionales que actualmente operan, bajo esquemas voluntarios, de los que se desprende que una cifra mayor resultaría poco asequible en función del número total de profesionistas en las distintas actividades, y que un número menor resultaría poco prudente para los efectos de atribuirle la categoría de "nacional" al colegio correspondiente.

Otro requisito impuesto a los colegios nacionales es el de que deberán acreditar que sus miembros tienen su domicilio fiscal en cuando menos la mitad más uno de las jurisdicciones locales (de los Estados y el Distrito Federal) del país. Ello, con el propósito de garantizar que, en efecto, se trate de organizaciones que cuentan con una presencia

geográfica razonable de manera permanente y no sólo transitoria.

Finalmente, en el caso de los Colegios nacionales, la Ley determina que las cuotas que hayan de cobrar a sus miembros no deberán ser menores al equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ni mayores a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. La razón de dichos límites radica, también, en los resultados arrojados por la investigación empírica que demuestran que esos son los montos razonablemente aceptables por aquellos profesionistas que, al día de hoy, son miembros de algún colegio o asociación voluntaria y, por otra parte, los suficientes para sufragar los gastos ordinarios de operación.

En otra guisa, y a efecto de garantizar uniformidad en la operación de la Ley, y en la protección de los intereses del público usuario de los servicios profesionales, la Ley General establece criterios mínimos de organización que deben cumplir todos los colegios. No obstante, en términos del Título II, las autoridades estatales y del Distrito Federal conservarán la facultad de agregar nuevos requisitos, en caso de juzgarse conveniente, en función de las realidades existentes en sus respectivas jurisdicciones.

De la Certificación Profesional

En el Título IV se regula la Certificación Profesional, con la que el profesionista se somete a un proceso de evaluación para hacer constar públicamente que posee la experiencia, los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para el ejercicio de su profesión o especialidad, adquiridos ya sea en la práctica profesional o a través de educación continua, y que éstos se encuentran vigentes de acuerdo con el estado de la técnica en el momento de la certificación.

La certificación periódica y sin excepciones prevista en la Ley, complementa la labor que efectuarán los Colegios de Profesionistas en cuanto a la educación continua y el control ético de sus miembros, estableciendo un marco completo que trata de garantizar la calidad de los servicios profesionales.

Pero debe insistirse en que la educación continua es un elemento, esencial sin duda, pero sólo uno, en los procesos de certificación o recertificación. Y es que sin educación continua, no puede haber certeza de la competencia técnica. En efecto, los objetivos de la educación continua son: dar certeza a la sociedad de la calidad de los servicios

profesionales que recibe; garantizar la protección de la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas y propiciar la superación personal de los profesionistas. Pero, además, trae consigo una ventaja adicional: el reconocimiento profesional para efectos de movilidad internacional.

La Ley establece una vigencia máxima de cinco años como plazo para el periodo de certificación, permitiendo un plazo menor que pudiera ser adecuado para ciertas actividades profesionales que necesiten una actualización más constante, de acuerdo con criterios técnicos y científicos, lo que habrá de ser siempre considerado por la Comisión motu proprio o a propuesta de los Entes Certificadores u otros interesados.

Ahora bien, la Ley distingue entre el examen de acceso a la profesión y los mecanismos de certificación o recertificación posteriores. El examen de acceso se concibe como el instrumento de medición técnica cuya finalidad es uniformar, en todo el país, las competencias mínimas con las que debe contar un profesionista para empezar a ejercer la actividad de que se trate, y será administrado por el Colegio al que decida inscribirse. La certificación y la recertificación posteriores, por su parte, son los medios a través de los cuales el Estado garantiza que los profesionistas en activo siempre estarán actualizados en los avances técnicos y científicos de sus respectivas disciplinas.

Reconociendo las implicaciones de la Ley y del cambio de modelo operativo que ello supone para una realidad completamente desregulada, la Ley establece que la falta de acreditación por primera vez no traerá aparejada la suspensión en el ejercicio profesional, sino que permitirá volver a someterse al proceso de nuevo en el plazo de seis meses, plazo en el que se permitirá el ejercicio del profesional. No obstante, en el caso de que no se vuelva a acreditar, se suspenderá el ejercicio con la inscripción ante el Registro Nacional de Actividades Profesionales, imponiéndose un periodo de seis meses para poder volver a acreditar el proceso. Dicha suspensión, será supervisada en coadyuvancia con la autoridad, por los Colegios de Profesionistas.

Por otra parte, toda resolución del Ente Certificador será inscrita en el Registro Nacional de Actividades Profesionales para poder dar publicidad y transparencia tanto a la actividad del Ente como al estado del profesionista.

Adicionalmente, el procedimiento de certificación podrá ser iniciado a través del Colegio de Profesionistas al que se pertenezca, lo cual cumple una función de eliminación de trámites innecesarios así como para facilitar el flujo de información sobre el cumplimiento de las obligaciones éticas por parte del colegiado, no permitiéndose la certificación en caso

de existir una sanción vigente.

Los Entes Certificadores tendrán la forma de Asociaciones Civiles, siendo sus asociados personas físicas o morales de naturaleza privada. Se pretende evitar con esto un ánimo de lucro en las actividades de certificación de profesionistas, puesto que la finalidad de interés público que estos entes persiguen, es incompatible con actividad mercantil alguna. Lo Colegios de Profesionistas debidamente autorizados podrán certificar a su vez profesionistas con las debidas autorizaciones.

Los recursos humanos, físicos y económicos para establecerse como Ente Certificador se regulan de manera flexible, puesto que las necesidades de las diferentes actividades profesionales a ser certificadas requieren recursos diversos en torno a la alta especialización de cada una de ellas. Por esto, la Comisión Interinstitucional evaluará en cada caso y de acuerdo a cada actividad profesional si los recursos con los que cuenta cada propuesta son suficientes, adecuados y necesarios para el desarrollo de su actividad certificadora.

De extrema importancia es la obligatoriedad de establecer un número mínimo de procedimientos de certificación para garantizar tanto la calidad como los derechos de los profesionistas a mantener su actividad profesional. En caso de incumplimiento, la autorización del Ente Certificador será revocada.

Para el correcto funcionamiento y actualidad de los Entes Certificadores, se requiere una relación constante con los Colegios de Profesionistas. Esta relación constante debe impulsar la existencia de instrumentos de certificación idóneos para el ejercicio profesional, las obligaciones éticas de la actividad profesional y el estado del ejercicio de la misma. Para ello, los comités técnicos que desarrollen dichos instrumentos, deberán incluir a miembros de los Colegios de Profesionistas de las actividades que vayan a certificar. De esta manera, se garantizan procedimientos e instrumentos que tengan relevancia para el ejercicio de la profesión y no solo instrumentos teóricos que evalúen lo que no sea necesario para el ejercicio real de la actividad profesional de que se trate.

Finalmente, y según se había anticipado líneas arriba, la supervisión de los Entes Certificadores corresponderá a la Comisión Interinstitucional, la cual verificará tanto el primer establecimiento, como los procedimientos que vayan a aplicar para la certificación de los profesionistas, así como cualquier modificación en los mismos. Sobre las resoluciones de los Entes, se establecen medios de impugnación que permiten garantizar la correcta aplicación de los instrumentos y evitar arbitrariedades, de acuerdo con lo que más abajo se explica.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Responsabilidades y Sanciones

El Título V de la Ley General dota al régimen de colegiación y certificación obligatorias con instrumentos que garantizan el efectivo cumplimiento de sus postulados.

Así, se prevén sanciones específicas para todos aquellos sujetos que tengan algún grado de vinculación con la operación de la Ley, y que incumplan con sus obligaciones.

Así, por ejemplo, tanto las universidades que no se inscriban en el Registro, como los Colegios o los Entes Certificadores que incumplan con sus obligaciones, serán sancionados por la autoridad administrativa.

Pero, acaso el aspecto más destacable tiene que ver con que finalmente en México se contará con un verdadero control técnico y ético del ejercicio profesional que implique, incluso, la posibilidad de sancionar al individuo con la suspensión temporal o la cancelación definitiva de su ejercicio profesional. Ello, sin perjuicio y con total independencia de las sanciones penales o de otra índole que en su caso procedan, incluyendo el único delito especial tipificado en la propia Ley General, denominado "Ejercicio Indebido de las Actividades Profesionales", de aplicación por las autoridades judiciales federales, y que pretende servir como recurso último para normar la conducta de los profesionistas.

En este ejercicio de control, los Colegios y los Entes Certificadores juegan un papel fundamental, pero no único, ya que también interviene la autoridad pública y la sociedad en general (por ejemplo, a través de la acción contenida en el artículo 104 a todo interesado), y es precisamente así, mediante este sistema de pesos y contrapesos entre las entidades privadas de interés público, los interesados y las autoridades competentes, que la Ley garantiza la imparcialidad y la objetividad en la aplicación de las sanciones.

Medios de Impugnación

En el Titulo VI, la Ley General se ocupa de regular los medios y procedimientos de impugnación de todas las decisiones relevantes.

Al respecto, la Ley procura la mayor amplitud de defensa de los interesados, siguiendo las

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

bases que proporciona la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señalada incluso como ordenamiento supletorio, pero tratando de establecer las particularidades que propician los asuntos que son materia de la Ley. Todos los sujetos involucrados tendrán los medios legales para hacer valer sus derechos.

Respecto de los actos de los Colegios de Profesionistas la Ley procura, sin lesionar la autonomía que les corresponde, permitir también la defensa de los derechos de los profesionistas. Se establece así que aquellos actos que tengan trascendencia respecto del ejercicio profesional, sean materia de recurso ante la autoridad competente; de este modo, se busca un adecuado balance entre el ejercicio independiente de las facultades de los Colegios y su carácter de órganos de colaboración del poder público.

En el mismo sentido, se prevé la posibilidad de impugnación de los actos de los Entes Certificadores, especificando las modalidades respectivas.

Con todo ello se ha buscado dar a los actores una garantía de certeza e imparcialidad, al hacer intervenir a las autoridades en los casos de conflicto.

Disposiciones Transitorias

La Ley General, tanto como la reforma constitucional, constituyen un cambio de paradigmas cuya adecuada y plena operación requiere un sistema transicional sensato y prudente, que reconozca realidades existentes y procure la armonización bajo el amparo de los ideales que inspiran a la Ley en el menor tiempo posible, pero no por ello menos asertivo.

Con esto en mente, se ha establecido un régimen de transición propiciando el respeto de los derechos de aquellos colegios u organizaciones que al día de la entrada en vigor de la Ley hubieran realizado actividades reconocidas por la autoridad y demuestren cumplir con los requisitos fijados en ésta. Asimismo, con la finalidad de homologar el tratamiento, pero sin desconocer la realidad existente, se permite que aquellas otras organizaciones que sin tener el carácter formal de colegios hayan realizado funciones semejantes, bajo la vigencia de cualquier ordenamiento legal y con el reconocimiento de las autoridades, asuman el carácter de Colegios. Con el mismo propósito se establece también que aquellas organizaciones que no hubieren dado cumplimiento a los requisitos y no hubieren solicitado su inscripción en el registro dentro del plazo de diez años, dejarán de contar con el

reconocimiento que les hubiere sido conferido para los efectos de la certificación de profesionistas.

Por otra parte, tanto el reconocimiento de las instituciones que funcionen como entes certificadores antes del inicio de vigencia de la Ley General, como el de los programas de educación continua, deberán sujetarse a lo dispuesto por la nueva Ley, concediéndoseles un plazo razonable para tramitar su reconocimiento.

Ahora bien, el cumplimiento de la obligación de incorporación a los Colegios para aquellos profesionistas habilitados antes del inicio de vigencia contará con un plazo de diez años. Con ello, la Ley estima que se otorga un tiempo más que razonable para que dichos profesionistas tomen las provisiones necesarias.

En otra guisa, y a efecto de garantizar el acceso igualitario, los colegios cuya formación inicie después o a partir de la vigencia de la Ley contarán con un medio que asegure que la autoridad competente revisará pertinencia de su registro, en aquellos casos en que estuviera lleno el número de colegios correspondiente.

Ahora bien, en cuanto a los plazos para el establecimiento del Registro y la expedición de los lineamientos de aplicación de la Ley, lo mismo que las normas o leyes a nivel de las Entidades Federativas, las autoridades competentes contarán con el plazo de un año, disponiéndose que la Comisión Interinstitucional quede instalada dentro del plazo de tres meses, a fin de que el primer catálogo de actividades sujetas a regulación se emita en el plazo de un año, todo ello contado a partir del inicio de vigencia de la ley.

Del mismo modo, se prevé que, también, dentro del plazo de un año, las autoridades federales tomen las providencias necesarias para la asignación los recursos necesarios para la correcta operación de la Ley; en tanto que, para el caso de las autoridades de las Entidades Federativas, estas contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor de su respectiva normatividad local para también las asignaciones correspondientes.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Por lo expuesto, por el digno conducto de usted C. Presidente, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Senadores, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUJETO A COLEGIACIÓN Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIAS

ÚNICO. Se expide la **Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias**, para quedar como sigue:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único.- Ámbito de Aplicación y Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria del artículo 5o, párrafos tercero y cuarto, y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias, estableciendo sus bases y requisitos.

Artículo 2. La aplicación de la presente Ley corresponderá a las autoridades federales y de las entidades federativas, dentro de su ámbito de competencia en los términos que esta Ley determine.

Artículo 3. Es objeto de la Ley establecer y regular la colegiación y certificación obligatorias para el control de quienes ejerzan las Actividades Profesionales, a fin de garantizar que los servicios respectivos sean otorgados bajo estándares de calidad y en consonancia con las normas éticas aplicables en beneficio de los usuarios.

Artículo 4. La colegiación y certificación profesionales tienen por fines la protección del público usuario mediante la actualización de los conocimientos de los profesionistas; el control ético de su desempeño; la defensa de los derechos de los colegiados y en general, la contribución a la mejora científica, técnica y cultural de los profesionistas en beneficio de los usuarios y la sociedad en general, de conformidad con las normas de esta Ley.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 5. Serán actividades sujetas a colegiación obligatoria y certificación periódica las que determine la Comisión Interinstitucional, que guarden relación con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas.

La Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales será la autoridad competente para identificar y precisar las Actividades Profesionales específicas que serán sujetas a la colegiación y certificación obligatorias.

Para la determinación de las actividades a que se refieren los dos párrafos anteriores, la Comisión Interinstitucional tomará en consideración que las actividades correspondan a profesiones cuyos estudios requieran de reconocimiento de validez oficial y se desarrollen dentro de las áreas profesionales de la medicina y las ciencias de la salud en general; el derecho; la ingeniería en sus diversas modalidades; la arquitectura; y la contaduría; asimismo, cuando alguna otra ley disponga el ejercicio de alguna actividad profesional que deba ser objeto de regulación.

El Catálogo General de Actividades Profesionales deberá ser publicado anualmente y regirá indefinidamente hasta que, mediante determinación específica y atendiendo a los procedimientos dispuestos por esta ley, la propia Comisión Interinstitucional decida que la actividad deba dejar de ser regulada.

Artículo 6. Sólo las personas que cuenten con título profesional válido, cédula profesional y constancias de colegiación y de certificación podrán ejercer las Actividades Profesionales.

Las autoridades federales y las de las entidades federativas estarán facultadas para no autorizar, suspender, inhabilitar o impedir el ejercicio de cualquier Actividad Profesional o de cualesquier facultad o función otorgada a los particulares por virtud de esta Ley, cuando el sujeto correspondiente no cumpla con los requisitos establecidos por esta Ley.

Artículo 7. Son sujetos obligados:

a) Todos los profesionistas que cuenten con títulos profesionales y diplomas de especialidad expedidos legalmente; y que hubieren obtenido el título o diploma como requisito para la habilitación del ejercicio de las Actividades Profesionales.

b) Los profesionistas extranjeros cuyos títulos sean válidamente reconocidos en los Estados Unidos Mexicanos en virtud de las leyes, tratados y convenios

internacionales vigentes, y que deseen ejercer alguna de las Actividades Profesionales.

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

a) Actividad(es) Profesional(es).- La(s) actividad(es) profesional(es) sujeta(s) a colegiación y certificación obligatorias en los términos del artículo 5.
b) Catálogo General de Actividades Profesionales.- El catálogo o listado de Actividades Profesionales que será integrado y actualizado de manera periódica por la Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales.
c) Certificación Profesional.- Es un proceso mediante el cual un profesionista, que habiendo sido habilitado para el Ejercicio Profesional, se somete periódicamente a una evaluación previamente establecida por el Ente Certificador autorizado, para hacer constar públicamente que posee experiencia, conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de su profesión o especialidad, dentro de un marco de ética profesional.
d) Colegiación Obligatoria.- Es uno de los requisitos para el ejercicio de alguna de las Actividades Profesionales consistente en la incorporación de los profesionistas a algún Colegio de Profesionistas, en los términos establecidos por esta Ley.
e) Colegios de Profesionistas.- Las entidades privadas de interés público que agrupan, de manera no transitoria, a profesionistas individuales de una misma rama de actividad profesional, a efecto de coadyuvar en las funciones de mejoramiento y vigilancia del Ejercicio Profesional, ya sean que cuenten con autorización estatal o nacional.
f) Comisión Interinstitucional.- Es la Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales.
g) Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales.- Es el órgano administrativo encargado de identificar las Actividades Profesionales sujetas a colegiación y certificación obligatoria; así como de verificar que los Entes Certificadores cumplan con los requisitos para evaluar las capacidades, habilidades y destrezas de los profesionistas, y decidir sobre la idoneidad de dichos entes para el ejercicio de esta función.
h) Constancia de Certificación.- Es el documento expedido por el Ente Certificador que hace constar que un profesionista se encuentra adecuadamente certificado.
i) Constancia de Colegiación.- Es el documento expedido por el Colegio de Profesionistas que hace constar que un profesionista pertenece a dicho Colegio.
j) Dirección General de Profesiones.- Es el órgano interno de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, en los términos del artículo 21 y 22 de la

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Ley General de Educación.

k) Ejercicio Profesional.- La realización a título oneroso o gratuito de todo acto propio de las Actividades Profesionales.
l) Ente Certificador.- Asociación civil o Colegio de Profesionistas coadyuvante de la autoridad educativa, formado por pares expertos, especializados en la actividad profesional que corresponda.
m) Servicio Social Profesional.- Es el trabajo de índole social obligatorio, temporal y gratuito para quienes acrediten insuficiencia de recursos que todo profesionista debe brindar anualmente, con la obligación de reportarlo al Colegio de Profesionistas al que pertenezca.
n) Sistema Nacional de Profesiones.- Es el sistema conformado por las instituciones públicas y particulares, nacionales y extranjeras, facultadas para la expedición de títulos y diplomas de especialidad que habilitan para el Ejercicio Profesional; los profesionistas y especialistas que hayan obtenido dichos títulos o diplomas y la Certificación Profesional correspondiente; los Colegios de Profesionistas y los Entes Certificadores que operen en todas las entidades federativas.
o) Registro.- Registro Nacional de Actividades Profesionales.
p) Reglamento Interior.- Es el Reglamento Interior del órgano administrativo que corresponda según el contexto de cada disposición de esta Ley en que se utilice dicha expresión.
q) Título Profesional.- El documento expedido por instituciones de educación superior, públicas o particulares, en favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios para el ejercicio de las Actividades Profesionales, de conformidad con las disposiciones aplicables.
r) Secretaría.- Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

Artículo 9. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en:

a) Ley General de Educación;
b) Código Civil Federal;
c) Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
d) Código Penal Federal.

TÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS A LA COLEGIACIÓN Y CERTIFICACIÓN OBLIGATORIAS

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Capítulo I.- Del Sistema Nacional de Profesiones

Artículo 10. El Sistema Nacional de Profesiones se integrará por:

I. Las instituciones del país, públicas o particulares, que están legalmente facultadas para la expedición de títulos profesionales y diplomas de especialidad que habilitan para el ejercicio de las Actividades Profesionales;
II. Los profesionistas y especialistas que hayan obtenido el título o diploma de especialidad, así como las constancias de colegiación y certificación profesionales necesarios para el ejercicio de las Actividades Profesionales;
III. Los Colegios de Profesionistas que operen dentro de todas y cada una de las entidades federativas así como las que operen a nivel nacional;
IV. Los Entes Certificadores de profesionistas que hayan obtenido la idoneidad en los términos de la presente Ley;
V. La Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales y;
VI. El Registro Nacional de Actividades Profesionales.

Capítulo II.- Distribución de Competencias

Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

Los Colegios de Profesionistas fungirán como órganos de opinión respecto de la aplicación de esta Ley, al igual que de colaboración con las autoridades competentes en las funciones de vigilancia y control del Ejercicio Profesional.

Artículo 12. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de colegiación y certificación obligatorias quedará distribuida conforme a lo siguiente:

I. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones:

a. Administrar y coordinar el Registro Nacional de Actividades Profesionales sujetas a colegiación y certificación obligatorias;
b. Otorgar la idoneidad, en ejecución de las decisiones que adopte la Comisión Interinstitucional, a los Entes Certificadores que cumplan con los requisitos que establece la presente ley.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

c. Inscribir en el Registro y supervisar a los Colegios de Profesionistas Nacionales constituidos conforme a los requisitos que establece la presente Ley.
d. Conocer de los procedimientos de ejecución e imponer las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley con relación a los profesionistas agrupados en los Colegios de Profesionistas Nacionales.
e. No autorización, suspender, inhabilitar o impedir el ejercicio de cualquier Actividad Profesional o de cualesquiera facultad o función otorgada a los particulares por virtud de esta Ley, cuando el sujeto correspondiente no cumpla con los requisitos establecidos por esta Ley.

II. Corresponde a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación, en el marco de sus respectivas competencias, conocer de la persecución y enjuiciamiento de los delitos establecidos en la presente Ley.

III. Corresponde a las entidades federativas, en materia de colegiación y certificación obligatorias, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

a. Expedir las normas locales necesarias para la ejecución de esta ley.
b. Determinar el número mínimo de miembros que debe existir para constituir los Colegios de Profesionistas en sus respectivas jurisdicciones.
c. Determinar los montos mínimos y máximos de las cuotas ordinarias a que se refiere el artículo 64 de ésta Ley para los Colegios de Profesionistas que operen en sus respectivas jurisdicciones.
d. Determinar los montos mínimos y máximos de las sanciones pecuniarias a que se refieren los artículos 90 y 96 de esta Ley para los profesionistas en lo individual y para los Colegios de Profesionistas que operen en sus respectivas jurisdicciones.
e. Crear y dotar de facultades a los Consejos Estatales de Actividad Profesional, los que serán integrados por un representante de cada uno de los Colegios de Profesionistas que por cada una de las Actividades Profesionales operen en sus respectivas jurisdicciones. Las normas estatales correspondientes establecerán la periodicidad con que deban operar dichos Consejo.
f. Conocer de los procedimientos de ejecución e imponer las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley con relación a los profesionistas agrupados en los Colegios de Profesionistas que operen en sus respectivas jurisdicciones.
g. Conocer de los procedimientos de ejecución e imponer las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley con relación a los Colegios de Profesionistas que operen en sus respectivas jurisdicciones.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

h. Tipificar como delictivas conductas que afecten contra el correcto Ejercicio Profesional cuando así se estime necesario, y perseguir y enjuiciar los delitos correspondientes.
i. Registrar y dar aviso a la Dirección General de Profesiones, sobre los Colegios de Profesionistas funcionando en su entidad para inscribirlos en el Registro.
j. Registrar y dar aviso a la Dirección General de Profesiones para su inscripción en el Registro sobre los profesionistas habilitados para el Ejercicio Profesional y lo mismo que respecto de aquellos que sean inhabilitados.
k. Coadyuvar con la Dirección General de Profesiones en la organización y actualización del Registro.
l. Supervisar a los Colegios de Profesionistas de sus respectivas entidades conforme a los requisitos que establece la presente Ley y las normas locales que sean expedidas de conformidad con esta.

Capítulo III. De la Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales

Artículo 13. La Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales es un organismo técnico, conformado por los representantes de los titulares de las autoridades en materia de profesiones de ocho entidades federativas que se irán alternando por región, de las Secretarías de Economía, Salud, Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social y de la propia Secretaria de Educación Pública, y de la Procuraduría General de la República, del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C., de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C., así como otras instituciones que por su especialidad puedan apoyar en las funciones de dicha comisión.

Artículo 14. La Comisión Interinstitucional será presidida por el o la titular de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría Técnica permanente de la Comisión Interinstitucional estará a cargo de la Dirección General de Profesiones.

La Comisión Interinstitucional será la máxima instancia de asesoría y consulta en materia de Ejercicio Profesional en la República y sesionará al menos tres veces por año.

En los términos de los artículos siguientes, las funciones de la Comisión Interinstitucional serán las de (i) identificar y mantener actualizado el Catálogo General de Actividades Profesionales y de (ii) regular, autorizar y revocar las autorizaciones a los Entes Certificadores.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 15. La Comisión Interinstitucional identificará las actividades profesionales sujetas a Colegiación Obligatoria y Certificación Profesional y mantendrá actualizado el Catálogo General de Actividades Profesionales, en términos del artículo 5 de esta Ley.

Las instituciones de educación superior legalmente autorizadas para expedir títulos de licenciatura o especialidad, así como los Colegios de Profesionistas autorizados para operar conforme a la presente Ley y cualquier miembro de la Comisión Interinstitucional estarán facultados para proponer la incorporación o desincorporación de alguna actividad profesional al Catálogo General de Actividades Profesionales.

Presentada la solicitud correspondiente ante la Dirección General de Profesiones, ésta la turnará para que sea considerada en la siguiente sesión de la Comisión Interinstitucional, la que deberá resolver sobre la solicitud en un plazo no mayor a doce meses a partir de haberla recibido. Si transcurrido dicho plazo no existe pronunciamiento expreso por parte de la Comisión Interinstitucional, se entenderá que fue rechazada la solicitud correspondiente.

La Comisión Interinstitucional informará a la Dirección General de Profesiones tan pronto como hubiere decidido modificar el Catálogo General de Actividades Profesionales, remitiéndole la versión actualizada de dicho catálogo. La Dirección General de Profesiones dispondrá la publicación del Catálogo General de Actividades Profesionales, debidamente modificado, en el Diario Oficial de la Federación, tan pronto como lo reciba.

Los profesionistas que ejerzan alguna de las actividades que se incorporen al Catálogo General de Actividades Profesionales en términos del párrafo anterior, contarán con un plazo de diez años para cumplir con los requisitos de Colegiación Obligatoria y Certificación Profesional establecidos en la presente Ley. Si, transcurrido dicho plazo, no los cumplieren, se les cancelará la autorización para el ejercicio.

Artículo 16. Con relación a los Entes Certificadores, la Comisión Interinstitucional:

I. Establecerá los lineamientos generales para operar como Ente Certificador, entre los que se encontrará su infraestructura, respaldo económico y capacidad para la evaluación de los profesionistas en un área específica del conocimiento o la técnica, así como su capacidad para operar a nivel nacional;
II. Emitirá los dictámenes de idoneidad para los Entes Certificadores que lo soliciten en los términos establecidos en la presente Ley;
III. Se asegurará que los Entes Certificadores a que se refiere el inciso anterior, sean

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

transparentes, confiables, imparciales, honestos, responsables y plurales, y;

IV. Revocará la autorización para operar como Ente Certificador cuando corresponda.

Artículo 17. La Comisión Interinstitucional conformará un comité de cinco especialistas por cada Actividad Profesional integrado por profesionistas de reconocido prestigio y ética profesional, propuestos por organismos nacionales, de instituciones de educación superior u organismos acreditadores de programas académicos de educación superior así como por los Colegios de Profesionistas de la Actividad Profesional correspondiente, los que dictaminarán sobre la solicitud de idoneidad para los Entes Certificadores.

Artículo 18. La Dirección General de Profesiones, a solicitud de la entidad interesada correspondiente, será la encargada de integrar el expediente respectivo asegurándose que contenga toda la documentación necesaria para emitir el dictamen a que se refiere el párrafo inmediato anterior, según los lineamientos aplicables expedidos por la Comisión Interinstitucional en términos del artículo 16 de esta Ley

Si dentro del plazo máximo de seis meses la Comisión Interinstitucional no ha tomado una decisión sobre la solicitud de autorización, se entenderá como autorizada la solicitud correspondiente.

Artículo 19. En caso de emitirse el dictamen favorable, expresa o tácitamente, la Dirección General de Profesiones expedirá la constancia de idoneidad a la entidad solicitante y procederá a su inscripción en el Registro Nacional de Actividades Profesionales.

Artículo 20. La constancia de idoneidad tendrá una vigencia de cinco años a partir de su expedición por parte de la Dirección General de Profesiones, y deberá incluir:

I. Nombre del Ente Certificador;
II. El número de inscripción ante el Registro Nacional de Actividades Profesionales; y
III. La Actividad Profesional a certificar

Artículo 21. La Secretaría, previa opinión de la Dirección General de Profesiones y de los órganos equivalentes de las entidades federativas, y tomando en cuenta el parecer de los Colegios de Profesionistas, expedirá el reglamento de la Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Capítulo IV.- Del Registro Nacional de Actividades Profesionales

Artículo 22. La Secretaría organizará, mantendrá actualizado y operará el Registro Nacional de Actividades Profesionales sujetas a colegiación y certificación obligatorias. Las autoridades competentes de las entidades federativas enviarán de manera oportuna toda la información relevante para la permanente actualización de dicho Registro.

El Reglamento establecerá las bases para la organización, funcionamiento y actualización del Registro Nacional de Actividades Profesionales.

Artículo 23. El Registro Nacional de Actividades Profesionales se integra por el conjunto de inscripciones relativas a:

I. Las instituciones públicas y particulares, autorizadas para la expedición de títulos profesionales y diplomas de especialidad, que faculten para el ejercicio de las profesiones del artículo 5.
II. Los profesionistas y especialistas que hayan obtenido el título o diploma de especialidad, así como, las constancias de colegiación y certificación necesarias, que los habiliten para el ejercicio de alguna de las Actividades Profesionales.
III. Los Colegios de Profesionistas que operen dentro de todas y cada uno de las entidades federativas así como los que operen a nivel nacional.
IV. los Entes Certificadores que hayan otorgado las constancias de idoneidad en los términos de esta Ley.
V. Las Actividades Profesionales sujetas a colegiación y certificación.

Artículo 24. Las constancias que se expidan respecto de las inscripciones que obren en el Registro Nacional de Actividades Profesionales harán prueba de su inscripción ante las autoridades competentes de la entidad federativa a que corresponda.

Artículo 25. Toda autoridad, dentro de su respectiva esfera de competencia, las instituciones de educación superior autorizadas, los Entes Certificadores, los profesionistas y los Colegios de Profesionistas que los agrupen, quedan obligados a proporcionar a la Dirección General de Profesiones o a las autoridades competentes de las entidades federativas toda la información relevante en términos de la presente Ley, para la permanente actualización del Registro Nacional de Actividades Profesionales a que se refiere el presente capítulo. Dicha obligación ha de cumplirse tan pronto como se genere la información relevante.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 26. La información contenida en el Registro Nacional de Actividades Profesionales será pública; cualquier interesado podrá solicitar la expedición de constancias relativas a cualquiera de los registros.

Artículo 27. La vigencia de las inscripciones de los documentos registrables estará condicionada a la conservación de las circunstancias y la satisfacción de los requisitos que las permitieron; así como al cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven de la presente Ley y de otras disposiciones aplicables.

TITULO III

DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

Capítulo I. Los Colegios de Profesionistas

Artículo 28. Los Colegios de Profesionistas son entidades privadas de interés público que agrupan a profesionistas de la misma rama de actividad para reunirse de manera no transitoria, a efecto de coadyuvar en las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional y realizar todo tipo de actividades relacionadas con la superación, defensa y correcto ejercicio de una misma profesión.

Artículo 29. Son facultades y atribuciones de los Colegios de Profesionistas:

I. La ordenación del ejercicio de las Actividades Profesionales.
II. Ostentar en su ámbito la representación y defensa exclusiva de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la ley.
III. La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados.
IV. El control ético y la aplicación del régimen disciplinario de alguna de las Actividades Profesionales de que se trate en garantía de la sociedad.
V. Llevar el registro y formar expediente individualizado de cada uno de sus integrantes, asentando las actividades de educación continua efectuadas, recabando copia de las constancias pertinentes y anotando los procedimientos de sanción que les hubieren sido instruidos;
VI. Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

VII. Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos.

VIII. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.

IX. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los estatutos profesionales y reglamentos de régimen interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales, en materia de su competencia.

X. Colaborar en los procesos de diseño, elaboración o modificación de los planes y programas de estudio de sus respectivas Actividades Profesionales, cuando sean requeridos por las autoridades o a solicitud de las instituciones educativas;

XI. Iniciar ante la Comisión Interinstitucional, propuestas fundadas de adición o supresión de alguna Actividad Profesional al Catálogo General de Actividades Profesionales que al efecto se elabore;

XII. Participar en la elaboración de los dictámenes que elabore la Comisión Interinstitucional, cuando sean convocados por ésta.

XIII. Servir de mediador o árbitro en los conflictos entre profesionistas, o entre éstos y las personas a quienes presten sus servicios o terceros afectados, cuando acuerden someterse a dicha mediación o bien al arbitraje, mismo que se sujetará a las reglas que sobre el particular se establezcan en los estatutos del respectivo Colegio de Profesionistas de conformidad con esta ley.

XIV. Prestar la más amplia colaboración al poder público como cuerpos consultores.

XV. Formular para proponer ante las autoridades correspondientes, listas de peritos de entre sus miembros, a fin de que se les reconozca como "peritos oficiales." Para ser perito se deberá obtener la constancia de certificación, cuando corresponda, así como cumplir con los requisitos específicos que establezca el colegio y dispongan otras leyes, en su caso.

XVI. Velar porque los puestos públicos en que se requieran conocimientos propios de determinada profesión o actividad profesional sean desempeñados por los profesionistas correspondientes.

XVII. Aplicar las sanciones que prevén sus propios estatutos, por violación a las normas de ética profesional correspondientes y colaborar con las autoridades competentes en la aplicación de otras sanciones cuando sean procedentes;

XVIII. Organizar y supervisar los programas de actualización profesional y otorgar las constancias correspondientes a quienes demuestren haberlos cumplido y reúnan los demás requisitos previstos en cada caso;

XIX. Solicitar la incorporación o desincorporación de alguna actividad profesional al Catálogo General de Actividades Profesionales.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados y las demás que señalen sus propios estatutos, y otras disposiciones aplicables siempre que no contravengan a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 30. Son obligaciones de los Colegios de Profesionistas:

I. Contar con su respectivo código de ética profesional al momento de solicitar su registro como Colegio de Profesionistas.
II. Contar con un órgano interno de control ético al momento de solicitar su registro como Colegio de Profesionistas.
III. Vigilar el Ejercicio Profesional de sus integrantes para que éste se realice de conformidad con lo establecido por las leyes sobre la materia y por el respectivo código de ética profesional del colegio;
IV. Denunciar, en su caso, ante las autoridades competentes las infracciones en que incurran los profesionistas de acuerdo con lo dispuesto en la fracción anterior;
V. Expedir a los miembros respecto de los cuales se lleve su expediente, las constancias de certificación profesional correspondientes, en los términos establecidos en esta Ley.
VI. Vigilar y verificar el cumplimiento del Servicio Social Profesional obligatorio de sus integrantes y expedir las constancias de ello cuando proceda; y
VII. Las demás que les fije esta Ley, así como las demás disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias relativas a la materia.

Artículo 31. Los Colegios de Profesionistas son órganos de opinión respecto de la aplicación de esta Ley, al igual que de colaboración de las autoridades competentes en las funciones de vigilancia y control del Ejercicio Profesional.

Artículo 32. Los Colegios de Profesionistas tendrán el carácter de coadyuvante de las autoridades administrativas competentes de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 33. Los Colegios de Profesionistas se disolverán y extinguirán:

I. Por decisión adoptada por mayoría calificada de todos sus agremiados;
II. Por resolución de autoridad competente.

Antes de su desaparición, los Colegios de Profesionistas deberán concluir todos los procedimientos disciplinarios que tengan como consecuencia la suspensión o inhabilitación del Ejercicio Profesional que se encuentren en trámite.

Página 32 de 65

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 34. Para el ejercicio de las profesiones cuya regulación es objeto de esta ley, el interesado, además de obtener la cédula profesional, deberá estar incorporado en alguno de los Colegios de Profesionistas autorizados conforme a la presente Ley, correspondiente a la Actividad Profesional de que se trate. Sin perjuicio de ello, cada profesionista podrá pertenecer a una o más agrupaciones o Colegios de Profesionistas, siempre que manifieste en forma expresa en cuál de ellos se llevará su expediente para efectos del Ejercicio Profesional. En caso de que el profesionista no manifieste en forma expresa cuál de ellos llevará su expediente, lo llevará el colegio en el que tenga mayor antigüedad.

Cada Colegio de Profesionistas llevará el registro y formará expediente individualizado de cada uno de sus integrantes, asentando las actividades de educación continua efectuadas, recabando copia de las constancias pertinentes, y anotando los procedimientos de sanción que les hubieren sido instruidos, e informará anualmente a la Dirección General de Profesiones, para los efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Actividades Profesionales.

Artículo 35. Los requisitos para la incorporación a un Colegio de Profesionistas son los siguientes:

I. Poseer título para la Actividad Profesional correspondiente legalmente expedido y registrado o los títulos extranjeros que, conforme a las leyes vigentes, sean homologados y revalidados a aquél.
II. Contar con la cédula para el Ejercicio Profesional correspondiente.
III. No estar inhabilitado para ejercer la profesión de que se trate por sentencia condenatoria firme, ni encontrarse en estado de interdicción.
IV. No estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la profesión de que se trate.
V. Satisfacer la cuota de ingreso y demás derechos de incorporación que tenga establecidos el Colegio de Profesionistas correspondiente.
VI. Aprobar el examen de acceso a la profesión correspondiente.
VII. Cualquier otro que establezca la normativa vigente.

Artículo 36. Podrán incorporarse a los Colegios de Profesionistas, con la denominación de colegiados no ejercientes, aquellos profesionistas que reúnan los siguientes requisitos:

I. Poseer título para la Actividad Profesional correspondiente legalmente expedido y registrado o los títulos extranjeros que, conforme a las leyes vigentes, sean homologados y revalidados a aquél.

II. Contar con la cédula para el Ejercicio Profesional correspondiente.
III. Satisfacer la cuota de ingreso y demás derechos de incorporación que tenga establecidos el Colegio de Profesionistas correspondiente.
IV. No ejercer ante autoridades de la federación, de las entidades federativas o de los municipios la Actividad Profesional de que se trate conforme a lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 37. Las solicitudes de incorporación a los Colegios de Profesionistas serán aprobadas por el órgano de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada Colegio y sólo podrán ser suspendidas o denegadas por la misma, previas las diligencias e informes que procedan, audiencia del interesado y mediante resolución motivada, contra la que cabrán los recursos procedentes.

Por razones de urgencia dicha competencia podrá ser ejercida por el Presidente del Colegio de Profesionistas de que se trate, sin perjuicio de la posterior ratificación del órgano de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada Colegio.

Artículo 38. Los profesionistas, al inicio de su Ejercicio Profesional, protestarán acatar el ordenamiento jurídico aplicable a cada Actividad Profesional, así como cumplir fielmente las obligaciones profesionales, colegiales y normas éticas de la misma.

La protesta será tomada por el órgano de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada colegio y en la forma establecida por los mismos. El órgano de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada colegio podrá autorizar que la protesta se formalice inicialmente por escrito, con compromiso de su posterior ratificación pública. En todo caso, se deberá dejar constancia en el expediente personal del colegiado del otorgamiento de dicha protesta.

Artículo 39. Enunciativamente, son derechos de los profesionistas colegiados:

I. Ejercer libremente su profesión, sin más requisitos que los señalados por el Artículo 5° de la Constitución General de la República, por esta Ley u otras leyes y sus reglamentos;
II. Ofrecer al público los servicios profesionales que preste, sin más límite que el aconsejado por la ética profesional;
III. Ostentarse como profesionista;
IV. Recibir, como contraprestación por sus servicios, los honorarios convenidos;

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

V. Incorporarse en sus respectivos Colegios de Profesionistas, cuando el ejercicio de la Actividad Profesional así lo exija, una vez que cumpla los requisitos legales y reglamentarios relativos;
VI. Obtener el registro de su título, la cedula para el Ejercicio Profesional y su inscripción en el Registro, una vez que cumpla los requisitos legales y reglamentarios relativos;
VII. Obtener la Certificación Profesional cuando corresponda;
VIII. Ubicar su domicilio profesional donde convenga a sus intereses, con excepción de los lugares prohibidos por la ley.
IX. Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos de su Colegio de Profesionistas, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias.
X. Recabar y obtener de todos los órganos corporativos la protección de su independencia y lícita libertad de actuación profesional.
XI. A todas las consideraciones honoríficas y de protocolo debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas a la misma.
XII. Aquellos otros que les confieran los estatutos particulares de cada Colegio de Profesionistas.

Artículo 40. Son obligaciones de los profesionistas colegiados:

I. Actuar de acuerdo a los principios científicos, técnicos y éticos aplicables al caso y generalmente aceptados dentro de las Actividades Profesionales de que se trate, según las circunstancias y medios en que se preste dicho servicio.
II. Sujetarse estrictamente al código de ética profesional del colegio al que estén incorporados.
III. Mantenerse actualizado en la materia de su especialidad y obtener la certificación correspondiente;
IV. Cumplir con el Servicio Social Profesional y prestar sus servicios en casos de circunstancias de peligro nacional, desastres o calamidades públicas, cuando así lo disponga la autoridad y las leyes respectivas.
V. En caso de urgencia inaplazable, prestar los servicios que se le requieran a cualquier hora y en el sitio que sean requeridos, lo que deberá ser informado al colegio que corresponda con posterioridad.
VI. Rendir en debida forma al cliente, cuando éste lo solicite, las cuentas de su gestión;
VII. Iniciar o proseguir las gestiones que le fueren encomendadas, sin incurrir en dilación injustificada;

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

VIII. Avisar oportunamente al cliente para que éste pueda tomar las medidas convenientes, en caso de no poder concluir la gestión que le hubiera sido encomendada;

IX. Otorgar facturas y/o recibos conforme a las disposiciones fiscales aplicables por concepto de pago de honorarios o gasto;

X. Incorporarse al Colegio de Profesionistas como colegiado ejerciente cuando esté en tal condición;

XI. Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y asumir las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos.

XII. Denunciar al colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación, sea por suspensión o inhabilitación del denunciado, por no contar con la certificación cuando ésta sea exigible o por estar incurso en supuestos de incompatibilidad o prohibición.

XIII. Denunciar al colegio todo acto de violación al código de ética de dicho colegio que llegue a su conocimiento;

XIV. Denunciar al colegio cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de un profesionista o de cualquier miembro de su Actividad Profesional en el ejercicio de sus funciones;

XV. Prestar sus servicios profesionales con el adecuado nivel de calidad.

XVI. Acreditar el examen de acceso y obtener las certificaciones periódicas subsecuentes para el Ejercicio Profesional correspondiente conforme a lo dispuesto por la presente Ley.

XVII. Prestar el Servicio Social Profesional de conformidad con los programas aprobados para ese efecto y bajo la vigilancia del Colegio de Profesionistas a que pertenezca, mismo que habrá de constatar su debido cumplimiento.

Cada colegio dispondrá la forma de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de prestar el Servicio Social Profesional de sus integrantes, notificando anualmente a la Secretaría su programa e informando del cumplimiento dado al del año inmediato anterior.

Quedan exentos del Servicio Social Profesional en los términos de los preceptos anteriores, las personas mayores de sesenta años, y aquellas que demuestren tener impedimento físico o causa grave que así lo justifique.

XVIII. Cuantos otros apruebe cada colegio en concordancia con lo dispuesto por la presente Ley.

XIX. Cualquiera otra derivada de las leyes o reglamentos aplicables a la materia.

Artículo 41. En el ejercicio de su Actividad Profesional los profesionistas en ningún caso deberán:

I. Conferir, sin la debida supervisión, el desempeño de las Actividades Profesionales o de comisiones relacionadas con ésta, a personas que carezcan de título profesional registrado o de la autorización correspondiente;

II. Autorizar con su firma, sin previo análisis y evaluación, como si fuera trabajo propio y con motivo de su Ejercicio Profesional, escritos, recetas, planos, dictámenes y cualquier otro acto análogo efectuado por quien no esté autorizado para ejercer;

III. Revelar o utilizar algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo del trabajo profesional desempeñado, excepto: cuando cuente con autorización expresa del cliente; cuando los manifieste para evitar la comisión de un delito que ponga en riesgo la vida y la salud de las personas o cuando éstos se refieren a los informes que obligatoriamente deba rendir según las leyes respectivas;

IV. Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses opuestos en un mismo negocio conexo sin perjuicio de poder realizar, con el consentimiento de todos los interesados, cualquier tipo de gestión conducente al provecho común;

V. Disponer, en provecho propio o de un tercero, de cualesquier tipo de bienes, informaciones o documentos que le hubieran sido suministrados por sus clientes para el desempeño del trabajo profesional convenido;

VI. Cualquier otra derivada de la presente Ley, las leyes o reglamentos aplicables a la materia.

Artículo 42. La condición de colegiado se perderá:

I. Por fallecimiento.

II. Por baja voluntaria.

III. Por reiterada falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y de las demás cargas colegiales a que estuvieran obligados los colegiados. Se entenderá como reiterada falta de pago el impago consecutivo de tres cuotas, ordinarias o extraordinarias, o de cinco de ellas aunque no sean consecutivas.

IV. Por condena judicial firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

V. Por sanción firme de expulsión del colegio, acordada en expediente disciplinario.

La pérdida de la condición de colegiado será acordada por el órgano de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada colegio en resolución motivada y, una vez firme, será comunicada a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y demás instancias que así lo requieran para los efectos del artículo 105 y 106 de esta Ley.

Artículo 43. Los profesionistas obligados a la colegiación obligatoria conservarán el derecho de cambiarse de Colegio de Profesionistas si así lo desean, una vez concluido cualquier procedimiento administrativo que tenga como consecuencia la suspensión o inhabilitación del Ejercicio Profesional que en su caso se encuentre en trámite, y de que no existan cuotas pendientes de pago.

En caso de desaparición del Colegio de Profesionistas, ya sea por decisión del propio colegio o como consecuencia de la falta de renovación de su autorización o de una sanción impuesta por una autoridad competente, se convocará a los integrantes de dicho colegio para que dentro del plazo de hasta seis meses se incorporen a cualquiera de los otros colegios ya existentes o aquel que en sustitución del que desaparezca reciba la correspondiente autorización para operar como Colegio de Profesionista dentro de la misma Actividad Profesional. El reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para garantizar la continuidad en la supervisión técnica y ética por el nuevo Colegio de Profesionistas.

Capítulo II. Elaboración, expedición y aplicación de un código de ética profesional

Artículo 44. A fin de obtener su inscripción como Colegio de Profesionistas, cualquier asociación interesada deberá contar con su respectivo código de ética que recoja todos aquellos aspectos que constituyan los principios y valores éticos reconocidos nacional e internacionalmente como los propios de la Actividad Profesional correspondiente. Dicho código deberá atender los problemas específicos del Ejercicio Profesional en México y hacer frente a aquellas cuestiones consideradas como prácticas a corregir.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 45. El código de ética profesional de la Actividad Profesional de que se trate deberá contener las normas sustantivas básicas que deben regir la conducta profesional de los colegiados en México, organizadas bajo los siguientes rubros:

I. Los derechos y deberes de los profesionistas;
II. Las relaciones con otros profesionistas y otras Actividades Profesionales;
III. Las relaciones con el colegio y otras autoridades;
IV. El cobro de honorarios y en su caso de la provisión de fondos;
V. El desarrollo y certificación profesionales
VI. El Servicio Social Profesional; y
VII. Régimen específico de la responsabilidad civil de los profesionistas.

Artículo 46. Los colegiados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes éticos. Las sanciones disciplinarias impuestas por los colegios se harán constar en el expediente personal del colegiado.

En la medida en que las sanciones impuestas por la autoridad judicial o administrativa con motivo del Ejercicio Profesional tengan directa relación con una norma ética del Colegio de Profesionistas respectivo, dichas sanciones deberán constar en el expediente personal de los profesionistas involucrados previa audiencia de los mismos

Artículo 47. Los Colegios de Profesionistas, deberán contar con un órgano competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria, en los términos que establezcan sus estatutos.

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan, ningún colegiado podrá ser sancionado por acciones u omisiones que no estén tipificadas como infracción en la presente Ley, en las leyes que rijan el ejercicio de cada Actividad Profesional en lo particular y en las normas éticas aplicables en cada colegio.

Capítulo III. Requisitos de constitución y registro de los Colegios de Profesionistas en las entidades federativas

Artículo 48. Para que una asociación de profesionistas en las entidades federativas pueda alcanzar el carácter de Colegio de Profesionistas, debe obtener su inscripción como tal ante la autoridad de la entidad federativa en donde se halle el domicilio social y sede principal de la asociación respectiva.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Solamente podrán ostentarse como "Colegio", aquellas asociaciones de profesionistas que hayan obtenido su constancia de registro correspondiente, expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables.

Lo anterior no será aplicable a las instituciones educativas que si bien detentan el nombre de "Colegio" en su razón social, por su objeto no tienen que ver con la Colegiación Obligatoria de profesionistas regulada por la presente Ley.

Artículo 49. Un Colegio de Profesionistas no podrá tener una denominación coincidente, similar o que induzca a confusión de otro anteriormente existente, o que sea susceptible de llevar a error respecto a los profesionistas integrados en el Colegio.

Artículo 50. Para obtener la inscripción de una asociación como Colegio de Profesionistas, será necesario acreditar ante la autoridad competente:

I. Estar legalmente constituida como asociación civil.
II. Acreditar haber desarrollado tareas en beneficio de la Actividad Profesional de que se trate que deberán incluir publicaciones, seminarios, cursos, conferencias y demás actividades equiparables durante cuando menos los dos años inmediatos anteriores a la solicitud de inscripción de una asociación como colegio.
III. Contar con su respectivo Código de ética profesional.
IV. Cada entidad federativa establecerá el número mínimo efectivo de profesionistas que las asociaciones deberán acreditar para poder obtener su registro como Colegio de Profesionistas, los que deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus deberes conforme a la presente Ley, antes de que se otorgue el reconocimiento a la asociación respectiva.
V. Tratándose de las asociaciones cuya profesión no tenga una antigüedad mayor de cinco años desde su establecimiento dentro del Catálogo General de Actividades Profesionales, el requisito de membresía mínima, se reducirá al número de profesionistas con que se cuente, sin que en ningún caso dicho número sea inferior a veinticinco profesionistas de la misma rama. No les será exigible en este caso los requisitos establecidos en la fracción I del presente artículo.
VI. Dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 51. La autoridad competente en cada entidad federativa, podrá otorgar el reconocimiento como Colegio de Profesionistas hasta cinco agrupaciones de cada Actividad Profesional por cada entidad federativa.

Artículo 52. Las actas constitutivas, los estatutos y los códigos de ética profesional, así como los programas de acción de los Colegios de Profesionistas, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Actividades Profesionales por conducto de la autoridad de la entidad federativa que corresponda, con el fin de que tales documentos puedan surtir efectos contra terceros. Para obtener dicha inscripción se deberán presentar al registro en copia certificada y pagar los derechos correspondientes, además cumplir los demás requisitos que para tal efecto señalen esta Ley y su Reglamento.

En el Registro Nacional de Actividades Profesionales deberán inscribirse los siguientes actos y documentos:

I. Documentos constitutivos, denominación y los cambios que ésta sufra;
II. Estatutos y sus modificaciones
III. Reglamentos de régimen interior, si existieran;
IV. Composición de sus órganos de gobierno;
V. Nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa, de sus miembros y de otros órganos previstos en los estatutos;
VI. Domicilio y sede y, en su caso, de sus demarcaciones o delegaciones;
VII. Códigos de Ética Profesional.
VIII. Programas de acción, si existieran;
IX. Disolución y cualquier otro acto o documento cuando así lo dispongan las normas vigentes.

Artículo 53. Los estatutos de los Colegios de Profesionistas se ajustarán a los siguientes requisitos mínimos:

I. En ningún caso, los estatutos que rijan la vida y gobierno interior de un Colegio de Profesionistas podrán contravenir lo preceptuado por esta Ley, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

a) La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios de Profesionistas deberá ser democrático, principio que deberá expresarse en los respectivos estatutos.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

b) Señalar la periodicidad con que deben celebrarse las Asambleas Generales de Asociados, que en ningún caso será mayor a un año, así como los requisitos para su convocatoria, instalación y validez de sus acuerdos;
c) Establecer la forma de integración de su órgano de representación, que será renovado con una periodicidad no mayor a tres años;
d) El régimen disciplinario, que contendrá, en todo caso, la tipificación de las infracciones que puedan cometerse por los colegiados, las sanciones a aplicar y el procedimiento sancionador.
e) Establecer un órgano interno de control ético.
f) Establecer los medios y procedimientos para dirimir controversias entre sus miembros y para la aplicación de las sanciones que correspondan;
g) Establecer la manera de instrumentar sus programas de Servicio Social Profesional y los medios para cumplirlo.
h) Cualquier reforma deberá ser notificada a la autoridad competente de la entidad federativa que corresponda, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su entrada en vigor.

II. Asimismo, los estatutos de los colegios regularán, al menos:

a) La denominación, el domicilio y el ámbito territorial del colegio, así como, en su caso, la sede de sus delegaciones.
b) Los requisitos para la colegiación y las causas de denegación, suspensión y pérdida de la condición de colegiado.
c) Los derechos y deberes de los colegiados.
d) Los mecanismos de participación de los colegiados en la organización y el funcionamiento del colegio.
e) La denominación, composición, forma de elección, funciones y régimen de funcionamiento de sus órganos de gobierno, así como los requisitos para formar parte de ellos.
f) El régimen económico del colegio.
g) El régimen de honores y distinciones susceptibles de ser concedidos a los colegiados o a terceros.
h) El régimen impugnatorio contra los actos de los colegios conforme a la presente Ley.

Cualesquiera otras materias cuya regulación sea exigida por la legislación estatal, por esta Ley o por otras normas de rango legal o reglamentario, o se considere necesaria para el mejor cumplimiento de las funciones de los colegios.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Capítulo IV. Requisitos de constitución y registro de los Colegios Nacionales de Profesionistas

Artículo 54. Podrán registrarse Colegios de Profesionistas con el carácter de nacionales. Además de lo dispuesto en el presente Capítulo, les serán aplicables en lo conducente las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 55. Para que una asociación de profesionistas pueda alcanzar el carácter de colegio nacional, debe obtener su inscripción como tal ante la Secretaría.

Solamente podrán ostentarse como "Colegio" con el carácter de "Nacional", aquellas asociaciones de profesionistas que hayan obtenido su constancia de registro correspondiente, expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables.

Artículo 56. Para obtener la inscripción de una asociación como colegio nacional, será necesario acreditar ante la autoridad competente:

I. Estar legalmente constituida como asociación civil o tener el carácter de colegio en alguna entidad federativa.
II. Acreditar haber desarrollado tareas en beneficio de la profesión de que se trate que deberán incluir publicaciones, seminarios, cursos, conferencias y demás actividades equiparables durante cuando menos los tres años inmediatos anterior a la solicitud de inscripción de una asociación como colegio.
III. Contar con su respectivo código de ética profesional.
IV. Acreditar, un mínimo efectivo de trescientos profesionistas con derecho a ejercer en la misma rama, al corriente en el cumplimiento de sus deberes conforme a la presente Ley, antes de que se otorgue el reconocimiento a la asociación respectiva.
V. Acreditar que entre la membresía se cuenta con profesionistas que tengan su domicilio fiscal en cuando menos la mitad más uno del número total de entidades federativas.
VI. Tratándose de las asociaciones cuya actividad profesional no tenga una antigüedad mayor de cinco años desde su establecimiento dentro del Catálogo General de Actividades Profesionales, el requisito de membresía mínima, se reducirá al número de profesionistas con que se cuente, sin que en ningún caso dicho número sea inferior a cincuenta profesionistas de la misma Actividad Profesional.

VII. Dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 57. La autoridad federal competente, podrá otorgar el reconocimiento como Colegio de Profesionistas hasta cinco agrupaciones nacionales de cada Actividad Profesional.

Artículo 58. En caso de que un Colegio de Profesionistas con registro para operar en alguna entidad federativa se convierta en colegio nacional, perderá dicho registro. El espacio vacante será ocupado en los términos establecidos por esta Ley y las demás normas aplicables para la inscripción de nuevos colegios en las entidades federativas.

Capítulo V. Organización de los Colegios de Profesionistas

Artículo 59. Sin perjuicio de otros órganos que los estatutos colegiales contemplen, los Colegios de Profesionistas estatales, del Distrito Federal y nacionales deberán contar con una Asamblea General, una Junta Directiva o de gobierno u órgano equivalente y un Presidente, un Vicepresidente, Primer y Segundo Secretario, Primer y Segundo Secretario Suplentes, Tesorero, Subtesorero y un número de vocales que no podrá ser superior a siete.

Cualquier cambio que se opere en el órgano de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada colegio, deberá ser notificado a la autoridad competente dentro de los treinta días naturales siguientes a su toma de posesión, para los efectos de su registro.

Artículo 60. Para los efectos de la presente Ley, las Asambleas Generales de Asociados serán el órgano supremo de cada Colegio de Profesionistas.

Artículo 61. Quienes desempeñen los cargos de Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios u otros similares, deberán encontrarse en el ejercicio de la Actividad Profesional de que se trate.

Los demás cargos deberán reunir iguales condiciones para su acceso, salvo si los estatutos reservan alguno o algunos de ellos a los colegiados no ejercientes.

Los estatutos podrán establecer las incompatibilidades que se consideren necesarias de los ejercientes para ocupar los cargos del órgano de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada colegio.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Las elecciones para la designación del órgano de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada colegio u otros órganos análogos se ajustarán al principio de libre e igual participación de los colegiados.

Serán electores todos los colegiados con derecho a voto, conforme a los estatutos de cada Colegio de Profesionistas.

Artículo 62. La representación institucional del Colegio de Profesionistas corresponde al presidente del mismo con las facultades que resulten de los respectivos estatutos y conforme a la presente Ley.

No obstante lo anterior, todo acto realizado por los órganos de gobierno, junta directiva o similar conforme a los estatutos de cada Colegio, se entenderá como acto de estos últimos, siempre que la designación de quienes integren dichos órganos se haya realizado en los términos de esta Ley, conforme a las disposiciones legales aplicables y de conformidad con lo previsto en sus propios estatutos.

Artículo 63. El régimen y funcionamiento de los órganos internos de los Colegios de Profesionistas se sujetará a lo establecido en sus estatutos y en la presente Ley.

Artículo 64. Los Colegios de Profesionistas cobrarán cuotas de incorporación y anuales a sus miembros, las que deberán ser suficientes para cubrir los gastos necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Cada entidad federativa establecerá los montos mínimos y máximos de dichas cuotas. En el caso de los Colegios Nacionales, no deberán ser menores al equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ni mayores al a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 65. Los Colegios de Profesionistas deberán actuar y desempeñar sus funciones estatutarias conforme a los principios de transparencia, derecho de acceso a la información y de rendición de cuentas. Deberán disponer de mecanismos de información eficientes y accesibles que proporcionen al interesado información fidedigna, pertinente y oportuna sobre las actividades que realizan.

Deberán asimismo cumplir con los siguientes principios:

I. Acceso a la información: haciendo disponible, oportuna, clara y verificable la información que se genera dentro del Colegio de Profesionistas.

II. Rendición de cuentas: deberán informar a los colegiados cómo se está administrando el colegio y cada una de sus áreas.

III. Cumplimiento de las disposiciones aplicables: de manera que tanto los colegiados como la sociedad en general puedan conocer las disposiciones legales que rigen las acciones que desarrolla el colegio. Deberá facilitarse que tanto los colegiados como la sociedad en general puedan monitorear de qué manera se está dando este cumplimiento y evaluar los resultados de su aplicación.

IV. Participación: dotando de igualdad de oportunidades a los colegiados y a cualquier interesado para expresar sus perspectivas, hacer propuestas, dar seguimiento a las acciones del sistema.

Artículo 66. Los Colegios de Profesionistas deberán cumplir las disposiciones legales aplicables relativas a la protección de los datos personales en posesión de los particulares, su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Los Colegios de Profesionistas deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad, y demás requisitos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás aplicables.

Capítulo VI. Temporalidad de la autorización de los Colegios de Profesionistas

Artículo 67. La autorización otorgada por la Dirección General de Profesiones o por las autoridades equivalentes de las entidades federativas para operar como Colegio de Profesionistas tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser renovada por periodos iguales siempre que al término de cada uno de ellos los colegios interesados acrediten que continúan cumpliendo con los requisitos impuestos por ésta Ley y su reglamento.

Artículo 68. En caso de que algún colegio no cumpla con los requisitos para la renovación de su autorización se procederá a la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Actividades Profesionales. La vacante dentro del número máximo de los cinco colegios para operar en cada entidad federativa o a nivel nacional será cubierta en los términos establecidos en ésta Ley y su reglamento. Con relación a los miembros de dicho colegio, se procederá en términos del artículo 43 de esta Ley.

TÍTULO IV

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 69. La Comisión Interinstitucional, analizará la idoneidad de los Entes Certificadores y, en caso de aprobarlas, notificará a la Dirección General de Profesiones para que proceda a su inscripción en Registro Nacional de Actividades Profesionales.

Artículo 70. La Certificación Profesional tendrá una vigencia máxima de cinco años, al término de los cuales deberá someterse a un nuevo proceso y cumplir con los requisitos y evaluaciones establecidas por el Ente Certificador que corresponda.

La Comisión Interinstitucional, de oficio o a petición de cualquier interesado, podrá establecer plazos menores para alguna Actividad Profesional específica, en función de sus características técnicas y científicas.

Artículo 71. Los profesionistas tendrán la obligación de certificarse en su respectiva Actividad Profesional a más tardar cumplidos cinco años contados a partir la fecha de su colegiación.

Si la Actividad Profesional fuera de aquellas cuya certificación tuviera una vigencia menor a cinco años, en los términos del artículo anterior, el plazo para la primera certificación a que se refiere este artículo deberá corresponderse con dicha vigencia.

Artículo 72. Cuando el solicitante no acredite el procedimiento de certificación, deberá volver a someterse a dicho procedimiento dentro del plazo máximo de seis meses. En caso de no acreditar la certificación por segunda ocasión consecutiva deberá esperar un plazo mínimo de seis meses para formular una nueva solicitud ante un Ente Certificador , quedando suspendido en el Ejercicio Profesional hasta en tanto obtenga la certificación correspondiente, lo que se hará constar en el Registro Nacional de Actividades Profesionales.

Artículo 73. El Colegio al que pertenezca el profesionista suspendido por falta de la Certificación Profesional correspondiente, vigilará el estricto cumplimiento de la suspensión, en coadyuvancia con la autoridad. Todos los colegios pertenecientes a la Actividad Profesional de que se trate serán notificados de la suspensión por conducto de la Comisión Interinstitucional y no admitirán al profesionista suspendido, sino hasta que haya dado cumplimiento a los requisitos de ejercicio correspondientes.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 74. Los procedimientos de certificación serán transparentes e imparciales. Todos los requisitos que se fijen para acceder a dichos procedimientos deberán ser objetivos. La autoridad vigilará que los Entes Certificadores cumplan con estos principios.

Artículo 75. Los programas de educación continua y actualización profesional serán instrumentados libremente por los Colegios de Profesionistas, y en su diseño podrán participar las instituciones de educación superior que el propio colegio determine. El cumplimiento de tales programas constituirá uno de los requisitos para la certificación, pero no será considerado como requisito único.

Artículo 76. La solicitud para la realización del procedimiento de certificación que formule el profesionista podrá realizarse a través del colegio de que lleve su expediente. El colegio correspondiente no podrá negar el trámite de la solicitud al profesionista salvo por lo dispuesto en esta ley.

Artículo 77. El Colegio de Profesionistas deberá acompañar a la solicitud del procedimiento de certificación una constancia sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el código de ética correspondiente.

Artículo 78. Cuando el profesionista solicitante de la certificación haya sido sometido a un procedimiento de sanción por violación a las normas de ética profesional y haya sido sancionado, el informe a que se refiere el artículo anterior deberá contener:

I. Descripción detallada de la conducta sancionada;
II. Sanción aplicada; y
III. Estado sobre el cumplimiento de la sanción.

El Ente Certificador no podrá continuar con el procedimiento de certificación en caso de que la sanción haya consistido en la suspensión o inhabilitación de su calidad de colegiado y no se haya dado cumplimiento a la misma.

Artículo 79. La constancia de certificación correspondiente solamente será emitida al profesionista que cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que esté incorporado a alguno de los Colegios de Profesionistas que corresponda a su Actividad Profesional en el que se encuentre su expediente en los términos de esta ley.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

II. Cumplir con el procedimiento de certificación establecido por el Ente Certificador.
III. Acreditar haber cumplido con el programa de educación continua y actualización profesional implementado por el Colegio de Profesionistas.
IV. Acreditar no haber sido sancionado por violación a las normas de ética profesional o en su caso haber cumplido con la sanción que le hubiera sido impuesta.

Artículo 80. La resolución del Ente Certificador deberá ser comunicada a la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, para su registro en términos de esta ley. Igualmente notificará el resultado al profesionista solicitante y al Colegio de Profesionistas que lleve su expediente.

Artículo 81. La resolución del Ente Certificador que niegue el otorgamiento de la certificación, podrá ser recurrida dentro de los quince días siguientes a la notificación de la decisión ante la propia entidad, para su reconsideración. En caso de que el Ente Certificador confirme su decisión, se estará a lo dispuesto en el capítulo de Medios de Impugnación establecido en la presente Ley.

Capítulo II. Sobre los Entes Certificadores

Artículo 82. Los Entes Certificadores deberán constituirse como Asociaciones Civiles y, aunque sus asociados deberán ser personas físicas o morales de naturaleza privada, sus funciones son de interés público.

Artículo 83. Para funcionar como Ente Certificador, es necesario contar con lo siguiente:

I. Un grupo de profesionistas, especializados en la materia de evaluación de la Actividad Profesional que corresponda y que no tengan resolución administrativa, judicial, ética desfavorable firme que afecte su idoneidad para ejercer la función, a juicio del comité a que se refiere el artículo 17 de esta Ley;
II. Los programas e instrumentos de certificación a que se refiere el artículo 75.
III. Una infraestructura material y los recursos humanos suficientes para el cumplimiento de sus funciones, y
IV. El respaldo económico mínimo que establezca la Comisión Interinstitucional.

Artículo 84. La Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificación Profesionales verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior a fin de

ordenar la expedición de la primera y, en su caso, de las sucesivas constancias de idoneidad.

Artículo 85. Los Entes Certificadores deberán someter a la aprobación de la Comisión Interinstitucional los programas e instrumentos de certificación que pretendan instrumentar, así como sus modificaciones, cuando esto suceda. Sin la aprobación correspondiente, no podrán ser aplicados.

Artículo 86. Los Entes Certificadores deberán mantener una relación constante con los Colegios de Profesionistas legalmente constituidos en los términos de la presente ley. Para ello, contarán con miembros de los mismos en los comités técnicos que establezcan para la elaboración de los programas e instrumentos de evaluación.

Artículo 87. Cada Ente Certificador publicará los requisitos académicos y de otra índole que sean necesarios para someterse al procedimiento de certificación.

Artículo 88. Cada Ente Certificador efectuará como mínimo un procedimiento de certificación al año. De no ser así, se le revocará, de oficio o a petición de parte, la autorización para operar.

Artículo 89. Los Colegios de Profesionistas debidamente autorizados podrán actuar como Entes Certificadores siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título.

TÍTULO V

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo I. De las Infracciones Administrativas y el Procedimiento para su Ejecución

Sección I. De las Infracciones Administrativas

Artículo 90. A las infracciones establecidas en esta ley le corresponderá alguna o algunas de las siguientes sanciones, las que podrán imponerse de manera simultánea:

I. Multa, que habrá de fijarse por días multa. Para los efectos de esta Ley, el día multa equivale al salario mínimo general vigente en el lugar de comisión de la infracción.
II. Amonestación.

III. Suspensión temporal del ejercicio profesional, y de las autorizaciones para operar como Colegio de Profesionistas o como Ente Certificador.
IV. Inhabilitación para el Ejercicio Profesional.
V. Cancelación definitiva de las autorizaciones para operar como Colegio de Profesionistas o como Ente Certificador.

Artículo 91. Se impondrá multa de mil a dos mil días multa a la institución educativa que debiendo inscribirse en el Registro, no lo hiciere.

Artículo 92. Se amonestará a los Colegios de Profesionistas que incurran en alguna de las conductas siguientes:

I. Llevar a cabo actividades ajenas a su objeto social;
II. No cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley;
III. No cumplir, en perjuicio de alguno de sus miembros, con alguna de las disposiciones contenidas en sus estatutos.

En caso de una primera reincidencia, se impondrá multa de dos mil a tres mil días multa.

En cada una de las reincidencias subsecuentes, se impondrá multa equivalente al doble de la sanción impuesta para la inmediata anterior.

Artículo 93. A la persona física que en representación de una asociación que pretenda obtener su registro como Colegio de Profesionistas presente documentación falsa para tales propósitos, se le impondrá multa de dos mil a tres mil días multa.

Artículo 94. Cuando de manera ulterior la autoridad competente constate, de oficio o a petición de parte, que para obtener la autorización para operar como Colegio de Profesionistas, se utilizó documentación falsa, se procederá a la cancelación definitiva de dicha autorización.

Artículo 95. Cuando para obtener la renovación de la autorización para operar como Colegio de Profesionistas se utilice documentación falsa, la autoridad competente, de oficio u a petición de parte, procederá a imponer una multa de dos mil a tres mil días multa al colegio correspondiente, al que, además, se le cancelará de manera definitiva su autorización.

Artículo 96. El Ejercicio Profesional será suspendido de manera temporal y se aplicará multa al profesionista involucrado, por la autoridad competente, en los siguientes casos:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

I. Por presentar documentos falsos ante los Colegios de Profesionistas o los Entes Certificadores a efecto de obtener las constancias de colegiación o certificación a que haya lugar, cuando alguno de estos hechos se advierta en forma superveniente. En tal caso, la suspensión no podrá ser menor a XXX meses y ni mayor a XXX meses, y la multa impuesta no podrá ser menor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción ni mayor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción;

II. Por presentar para su registro constancias de colegiación o certificación falsas, a sabiendas de ello. En tal caso, la suspensión no podrá ser menor a XXX meses y ni mayor a XXX meses, y la multa impuesta no podrá ser menor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción ni mayor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción;

III. Por ejercer la Actividad Profesional sin pertenecer a un Colegio de Profesionistas o sin contar con la certificación que corresponda. En tal caso, la suspensión no podrá ser menor a XXX meses y ni mayor a XXX meses, y la multa impuesta no podrá ser menor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción ni mayor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción;

IV. Por requerimiento de autoridad judicial en el que se inhabilite temporalmente a un profesionista para ejercer su profesión o especialidad. En tal caso, la suspensión no podrá ser menor a XXX meses y ni mayor a XXX meses, y la multa impuesta no podrá ser menor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción ni mayor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción y;

V. Por violación a las normas de ética profesional declarada por el órgano competente del Colegio de Profesionistas al que pertenezca el profesionista sancionado, en los términos de sus estatutos, por el tiempo que se determine en la resolución, y a petición de dicho colegio, siempre que la autoridad competente así lo confirme en términos del a Sección II de este Capítulo. En tal caso, la suspensión no podrá ser menor a XXX meses y ni mayor a XXX meses, y la multa impuesta no podrá ser menor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción ni mayor al equivalente a XX salarios mínimos generales vigentes en el lugar de comisión de la infracción.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

La aplicación de las sanciones previstas en este artículo será sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que en su caso correspondan.

Artículo 97. La autoridad competente inhabilitará de manera definitiva para el ejercicio de su respectiva Actividad Profesional a los profesionistas, en los siguientes casos:

I. Por sentencia ejecutoriada que inhabilite permanentemente a un profesionista para ejercer su Actividad Profesional.
II. Por reincidir en alguna de las conductas identificadas en los fracciones (I), (II) y (III) del artículo anterior; y
III. Por violación grave a las normas de ética profesional declarada por el órgano competente del Colegio de Profesionistas al que pertenezca el profesionista sancionado, en los términos de sus estatutos, y a petición de dicho colegio, siempre que la autoridad competente así lo confirme en términos del a Sección II de este Capítulo.

Artículo 98. A cualquier persona moral o entidad que utilice el término "Colegio" en contravención a los términos establecidos por esta Ley, se le impondrá una multa de quinientos a mil días multa. En caso de reincidencia, la multa se impondrá por el doble de la sanción anterior.

Artículo 99. Toda amonestación, multa, suspensión o inhabilitación impuesta por las autoridades competentes se hará constar en el Registro Nacional de Actividades Profesionales, para lo cual deberá haber constante comunicación entre la federación y las entidades federativas. En todo caso se hará constar la duración de la sanción impuesta.

Artículo 100. La inscripción de las sanciones a que se refiere el artículo anterior sólo podrá ser cancelada por sentencia ejecutoriada que así lo disponga.

Artículo 101. La aplicación de las sanciones que se establecen en este título no libera al infractor del cumplimiento de las obligaciones que dispone esta Ley y operará sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Artículo 102. Se impondrá multa de mil a dos mil días multa a cualquier persona que interponga de manera notoriamente frívola o improcedente en dos o más ocasiones, contra la misma persona, profesionista o institución, los recursos previstos en los artículos 109 y 110.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Sección II. Procedimiento de Ejecución de las Infracciones Administrativas

Artículo 103. Las sanciones previstas en esta ley serán aplicadas por la autoridad competente, con arreglo a lo que previene esta ley, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 104. Se concede acción individual a todo interesado para denunciar a quien sin Título Profesional o diploma de especialidad legalmente expedido, sin ser miembro de algún Colegio de Profesionistas o sin la certificación correspondiente, ejerza alguna de las Actividades Profesionales objeto de esta ley. Dicha denuncia podrá ser presentada ante los Colegios de Profesionistas que lleven el control del expediente del sujeto denunciado o las autoridades competentes.

La misma legitimación existirá para denunciar ante la autoridad competente a los Colegios de Profesionistas que injustificadamente no inicien o conduzcan los procedimientos de supervisión ética de sus miembros.

Artículo 105. Las resoluciones de los Colegios de Profesionistas sobre la conducta ética de sus miembros, así como aquellas relativas a la falta de cumplimiento de las obligaciones de los profesionistas en materia de certificación profesional, deberán ser puestas en conocimiento de la autoridad competente por parte del Colegio de Profesionistas que lleve el control del expediente del profesionista en cuestión.

Artículo 106. Recibida la comunicación de los Colegios de Profesionistas o la acción individual mencionada en los artículos precedentes, la autoridad competente instruirá el proceso administrativo correspondiente.

Capítulo II. Del delito de Ejercicio Indebido de las Actividades Profesionales

Artículo 107. Se sancionará con multa de doscientos a cuatrocientos días multa al que sin pertenecer a un Colegio de Profesionistas o sin contar con la Constancia de Certificación que corresponda conforme a esta ley, realice alguna de las Actividades Profesionales a que se refiere el artículo 5 de este ordenamiento.

En caso de reincidencia, se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de seiscientos a mil días multa.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 108. El delito a que se refiere el artículo anterior, será sancionado por las autoridades judiciales federales, aplicándose, en lo conducente, lo dispuesto por el Código Penal Federal.

TÍTULO VI
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Capítulo I. De los actos de la autoridad

Artículo 109. Los actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere la presente Ley se regirán, en todo lo no expresamente previsto por la misma, por lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 110. Los profesionistas, Colegios de Profesionistas, Entidades Certificadoras, instituciones educativas y los particulares afectados por los actos y resoluciones definitivos de la autoridad podrán interponer el Recurso de Revisión o acudir directamente ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. En todos los casos de aplicación de sanciones no pecuniarias en contra de un profesionista que den lugar a la interposición del recurso o de algún medio jurisdiccional de impugnación, se dará intervención como tercero interesado al Colegio de Profesionistas a que pertenezca el profesionista sancionado. El colegio podrá ofrecer pruebas, controvertir las ofrecidas y alegar lo que estime procedente, así como interponer los recursos o medios de impugnación que prevengan las leyes aplicables.

Artículo 111. El recurso se interpondrá por escrito, ante la misma autoridad que emitió el acto o resolución impugnados, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación y será resuelto por la misma autoridad o el superior jerárquico, según lo determine el Reglamento Interior.

Artículo 112. El escrito mediante el cual se interponga el recurso deberá cumplir los siguientes requisitos y adjuntar los documentos correspondientes:

I. El nombre o razón social del recurrente;
II. El domicilio y el correo electrónico o el equivalente para oír y recibir toda clase de notificaciones, y, en su caso, la autorización para recibir incluso las de carácter personal por la vía electrónica;
III. Los documentos con los que se acredite la personalidad de quien promueve;
IV. El acto o resolución que se recurra y la fecha de su notificación;
V. Los hechos que constituyan el antecedente del acto o resolución;

VI. Las pruebas que se ofrezcan, las cuales deberán tener relación inmediata y directa con los hechos relatados;
VII. Los agravios que se le causen.
VIII. La solicitud de suspensión, en su caso.

Artículo 113. Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos o no acompañe los documentos respectivos a que se refieren las fracciones I y de III a VII del artículo anterior, la autoridad lo prevendrá, por escrito y mediante notificación personal, para que subsane la omisión prevenida dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de dicha prevención y, en caso de que la omisión no sea subsanada en el plazo indicado, la autoridad lo tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas, se tendrán por no ofrecidas.

Artículo 114. La autoridad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del recurso, dictará el acuerdo de prevención o admisión del recurso relacionando, en su caso, las pruebas ofrecidas y las que se admitan, disponiendo, asimismo, el plazo para el desahogo de las pruebas que lo requieran. Admitido el recurso, se correrá traslado con el mismo al Colegio de Profesionistas para que dentro de los cinco días hábiles siguientes se manifieste como estime conveniente, en los casos en que proceda su intervención como tercero interesado.

Artículo 115. Al interponerse el recurso o con motivo de la intervención del tercero interesado podrá ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional o la declaración de la autoridad. En todo caso las documentales serán acompañadas al primer escrito que presente cada interviniente. Las constancias que obren en el expediente formado por la autoridad deberán ser tomadas en consideración para resolver, aun cuando dicho expediente no haya sido ofrecido como prueba. Si se ofrecen pruebas que requieran de actuación para su desahogo, se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tal efecto. La autoridad que esté conociendo del recurso podrá allegarse los elementos de convicción adicionales que considere necesarios.

Artículo 116. Dictado el acuerdo de admisión y transcurrido el plazo para la intervención del tercero o concluido el plazo para el desahogo de las pruebas, en su caso, se pondrá el expediente a disposición de las partes para que dentro del plazo de diez días hábiles formulen por escrito sus alegatos. Transcurrido este plazo, con alegatos o sin ellos, la autoridad dictará un acuerdo que declare concluido el procedimiento y procederá a dictar la resolución que corresponda.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 117. La resolución del recurso será dictada dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de conclusión del procedimiento, en la que la autoridad podrá:

I. Confirmar el acto o resolución impugnados o revocarlos;
II. Modificar el acto o resolución impugnados;
III. Sobreseer el recurso;
IV. Ordenar la reposición total o parcial del procedimiento en el que hubieren sido emitidos el acto o resolución materia de la impugnación.

Artículo 118. El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. Sea presentado fuera del término previsto;
II. Se presente sin la firma de quien deba hacerlo, sin que tal deficiencia sea subsanada antes del vencimiento del plazo de interposición;
III. El acto o resolución hubieren sido expresamente consentidos;
IV. Ante los tribunales se esté tramitando algún medio de defensa interpuesto por el recurrente que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto o resolución impugnados.

Artículo 119. La autoridad decretará el sobreseimiento del recurso cuando:

I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
II. El recurrente fallezca;
III. Cuando habiendo sido admitido el recurso, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley;
IV. Cuando la autoridad emisora del acto o resolución impugnados lo modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia.

Artículo 120. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada si concurren los siguientes requisitos:

I. Respecto de cualquier acto o resolución administrativa y de aplicación de sanciones no pecuniarias:
   a. Que lo solicite el recurrente;
   b. Que el recurso haya sido admitido
   c. Que de otorgarse no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que ocasionen perjuicios al interés social o al orden público;

d. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtenerse resolución favorable, de conformidad con lo que determine la propia autoridad que conozca del recurso. La garantía aquí mencionada tendrá el carácter de requisito de eficacia de la suspensión y deberá ser constituida dentro del término fijado por la autoridad;
e. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o difícil reparación en contra del recurrente.

II. Respecto de sanciones de carácter pecuniario, además de los requisitos dispuestos en las fracciones I, II y III:

f. Que se garantice el importe correspondiente dentro del plazo y por cualquiera de los medios dispuestos por el Código Fiscal de la Federación. De no constituirse la garantía respecto de la sanción pecuniaria, cesará la suspensión sin necesidad de declaración por la autoridad y procederá la ejecución.

La autoridad resolverá la suspensión al acordar sobre la admisión del recurso. La resolución que decrete la suspensión surtirá efectos de inmediato y por todo el tiempo de tramitación del recurso, hasta que se dicte resolución en el fondo del asunto, aun cuando dicha resolución sea en el sentido de sobreseer.

Tratándose de los supuestos a que se refiere el Apartado II. f) de este artículo, el incumplimiento en el otorgamiento de la garantía que se fije, dará lugar a la emisión por parte de la autoridad de una resolución en la que declare que la suspensión ha quedado sin efecto.

Artículo 121. La resolución que niegue la suspensión y la que resuelva el recurso se considerarán definitivas y podrán ser impugnadas por los medios jurisdiccionales correspondientes.

Capítulo II. De los actos de los Colegios de Profesionistas

Artículo 122. Los actos o resoluciones dictados por los Colegios de Profesionistas contra alguno de sus integrantes, que tengan por efecto la suspensión en sus derechos como integrantes de los colegios o su expulsión, podrán ser recurridos por éstos mediante la interposición del recurso a que se refiere el capítulo anterior.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

Artículo 123. Salvo lo expresamente dispuesto en el presente capítulo, serán aplicables al recurso aquí regulado, las disposiciones establecidas en el capítulo anterior correspondientes a términos, requisitos, trámite y resolución del recurso.

Artículo 124. El recurso será interpuesto ante la Dirección General de Profesiones o sus equivalentes en sus entidades federativas, y tramitado y resuelto por las autoridades que determine el Reglamento Interior. La sola interposición del recurso dará lugar a la suspensión de la medida decretada por el Colegio de Profesionistas por todo el tiempo de duración del trámite del recurso, hasta que se dicte y notifique la resolución que sobre el mismo sea dictada.

Artículo 125. Admitido el recurso, la autoridad que conozca del mismo requerirá al Colegio de Profesionistas para que, por conducto del órgano que conforme a sus estatutos lo represente, rinda dentro de los cinco días hábiles siguientes un informe pormenorizado sobre el procedimiento seguido y las razones que condujeron a emitir el acto o tomar la resolución materia del recurso, acompañando dicho informe de las pruebas que estime pertinentes.

Artículo 126. Si el informe no fuera rendido dentro del término correspondiente, se tendrán por ciertos todos los hechos expuestos por el profesionista recurrente en su escrito de interposición del recurso.

Artículo 127. La resolución del recurso se reducirá al análisis del cumplimiento por los órganos del Colegio de Profesionistas que intervinieron en la emisión del acto o resolución impugnados, de todas las disposiciones estatutarias relativas a la aplicación de sanciones, los términos y formalidades para el desahogo del procedimiento y el cumplimiento debido de la oportunidad concedida al profesionista para ser oído, ofrecer pruebas y alegar lo conducente.

Artículo 128. Si en la emisión del acto o resolución recurrida el Colegio de Profesionistas cumplió estrictamente con lo previsto en sus estatutos, la autoridad que conozca del recurso confirmará el acto y procederá a instruir el procedimiento de suspensión o revocación de la habilitación para el ejercicio profesional, sin hacer pronunciamiento alguno acerca de las razones que condujeron a la toma de la decisión por el propio Colegio de Profesionistas.

La resolución dictada en los términos del párrafo anterior se considerará definitiva y solamente podrá ser materia de impugnación por la vía jurisdiccional correspondiente como parte del procedimiento que dé lugar a la emisión de la resolución que determine la

situación del profesionista en relación con su habilitación para el ejercicio profesional. Estarán legitimados para promover jurisdiccionalmente tanto el Colegio de Profesionistas como el profesionista involucrado.

Artículo 129. Si hecho el análisis a que se refiere el artículo 122 la autoridad comprobara alguna violación o incumplimiento por parte del Colegio de Profesionistas que pudiera haber afectado el sentido de su resolución, dispondrá la revocación de esta última notificando de inmediato al colegio para que restituya al profesionista en el pleno goce de sus derechos estatutarios. El profesionista no podrá ser sometido a un nuevo procedimiento de sanción instruido con base en los mismos hechos.

Esta resolución solo podrá ser impugnada en la vía jurisdiccional por el Colegio de Profesionistas.

Artículo 130. Si para la instrucción por el Colegio de Profesionistas del procedimiento que condujo a la emisión del acto o resolución materia del recurso hubiera mediado queja o petición de un integrante del colegio o de un tercero, la autoridad les correrá traslado con una copia del recurso, para que manifiesten, dentro de los cinco días siguientes a dicho traslado lo que a su interés corresponda como terceros intervinientes. Con dicha manifestación, o sin ella, se dará curso al trámite para la emisión de la resolución respectiva.

Capitulo III. De los actos de los Entes Certificadores

Artículo 131. Los actos o resoluciones dictados por los Entes Certificadores que tengan por efecto otorgar o denegar la certificación a los profesionistas, podrán ser recurridos por éstos o por cualquier tercero interesado mediante la interposición del recurso a que se refiere el capítulo I del presente Título.

Artículo 132. Salvo lo expresamente dispuesto en el presente capítulo, serán aplicables al recurso aquí regulado, las disposiciones establecidas en el capítulo I del presente Título correspondientes a términos, requisitos, trámite y resolución del recurso.

Artículo 133. El recurso será interpuesto ante la Dirección General de Profesiones o sus equivalentes en sus entidades federativas, y tramitado y resuelto por las autoridades que determine el Reglamento Interior.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

En caso de que el recurrente sea el profesionista afectado, la sola interposición del recurso dará lugar a la suspensión de la medida decretada por el Ente Certificador por todo el tiempo de duración del trámite del recurso, hasta que se dicte y notifique la resolución que sobre el mismo sea dictada.

Artículo 134. Admitido el recurso, la autoridad que conozca del mismo requerirá al Ente Certificador para que rinda dentro de los cinco días hábiles siguientes un informe pormenorizado sobre el procedimiento seguido y las razones que condujeron a emitir la resolución impugnada, acompañando dicho informe de las pruebas que estime pertinentes.

En caso de que el recurrente no sea el profesionista interesado también se le dará vista a éste de la interposición del recurso para que manifieste lo que a su interés convenga.

Artículo 135. Si el informe no fuera rendido dentro del término correspondiente, se tendrán por ciertos todos los hechos expuestos por el recurrente en su escrito de interposición del recurso.

Artículo 136. La resolución del recurso se reducirá a analizar el procedimiento de certificación a fin de establecer si se condujo bajo los estándares exigidos en la normatividad aplicable, incluido el programa de certificación del Ente Certificador, a fin de determinar si la decisión impugnada fue arbitraria.

Artículo 137. Si en la emisión del acto o de la resolución recurrida el Ente Certificador no actuó de manera arbitraria la autoridad que conozca del recurso confirmará el acto.

La resolución dictada en los términos del párrafo anterior se considerará definitiva y solamente podrá ser materia de impugnación por la vía jurisdiccional correspondiente por parte de quien tenga interés para ello.

Artículo 138. Si la autoridad comprobara alguna arbitrariedad por parte del Ente Certificador procederá de la siguiente forma:

En caso de que el recurrente sea el profesionista, a quien se le negó la certificación, se dejará sin efectos dicha negativa y se ordenará al Ente Certificador la inmediata expedición de la certificación correspondiente.

En caso de que el recurrente sea un tercero interesado que impugne el otorgamiento de alguna certificación de algún profesionista, se dejara sin efectos dicho otorgamiento y se

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

ordenará al Ente Certificador la reposición del procedimiento respecto del profesionista involucrado que conduzca a una nueva decisión en plenitud de jurisdicción.

Las resoluciones a que se refiere este artículo solo podrán ser impugnadas en la vía jurisdiccional por el profesionista involucrado o tercero interesado.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con las salvedades establecidas en los artículos transitorios siguientes.

SEGUNDO.- Todos los Colegios de Profesionistas que a la entrada en vigor de la presente ley hubieran sido reconocidos por las autoridades competentes y cumplan con los requisitos establecidos en ésta, podrán obtener su constancia de inscripción al sistema mediante simple solicitud que presenten, dentro de los dos años siguientes al inicio de vigencia. La autoridad verificará el cumplimiento de los requisitos y procederá a la inscripción.

TERCERO.- Toda organización de profesionistas, cualquiera que sea la denominación que hubiere adoptado, que haya sido constituida y opere bajo la vigencia de cualquiera otra ley, que cuente con reconocimiento de las autoridades competentes y cumpla funciones de coadyuvancia en los procesos de certificación, formación de especialistas, vigilancia, y control de los profesionistas, tendrá, para los efectos de esta ley, el carácter de Colegio de Profesionistas. Dentro de los dos años siguientes al inicio de vigencia de esta ley podrá manifestar ante la autoridad su propósito de asumir el carácter de Colegio de Profesionistas, cumpliendo con los requisitos establecidos en ésta, en cuyo caso la autoridad procederá a su inscripción en el registro correspondiente.

CUARTO.- Toda organización de profesionistas que se encuentre en el supuesto del artículo anterior y dentro de los diez años siguientes al inicio de vigencia de esta ley no hubiere dado cumplimiento a los requisitos establecidos y, consecuentemente, no hubiere obtenido su inscripción ante el registro respectivo, dejará de contar con el reconocimiento que le hubiere sido conferido para los efectos de la certificación de profesionistas.

QUINTO.- Toda institución que haya realizado actividades de certificación profesional con anterioridad a esta Ley podrá manifestar dentro de los dos años siguientes al inicio de la misma, su intención de asumir el carácter de Ente Certificador cumpliendo con los requisitos establecidos en ésta, en cuyo caso la autoridad procederá a su inscripción correspondiente. Si transcurrido el plazo de dos años referido no se realiza tal procedimiento, la institución correspondiente dejara de contar con el reconocimiento que le hubiere sido conferido.

SEXTO.- Cualquier programa de educación continua o actualización profesional, o cualquier procedimiento de certificación instrumentado por los Colegios de Profesionistas que hubieren estado registrados ante la autoridad con esa calidad, será considerado para

efectos del cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para la obtención del reconocimiento de idoneidad para certificar, siempre que dentro del año siguiente a la instalación de la Comisión Interinstitucional presenten la solicitud correspondiente para obtener dicho reconocimiento de idoneidad.

SÉPTIMO.- El examen de acceso al ejercicio profesional deberá ser instrumentado para su aplicación a partir del décimo año de vigencia de esta ley. Su aplicación será efectuada por los Colegios de Profesionistas. La autoridad instrumentará y supervisará la conformación del examen indicado, con la participación de los Colegios de Profesionistas reconocidos a esa fecha.

OCTAVO.- Todos los profesionistas que a la fecha del inicio de vigencia de esta ley o durante el plazo de diez años siguientes cumplan con los requisitos previstos en la misma, deberán incorporarse a alguno de los Colegios de Profesionistas reconocidos y cumplir con el requisito de certificación.

NOVENO.- Cualquier grupo de profesionistas que cumpla con los requisitos dispuestos para la formación de un Colegio de Profesionistas podrá, en cualquier tiempo, someter su solicitud de registro ante la autoridad competente para su inscripción y reconocimiento consecuente. Si al presentar su solicitud la autoridad encontrara que está cubierto el número máximo de colegios dispuesto por la ley, lo hará del conocimiento de todos los existentes y abrirá un período de revisión de sus respectivos expedientes, por el plazo de tres meses para, de ser así procedente, notificar que se procederá a la baja del que no cumpla con los requisitos, y a la inscripción del nuevo colegio. Se entenderá como incumplimiento la falta de cualquiera de los requisitos fijados en la ley y no únicamente el de carácter numérico.

DÉCIMO.- Todos los lineamientos y registros dispuestos por esta ley, así como su Reglamento, deberán quedar conformados y puestos en operación por la autoridad dentro del plazo de un año, contado a partir del inicio de vigencia de esta ley.

DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión Interinstitucional se pondrá en funcionamiento dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

DECIMO SEGUNDO.- El primer Catálogo General de Actividades Profesionales deberá quedar emitido por la Comisión Interinstitucional dentro del plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias.

DECIMO TERCERO.- Las entidades federativas deberán promulgar su respectiva normatividad, en los términos del artículo 73 Constitucional y de esta Ley, en el plazo máximo de un año a partir del inicio de vigencia de esta Ley.

DECIMO CUARTO.- La Dirección General de Profesiones deberá contar con todos los recursos humanos y materiales necesarios para la operación de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable, en el plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

DECIMO QUINTO.- Las autoridades de las entidades federativas equivalentes a la Dirección General de Profesiones, deberán contar con todos los recursos humanos y materiales necesarios para la operación de esta Ley y su Reglamento, y de su respectiva normatividad local, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de esta última.

Senado de la República, a 18 de febrero de 2014

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ MIGUEL ROMO MEDINA

ROBERTO GIL ZUATH ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

MANUEL CAMACHO SOLIS ENRIQUE BURGOS GARCÍA

MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR

Página 65 de 65

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.



SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

El suscrito, **BENJAMÍN ROBLES MONTOYA**, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio es el cimiento en el que descansa la organización política, jurídica y social de México, es también la base que la da sentido a la República mexicana. A pesar de esta característica intrínseca y fundamental, el municipio ha sufrido un proceso histórico para tratar de solventar debilidades frente a los otros niveles de gobierno, flaquezas que han ido frenando en gran medida su óptimo desarrollo y su condición de autonomía y libertad. A lo largo de su historia se han realizado esfuerzos que han culminado en su fortalecimiento mismo que se ha traducido en la ampliación de sus facultades, aunque todavía no se ha concluido esta labor.

La realidad del municipio mexicano transita por debilidades institucionales derivadas de una condición estructural de precariedad resultado de un sistema político caracterizado por su centralismo lo que provoca un desprecio hacia estas organizaciones básicas de la administración pública.
En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en está H. Cámara tiene la responsabilidad política y social de luchar en pro de esta causa proponiendo las medidas y acciones necesarias que logren abonar con la labor de dotar a nuestros municipios de las facultades que garanticen su óptimo desarrollo y se logre trascender a esa descentralización administrativa para fortalecer la autonomía municipal.

En este contexto debemos señalar el sustento jurídico del municipio mexicano que tiene como soporte el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece que las entidades federativas que conforman el país tendrán que adoptar la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su propia organización política y administrativa, el Municipio Libre para normar su régimen interior.

Ahora bien, la presente iniciativa tiene como finalidad fortalecer la autonomía del municipio en relación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 Constitucional en donde observamos que es responsabilidad del Estado:

"Promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica."

Por su parte la Ley reglamentaria en su artículo 1 estipula:

"Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución."

Para pronta referencia el artículo 26 Constitucional a que hace referencia el primer artículo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su parte conducente establece:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales."

De manera tal que el marco normativo que utilizamos para elaborar el presente proyecto nos conduce al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como un instrumento de política pública que nos ayuda a entender la importancia que actualmente se le está dando a la descentralización.

En el texto de referencia podemos ubicar que el Gobierno Federal confirma que debido a una alta centralización de atribuciones, recursos y decisiones, además de la carencia de esquemas efectivos de coordinación entre los niveles de gobierno y procesos de descentralización inconclusos han ahondado las divergencias entre regiones, entidades federativas y municipios.

Con el ánimo de hacerle frente a la centralización imperante en el país, el Plan actual emplea el concepto de federalismo articulado mediante el cual se busca que los órdenes de gobierno asuman sus respectivas responsabilidades corresponsablemente para que ningún organismo de la administración pública en sus diferentes niveles quede marginado del proyecto de país encaminado a alcanzar los "grandes objetivos" nacionales; de tal modo el ejecutivo federal se compromete, a través del Plan, a construir la bases de los mecanismos de diálogo y concertación intergubernamental para conseguir las metas nacionales.

Como Grupo Parlamentario en el Senado de la República, el PRD suscribe estas intenciones, pero con las reservas debidas, ya que baste recordar que los gobiernos federales emanados del PRI dejaron en condición de rezago, hoy persistente, a muchos municipios en el país.

Por tal motivo debemos de irnos con cuidado con la letra de este documento y asumir nuestro papel de un partido de izquierda como un críticoférreo del poder ejecutivo pero a la vez, como un impulsor desde nuestra trinchera legislativa para que los postulados de este programa nacional aterricen en nuestras leyes.

Uno de los principales objetivos que se proponen en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo versa sobre el papel que la Banca de Desarrollo debe adoptar para contribuir de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, con la creación de valor y crecimiento del campo a través de una redefinición de su mandato legal a fin de permitirle reunir los elementos imprescindibles para que la gestión de los recursos estén orientados a las empresas productivas que no consiguen financiamiento de la banca privada y con esto obtener un mayor margen de operación y adoptar nuevas y mejores tecnologías.

Lo anterior viene a colación ya que la iniciativa que proponemos no podría llevarse a cabo sin la asignación de recursos federales destinados a impulsar el desarrollo rural, que ha sido desdeñado por gran parte de la iniciativa privada y que no encontró en los pasados esquemas de la Banca de Desarrollo la ayuda necesaria para aminorar el rezago en el sector.

Es pertinente ahondar en el tema del desarrollo sustentable ya que es parte sustancial de la Ley que se pretende reformar. El Plan Nacional indica que en la última década los efectos del cambio climática y la degradación del medio ambiente se intensificó de manera significativa, por ejemplo, entre los años 2000 y 20120 las sequías, inundaciones y ciclones ocasionaron aproximadamente cinco mil muertes, trece millones de damnificados y pérdidas económicas por alrededor de 250 mil millones de pesos.

De modo que el sector que nos ocupa ha manejado el tema de la sustentabilidad como algo prioritario aún con las condiciones adversas derivadas del desdén de las autoridades y los particulares, se han hecho esfuerzos para abonar a este aspecto del desarrollo.
El origen del desarrollo sustentable proviene de la crítica, evaluación y propuestas sobre los impactos de la producción y el consumo humano en el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. Tal paradigma se centra en una cuestión básica que involucra la relación entre el hombre y la naturaleza, pero también con un componente económico ha hace permisible la perduración y autorregulación del desarrollo rural sin afectación al ambiente.

Resulta trascendente mencionar que el enfoque del desarrollo rural sustentable ha venido prometiendo en el discurso oficial nuevas perspectivas para el campo y el medio rural, no obstante la ejecución de las políticas públicas en la materia se encuentran aún a prueba por lo que es importante elaborar un seguimiento minucioso sobre el curso de acción en la implementación de estos modelos a fin de determinar su verdadera viabilidad en un sector abandonado y desdeñado por las autoridades, ya que es precisamente esta población que empieza a tener en sus filas sujetos sociales cada vez más informados y dispuestos a la actuación cívica por lo que debemos considerar que estas acciones se realizan en contextos políticos e institucionales que lo mismo pueden restringir o potenciar beneficios.

De modo tal, que el gobierno federal pretende implementar medidas dirigidas a reducir la dependencia que se tiene de los combustibles fósiles con la promoción del uso de fuentes de energía alternativas con la finalidad de fomentar la innovación y el mercado de nuevas tecnologías para el mejor aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Pero en el ámbito municipal esta tarea resulta aún inconclusa, de ahí que uno de los propósitos de esta iniciativa es dotar al municipio de mayores facultades con el objetivo de que su participación en estos procesos que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo sean determinantes en el desarrollo del sector.

En un estudio realizado en el año 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que los instrumentos para apoyar el desarrollo rural en México se han orientado a los aspectos de desarrollo social, salud y crecimiento agropecuario, así como la conformación de capacidades con una mayor focalización hacia la población de menores recursos. También señala que los Programas Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable han servido como marcos articuladores de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al reducir duplicidades en las políticas públicas para el sector rural y consolidar el gasto rural.

Sin embargo, el análisis de la FAO concluye reconociendo la articulación de políticas relevantes en el sector pero con la existencia de una batalla importante de la población que conforma el ámbito rural que ve limitadas sus capacidades de producción y la pobreza que enfrentan sigue siendo de altos grados.

En virtud de lo expuesto con antelación nuestro Grupo Parlamentario advirtió la necesidad de darle fortaleza al organismo fundamental de la administración pública en el ámbito del desarrollo rural sustentable enmarcado en la Ley respectiva, ya que creemos que es a partir de ampliar las atribuciones de los municipios que los resultados en el sector se lograran de manera más contundente en el entendido de que el propósito del Gobierno Federal es el de consolidar el federalismo.

El artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en lo conducente establece:

"*Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, instancias para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento."*

Con base en este artículo formulamos nuestra iniciativa en razón de que, es a través del establecimiento de Consejos como instancias de índole federalista y de participación mediante las cuales el municipio puede tomar un lugar preponderante en el sector rural en términos de involucrarse en la definición de las prioridades, la planeación y distribución de los recursos federales en la materia, logrando así su fortalecimiento y su papel determinante para el desarrollo del sector.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo Unico. Se adiciona el artículo 24 ter a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 24 Ter. Para fortalecer la participación que les otorga el artículo 24 de esta ley, los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable podrán además funcionar como instancias de asesoría y gestión en materia rural de los municipios, a travésde la formulación de estudios y análisis técnicos que les permitan evaluar y proponer alternativas para su desarrollo.

I. En los términos de los acuerdos que para tal efecto se establezcan, los gobiernos de la federación y de las entidades federativas pactarán mecanismos para que los municipios dispongan de los recursos financieros y materiales que resguarden la efectiva participación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable en la promoción del desarrollo rural que les permitan, entre otras medias:

a) Asesorar a los ayuntamientos en la elaboración, ejecución y evaluación de programas de desarrollo rural en lo económico y social, bajo criterios de aprovechamiento de los recursos naturales municipales que atiendan su conservación y restauración.

b) Promover la participación de los sectores público, social y privado en la elaboración y ejecución de programas municipales de desarrollo rural sustentable.

TRANSITORIO

Artículo Único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.



SEN. ARMANDO RÍOS PITER



SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO

INICIATIVA QUE CONTIENE LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Quien suscribe, **ARMANDO RÍOS PITER** y **ZOÉ ROBLEDO ABURTO**, integrantes de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA QUE CONTIENE LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

La lucha por la transición democrática en México es un proceso inacabado mientras el ciudadano padezca amplios vacios de información del ejercicio de los recursos públicos y de la actividad del Estado, la opacidad es un cáncer de nuestro sistema político que alimenta a la corrupción y a la ineficiencia del gasto público.

La evolución del régimen político y económico debe garantizar el pleno ejercicio del acceso y rendición de cuentas a cada uno de los ciudadanos, sin cortapisas de burocracias construidas en el sindicalismo, en la administración pública o en salvaguardas jurídicas que sientan las bases de un sistema de incentivos que obstaculizan la información de forma clara y expedita.

La reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas aprobada por el Congreso de la Unión, y recientemente publicada por el Ejecutivo Federal es el resultado de la demanda de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales para impulsar una segunda generación de reformas que establece las bases generales de acceso a la información, con el objeto de combatir el retraso de la modernización en la materia a nivel de entidades federativas.

Se trata de una reforma mayor, de nueva generación, respecto de los principios, bases y mecanismos para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental, el aspecto central de la reforma es el principio constitucional de que la información que será de carácter público, como toda aquella en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

La reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas forma parte de las reformas sistémicas, inminentes para la modernización del Estado mexicano, a esta se suma la Minutas en materia de fiscalización, combate a la corrupción y deuda subnacional, las reformas aprobadas en materia de Contabilidad Gubernamental, las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Congreso de la Unión requiere expedir a la brevedad la ley reglamentaria en materia de transparencia con el objeto de emprender políticas públicas que mitiguen y prevengan los actos de corrupción por un lado y que incentiven a la participación ciudadana por el otro.

La corrupción es una manifestación de las debilidades institucionales, bajos estándares morales, incentivos sesgados y falta de aplicación de la ley. El comportamiento corrupto deriva en beneficios ilícitos a una persona o grupo pequeño al ignorar reglas que han sido diseñadas para garantizar la imparcialidad y eficiencia.

El derecho de acceso a la información es reconocido por las convenciones internacionales como un medio eficiente de lucha contra la corrupción, y forma parte de las medidas de promoción del buen gobierno recomendadas por las grandes organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

De tal modo que son numerosos los beneficios políticos y económicos de la transparencia, los ciudadanos participan de manera más activa en la elaboración de las políticas públicas, y el debate público es de mejor calidad. Los funcionarios se saben responsables ante el público, y es más difícil realizar acciones ilegales. La legitimidad del gobierno y la confianza de los ciudadanos hacia él quedan así reforzadas, lo cual facilita la aplicación de las políticas públicas.

La transparencia y el acceso a la información pública deben ser los ejes fundamentales de nuestra acción política como legisladores, manifestar nuestro profundo compromiso como representantes populares con la nación y el Estado mexicano. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se someta a escrutinio, cuando los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comenzarán a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

La LXII Legislatura del Senado de la República tiene la responsabilidad con las organizaciones civiles, instituciones académicas y la sociedad civil, así como establecer los puentes de comunicación con los órganos locales de transparencia, de construir un dialogo para diseñar una nueva arquitectura institucional permita al país afrontar de manera eficaz los compromisos y obligaciones asumidos con la sociedad mexicana.

Desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, la ley reglamentaria debe además de reconocer el acceso a la información como derecho humano, necesita ser acompañado por un régimen jurídico que los elementos y garantías para su correcto ejercicio.

En este sentido la apertura de la información implica un cambio radical en la cultura burocrática y las mentalidades administrativas, construidas en el mundo de la opacidad. Acabar con las resistencias y la inercia administrativa es uno de los retos más difíciles de emprender y que como legisladores enfrentaremos en la redacción de la ley así como de la supervisión de su implementación, en este sentido, los aliados más importantes son los ciudadanos, por esta razón es fundamental dotarlos de los medios adecuados para un real y efectivo acceso a la información

Como muestra los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.

Si bien, sabemos que el tema de la transparencia hoy se ha vuelto un concepto que anda en boca de muchas agrupaciones constituidas como asociación civil o simplemente como grupos sociales interesados en ejercer uno de sus derechos humanos, hay que agradecer de el interés y el gran trabajo realizado en poyo de la construcción de esta Ley general de trasparencia y acceso a la información pública a las organizaciones civiles como FUNDAR, México Infórmate y Colectivo por la Transparencia quienes no ah parado de hacer un llamado a los legisladores para que rinden un marco jurídico adecuado a la sociedad que estamos buscando tener.

Estas organizaciones civiles han expuesto que la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información son pilares fundamentales de un sistema democrático, además de que son los elementos indispensables para oxigenar la institucionalidad democrática y para alcanzar un régimen que garantice con plenitud los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México.

La transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas aparecen como complementarios. Por lo que los órganos autónomos que se estarán formando en los siguientes meses deberán de diseñarse para trabajar coordinadamente. Solo así se estaría transitando de una política de la respuesta a una política pleno acceso a la información pública, condición y garantía de un manejo correcto de los recursos públicos.

Por lo anterior, quienes suscribimos la presente iniciativa bajo el nombre de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, proponemos los principios, las bases y los procedimientos del derecho de acceso a la información, implicando la unificación de criterios que tendrán validez en todo el territorio nacional y la ampliación de sujetos obligados a todo aquel que maneje recursos de origen público, adicionalmente se propone:

a) *Información regulada*.- Detalla la información que será pública, como toda aquella en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

b) *Garantía de existencia de la información*.- Incluye la seguridad nacional como criterio para la reserva de información, pero ordena que prevalezca el principio de máxima publicidad. Ordena a los sujetos obligados documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y remite a la ley la determinación de los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Entre la información que deberá generarse y publicitarse deberá estar la relativa al ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

c) *Naturaleza del organismo.*- Se transforma al IFAI en un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, regido por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión. En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Se crea un órgano autónomo, especializado, imparcial y colegiado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica de gestión, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables.

d) *Competencia*.- Conocerá de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; salvo asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados locales que determinen la reserva de la información. Además, de oficio o a petición fundada de un organismo local, conocerá de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia lo ameriten. Sus resoluciones son vinculatorias,

definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

e) *Integración*.- Se integra por siete comisionados nombrados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Podrán ser objetados por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso, el Senado nombrará una nueva propuesta, en los términos anteriores, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si el segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

f) *Duración*.- Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

g) *Consejo*.- Tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

h) *Facultades de coerción*.- La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

i) *Coordinación*.- El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

j) *Legitimación activa para juicios constitucionales*.- Otorga a los organismos garantes facultad para iniciar controversias constitucionales contra el Ejecutivo Federal y contra el Banco de México, por violaciones a sus principios de actuación, así como para interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o locales y tratados internacionales que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Los organismos locales podrán iniciar la acción en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales.

k) *Sistema Nacional de Transparencia*: Se establece el sistema Nacional de trasparencia y rendición de cuentas el cual trabajara de manera coordinada con el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anti corrupción.

l) *Disposiciones adicionales* en materia de acceso a la información:
   - Se especifican ampliamente los conceptos de información reservada y confidencial.

- Se establecen obligaciones de información por oficio de acuerdo a cada uno de los diversos sujetos obligados.
- Se delimita que para la clasificación de la información como reservada se deberá funda y motivar con elementos objetivos y verificables que demuestren una alta probabilidad de dañar el interés público o la seguridad nacional.
- Se reduce el tiempo de clasificación de la información a solo 7 años con posibilidad de extender la clasificación por un único periodo extra de 5 años más.
- Se obliga a las entidades, dependencias, partidos y asociaciones políticas a contar con una unidad de enlace.
- Se crea el Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros.

En conclusión, la reforma de transparencia es fundamental para avanzar en la consolidación democrática. La propuestas presentadas en este proyecto se suman a las diferentes voces que se han manifestado en el Senado de la República por transparentar la información de interés público, la asignación de recursos públicos e información necesaria para el ejercicio de los derechos humanos, principalmente el que hoy nos interesa: **el derecho de acceso a la información.**

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Cámara de Senadores el siguiente Proyecto de Decreto, para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6 CONSTITUCIONAL.

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio Nacional. El presente ordenamiento reglamenta los principios y bases establecidos en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar información pública. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública garantizando el acceso efectivo de toda persona a la información pública que genere, administre o posea cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice autos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. **Comités:** Los Comités de Información de cada una de las dependencias y entidades mencionados en el Artículo 26 de esta Ley o el titular de las referidas en el Artículo 28;

II. **Datos personales:** La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, patrimonio, situación financiera, información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad;

III. **Derecho de Acceso a la Información Pública**: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los términos de la presente Ley;

IV. **Documentos:** Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

V. **Dependencias y entidades:** Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y estatal, así como del Distrito Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República;

VI. **Expediente**: Serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones, compuestas por documentos que pertenecen a un mismo asunto o procedimiento tramitado por o ante los Entes Obligados;

VII. **Información:** La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título;

VIII. **Información confidencial:** la información pública protegida, intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal queda prohibida de forma permanente su distribución, comercialización, publicación y difusión generales, y cuyo acceso queda restringido a las autoridades que de acuerdo a ley corresponda su manejo, y a los particulares titulares de dicha información;

IX. **Información reservada:** La información pública protegida, relativa a la función pública, que por disposición legal queda prohibida de forma temporal su distribución, publicación y difusión generales, y cuyo acceso queda restringido a las autoridades

X. **Instituto:** El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecido en el Artículo 30 de esta Ley;

XI. **Ley:** Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

XII. **Máxima Publicidad:** Principio rector de la presente ley consistente en la obligación de los Entes Obligados para exponer la información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información;

XIII. **Órganos constitucionales autónomos:** El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Información Pública, el Banco de México, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV. **Protección de Datos Personales:** La garantía que tutela la privacidad de datos personales en poder de los Entes Obligados y de particulares;

XV. **Reglamento:** El Reglamento, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XVI. **Servidores públicos:** Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos;

XVII. **Seguridad nacional:** Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;

XVIII. **Sistema de datos personales:** El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un

sujeto obligado;

XIX. **Sistema Nacional:** El Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas es un órgano de coordinación entre el Instituto nacional de información pública y los institutos de las entidades federativas en materia de información y rendición de cuentas.

XX. **XVIII. Sujetos obligados:**

- **a)** El Poder Ejecutivo Federal, los Poderes ejecutivos de las entidades federativas, la Administración Pública Federal, las administraciones públicas de las entidades federativas y la Fiscalía General de la República, así como las Fiscalías de las entidades federativas;
- **b)** El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente, así como las legislaturas estatales incluyendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y cualquiera de sus órganos;
- **c)** El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas así como el Consejo de la Judicatura Federal y los Consejos de la Judicatura de las entidades federativas;
- **d)** Los órganos constitucionales autónomos;
- **e)** Los tribunales administrativos federales y de las entidades federativas;
- **f)** Partidos políticos;
- **g)** Fideicomisos y fondos públicos;
- **h)** Cualquier otro órgano federal, y
- **i)** Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza autos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

XIV. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los sujetos obligados tengan la información de conformidad con las facultades que les correspondan.

Artículo 4. La presente Ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos de los tres ámbitos de Gobierno.

Son objetivos de esta Ley:

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos a la información pública;

II. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos de los gobiernos federal, y de la entidades federativas, en sus respectivas competencias, transparentando el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;

III. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados, a través de la generación y publicación de la información sobre sus indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz oportuna y comprensible;

IV. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;

V. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;

VI. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y

VII. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

Artículo 5. El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados.

En la interpretación de esta Ley y de su Reglamento, se deberá favorecer los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, independencia, información, eficacia, objetividad, celeridad, veracidad, transparencia, profesionalismo y máxima publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

Capítulo II Obligaciones de transparencia

Artículo 6. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto, entre otra, la información siguiente:

I. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular, por cada eslabón de la estructura las atribuciones y responsabilidades que le corresponden, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. Las facultades de cada unidad administrativa;

III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalente hasta el titular del Sujeto obligado, con nombre fotografía, domicilio, numero telefónico oficial y, en su caso dirección electrónica oficial;

IV. La remuneración mensual bruta y neta de los servidores públicos por puesto o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación en un formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración;

V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;

VII. Los servicios que ofrecen;

VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán publicarse tal y como se registraron;

IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal y de la entidades federativas, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;

X. Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación;

XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos;

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;

XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;

XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y

XVII. Una lista con el importe por concepto de viáticos y gastos de representación que mensualmente los servidores públicos hayan ejecutado por concepto de cargo o comisión;

XVIII. La relación del número de recomendaciones emitidas por el Instituto al Sujeto obligado en sus respectivas funciones y competencias, y el seguimiento a cada una de ellas;

XIV. La calendarización, las minutas y las actas de reuniones públicas de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos obligados, en el ámbito de su competencia. Se deberá difundir las minutas o las actas de las reuniones y las sesiones, resguardando siempre la información reservada que pudiera contener, en términos de la presente Ley;

XX. Con respecto de las auditorias y revisiones, un informe que contenga lo siguiente**:**

a) Los resultados de todo tipo de auditorias o revisiones concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;

b) El número y tipo de auditorías o revisión a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizo;

c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de la auditoría o de la revisión por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas efectuadas por el sujeto obligado;

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;

XXI. Los dictámenes de la cuenta pública, así como los estados financieros y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes;

XXII. La deuda pública contraída por cada una de las entidades, así como las instituciones a las que se adeuda, especificando de manera detallada, monto, tasa de interés, plazo, comisión y destino del empréstito;

XXIV. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Así mismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Sujetos Obligados, en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial o total;

XXVI. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo u el o los contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida;

2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y el dictamen técnico que acrediten las razones que lo justifican;

4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5. El número de contrato, la fecha, el monto, y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada;

6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;

8. Los avances sobre las obras o servicios contratados.

b) de las adjudicaciones directas:

1. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;

3. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;

6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental sobre según corresponda;

7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.

c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas.

Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del presente artículo aplicables a sus paginas de internet, con el objeto de que el instituto verifique y apruebe, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

XXVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que responda a las solicitudes hechas con antelación por el público.

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, permitiendo asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto. Para tales efectos, independientemente de su publicación en otros medios, las dependencias y entidades deberán establecer un apartado especial y de acceso irrestricto en su portal de internet que contenga la información referida en este artículo.

Artículo 7. El Poder Judicial de la Federación así como los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas deberán hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, salvaguardando los datos personales de las partes, a menos que exista autorización expresa para que estos sean publicados.

Artículo 8. La información a que se refiere el Artículo 6 deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Las dependencias y entidades deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su información, como también su integración en línea, en los términos que disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expida el Instituto.

Artículo 9. Las dependencias y entidades deberán hacer públicas, directamente o a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, o de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en los términos que establezca el Reglamento, y por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar o someter a firma del titular del Ejecutivo Federal, los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el Artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, salvo que se determine a juicio de la Consejería o la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, según sea el caso, que su publicación puede comprometer los efectos que se pretendan lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con esa Ley.

Artículo 10. Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Capítulo III Información reservada y confidencial

Artículo 11. Para solicitar la clasificación de la información como reservada, las dependencia y entidades deberán fundar y motivar con elementos objetivos y verificables que demuestren una alta probabilidad de dañar el interés público protegido, ante el Instituto quien decidirá de manera inatacable si tal pretensión es justificada.

a) Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;

III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o

V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o

persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

Artículo 12. También se considerará como información reservada:

I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;

II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal;

III. Las averiguaciones previas;

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o

VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Artículo 13. La información clasificada como reservada según los artículos 11 y 12, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de **siete** años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.

Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto la ampliación del periodo de reserva hasta por cinco años más, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Artículo 14. Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley, su Reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto.

Artículo 15. Las unidades administrativas elaborarán semestralmente y por rubros temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados. Dicho índice deberá indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha de la clasificación, su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se reservan. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.

En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.

Artículo 16. Como información confidencial se considerará:

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 17, y

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.

Artículo 17. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.

Capítulo IV Protección de datos personales

Artículo 18. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, corrección y eliminación de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el Instituto;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Instituto;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Artículo 19. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

Artículo 20. No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos:

I. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran;

II. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos;

III. Cuando exista una orden judicial;

IV. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratamiento de datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos personales para propósitos distintos a aquéllos para los cuales se les hubieren transmitido, y

V. En los demás casos que establezcan las leyes.

Artículo 21. Los sujetos obligados que posean, por cualquier título, sistemas de datos personales, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto, quien mantendrá un listado actualizado de los sistemas de datos personales.

Artículo 22. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, previa acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales. Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, en formato comprensible para el solicitante, la información correspondiente, o bien, le comunicará por escrito que ese sistema de datos personales no contiene los referidos al solicitante.

La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25.

Artículo 23. Las personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, ante la unidad de enlace o su equivalente, que modifiquen sus datos que obren en cualquier sistema de datos personales. Con tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones a la unidad de enlace o su equivalente, que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su petición. Aquélla deberá entregar al solicitante, en un plazo de 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las modificaciones o bien, le informe de manera fundada y motivada, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones.

Artículo 24. Contra la negativa de entregar o corregir datos personales, procederá la interposición del recurso a que se refiere el Artículo 50. También procederá en el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refieren los artículos 22 y 23.

Capítulo V Cuotas de acceso

Artículo 25. Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, y

II. El costo de envío. Las cuotas de los derechos aplicables deberán estar establecidas en la Ley Federal de Derechos. Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir los costos de entrega de información.

TÍTULO SEGUNDO ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I Unidades de enlace y comités de información

Artículo 25. Las dependencias y entidades, así como los partidos y asociaciones políticas contarán con al menos, una Unidad de Enlace, cuyo responsable será nombrado, ya sea por el comité de Transparencia o por

el titular del sujeto obligado y que tendrá las funciones siguientes:

I. Recabar y difundir la información a que se refiere el Artículo 6, además de propiciar que las unidades administrativas la actualicen periódicamente;

II. Capturar, ordenar y procesar las solicitudes de acceso a la información, referidas en los artículos 22, 23 y 38;

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u otro órgano que pudieran tener la información que solicitan;

IV. Realizar los trámites internos de cada dependencia o entidad, necesarios para entregar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a los particulares;

V. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

VI. Habilitar a los servidores públicos de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos, y

VIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares.

Las unidades de enlace de los partidos y las asociaciones políticas atenderán las solicitudes respecto de la recepción, aplicación y destino de los recursos públicos que reciban, así como de las que se relacionen directamente con el cumplimiento de sus obligaciones de ley; en los casos que una solicitud no se relacione con estos supuestos, no se les considerará sujetos obligados.

Artículo 26. Las dependencias y entidades contarán con un comité de información, integrado por, al menos, el Titular del Sujeto obligado o un representante, el titular del área jurídica, el responsable de la Unidad de Enlace y un representante del órgano de control; este ultimo con derecho a voz pero no a voto.

Además, estarán presentes los titulares de las áreas que propongan la clasificación de la información o que declaren su inexistencia.

En el caso de los municipios con una población mayor a 70 mil habitantes, el comité estará integrado por un regidor electo por el cabildo, el secretario del ayuntamiento, el síndico y el titular de la Unidad de Enlace. El contralor asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. En los municipios con población menor de 70 mil habitantes, el cabildo actuará como Comité de Transparencia.

En los casos de los municipios, los titulares de las unidades administrativas que propongan la clasificación o que declaren su inexistencia tendrán participación con derecho a voz y voto.

Los Comités adoptarán sus decisiones por mayoría de votos y en caso de empate, el presidente del Comité contará con voto de calidad. Además, deberán registrarse ante el Órgano Garante.

Los comités de los partidos y las asociaciones políticas nacionales o locales, se integrarán por, al menos, el Titular de la agrupación o un representante, el titular de la secretaría general o su órgano equivalente, el titular del área jurídica o su órgano equivalente y los representantes ante el Instituto Nacional Electoral en el caso de los partidos políticos.

En el caso de las personas físicas o morales, de los sindicatos o de los fideicomisos, las funciones,

obligaciones y responsabilidades de los comités serán ejercidas en lo conducente por el órgano que los represente legalmente. El reglamento establecerá las obligaciones específicas y las particularidades de estos sujetos obligados.

Artículo 27. Los comités tendrán las funciones siguientes:

I. Coordinar y supervisar las acciones de la dependencia o entidad tendientes a proporcionar la información prevista en esta Ley;

II. Instituir, de conformidad con el Reglamento, los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

III. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los titulares de las unidades administrativas de la dependencia o entidad;

IV. Realizar a través de la unidad de enlace, las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que conste la información solicitada;

V. Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para la dependencia o entidad, en materia de clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por el Instituto y el Archivo General de la Nación, según corresponda;

VI. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia o entidad, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la organización de los archivos;

VII. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere el Artículo 37;

VIII. Establecer las Unidades de Enlace necesarias y promover la capacitación y actualización de servidores públicos adscritos a éstas, y

VIX. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones o recomendaciones del Órgano Garante.

Artículo 28. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva; la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités a que se refiere el Artículo 26, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa.

Artículo 29. Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar, en coordinación con el Instituto, los criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.

Los titulares de las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la organización del archivo.

Capítulo II Del Instituto

Artículo 30. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos de esta Ley.

El Instituto se regirá en todo momento por los principios de certeza Jurídica, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Los órganos garantes administrarán su patrimonio conforme a las leyes y deberán ajustarse a los principios de austeridad, honestidad, legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de recursos.

Artículo 31. El Instituto estará integrado por siete comisionados, quienes serán nombrados por la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, el Presidente de la república podrá objetar dicho nombramiento en un plazo de diez días hábiles.

Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

La designación de los comisionados de los Órganos garantes de las entidades federativas se hará con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de las legislaturas locales, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

Los Comisionados duraran en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, V, y VI del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos y serán sujetos de juicio político.

Artículo 32. El Instituto será presidido por un Comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de **tres** años, renovable por una ocasión, y será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado de la República.

Artículo 33. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Artículo 34. Los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo serán sustituidos de manera anual, salvo que sean ratificados para un segundo periodo.

Artículo 35. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar en el orden administrativo esta Ley, de conformidad con el Artículo 5, resolver los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de posesión de los sujetos obligados; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.

III. Proponer a las autoridades educativas, contenidos sobre la importancia del Derecho de acceso a la

información en los programas de estudio de educación básica, media superior y superior.

IV. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes;

V. Conocer de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados en materia de transparencia de las entidades federativas, en los que se determine la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información.

También podrá conocer de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de alguna entidad federativa de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

VI. Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial;

VII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades;

VIII. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las dependencias y entidades para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6;

IX. Orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información;

X. Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución de sus programas de información establecidos en la fracción VI del Artículo 27;

XI. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como el de acceso y corrección de datos personales;

XII. Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, que estén en posesión de las dependencias y entidades;

XIII. Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada dependencia y entidad, de conformidad con el último párrafo del Artículo 56, las presuntas infracciones a esta Ley y su Reglamento. Las resoluciones finales que al respecto expidan los órganos internos de control y que hayan causado estado deberán ser notificadas al Instituto, quien deberá hacerlas públicas a través de su informe anual;

XIV. Elaborar la guía a que se refiere el Artículo 36;

XV. Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de acceso a la información y protección de datos personales;

XVI. Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla;

XVII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley;

XVIII. Cooperar respecto de la materia de esta Ley, con los demás sujetos obligados, las entidades federativas, los municipios, o sus órganos de acceso a la información, mediante la celebración de acuerdos o programas;

XIX. Elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación;

XX. Designar a los servidores públicos a su cargo;

XXI. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo integre al Presupuesto de Egresos de la Federación;

XXII. Organizar seminarios, cursos, talleres y elaborar y publicar estudios e investigaciones para promover y difundir el conocimiento del Derecho a la información;

XXIII. Diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los sujetos obligados sobre el cumplimiento de la ley, así como evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de sus actos, y;

XXIV. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y cualquier otra disposición aplicable.

Artículo 36. El Instituto elaborará una guía que describirá, de manera clara y sencilla, los procedimientos de acceso a la información de las dependencias y entidades.

Artículo 37. El Instituto rendirá anualmente un informe público al H. Congreso de la Unión sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan las dependencias y entidades según lo señala el Artículo 27 fracción VII, en el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada dependencia y entidad así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere necesarios.

Capítulo III Del procedimiento de acceso ante la dependencia o entidad

Artículo 38. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá contener:

I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso;

II. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita;

III. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y

IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio.

Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la unidad de enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el Artículo 42.

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente.

Si la solicitud es presentada ante una unidad administrativa distinta a la unidad de enlace, aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de la unidad de enlace.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Artículo 39. La unidad de enlace será el vínculo entre la dependencia o entidad y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o entidad a fin de facilitar el acceso a la información.

Artículo 40. Las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas. Asimismo, se deberá procurar la entrega de la información vía electrónica para evitar gastos al solicitante.

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.

En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.

Artículo 41. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

Artículo 42. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de diez días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.

El Reglamento establecerá la manera y términos para el trámite interno de las solicitudes de acceso a la información.

Artículo 43. En caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos como reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio, con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, al Comité de la dependencia o entidad, mismo que deberá resolver si:

I. Confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información, o

II. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.

El Comité podrá tener acceso a los documentos que estén en la unidad administrativa. La resolución del

Comité será notificada al interesado en el plazo que establece el Artículo 42. En caso de ser negativa, deberá fundar y motivar las razones de la clasificación de la información e indicar al solicitante el recurso que podrá interponer ante el Instituto.

Artículo 44. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el Artículo 42.

Artículo 45. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público esta información, en la medida de lo posible a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica.

Artículo 46. Las unidades de enlace no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas; cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona, o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

Capítulo IV Del procedimiento ante el Instituto

Artículo 47. El solicitante a quien se le haya notificado, mediante resolución de un Comité: la negativa de acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Instituto o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al Instituto al día siguiente de haberlo recibido.

Artículo 48. El recurso también procederá en los mismos términos cuando:

I. La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo haga en un formato incomprensible;

II. La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales;

III. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega, o

IV. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponda a la información requerida en la solicitud.

Artículo 49. El recurso previsto en los artículos 47 y 48 procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 50. El Instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos por los particulares.

Artículo 51. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, en el plazo señalado en el Artículo 42, se entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que la dependencia o entidad quedará obligada a darle acceso a la información en un periodo de tiempo no mayor a los 10 días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción del material informativo, salvo que el Instituto determine que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales.

A efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el párrafo primero de este Artículo, el Reglamento establecerá un procedimiento expedito para subsanar el incumplimiento de las dependencias y entidades de

entregar la información. Para este efecto, los particulares podrán presentar la constancia a que se refiere el Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo expedida por la unidad de enlace que corresponda, o bien bastará que presenten copia de la solicitud en la que conste la fecha de su presentación ante la dependencia o entidad. En este último caso, el procedimiento asegurará que éstas tengan la oportunidad de probar que respondieron en tiempo y forma al particular.

Artículo 52. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá contener:

I. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud;

II. El nombre del recurrente y del tercero interesado si lo hay, así como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones;

III. La fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado;

IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios;

V. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, y

VI. Los demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.

Artículo 53. Salvo lo previsto en el Artículo 51, el Instituto sustanciará el recurso de revisión conforme a los lineamientos siguientes:

I. Interpuesto el recurso, el Presidente del Instituto, lo turnará al Comisionado ponente, quien deberá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la interposición del recurso, integrar el expediente y presentar un proyecto de resolución al Pleno del Instituto;

II. El Pleno del Instituto podrá determinar la celebración de audiencias con las partes;

III. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente y asegurarse de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones, así como formular sus alegatos;

IV. Mediante solicitud del interesado podrán recibirse, por vía electrónica, las promociones y escritos;

V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de los veinte días hábiles siguientes en que se presentó el proyecto de resolución, y

VI. Las resoluciones del Pleno serán públicas.

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar, por una vez y hasta por un periodo igual, los plazos establecidos en las fracciones I y V de este Artículo.

La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por el Instituto por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente.

Artículo 54. Las resoluciones del Instituto podrán:

I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;

II. Confirmar la decisión del Comité, o

III. Revocar o modificar las decisiones del Comité y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada o a los datos personales; que reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.

Las resoluciones, que deberán ser por escrito, establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución.

Si el Instituto no resuelve en el plazo establecido en esta Ley, la resolución que se recurrió se entenderá confirmada.

Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del procedimiento que algún servidor público pudo haber incurrido en responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control de la dependencia o entidad responsable para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad que corresponda.

Artículo 55. El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado en el Artículo 47;

II. El Instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva;

III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por un Comité, o

IV. Ante los tribunales del Poder Judicial Federal se esté tramitando algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente.

Artículo 56. El recurso será sobreseído cuando:

I. El recurrente se desista expresamente del recurso;

II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;

III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley, o

IV. La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin efecto o materia.

Artículo 57. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, solo en caso de que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional, el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial

Artículo 58. Transcurrido un año de que el Instituto expidió una resolución que confirme la decisión de un Comité, el particular afectado podrá solicitar ante el mismo Instituto que reconsidere la resolución. Dicha reconsideración deberá referirse a la misma solicitud y resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles.

TÍTULO V INFORMACIÓN FOCALIZADA

Artículo 62. Además de los señalados en el artículo 6, los poderes ejecutivos Federal y de las entidades federativas, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, por lo menos, la siguiente información respecto de los temas, documentos y políticas, dentro de sus respectivas competencias y jurisdicciones:

I. Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia;
II. En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el numero de averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuantas se ejerció acción penal, en cuantas se decretó el no ejercicio y cuantas se archivaron, además de las ordenes de aprehensión, presentación y cateo;
III. Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron;
IV. Los reglamentos de las leyes expedidos en ejercicio de sus atribuciones;
V. El listado de expropiaciones, que contenga al menos, fecha de expropiación, domicilio y utilidad publica;
VI. Los listados de las personas que han recibido extensiones, condonaciones de impuestos locales, o regímenes especiales en materia tributaria local, cuidando no revelar información confidencial, salvo que los mismos se encuentren relacionados al cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de los mismos;
VII. El listado de patentes de notarios otorgadas, en términos de la Ley respectiva;
VIII. Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de concertación con los sectores social y privado;
IX. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; y
X. Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados, que permitan que el usuario conozca el tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio;
XI. Sistema electrónico con el uso de un tabulador que permita consultar el cobro de impuestos, servicios, derechos y aprovechamientos, así como el total de las cantidades recibidas por estos conceptos;
XII. Relación de constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones y dictámenes de las obras que se llevan a cabo en cada una de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, que permita conocer el estado, situación jurídica y modificaciones de cualquier índole de cada predio:
XIII. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas.
XIV. En materia energética deberá haber máxima trasparencia y equidad en los procesos de contratación realizando todas licitaciones públicas por medios electrónicos, fomentando la operación bajo los estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
XV. Para buscar mayor transparencia y eficiencia en la actividad comercial de PEMEX, a través del uso de medios y firmas electrónicas en los Sistema de Contratación y Operación para brindar certeza de la Información.

Artículo 63. Además de lo señalado en el artículo 6, los Órganos Legislativos, compuestos por el congreso de la unión y los congresos de las entidades federativas, como sujetos obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:

a. Nombres, fotografía y currículo de los legisladores en funciones, así como las Comisiones y Comités

a los que pertenecen;

b. Agenda legislativa;

c. Orden del Día, listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones del pleno;

d. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

e. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el congreso de la unión, los órganos legislativos de cada entidad federativa y;

f. El Diario de Debates;

g. Convocatorias, actas, versiones estenográficas, listas de asistencia y acuerdos de cada una de las sesiones de las Mesas Directivas, las comisiones de análisis y dictamen legislativo o comités;

h. Votación nominal, de los dictámenes y acuerdos sometidos a la consideración del Pleno;

i. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de control interno, así como un informe semestral de su cumplimiento;

j. Asignación y destino final de los bienes materiales;

k. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los legisladores o del personal de las unidades administrativas;

l. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes;

m. Los convenios, acuerdos de colaboración o figuras análogas que se celebren, señalando el motivo, el nombre o razón social del ente, el tiempo de duración y los compromisos que adquiera;

n. Los recursos económicos que de conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, sean entregados a los legisladores independientes, Grupos Parlamentarios o Coaliciones, así como los informes que éstos presenten sobre su uso y destino final;

o. El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban para los informes de actividades de cada una de las y los legisladores;

p. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno;

q. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior, y

r. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación y Quejas Ciudadanas de cada uno de uno de los legisladores, así como el tipo y número de gestiones que presten.

Artículo 64. Además de lo señalado en el artículo 6, los Órganos Judiciales, conformados por los Tribunales de lo Contenciosos Administrativo, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como los Consejo de la Judicatura, de la entidades federativas, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información

respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:

I. Los Tribunales Superiores de Justicia, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje:

a)Lista de asistencia y orden del día de las Sesiones del Pleno;

b) Acta, minuta y/o Versión Estenográfica de las Sesiones del Pleno;

c) Votación de los acuerdos sometidos a consideración del Pleno;

d) Acuerdos y Resoluciones del Pleno;

e) Programación de visitas a las instituciones del sistema penitenciario, así como el seguimiento y resultado de las entrevistas practicadas con los individuos sujetos a proceso;

f) Estadística Judicial;

g) Resoluciones y Expedientes judiciales y administrativos resueltos por Jueces y Magistrados, que hayan causado estado;

h) Carrera judicial, convocatorias, registro de aspirantes y resultados de las evaluaciones;

i) Inventario de los bienes muebles propiedad del Tribunal, así como su uso y destino de cada uno de ellos;

j) Inventario de vehículos propiedad del Tribunal, asignación y uso de cada uno de ellos

k) Monto y manejo de los recursos económicos de los Fideicomisos existentes en el Tribunal, de acuerdo con los informes del Comité Técnico de que se trate;

l) Monto y periodicidad de los apoyos económicos y en especie otorgados a sus trabajadores en todos sus niveles y tipos de contratación;

m) Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y programa anual de enajenación de bienes propiedad del Tribunal; y

n) El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que se contengan las listas de acuerdos, laudos, resoluciones, sentencias relevantes y la jurisprudencia.

II. Consejos de la Judicatura de las entidades federativas:

a) Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo;

b) Acuerdos y/o resoluciones del Consejo;

c) Acuerdos y minutas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo;

d) Seguimiento de los acuerdos o resoluciones del Consejo;

e) Datos estadísticos anuales de sus actuaciones;

f) Procedimiento de ratificación de Jueces;

g) Aplicación y destino de los recursos financieros;

h) Viajes oficiales nacionales y al extranjero de los jueces, magistrados consejeros o del personal de las unidades administrativas;

i) Asignación y destino final de los bienes materiales;

j) Inventario de los bienes inmuebles propiedad del Consejo, así como el uso y destino de cada uno de ellos; y

k) Resoluciones del órgano de control interno.

III. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas, deberá publicar la relación de los contratos colectivos de trabajo que tenga registrados, los boletines laborales, el registro de asociaciones, así como los informes mensuales que deriven de sus funciones.

Artículo 65. Además de lo señalado en el artículo 6, los fideicomisos y fondos públicos, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:

I. Nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al Fideicomitente, al Fiduciario y al Fideicomisario;

II. Sector de la Administración Pública a la cual pertenecen;

III. El monto total, el uso y destino de los subsidios, donaciones, transferencias, aportaciones o subvenciones que reciban;

IV. Monto total de remanentes de un ejercicio fiscal a otro;

V. Las modificaciones que en su caso sufran los contratos o decretos de creación del fideicomiso o del fondo público, y

VI. Causas y motivos por los que se inicia el proceso de extinción del fideicomiso o fondo público, especificando de manera detallada los recursos financieros destinados para tal efecto.

Artículo 66. El instituto coordinará sus acciones con la Auditoria Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geografía así como con los organismos garantes de las entidades federativas con el Objeto de fortalecer la rendición de cuentas.

Artículo 67. La suprema Corte de justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales de dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Artículo 68. La Suprema Corte de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el Acceso a la información pública gubernamental.

CAPITULO I DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Articulo 69. Se establece el Sistema Nacional de transparencia y rendición de cuentas como un órgano de coordinación entre el Instituto Nacional de Información Pública y los institutos de las entidades federativas en materia de información y rendición de cuentas para la armonización de los sistemas de información en los tres ámbitos de gobierno.

Articulo 70. El Sistema Nacional de transparencia y rendición de cuentas tiene por objeto la coordinación de esfuerzos dirigidos a trasparentar la utilización de recursos públicos, la función pública y la rendición de cuentas de manera accesible a toda la población.

Artículo 71. El Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas trabajara de manera coordinada con los sistemas nacionales de Fiscalización y de Anti Corrupción para garantizar la vigilancia social sobre la gestión pública, denunciando la opacidad, las malas prácticas burocráticas y la corrupción.

TÍTULO VI RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 71. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:

I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta Ley;

III. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada confidencial conforme a esta Ley;

IV. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las características señaladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información del Comité, el Instituto;

V. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley;

VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso, y

VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los órganos a que se refiere la fracción IV anterior o el Poder Judicial de la Federación.

La responsabilidad a que se refiere este Artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La infracción prevista en la fracción VII o la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones I a VI de este Artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.

Artículo 72. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

Artículo 73. Se impondrán medidas de apremio a quienes incurran en las responsabilidades a que se refiere el presente título.

El Instituto aplicará las siguientes medidas de apremio a quien desacate una resolución o recurso de revisión,:

I.- Amonestación privada o pública;

II.- Apercibimiento;

III.- Suspensión, y

IV.- Multa equivalente al monto de diez a ciento cincuenta días de salario mínimo general diario vigente.

Si una vez agotados los medios de apremio persistiere el incumplimiento, el Consejo General dará aviso al superior jerárquico para que obligue al servidor público a cumplir sin demora la resolución; y si no tuviere superior jerárquico, el requerimiento se hará directamente a éste.

Cuando no se cumpliere la resolución, a pesar del requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, en lo que respecta para decretar la destitución del servidor público que incumplió.

En caso de que el incumplimiento sea realizado por un servidor público que goce de fuero constitucional, el Instituto podrá optar por la interposición del Juicio Político.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de febrero de 2014.

SUSCRIBEN

ARMANDO RÍOS PITER **ZOÉ ROBLEDO ABURTO**

DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO Y LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 CONSTITUCIONAL.



SEN. ARMANDO RÍOS PITER



SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO



SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE

PROYECTO DE DECRETO QUE SE OTORGA A LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO SECTOR ESTRATEGICO CON RANGO CONSTITUCIONAL

Los suscritos, **ARMANDO RÍOS PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO** y **LUZ MARÍA BERISTAIN**, legisladores de la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y, 164 numeral 3 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente **PROYECTO DE DECRETO QUE SE OTORGA A LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO SECTOR ESTRATEGICO CON RANGO CONSTITUCIONAL**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Situación y tendencias del turismo global

A nivel internacional el turismo representa más de una tercera parte del comercio mundial de servicios y es una de las fuentes más importantes de empleo a nivel mundial ya que requiere diversos niveles de cualificación permitiendo la incorporación de jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes en la población activa. El turismo es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, su actividad no es menor para los países emergentes o con extrema pobreza, dado que dicho sector contribuye a reducir la pobreza en países en vías de desarrollo.

El turismo representa para la economía mundial[54] el 9.3% del Producto Interno Bruto mundial, proporcionalmente el 6% de las exportaciones mundiales y el 4.7% corresponda al sector turístico. En materia de empleo aporta el 8.7% de los empleos en todo el mundo. 261.4 millones de personas (1 de cada 11 empleos). Se estima que en 2012 fueron 1,035 millones de turistas internacionales, de 5 a 6 mil millones de turistas internos, y un crecimiento de 4.8% crecimiento en economías emergentes y 2.6% crecimiento en economías desarrolladas.

La magnitud de los ingresos generados por el turístico internacional se estima, a pesar de las crisis económicas de 2008-2010, en 1 billón 75 mil millones de dólares por turismo internacional, una cifra de 396 mil millones de dólares más que en 2005. Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% durante la primera mitad de 2013, en comparación con el mismo periodo de 2012, llegándose a los casi 500 millones, según los datos que acaba de difundir la Organización Mundial del Turismo. El crecimiento estuvo por encima de la predicción formulada a principios de año que oscilaba de 3% y 4% y está superando también la tendencia de la previsión a largo plazo que figura en el informe de la *OMT Tourism Towards* 2030 de 3.8% al año.

En 2012 nuestro país se ubicó en la posición 13 en lo que se refiere a llegadas de turistas internacionales. De acuerdo a los especialistas para el año 2030, la cifra superará los 1,800 millones de turistas anuales, un dato

[54] Panorama OMT de turismo internacional 2013.

revelador para que nos habla del amplio potencial de crecimiento y del desafío de las políticas públicas para garantizar en un mercado global altamente competitivo y diversificado mantener ventajas comparativas.

De acuerdo al Ranking Mundial de la OMT los cinco principales destinos turísticos del mundo, tanto por el número de turistas que reciben y por la derrama que captan son Francia, Estados Unidos, China, España e Italia.

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2008 los ingresos generados a nivel mundial por el turismo internacional alcanzaron 942 mil millones de dólares, su máximo histórico, pero debido a los efectos de la recesión económica de 2008-2009 los ingresos en 2009 cayeron para 852 mil millones de dólares, representando una disminución en términos reales del 5,8%, esto es, ajustando los ingresos para considerar las fluctuaciones de la tasa de cambio y la inflación del dólar estadounidense con respecto al euro. En 2010 los ingresos totales sumaron 919 mil millones de dólares y los países con la mayor entrada de divisas originadas en el turismo internacional se concentraron en Europa, sin embargo, el mayor receptor de ingresos en continúa siendo Estados Unidos con 103.5 millones de dólares seguido por España y Francia.

Tabla 1 Divisas por Turismo 2008-2010

(Miles de Millones de dólares)

Posición Mundial	País	Continente	2008	2009	2010
1	Estados Unidos	América	110,0	94,2	103,5
2	España	Europa	61,6	53,2	52,5
3	Francia	Europa	55,6	49,4	46,3
4	China	Asia	40,8	39,7	45,8
5	Italia	Europa	45,7	40,2	38,8
6	Alemania	Europa	40,0	34,6	34,7
7	Reino Unido	Europa	36,0	30,1	30,4
8	Australia	Oceanía	24,8	25,4	30,1
9	Hong Kong	Asia	15,3	16,4	23,0
10	Turquía	Europa	22,0	21,3	20,8

Para 2012, los cinco principales países con mayor gasto turístico en el mundo son Estados Unidos, España, Francia, China[55] e Italia, con ingresos de 129 millones de dólares, 56 millones de dólares, 53.7 millones de dólares, 50 millones de dólares y 41.2 millones de dólares respectivamente.

Así mismo, el turismo internacional ha mostrado importantes cambios en sus tendencias actuales Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Italia y Canadá son los principales mercados emisores de turistas en el mundo.

55 En el caso de china la mayor parte de su comercio es intrarregional. Más del 60% del turismo agresivo de China se realiza dentro de su región.

Los datos al cierre de 2013 indican una recuperación del turismo en 2012, confirmando que es un motor clave de crecimiento en un entorno económico cambiante. La OMT estima que en 2013 el turismo internacional crecerá entre 3 y 4%.

Tabla 2 Divisas por Turismo (2008-2010)
(Miles de Millones de dólares)

Posición Mundial	Continente	País	2011	2012	T.C.
		Turismo Mundial	1,042	1,075	3.2%
1	América	Estados Unidos	116.1	128.6	10.8%
2	Europa	España	59.9	55.9	-6.7%
3	Europa	Francia	54.5	53.7	-1.5%
4	Asia	China	48.5	50.0	3.1%
5	Europa	Italia	43.0	41.2	-4.2%
6	Asia	Macao (china)	38.5	n.d.	n.d.
7	Europa	Alemania	38.9	38.1	-2.1%
8	Europa	Reino Unido	35.1	36.4	3.7%
9	Asia	Hong Kong	27.7	31.7	14.4%
10	Oceanía	Australia	31.5	31.5	0.0%
24	América	México	12	13	6.7%

Sin embargo, es del conocimiento general de los industriales del ramo que las crisis económicas de 2008 y 2010 han replanteado la forma de viajar, ahora la tendencia de los flujos turísticos son a destinos más cercanos, tenemos a un turista que valora cada vez más el valor y la diferenciación de las ofertas; en el caso de los empresarios demandan cada vez más aplicaciones móviles para la planeación de viajes y modalidades de viaje que combina negocios más placer.

Cambios en los flujos del turismo mundial

De acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo[56] en 2012 se reportó un crecimiento del 6.0% en el tráfico de pasajeros internacionales aéreos en el mundo. Siendo las regiones de Medio Oriente, Latinoamérica y África las que presentaron un mayor crecimiento, 15.4%, 8.4% y 7.5% respectivamente.

Así mismo, se ha pulverizado la oferta de destinos turísticos en el mundo, mientras que en 1950 cinco países concentraban el 71% del mercado turístico, para 2012, los principales destinos turísticos solo concentró el 30% del mercado. Los mercados tradicionales consolidan su presencia, al tiempo que los destinos emergentes ganan mercado. Asia-Pacífico y África son las regiones con mayor crecimiento en el periodo 2005 – 2012, 52.0% y 50.9% respectivamente.

Durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo y uno de los sectores con mayor competitividad. A pesar de ocasionales conmociones, las llegadas de turistas internacionales han registrado un crecimiento ininterrumpido, de 25 millones en 1950, 278 millones en 1980, 528 millones en 1995 y 1,035 millones en 2012.

56 En ingles "*International Air Transport Association*" (**IATA)**.

De acuerdo al Barómetro de la Organización Mundial del Turismo, en 2013 la llegada de turistas creció cinco por ciento a tasa anual, es decir, un aumento de 52 millones de viajeros respecto a 2012.

La región con mayor demanda turística fue Asia-Pacífico presentando un crecimiento del seis por ciento, África aumentó seis por ciento y Europa cinco por ciento, la región de las Américas que incluye a México tuvo una alza de cuatro por ciento, logrando un total de 169 millones.

Para 2014 se estima que el dinamismo del sector continuará, las perspectivas regionales de llegadas de turistas alcanzan el seis por ciento para Asia-Pacífico, seis por ciento para África, cuatro por ciento para Europa, cuatro por ciento para las Américas y hasta cinco por ciento para Medio Oriente. Según previsiones de OMT, las llegadas de turistas internacionales crecerán a 3.3% anualmente entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1,800 millones.

Los principales receptores son Estados Unidos, Francia, España y China, seguidos de Italia, Reino Unido, Turquía, Alemania, Malasia y México. En 10 años México perdió tres lugares por debajo de lo registrado en 2003.

A pesar de que México tiene ventajas comparativas muy significativas sobre el resto de sus vecinos para atraer inversiones turísticas, así como a los propios viajeros; estas ventajas, sin embargo, deben ser correctamente dinamizadas para lograr que la industria turística se convierta en un sector estratégico.

Los principales competidores turísticos de México en América y el Caribe son República Dominicana, Cuba, Costa Rica y Brasil. Mientras que a nivel mundial son Tailandia, Malasia y China.

La importancia del Sector Turismo en México

El turismo es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, dicha actividad sirve para reducir la pobreza representando un factor de desarrollo sustentable ya que es consumido en el lugar en el que se produce, no depende del desarrollo de otros países, sustenta otras actividades económicas, es intensivo en la mano de obra, crea oportunidades para la creación de pequeñas y medianas empresas, fortalece el orgullo cultural y la infraestructura creada por el sector beneficia a las comunidades locales.

En 2012 el turismo dejó una derrama de 12,600 millones de peso, según el reporte mas reciente del Banco de México, durante el primer semestre de 2013, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México fue de siete mil 119 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7.2 por ciento en relación con el mismo período del año pasado. Del 1 de enero al 30 de junio, nuestro país recibió 6.5 millones de turistas vía aérea, esto es, 7.1 por ciento superior a los seis millones de paseantes extranjeros en el mismo lapso de 2012.

Este sector es sin duda es un generador de empleo sobre todo en los jóvenes, actualmente emplea alrededor de 2.5 millones de personas directamente y 5 millones indirectamente. Es importante mencionar que el Informe 2011 de la SECTUR indica que el 46% de la fuerza laboral en el sector turístico son mujeres.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los recursos del Fondo Pyme se priorizó la inversión a proyectos gestionados en el ámbito privado; en el gobierno de Enrique Peña Nieto se establecieron nuevas reglas del Fondo Pyme referentes a competitividad regional, reactivación económica y obtención de apoyos para proyectos de mejora regulatoria, que incluye a sectores estratégicos regionales como el turismo para Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Guerrero.

En 2013 más de 186 millones de turistas nacionales y extranjeros viajaron por México, de acuerdo con el Centro de Información y Estadística para el Empresario Turístico. De los cuales, 162'407,548 eran turistas nacionales y 23'673,875 provenían del exterior.

Brasil, Colombia y Argentina se consolidaron en el 2013 dentro de los diez países emisores de turistas hacia México, al mostrar un dinamismo mayor en el volumen de llegadas. En los últimos tres años, la participación de turistas provenientes de países sudamericanos creció 4.3 puntos porcentuales al pasar de 6.3 por ciento en 2010 al 10.6 por ciento al cierre del 2013.

En el mismo periodo, mientras que Estados Unidos y Canadá pasaron de tener una participación del 72 por ciento en 2010 a 68.5 por ciento al cierre del 2013, es decir, una contracción de 4 puntos porcentuales. Por nuestra parte, los 360 mil turistas británicos que actualmente llegan a México ya representan por nacionalidad el tercer lugar de origen de los visitantes que recibe el país, después de los estadounidenses y los canadienses; para 2014 se pretende que la cifra aumente a 500 mil. Para 2013, el gasto de turistas extranjeros alcanzó 11,715.6 millones de dólares, superior a los 10,712.2 millones registrados en 2012.

Cabe señalar que para el mismo año, el turismo doméstico presentó una tendencia a la alza. De los 162'407,548 turistas nacionales sólo 75'294,958 turistas nacionales se alojaron en hoteles, mientras que 87'112,590 tuvieron alguna otra forma de alojamiento. La oferta hotelera en México es de 671,115 habitaciones disponibles, 546,649 corresponden a hoteles de 1 a 5 estrellas y 124,466 a otros tipos de alojamiento.

En Guerrero el turismo es la base de la economía, con respecto a las actividades económicas desarrolladas por los guerrerenses en edad de trabajar (2.075.739 a 2000), el sector primario ocupa 14.276 personas y representa el 5,6% de la población económicamente activa (PEA): el secundario ocupa a 47.471 personas y representa el 18,72% y el terciario ocupa 184.869 personas y representa el 72,92%; es en este último en el que se ocupa la mayor parte de la población debido a que el estado basa su economía en el turismo y el comercio. El turismo es la actividad económica que más recursos deja al Estado, pues aporta 30,689,750 pesos (24%) al PIB total del Estado y emplea a 140.000 trabajadores.[57]
De acuerdo a la Secretaría de Turismo, las entidades federativas que más obtuvieron ingresos por turismo en 2008 fueron Quintana Roo (contribuyó 17.88% para el PIB turístico), Baja California Sur (12.1%), Guerrero (7.13%) y Nayarit (5.43%).

Tabla 3 Turismo en México en datos a 2012

- En 2012, se ubica en la posición 24 en lo que se refiere a divisas por turismo internacional, con **12 mil 739 millones de dólares** en el mismo año.
- El turismo en México representa el **8.4% del PIB nacional.**
- **2 millones de empleos directos** y es un impulsor de la inversión extranjera.
- Más de **17 mil 315 hoteles** y más de **651,156 cuartos de hotel**.
- **58 aeropuertos internacionales .**
- **44 del Ranking Mundial de Competitividad Turística** del Foro Económico Mundial de 2012.
- 13 lugar e**n llegadas de turistas internacionales**,
- **75.7 millones turistas internacionales**.
- 68.1 millones de turistas nacionales.
- El turismo representa el 8.6% del PIB.
- El IMSS registro **2.5 millones de empleos en el sector turismo para 2012**
- El 46% de la fuerza laboral son mujeres.

Tabla 4. Indicadores de Turismo en México, 2001 - 2011

[57] Secretaría de Relaciones Exteriores,
(Dehttp://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/ftgue.pdf, consultado el 9 de julio de 2013)

Año	Establecimientos Hoteleros	Cuartos Disponibles	Visitantes internacionales a México (1)	Gasto total de visitantes internacionales a México (2)	Visitantes internacionales de México al exterior (1)	Gasto total de visitantes internacionales de México al exterior (2)
2001	11,218	458,123	100,719	8,401	123,737	5,702
2002	11,618	469,488	100,153	8,858	124,633	6,060
2003	12,518	496,292	92,330	9,362	123,015	6,253
2004	13,060	515,904	99,250	10,796	128,903	6,959
2005	13,751	535,639	103,146	11,803	128,392	7,600
2006	14,410	562,039	97,701	12,177	122,022	8,108
2007	14,970	584,331	93,582	12,919	109,534	8,462
2008	15,754	603,781	92,248	13,370	107,520	8,568
2009	16,526	621,946	88,044	11,513	98,228	7,207
2010	16,875	638,494	81,953	11,992	91,658	7,255
2011	17,315	651,156	75,732	11,869	88,113	7,832

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2012. 2013. Nota: (1) Miles de personas, (2) Millones de dólares

2013 el mejor año para el sector turístico en México

En México la industria turística representa la tercera fuente de ingresos de divisas al país, solo por debajo de actividades petroleras y remesas familiares. De acuerdo a titular de la Secretaría de Turismo en 2013 el sector represento el 8.4% del Producto Interno Bruto, mismo que se busca aumentar un punto en seis años.

Más de 13 mil 900 millones de dólares fue la derrama de divisas por turismo en México durante 2013, superando 3.4 por ciento los dólares obtenidos en 2008, cuando se captaron 13 mil 370 millones de dólares. De acuerdo al Banco de México, en su reporte que de enero a diciembre del año pasado se alcanzó una cantidad de 13 mil 819 millones de dólares, 3.4 por ciento superior a los 13 mil 370 millones de dólares captados en 2008, que era considerado el mejor año del turismo, México recibió 23 millones 700 mil viajeros internacionales, lo que significó 3.5 por ciento arriba de lo observado en 2008, que fue de 22 millones 900 mil visitantes. El flujo de turistas vía aérea se llegó a 12 millones 223 mil paseantes, 11 por ciento superior a lo reportado en 2008, cuando fue de 11 millones.

El Banco de México registró que respecto a 2012, el ingreso de divisas por visitantes internacionales fue mayor 8.5 por ciento, esto es, se pasó de 12 mil 739 millones de dólares, a 13 mil 819 millones de dólares.

El flujo de turistas internacionales sumara 23 millones 700 mil, en 2013, porque representa un aumento de 1.4 por ciento más, comparado con los 23.4 millones de 2012. El arribo de turistas por vía aérea, principal segmento del turismo internacional, en 2013 se alcanzo los 12 millones 200 mil paseantes, lo que significó un 7.6 por ciento mayor a los 11 millones 400 mil turistas registrados en 2012. El gasto medio del turismo vía aérea, registro un incremento de 3.2 por ciento en el gasto medio en relación con 2012, al pasar de 840 a 867 dólares.

De acuerdo al INEGI, al tercer trimestre de 2013, el Indicador Trimestral del PIB Turístico avanzó 0.7% en términos reales respecto al mismo periodo de un año antes. En el lapso de referencia, el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior aumentó 3.4% comparado con el trimestre julio-septiembre de 2012. Por componentes, el consumo del turismo interno se incrementó 3.8%, en tanto que el del turismo receptivo descendió -0.4 por ciento.

Tabla 3 Turismo en México en datos a 2013

- Divisas generadas por el sector turístico: 13 mil 900 millones de dólares.
- México recibió 23 millones 700 mil viajeros internacionales.
- El flujo de turistas vía aérea se llegó a 12 millones 223 mil paseantes
- El gasto medio por turista vía aérea paso de 840 a 867 dólares.
- El Indicador Trimestral del PIB Turístico avanzó 0.7%
- El consumo del turismo interno se incrementó 3.8%.

Fuente: Inegi, Banco de México, Reporte Enero-diciembre 2013.

Para 2013, la actividad turística en nuestro país representó 9% del Producto Interno Bruto y la tercera fuente de captación de divisas. El turismo genera 2.5 millones de empleos directos e indirectos, es decir, 1 de cada 11 empleos. Participan en el turismo más de 43 mil unidades económicas, siendo el 80% pequeña y medianas empresas. El sector registra un saldo positivo en la balanza turística, que en 2013 alcanzó un superávit de 4,725.9 millones de dólares. De acuerdo a datos de Sectur, los destinos de sol y playa son considerados el primordial punto de atención turística.

Durante los primeros once meses del 2013 los ingresos que recibió México por la visita de turistas internacionales ascendió a 10 mil 380 millones de dólares, constituyendo la entrada de divisas más elevada de la que se tiene registro de acuerdo a Banxico. En 2014, el Consejo de Promoción Turística busca incrementar a 20 por ciento la participación de México en el mercado turístico estadounidense, considerado el más importante para el país.

El buen comportamiento de los ingresos por turismo internacional es resultado de varios factores, entre los que destaca el mayor arribo de visitantes foráneos al país, así como un incremento en su gasto. Si a los ingresos por turistas internacionales sumamos los recursos por excursionistas foráneos, la entrada de divisas hasta el mes de noviembre de 2013 suma 12 mil 302 millones de dólares.

Este dinamismo en la entrada de extranjeros se debe a la recuperación en el número de visitantes provenientes de EU, así como el incremento de turistas provenientes de Asia y Sud América. Para 2014, el incremento esperado de cuatro puntos porcentuales para el mercado turístico estadounidense, podría significar el arribo al país de 500 mil turistas nuevos. Con dicho incremento se pretende convertir a México en el destino más importante para los estadounidenses; por encima del bloque de países europeos que lo mantiene en el segundo puesto.

En el caso de México, parece ser el turismo una pieza clave en el desarrollo de la economía, y en el caso particular de estados como Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero y Nayarit, es la actividad central de sus economías estatales.
La entrada de divisas al país presenta una tendencia al alza que nos habla de un repunte en el sector luego de la crisis económica mundial que debe ser valorado para aplicar políticas que permitan su fortalecimiento. Convertir a México en el destino turístico más importante para los estadounidenses debe ser una prioridad, pues si bien se está creciendo se podría crecer más.

La actividad turística como actividad prioritaria de la Constitución

En el año 2003, se aprobó por parte de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, tiene que ver con la adición de un inciso K a la fracción XXIX del artículo 73 de la carta magna, para facultar expresamente al Congreso de la Unión para que legislar en materia de turismo, señalando las bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal en esa materia, previendo además la participación de los sectores social y privado en la misma.

Esta reforma dio sustento a las leyes estatales y propiciar la elaboración y promulgación en aquellas entidades donde no existía; se fortaleció la autonomía de las entidades federativas y los municipios, estableciendo las bases generales y lineamientos sobre los cuales la Federación, los estados y los municipios coadyuven con

una legislación de beneficio común y que derrame de manera equitativa los beneficios económicos que arroja el turismo.

Sin embargo, en 2002 la importancia del sector turístico para México ocupaba el séptimo lugar mundial en recepción de turistas y que los ingresos de divisas extranjeras captados por ese concepto han llegado a superar a los generados por las exportaciones de petróleo. En la edición del Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2002, que cada año publica el INEGI, y en el que un apartado específico se refiere al turismo. En la edición 2002 de dicho anuario se informa que en México, con datos de 2001, hay un total de 10,979 establecimientos hoteleros; esos establecimientos alcanzan a sumar 452,116 cuartos de hotel. En el 2001 ingresaron a México 19.8 millones de turistas extranjeros, los cuales gastaron 8,401 millones de dólares. Los mexicanos que hicieron turismo fuera de las fronteras nacionales sumaron poco más de 12 millones de personas y gastaron 5,702 millones de dólares.

Para 2011, hay un total de 17,315 establecimientos hoteleros; esos establecimientos alcanzan a sumar 651,156 cuartos de hotel. En el 2011 ingresaron a México 75.7 millones de turistas extranjeros, los cuales gastaron 11,869 millones de dólares. Los datos a 2013 indican que a pesar que en 1994 ocupábamos el séptimo lugar en cuanto a visitantes y el noveno en cuestión de divisas, actualmente ocupamos el 13 lugar y el 32 respectivamente.

Los cambios en la demanda mundial y las oportunidades tienen México frente a la recuperación del sector, obligan a diversificar nuestra oferta turística para competir de manera importante a nivel mundial, lo cual se lograría a través de una estrategia que involucre a las secretarías de Estado, secretarías de turismo de estados y municipios, sector hotelero, restaurantes, transporte, entretenimiento y específicamente el sector financiero.

Desde nuestro punto de vista existen además del fortalecimiento como región turística de todos los estados con vocación frente al mundo y la coordinación interinstitucional, consideramos tres vertientes que deben derivar en un nuevo ordenamiento normativo del sector como es a) elevar la competitividad, b) Especializar el financiamiento y el papel de la banca de desarrollo, y c) Apoyar al turismo de salud, que desarrollaremos a continuación:

a) Competitividad del sector turístico en México

A pesar de la tendencia positiva del sector, México ha perdido competitividad en materia turística a nivel global y no ha logrado aprovechar en su totalidad las oportunidades de desarrollo que brinda esta industria. En los últimos años, el turismo en el mundo ha crecido a tasas superiores al crecimiento de la economía en su conjunto. México ocupa el vigésimo tercer lugar por captación de divisas, pero sigue sin poder desarrollar servicios turísticos que generen mayor valor agregado y atraigan a más turistas internacionales. De acuerdo al Índice de Competitividad de Turismo[58] en 2011 México está fuera de los primeros 20 lugares a nivel mundial.

[58] El Índice de Competitividad de Turismo (*Travel and Tourism Competitiveness Index*, TTCI), fue desarrollado y publicado por primera vez en 2007 por el Foro Económico Mundial (FEM). El informe del TTCI de 2007 cubrió 124 países. El informe de 2008 aumentó para 130 el número de países evaluados, 133 países en 2009, y 139 países en 2011. El índice es una medida de los factores que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo de un país específico, en consecuencia, no se debe confundir este índice como una medida de la atractividad del país como destino turístico. En el informe anual se clasifican los países seleccionados de acuerdo con el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (TTCI), con una calificación de 1 a 6, la cual refleja el desempeño de cada país para cada subíndice específico. La nota 6 es la máxima calificación posible. El índice general se compone de tres sub-índices principales: (1) marco regulador; (2) ambiente de negocios e infraestructura; y (3) recursos humanos, culturales y naturales. En cada informe anual también se incluye un perfil específico para cada país evaluado, denominado Perfil de País, que incluye las calificaciones individuales recibidas en cada variable utilizada para calcular su TTCI. El perfil es complementado con información clave sobre los indicadores económicos del país según las estadísticas del Banco Mundial, y con indicadores provenientes del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

De acuerdo a Jorge S. Hernández Delgado de la Confederación Nacional Turística, México ocupó por muchos años los primeros lugares en el ranking internacional como destino turístico, en 1994 ocupábamos el séptimo lugar en cuanto a visitantes y el noveno en cuestión de divisas, actualmente ocupamos el 13 lugar y el 32 respectivamente.

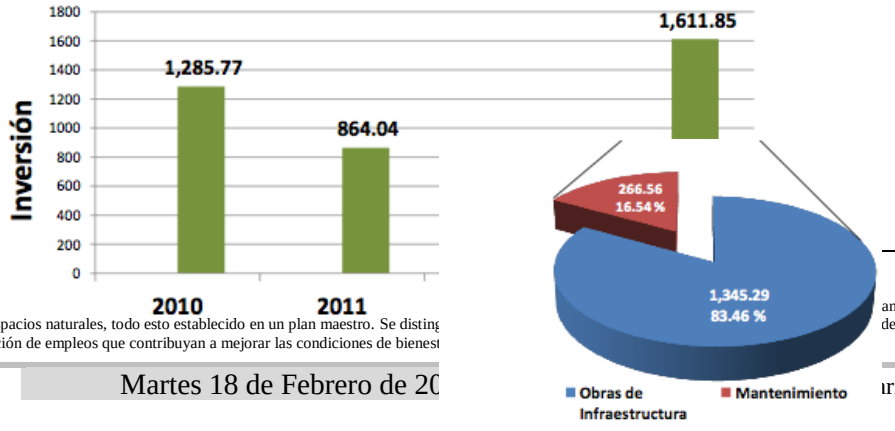
Desde el punto de vista de los legisladores que suscribimos este proyecto, consideramos que la política de competitividad en el sector turístico, requiere de adecuaciones en la política federal, se requiere apuntalar nuevos destinos turísticos para favorecer el desarrollo regional transversalmente con una visión integral como nación y por especialización regional. El diagnostico actual del sector turístico evidencia que las entidades no se han beneficiado de manera equitativa en la inserción de mercados internacionales, para lograrlo es necesario promover la competitividad de cada región para reducir las diferencias en los indicadores de bienestar social y explorar las diferentes áreas de oportunidad que tiene el sector, es necesario estar a la vanguardia e impulsar otras posibilidades que no cuentan con el apoyo institucional o políticas públicas que las favorezcan, insuficiencias que no han sido superadas por la última reforma constitucional al artículo 73 en materia de turismo.
El saldo final de la pasada década es que la estadía y el gasto promedio no ha variado. México cuenta con un mercado interno que representa el desplazamiento de 160 millones de visitantes y un consumo de más de 126 mil millones de dólares al año, el cual falta por explotarse aun más.

b) La industria del turismo requiere de un financiamiento especializado

En el marco de la modernización, ordenamiento y financiamiento del sector se requiere de mecanismos eficientes y de mayor alcance que faciliten la inversión en el sector. Las últimas estrategias para el desarrollo del sector turismo, han sido limitadas si consideramos lo que representa el turismo para México en términos de fuente de ingresos y generación de empleos.
Consideramos que ante la importancia del sector turístico y su potencial económico, es necesario fortalecer la propuesta de política turística del Ejecutivo Federal, con una política de financiamiento competitivo al sector turístico tradicional y potencial que contamos como país, actualmente el crédito otorgado por el sistema bancario al sector turístico es de 44,732.5 millones de pesos, 37,040.9 de la banca comercial y 7,691.3 millones de la banca de desarrollo.

Desde nuestro punto de vista consideramos que el ciclo histórico del FONATUR ha terminado, al cierre del ejercicio fiscal 2012 se ejercieron 650.07 millones de pesos y para 2013 el presupuesto autorizado es de 1,611.85 millones de pesos, de los cuales 1,345.29 son para obras de infraestructura y 266.56 para mantenimiento de los CIP's[59]
Existe una preocupación en el sector turístico debido a que FONATUR sólo tiene asignados recursos para obras de infraestructura en zonas de playa, y ha descuidado sectores alternativos de turismo, que serían detonantes del crecimiento económico, como el turismo médico, de negocios, de aventura, indígena, ecoturismo, etc. (Véase Gráfica 2).

Gráfico 1: Presupuesto de egresos 2010-2013



[59] CIP's: Ciudad Turística que integra de manera an con equipamiento urbano, equipamiento turístico y espacios naturales, todo esto establecido en un plan maestro. Se distinguen de las finanzas locales a nivel Estatal y Municipal, y a la generación de empleos que contribuyan a mejorar las condiciones de bienest

Fuente: Presupuesto 2013, FONATUR, (De: http://www.cmic.org/comisiones/sectoriales/turismo/noticias_principales/reunion%20fonatur-cmic/Presentación%20FONATUR.pdf, consultado el 29 de jul. de 2013)

La integración de las mypimes a los beneficios multiplicadores del turismo, el desarrollo de nuevos destinos turísticos y el fortalecimiento de la conectividad a comunidades con potencial turístico requiere de una Banca de Fomento Turístico, una banca que garantice:

- **Una banca especializada de segundo piso para financiar proyectos del sector social y privado.**
- **Financiamiento y coordinación de las distintas decisiones de inversión** de la Secretaría de Turismo, Gobiernos Estatales, Municipales, comunitario y del sector privado nacional.
- **Ampliar el apoyo de créditos para infraestructura y mantenimiento.**
- **Canalizar el financiamiento de** instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, aquellos proyectos turísticos que impulsen el desarrollo regional.
- Otorgar préstamos o créditos para el desarrollo de proyectos turísticos.
- Otorgar **préstamos o créditos** para el desarrollo de proyectos turísticos en **condiciones competitivas**.
- Crear y consolidar **centros turísticos** conforme a los planes maestros de desarrollo.
- Financiar **infraestructura, servicios y equipamiento** en centros de desarrollo turístico.
- Participar con los **sectores público, social y privado en la constitución**, fomento, desarrollo, inversión, desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
- Proporcionar **asistencia técnica a los municipios y comunidades** para la formulación, administración y ejecución de sus planes de desarrollo turístico.

Gráfica 2: Detalle del presupuesto 2013

Fuente:

CENTROS INTEGRALMENTE PLANEADOS (CIP's)	OBRAS	MANTENIMIENTO	INVERSIÓN	%
Cancún	57.05	64.59	**121.63**	7.55%
Ixtapa	139.88	34.81	**174.69**	10.84%
Los Cabos	50.89	32.89	**83.78**	5.20%
Loreto	142.99	30.98	**173.98**	10.79%
Huatulco	370.50	60.34	**430.84**	26.73%
Nayarit	208.80	16.65	**225.46**	13.99%
Cozumel (Proyecto Turístico Integral)	62.96	14.10	**77.06**	4.78%
Costa del Pacífico	312.22	12.20	**324.41**	20.13%
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA	**1,345.29**	**266.56**	**1,611.85**	**100.00%**

Presupuesto2013, FONATUR, (De: http: //www.cmic.org/comisiones/sectoriales/turismo/noticias_principales/reunion%20fonatur-cmic/Presentación%20FONATUR.pdf, consultado el 29 de jul. de 2013)

c) El potencial del turismo de Salud en México

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la llamada industria de turismo de salud, aquel por el que unos 7 millones de personas al año viajan fuera de su país de origen en busca de tratamientos médicos y operaciones quirúrgicas, dentales, oftalmológicas y hasta estéticas o cosméticas, atraídas por tecnología avanzada, enfoques científicos de vanguardia, calidad en el servicio y sobre todo menores costos.

En México han aumentado los ingresos generados por el turismo médico en los últimos ocho años, ya que en 2006 ascendían a mil 544 millones de dólares y se calcula que el año pasado llegaron a 2 mil 847 millones de dólares.

El monto se incrementa hasta 4 mil 196 millones de dólares si se incluyen otros servicios como spas, masajes, terapias, temazcales, regaderas vichy (un sistema de hidromasaje horizontal), entre otros, que ofrece el sector turístico a través de hoteles y paquetes en destinos de playa, agrupados en el turismo de bienestar. Todo este turismo, el médico y el de bienestar, puede crecer a una tasa anual de 7 por ciento en los próximos tres años y rebasar así los 5 mil millones de dólares, según los cálculos oficiales.

La IED destinada a los servicios de salud y que abarca desde servicios médicos, consulta externa, hospitales, laboratorios y diagnósticos, señala, alcanzó 152.8 millones de dólares en los últimos 13 años.

A la fecha, Tailandia ocupa el primer lugar en el turismo médico al concentrar un millón 200 mil de estos visitantes; es decir, 17 por ciento del total. Le sigue México con un millón de turistas que buscan servicios de salud, la mayoría estadunidense de origen hispano y proveniente de los estados de California, Arizona y Texas. En el caso de Cuba, el turismo de salud equivalente a 6 mil millones de dólares al año.

Con ello supera a Estados Unidos, que se ubica en la tercera posición con 800 mil personas. Después de estas tres naciones, Singapur, India, Brasil, Turquía y Taiwán se reparten otro millón 380 mil turistas, según *Patients Beyond Borders* (Pacientes sin fronteras), una empresa estadunidense que gestiona los viajes y tratamientos médicos para sus clientes. Según esta firma, el año pasado 900 mil estadunidenses viajaron fuera de su país en busca de tratamientos médicos, con lo cual representan los principales consumidores del turismo médico, ya que uno de cada siete turistas de este tipo provienen del vecino país.

En el caso de México, los pacientes de Estados Unidos y Canadá llegan a pagar entre 36 y hasta 89 por ciento menos por operaciones y tratamientos médicos que van desde cirugías estéticas de nariz (rinoplastia) hasta remplazos de cadera o de válvula cardiaca, principalmente en Nuevo León, las Baja Californias, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán.

Un *bypass* cardiaco, por ejemplo, cuesta en Estados Unidos 144 mil dólares y en México sólo 27 mil, una cirugía de columna 100 mil dólares allá y 12 mil dólares aquí o una liposucción 9 mil y 2 mil 800 dólares, respectivamente.

Uno de los objetivos de la presente reforma es establecer una nueva política pública con visión integral que potencie con una visión nacional al sector turístico, a fin de establecer coordinadamente nuevos corredores turísticos con conectividad aérea, integrar paquetes turísticos con servicios de salud con el sector privado, mejorar la atracción de nuestros paisanos en Estados Unidos con el turismo religioso de la Ciudad de México y Guadalajara, entre otros desafíos. Estamos frente a una oportunidad para desarrollar el gran potencial de nuestro país frente a los cambios de la demanda internacional del sector. Este es el gran desafío que busca subsanar la presente iniciativa.

Reingeniería para detonar el Turismo

Nuestra industria del turismo requiere de una reingeniería que garantice su permanencia en un mercado global requiere de un nuevo andamiaje institucional que fortalezca las capacidades del Estado para elevar la

competitividad, este esfuerzo de ser acompañado de una nueva visión del desarrollo que garanticen una económica en beneficio de la economía y de los propios habitantes de cada región en función de su potencial turístico como puede ser cultural, natural, aventura, ecológico, religioso,salud y deporte.

De acuerdo al sector empresarial y de los especialistas en promoción turística, elevar la competitividad en la industria turística requiere adicionalmente fortalecer las acciones que se han implementado en la última década como:

- Mejorar la conectividad aérea y requiere de un mayor desarrollo de su sistema aeroportuario, de sólo en 59 aeropuertos mexicanos, de los cuales 35 operan vuelos nacionales e internacionales y 24 únicamente nacionales.
- Elevar la competitividad de los destinos y de las empresas turísticas a nivel nacional, regional y local.
- Elevar el financiamiento en términos competitivos a proyectos de largo plazo.
- Establecer una banca de desarrollo especializada en el sector turístico.
- Modificaciones regulatorias que aseguren efectivamente la competitividad del turismo.
- Mayor capacitación y profesionalización en centros turísticos orientada a los mercados internacionales en crecimiento como es de China e India.
- Integrar a proveedores turísticos para elevar la cadena de valor del sector y certificación de los mismos.
- Reducción de trámites locales innecesarios
- Fortalecimiento del mercado turístico nacional.
- Captación de nuevos mercados internacionales.
- Elevar la estancia y gasto de los turistas nacionales e internacionales.
- Incorporar la sustentabilidad.
- El turismo de salud requiere mayores incentivos fiscales y coordinación entre entidades federativas.

Con estos antecedentes, los legisladores representantes del sector turístico en el Senado de la república proponemos una reforma constitucional que reconstruya toda la política de turismo en México en respuesta a los cambios de las tendencias mundiales, pero sobre todo, para ofrecer una alternativa de desarrollo a nuestras comunidades.

El texto propuesto de esta reforma propone establecer al **sector turístico y las actividades relacionadas son de carácter prioritario para la economía nacional, por lo que el Estado proveerá de la infraestructura, incentivos fiscales y financiamiento para garantizar su competitividad global, el empleo y el desarrollo integral de las regiones turísticas con una visión integral.**

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas; así como 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para reformar el texto constitucional, sometemos a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto por el que se establece el carácter prioritario a la actividad turística a nivel constitucional, por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 25 Constitucional, para quedar como sigue :

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 25. …

…

…

…

…

El sector turístico y las actividades relacionadas son de carácter prioritario para la economía nacional, por lo que el Estado proveerá de la infraestructura, incentivos fiscales y financiamiento para garantizar su competitividad global, el empleo y el desarrollo integral de las regiones turísticas con una visión integral.

…

…

…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de febrero de 2014.

SUSCRIBEN

ARMANDO RÍOS PITER

ZOÉ ROBLEDO ABURTO

LUZ MARÍA BERISTAIN

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

CONTINÚA TOMO II

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL

Consulta la Gaceta del Senado en ***www.senado.gob.mx***





Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”.